**CONSEJO SUPERIOR**

**ACTA N° 38-2020**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL**. - San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.

En esta sesión extraordinaria de Presupuesto 2021 con asistencia del Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente; el doctor Gary Amador Badilla, el máster Carlos Montero Zúñiga, la licenciada Sandra Pizarro Gutiérrez y la máster Sara Castillo Vargas. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, el máster Erick Mora Leiva Jefe Proceso de Planeación y Evaluación, el licenciado Minor Alvarado Chaves, Jefe Subproceso de Presupuesto y Portafolio de Proyectos y el licenciado Juan Carlos Sebiani, por su orden Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD).

# **ARTÍCULO I**

**ENTRA LA LICENCIADA WAIMAN HIN HERRERA, SUBDIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA**

**DOCUMENTO N° 4530-2020**

En reunión de trabajo del Consejo Superior del pasado 27 de marzo de 2020 la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, indica que mediante oficio PJ-DGH-CAP-022-2020, la Dirección de Gestión Humana remitió la proyección presupuestaria para permisos con goce de salario con sustitución para personal judicial becado, así como ayudas económicas para actividades de capacitación y becas correspondientes al año 2021. En dicho oficio se indica lo siguiente:

*“Se remite la proyección presupuestaria para permisos con goce de salario con sustitución para personal judicial becado, así como ayudas económicas para actividades de capacitación y becas correspondientes al año 2021.*

*De acuerdo con lo anterior, el día 18 de diciembre de 2019 se solicitó a la Escuela Judicial y a las diferentes Unidades de Capacitación la formulación del presupuesto de becas y capacitaciones del año 2021, orientado en un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación que justifique la asignación de recursos presupuestarios por concepto de beca, ayuda económica o permiso con goce de salario, a las actividades formativas que correspondan según los resultados obtenidos, tomando en cuenta que no se debe aumentar el saldo total presupuestado aprobado para el año 2020 y las medidas para la contención del gasto en el Poder Judicial aprobadas en el año 2017.*

*Para realizar las estimaciones presupuestarias se utilizó el tipo de cambio del dólar autorizado, siendo este el ¢608,66, brindado por el Subproceso Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación, y el tipo de cambio del euro, siendo este ¢667,70, brindado por el MBA. José Andrés Lizano Vargas, Jefe del Proceso de Riesgos de Financiero Contable. Asimismo, el cálculo de los salarios se fundamenta en la información proporcionada por la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales de la Dirección de Gestión Humana.*

Se indica en el oficio que la formulación presupuestaria de cada Programa se orientó a partir de los resultados obtenidos de los distintos diagnósticos de necesidades de capacitación, realizados en enero 2018 en el caso del Programa 926 Administrativo y en 2020 en el Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, mientras que para el resto de Programas los diagnósticos se realizaron en enero 2019.

La formulación del Programa 926 Administrativo, la realiza directamente la Dirección de Gestión Humana y en el resto de los Programas, seguidamente se indican las personas que remitieron las necesidades.

* Programa Jurisdiccional: Licda. Eimy Solano Castro, Coordinadora de Unidad en la Administración de la Escuela Judicial.
* Organismo de Investigación Judicial: Licda. Jovanna Monge Araya, Asistente Administrativa de la Unidad de Capacitación.
* Ministerio Público: Máster Hulda Chinchilla Rizo, Abogada de la Unidad de Capacitación y Supervisión – Reclutamiento y Selección.
* Defensa Pública: Máster Miguel Zamora Acevedo, Coordinador interino de la Unidad de Capacitación.
* Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos: Licda. Yaclínn Quesada Fallas, Profesional 1 de la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos.

Seguidamente se adjunta el oficio completo:



En términos generales el comportamiento de Permisos con Goce de Salario, Ayudas Económicas para Capacitación y Becas, comparando lo aprobado para el 2020 y lo solicitado para el 2021, se muestra de la siguiente manera:



A continuación, se presenta el análisis y los aspectos más relevantes de cada uno de los rubros:

**A. Requerimientos para Permisos con Goce de Salario para Sustitución del Personal Judicial Becado.**

* Para el 2020 se aprobaron un total de ¢843.423.879, mientras que para el 2021 se están solicitando ¢839.364.467 lo que representa un decrecimiento de 0,5% equivalente a ¢4.059.412.



Como puede observarse se presenta una disminución de 3,5 permisos, producto del rebajo de un permiso en el Programa Administrativo y 2,5 permisos en el Ministerio Público.

En cuanto al total de meses de sustitución (249,51) se presenta un incremento de 1,01 meses, debido a un aumento en la Defensa Pública (0,75) y en el Ministerio Público (0,51) mientras que en el Programa Administrativo se da una disminución de 0,25 meses. Estas variaciones se dan por los siguientes movimientos:

1. En el Programa Administrativo se disminuye de 6 a 5 la cantidad de permisos para las participaciones derivadas de las convocatorias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
2. En el Ministerio Público se eliminan los dos permisos aprobados en 2020 para el Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género en la Universidad de Valencia en España y los recursos (¢22.818.245) se reasignan al rubro: “Para Especialistas en Contenido” que como consecuencia pasa de 2 a 2,5 permisos. Adicionalmente, se rebajan de 6 a 5 los permisos para las participaciones derivadas de convocatorias de las agencias de cooperación u otros Organismos Internacionales.
3. En la Defensa Pública se reducen de 6 a 5 los permisos para las participaciones derivadas de convocatorias de las agencias de cooperación u otros Organismos Internacionales y se incluye como nuevo un permiso para el Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona.

El resto de las modificaciones se deben a la variación en la estimación salarial mensual para la clase de puesto en la que se realizan los cálculos.

**B. Ayudas Económicas para Personas que Participan de Actividades de Capacitación.**

* Para el 2020 se aprobaron ¢59.338.638 para 163 participantes.
* Para el 2021 se están solicitando ¢54.236.565 para 211 participantes, monto que representa un decrecimiento del 8,6% (¢5.102.073) con respecto al 2020.



Seguidamente se detallan los movimientos realizados entre 2020 y 2021:

1. En el Programa Administrativo se reduce de ¢16.227.164 a ¢10.000.000 el presupuesto para capacitación especializada en inversiones y riesgos y se incrementa de 25 a 65 la cantidad de participantes para la actividad denominada. *“Técnico en Administración de Proyectos, Capacitación en Habilidades Directivas y Uso de Microsoft Project”* línea que pasa de ¢10.000.000 a ¢16.516.087.
2. En el Programa Jurisdiccional la disminución registrada se debe a la actualización del tipo de cambio del Euro, que pasa de ¢964,56 a ¢667,70 según estimaciones realizadas por el Proceso de Riesgos del Departamento Financiero Contable.
3. En el Organismo de Investigación Judicial se incluye una ayuda económica más para la actividad denominada *“Participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación u otros Organismos Internacionales”*, por lo que pasa de 5 a 6 ayudas.
4. Para el Ministerio Público se incrementan de 9 a 16 la cantidad de participantes, producto de que los dos cupos que se presupuestaron en 2020 para el Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género en la Universidad de Valencia, España, con un costo de ¢2.314.935, no se consideran para 2021 y en su lugar se incluye como nuevo el Técnico Especializado en Administración de Proyectos para un total de 9 participantes. Adicionalmente y en línea con lo indicado en el punto 2, se ajustó el tipo de cambio del Euro en el monto presupuestado para el Título de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución de la Universidad de Castilla de la Mancha.

El resto de las modificaciones se deben a la variación en la estimación salarial mensual para la clase de puesto en la que se realizan los cálculos.

**C. Becas para Personas Funcionarias Judiciales**

* Para el 2020 se aprobaron un total de ¢82.468.998, mientras que para el 2021 se están solicitando ¢84.343.982, lo que representa un crecimiento de 2,3% equivalente a ¢1.874.984.



Seguidamente se resumen las modificaciones realizadas respecto a lo aprobado para 2020.

**Programa Administrativo**

1. No se incluyen recursos en 2021 para la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica, debido a que se justifica que en el 2019 no se mostró interés en participar por parte de ninguna persona. De igual forma no se presupuesta monto para la Maestría en Dirección de Empresas del TEC por cuanto se indica que ya para el año 2021 habrá finalizado este compromiso. En ambos casos se reasigna el presupuesto para incluir nuevas actividades según los resultados del diagnóstico.
2. Para la Maestría en Administración de las Tecnologías de la Información, se rebaja de 2 a 1 la cantidad de personas. Al respecto se indica que en sesión de Consejo Superior N° 104-19, del 28 de noviembre de 2019, artículo XXXIX, se seleccionó solamente a un participante y es para esa persona que se está presupuestando recursos en 2021.
3. Para la Maestría en Administración de Recursos Humanos en la Universidad Nacional, se rebajan de 2 a 1 los cupos, para lo cual se justifica que en divulgaciones anteriores no se han inscrito personas servidoras judiciales por lo cual se propone disminuir a una beca.
4. Se incorporan como nuevas las siguientes becas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postgrado** | **Universidad** | **Cantidad de Personas Participantes** | **Monto aproximado a cancelar 2021** | **Observaciones** |
| Maestría Profesional en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | Universidad de Costa Rica (UCR) | 2 | 2.554.150 | Beca completa. Duración 2 años y medio. El plan de estudios se conforma por seis ciclos semestrales (el tercero corresponde a verano) y el crédito tiene un costo de ¢55.575. |
| Maestría Profesional en Tecnologías de la Información y Comunicación para la Gestión Organizacional | Universidad de Costa Rica (UCR) | 2 | 3.554.240 | Beca completa. Duración 2 años distribuidos en 6 cuatrimestres. El costo del crédito es de ¢55.535. |
| Maestría en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública | Universidad de Costa Rica (UCR) | 2 | 2.612.640 | Beca completa. Duración 2 años y medio. El plan de estudios se conforma por nueve ciclos trimestrales de dos materias cada uno, excepto el último que posee solamente una materia. Se matriculan cuatro materias por semestre (dos ciclos) y se cursan dos materias por trimestre. El costo del crédito es de ¢54.430. |

1. Finalmente, para los dos cupos de la Maestría en Gerencia de Proyectos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, al presupuesto total requerido, se le adiciona el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por cuanto indica la Dirección de Gestión Humana que la misma es administrada por la FUNDATEC y por tanto no se encuentra exenta del pago del impuesto.

**Programa Jurisdiccional**

1. El incremento mostrado (¢1.614.407) se debe a u incremento en el costo de la beca de Especialidad en Derecho Ambiental de la UCR que pasa de ¢616.550 en 2020 a ¢2.394.920 en 2021, lo cual según se justifica se debe a la actualización de los costos de este Programa.

**Defensa Pública**

1. Se reduce de dos a una persona la cantidad de participantes para la Maestría Profesional en Criminología de la UNED y con estos recursos se incluye un cupo para el Máster en Razonamiento Probatorio en la Universidad de Girona.
2. Se incrementa en uno la cantidad de personas participantes en cuatro actividades; sin embargo, no existe incremento en el presupuesto dado que para 2021 lo que se propone son becas parciales. Seguidamente el detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postgrado** | **Universidad** | **Cantidad de Personas Participantes 2020** | **Cantidad de Personas Participantes 2021** |
| Máster en Argumentación Jurídica | Universidad de Alicante | 1 | 2 |
| Cursos de especialización en Derecho | Universidad de Salamanca | 2 | 3 |
| Curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales | Universidad de Pisa | 2 | 3 |
| Cursos de posgrado en Derecho | Universidad de Castilla-La Mancha | 2 | 3 |

**Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos**

1. Se incorpora como nueva la participación de una persona para la Maestría en Derechos Humanos de la UNED por ¢3.267.757, movimiento que no incrementa el presupuesto total de este Programa, por cuanto la Maestría Estudio de la Violencia Social y Familiar, así como la Maestría Profesional en Criminología, para las cuales se formularon recursos en el 2020 por todo el año, se tiene que para el 2021 se requieren solamente 8 meses y 4 meses, respectivamente.

**DETALLE POR TIPO DE SOLICITUD**

La previsión para **permisos con goce de salario para sustitución del personal judicial becado** se presenta en el siguiente resumen:



A continuación, el detalle del cuadro anterior de **permisos con goce de salario para sustitución del personal judicial becado**,según Programa Institucional:













En cuanto a **ayudas económicas para capacitación** a continuación, se presenta el siguiente resumen:



El detalle de **ayudas económicas para capacitación** según Programa Institucionalse presenta seguidamente.













En cuanto a **becas** a continuación, se presenta el resumen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN SUBPARTIDA 6.02.01 (BECAS A FUNCIONARIOS)** | | | | | |
| **Programa presupuestario** | **Cantidad de Participantes** | **Monto aprobado 2020** | **Monto aproximado a cancelar 2021** | **Diferencia 2020 - 2021** | |
| **Monto** | **Porcentaje de variación** |
| Programa 926 Dirección y Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional | 12 | 15.106.103 | 15.682.349 | 576.246 | 3,81% |
| Programa 927 Servicio Jurisdiccional | 10 | 16.784.018 | 18.398.425 | 1.614.407 | 9,62% |
| Programa 928 Organismo de Investigación Judicial | 4 | 11.519.982 | 11.519.982 | 0 | 0,00% |
| Programa 929 Ministerio Público | 8 | 11.994.348 | 11.721.525 | -272.823 | -2,27% |
| Programa 930 Defensa Pública | 29 | 20.451.240 | 20.411.240 | -40.000 | -0,20% |
| Programa 950 Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito | 3 | 6.613.307 | 6.610.461 | -2.846 | -0,04% |
| **TOTALES** | **66** | **82.468.998** | **84.343.982** | **1.874.984** | **2,27%** |

Adicionalmente, de seguido se incluye el detalle de **becas según Programa Institucional:**













**Ejecución de la Subpartida 60201 “Becas a Funcionarios”**

En este apartado se presenta un resumen de la ejecución de la subpartida de Becas, primeramente mostrando los datos del 2019 y luego un cuadro comparativo 2018 – 2019 por Programa Presupuestario.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución 2019**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Programa** | **Ppto. Inicial** | **Ppto. Actual** | **Devengado** | **% Ejecución** | | 926 Direcc. Adm. Y Otros Org. De Apoyo | 16.035.051 | 2.785.779 | 1.856.820 | 67% | | 927 Servicio Jurisdiccional | 32.727.023 | 8.642.843 | 4.391.140 | 51% | | 928 Organismo de Investigación Judicial | 875.347 | 875.347 | 875.347 | 100% | | 929 Ministerio Público | 4.637.993 | 4.637.993 | 0 | 0% | | 930 Defensa Pública | 28.637.574 | 23.999.871 | 2.370.030 | 10% | | 950 Serv. Atenc. y Protecc. Víct. Y Testigos | 8.169.084 | 5.724.788 | 1.563.200 | 27% | | **TOTAL** | **91.082.072** | **46.666.621** | **11.056.537** | **24%** |   En este primer cuadro es importante resaltar que de los ¢91.082.072 aprobados por parte del Consejo Superior para el 2019, vía modificaciones presupuestarias se cedieron por parte de todos los Programas Presupuestarios (excepto OIJ y Ministerio Público) un 49% de los recursos (¢44.415.451), por lo que quedaron disponibles para ejecutar solamente ¢46.666.621 (51%). Del monto indicado anteriormente, solo se ejecutó el 24%, equivalente a ¢11.056.537, siendo únicamente el caso del OIJ donde se alcanzó una ejecución del 100% y en el otro extremo se ubica el Ministerio Público que no logró ejecutar nada. Ahora bien, si el total ejecutado se compara no contra el presupuesto actual sino contra el inicial, la ejecución sería de un 12%.  **Ejecución 2018 – 2019** |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Programa** | **Porcentaje de Ejecución** | | | **2018** | **2019** | | 926 Dirección Administración y Otros Órganos De Apoyo | 17% | 67% | | 927 Servicio Jurisdiccional | 11% | 51% | | 928 Organismo de Investigación Judicial | 0% | 100% | | 929 Ministerio Público | 9% | 0% | | 930 Defensa Pública | 69% | 10% | | 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 10% | 27% | | **TOTAL** | **21%** | **24%** | |  |

Al comparar la ejecución de ambos años, se puede observar como ningún Programa Presupuestario mantiene un comportamiento estable, dado que por ejemplo los Programas Administrativo y Jurisdiccional que son de los que más baja ejecución registraron en 2018, en 2019 presentaron una mejora significativa. Por otra parte, está el caso de la Defensa Pública, que pasó de un 69% en 2018 a tan sólo un 10% en 2019.

Seguidamente se presentan las justificaciones sobre ejecución 2019 brindadas por la Dirección de Gestión Humana.

*“Para brindar respuesta a lo solicitado en correo del 4 de marzo de este año en relación con la ejecución del presupuesto de becas durante el 2019 procedo a recordar el acuerdo de Consejo Superior en sesión No. 62-17 del 29 de junio de 2017, artículo LXXXII, el cual indica:*

***“3.)*** *En tanto se cumple lo ordenado en los puntos 1 y 2, la Dirección Gestión Humana seguirá apoyando a las Unidades para cumplir con lo relativo al otorgamiento de becas en la institución, según le sea requerido por cada una, por ser la oficina que tiene la experiencia y ha venido cumpliendo esas funciones para todo el personal judicial.”*

*A partir de lo anterior, corresponde al Subproceso Gestión de la Capacitación, la gestión y administración de lo relativo a becas con el presupuesto asignado a la Subpartida 6.02.01 (Becas a funcionarios), no obstante, es importante indicar que el presupuesto de las subpartidas que apoyan la gestión de becas, es un presupuesto administrado por este Subproceso y los encargados de cada programa presupuestario en los distintos ámbitos y programas, pero su origen y principal decisor de su uso es el Consejo Superior, de ahí que sea este Consejo quien define (bajo recomendación del Consejo de Personal), quién obtiene los beneficios, cuáles beneficios obtiene, por cuánto tiempo y que condiciones debe asumir (contrato de adiestramiento) para obtener el beneficio económico y/o permiso.*

*Dicho lo anterior, a continuación se detallan aspectos importantes que impactaron la**ejecución de los recursos presupuestarios asignados a la subpartida 6.02.01 (Becas a funcionarios) durante el año 2019:*

***Programa presupuestario 926 (Dirección y Administración):***

1. ***Maestría en Administración y Derecho Empresarial:*** *En sesión de Consejo Superior No. 40-18 del 11 de mayo de 2018, Art. VIII, se acordó: "[…] el 25% del costo de los aranceles correspondientes a matrícula y materias* ***no será otorgado en razón de las restricciones presupuestarias que enfrenta este Poder Judicial****" (La negrita no pertenece al original). El presupuesto para el año 2019 se aprueba en la sesión de Consejo Superior No. 34-18 celebrada el 25 de abril de 2018, artículo XIV, la cual corresponde a una fecha anterior al primer acuerdo mencionado, por tal motivo el presupuesto quedó sin ejecución.*
2. ***Maestría en Administración de Recursos Humanos*** *y* ***Maestría en Derecho Público:*** *Se realizaron oportunamente las divulgaciones para ambas actividades y ninguna persona servidora judicial del programa 926 estuvo interesada en participar.*
3. ***Maestría en Administración de las Tecnologías de la Información:*** *La actividad se divulgó en el año 2019 debido a que para este año se incluyó por primera vez en el presupuesto de becas, sin embargo, de acuerdo con el calendario lectivo de la Universidad Nacional tenían programado dar inicio a las lecciones hasta el año 2020, razón por la cual no hubo ejecución presupuestaria.*

***Programa presupuestario 927 (Judicatura):***

1. ***Maestría en Administración y Derecho Empresarial:*** *En sesión de Consejo Superior No. 40-18 del 11 de mayo de 2018, Art. VIII, se acordó: "[…] el 25% del costo de los aranceles correspondientes a matrícula y materias* ***no será otorgado en razón de las restricciones presupuestarias que enfrenta este Poder Judicial****" (La negrita no pertenece al original). El presupuesto para el año 2019 se aprueba en la sesión de Consejo Superior No. 34-18 celebrada el 25 de abril de 2018, artículo XIV, la cual corresponde a una fecha anterior al primer acuerdo mencionado, por tal motivo el presupuesto quedó sin ejecución.*
2. ***Maestría en Ciencias Penales:*** *Se aprueban 5 becas y el Consejo Superior solamente otorga 1 beca mediante acuerdo de Consejo Superior en sesión No. 102-18 del 22 de noviembre de 2018, artículo XLII. Debido a este acuerdo no fue posible ejecutar las 4 becas restantes.*
3. ***Maestría en Dirección de Empresas:*** *Según los resultados del Informe de resultados de la Consulta de necesidades de formación profesional superior del ámbito jurisdiccional realizado por la Escuela Judicial en el mes de enero del año 2019, esta actividad* ***no*** *satisface las necesidades de capacitación que posee la población del programa 927 (Judicatura), por lo que no se divulga en este periodo y tampoco se incluye dentro de la formulación presupuestaria del año 2020.*
4. ***Especialidad en Derecho Ambiental:*** *La Universidad de Costa Rica informó que la actividad se encontraba inactiva, por lo que no hubo ejecución.*
5. ***Maestría en Derecho Procesal Constitucional:*** *Desde febrero de 2018 no se abren nuevas cohortes y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora informó que no tiene proyectado nuevas cohortes. Para el 2020 este presupuesto se distribuyó para incluir nuevas actividades que satisfagan necesidades de capacitación como el Doctorado en Derecho que actualmente está formulando la Presidencia de La Corte.*

***Programa presupuestario 928 (Organismo de Investigación Judicial):***

1. *Se ejecutó en su totalidad.*

***Programa presupuestario 929 (Ministerio Público):***

1. ***Maestría en Ciencias Penales:*** *Según lo indicado en la sesión del Consejo Superior No. 102-18 del 22 de noviembre de 2018, artículo XLII, no se seleccionó a ninguna persona de este programa.*
2. ***Maestría en Administración y Derecho Empresarial:*** *En sesión de Consejo Superior No. 40-18 del 11 de mayo de 2018, Art. VIII, se acordó: "[…] el 25% del costo de los aranceles correspondientes a matrícula y materias* ***no será otorgado en razón de las restricciones presupuestarias que enfrenta este Poder Judicial****" (La negrita no pertenece al original). El presupuesto para el año 2019 se aprueba en la sesión de Consejo Superior No. 34-18 celebrada el 25 de abril de 2018, artículo XIV, la cual corresponde a una fecha anterior al primer acuerdo mencionado, por tal motivo el presupuesto quedó sin ejecución.*

***Programa presupuestario 930 (Defensa Pública):***

1. ***Maestría en Ciencias Penales:*** *En sesión de Consejo Superior No. 102-18 del 22 de noviembre de 2018, artículo XLII, no se seleccionó a ninguna persona de este programa.*
2. ***Maestría en Administración y Derecho Empresarial:*** *En sesión de Consejo Superior No. 40-18 del 11 de mayo de 2018, Art. VIII, se acordó: "[…] el 25% del costo de los aranceles correspondientes a matrícula y materias* ***no será otorgado en razón de las restricciones presupuestarias que enfrenta este Poder Judicial****" (La negrita no pertenece al original). El presupuesto para el año 2019 se aprueba en la sesión de Consejo Superior No. 34-18 celebrada el 25 de abril de 2018, artículo XIV, la cual corresponde a una fecha anterior al primer acuerdo mencionado, por tal motivo el presupuesto quedó sin ejecución.*
3. *En las sesiones de Consejo Superior No. 34-18 del 25 de abril de 2018, Art. XIV y No. 43-18 del 16 de mayo de 2018, Art. IV, para el programa 930 (Defensa Pública) en la subpartida 60201 (Becas a funcionarios), se aprobó únicamente ¢4.637.703,92, los cuales son administrados por este Subproceso y no fueron ejecutados por las razones anteriores.*
4. *Por su parte, la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública solicitó mediante oficio 52-CSP-2018 la asignación de ¢24.000.000,00 a esta subpartida, aprobados por el Consejo Superior en sesión No. 31-18 del 18 de abril de 2018, artículo X, por lo cual la administración de estos recursos no corresponde a este Subproceso. Y lo ejecutado según los datos de las liquidaciones 2019 de Financiero Contable, corresponden a trámites de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública.*

*Como complemento de lo indicado por la Dirección de Gestión Humana, se consultó a la Licda. Melania Soto Delgado, Administradora de la Defensa Pública, quien señaló que hay algunos factores que incidieron en esta baja ejecución, entre ellos, la poca participación de las personas, aspecto que se ve limitado por que la Defensa Pública cuenta con gran cantidad de funcionarios interinos, y dentro de los requisitos en la mayoría de las publicaciones es que sean funcionarios en propiedad, adicional a esto, los altos costo de las maestrías o posgrados, y la limitación de recursos a la hora de otorgar las becas, siendo la constante una ayuda económica o becas parciales lo que limita su acceso, así como también la cantidad de requisitos exigidos para su asignación versus los recursos dotados.*

*De igual manera, se han presentado cancelación de maestrías o finalización de convenios que generan que queden recursos, así como que la participación sea enfocada a otros grupos de profesionales y que los Defensores que participen no sean aceptados.*

*Finalmente, indicó que según el sistema de ejecución de presupuesto SIGA-PJ para el 2019, se ejecutó un total de ¢2,370,030.45, pero se tenían recursos reservados para varios compromisos de los cuales, por diversos motivos se atrasó su ejecución y los mismos se están cancelando a partir de este año con recursos 2020, por un total de ¢7,565,400.00.*

***Programa presupuestario 950 (Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito):***

1. ***Maestría Profesional en Estudio de la Violencia Social y Familiar:*** *En sesión de Consejo Superior No. 76-19 del 29 de agosto de 2019, artículo XLIV, se seleccionó a una servidora, sin embargo, según calendario universitario, dicha maestría inició lecciones durante el tercer cuatrimestre del año 2019 y la factura se canceló durante el año 2020.*
2. ***Maestría Profesional en Derechos Humanos:*** *Se considera únicamente el pago de la beca otorgada a la servidora Andrea Méndez Carmona otorgada en sesión de Consejo Superior No. 78-18 del 04 de setiembre de 2018, artículo XVIII. Para el año 2020 se reasignan estos recursos a otra actividad formativa por lo que, durante el año 2019 no se otorgan más becas ya que no se podría mantener el beneficio por la duración total de la actividad.*

*Para finalizar, es relevante indicar que los recursos no ejecutados fueron comunicados al Lic. Luis Abarca Padilla, Jefe del Subproceso de Presupuesto, con el fin de cederlos”.*

Se adjunta el archivo completo con el detalle de lo solicitado para 2021.



* **OFICIO PJ-DGH-CAP-116-2020 RELACIONADO CON ACUERDO DE LA SUBCOMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS**

Mediante correo electrónico del pasado 25 de marzo, la Dirección de Gestión Humana remitió a la Dirección de Planificación el oficio **PJ-DGH-CAP-116-2020,** en el cual propone una serie de requerimientos presupuestarios necesarios para atender lo dispuesto por la **Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, respecto de dotar a las** Unidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, Escuela Judicial, Dirección de Justicia Restaurativa, y las Comisiones, entre otros, de un rubro bajo las partidas de capacitación, viáticos y transportes, a efecto de contar con recursos para la alimentación en las visitas a territorios indígenas.

En atención a lo expuesto, la Dirección de Gestión Humana indica lo siguiente:

*“(…) Se procede a remitir la proyección de presupuesto para el periodo 2021 de cada una de las Unidades de Capacitación por programa presupuestario, atendiendo a la solicitud de la Sub comisión de Acceso a la Justicia de la Población Indígena, siendo uno de los puntos planteados por el señor Jorge Morales Ramírez, Asesor de la Presidencia de la Corte en su oficio 360-P-2019 del 20 de diciembre de 2019.*

***Formulación de Presupuesto 2021 para la atención de la población indígena***

***Programa 926. Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo***

***Dirección Nacional de Justicia Restaurativa:***

* *Subpartida 10701 Actividades de Capacitación: servicio de alimentación y materiales auxiliares de capacitación para cuatro talleres para 30 personas participantes, se proyecta un presupuesto de ¢900.000,00 (novecientos mil colones con 00/100).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Capacitaciones*** | | | | |
|  | ***Cantidad de personas*** | ***Cantidad de días*** | ***Precio Promedio*** | ***Total*** |
|  |  |  |  |  |
| *REFRIGERIO* | *30* | *1* | *1.500,00* | *45.000,00* |
| *ALMUERZOS* | *30* | *1* | *4.000,00* | *120.000,00* |
| *MATERIALES* | *30* | *1* | *2.000,00* | *60.000,00* |
|  |  |  | *subtotal* | *225.000,00* |
|  |  | *Cantidad de capacitaciones* | | *4* |
|  |  |  | ***Total*** | ***900.000,00*** |

* *Subpartida 10502 Viáticos dentro del país: alimentación y hospedaje para tres personas y dos días, se proyecta un presupuesto de* *¢399.600,00 (trescientos noventa y nueve mil seiscientos colones con 00/100).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pago de viáticos*** | | | | |
|  | ***Cantidad de personas*** | ***Cantidad de días*** | ***Tarifa*** | ***Total*** |
| *DESAYUNO* | *3* | *2* | *3500* | *21.000,00* |
| *ALMUERZO* | *3* | *2* | *4500* | *27.000,00* |
| *CENA* | *3* | *1* | *4500* | *13.500,00* |
| *HOSPEDAJE* | *3* | *1* | *12800* | *38.400,00* |
|  |  |  | *subtotal* | *99.900,00* |
|  |  | *Cantidad de capacitaciones* | | *4* |
|  |  |  | ***Total*** | ***399.600,00*** |

* *Subpartida 10499 Otros servicios de gestión y apoyo: servicio de una persona intérprete para la interacción con la población indígena para los cuatro talleres, se proyecta un presupuesto de* *¢434.400,00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos colones con 00/100).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pago de interpretes*** | | | | |
|  | ***Cantidad de personas*** | ***Cantidad de días*** | ***Tarifa*** | ***Total*** |
| *Servicio de interprete* | *1* | *1* | *108600* | *108.600,00* |
|  |  |  | *subtotal* | *108.600,00* |
|  |  | *Cantidad de capacitaciones* | | *4* |
|  |  |  | ***Total*** | ***434.400,00*** |

*Cabe mencionar que la Dirección de Gestión Humana no emite formulación de presupuesto para este fin, dado que los esfuerzos que realiza son en procura de brindar un mejor servicio a las poblaciones indígenas mediante la capacitación y sensibilización al personal judicial con el fin de que el personal judicial brinde un adecuado servicio y acceso a la justicia, esto a través del desarrollo de cursos virtuales en el Subproceso Gestión de Capacitación, de los cuales uno de ellos se está ofertando en la matrícula virtual y el otro está por desarrollarse de acuerdo con las temáticas y prioridades que defina la Subcomisión de Pueblos Indígenas.*

***Programa 927. Servicio Jurisdiccional***

***Escuela Judicial***

* *Subpartida 10701 Actividades de Capacitación: servicio de alimentación completa para tres capacitaciones de dos días para 35 personas participantes se proyecta* *un presupuesto de ¢3.318.000,00 (tres millones trescientos dieciocho mil colones con 00/100).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Proyección Alimentación Actividades de Capacitación subpartida 10701*** | | | | | | | | | |
| ***Capacitación 1*** | ***Cantidad de Participantes*** | ***Cantidad días*** | ***Desayuno*** | ***Almuerzo*** | ***Bocadillos*** | ***Cena*** | ***Total*** | |
| *35* | *2* | *3.500,00* | *5.500,00* | *1.300,00* | *5.500,00* | *1.106.000,00* | |
|  | | | | | | | | | |
| ***Capacitación 2*** | ***Cantidad de Participantes*** | ***Cantidad días*** | ***Desayuno*** | ***Almuerzo*** | ***Bocadillos*** | ***Cena*** | ***Total*** | |
| *35* | *2* | *3.500,00* | *5.500,00* | *1.300,00* | *5.500,00* | *1.106.000,00* | |
|  | | | | | | | | | |
| ***Capacitación 3*** | ***Cantidad de Participantes*** | ***Cantidad días*** | ***Desayuno*** | ***Almuerzo*** | ***Bocadillos*** | ***Cena*** | ***Total*** | |
| *35* | *2* | *3.500,00* | *5.500,00* | *1.300,00* | *5.500,00* | *1.106.000,00* | |
| ***Total Presupuesto requerido para alimentación en capacitación*** | | | | | | | | ***3.318.000,00*** | |

***Programa 928. Organismo de Investigación Judicial***

***O.I.J.***

*En oficio EJ-CAP-OIJ-113-2020 la Msc. Kattia Campos Zúñiga Jefa de la Unidad de Capacitación del O.I.J. indica que no tienen contemplado ese tipo de actividad académica para las personas indígenas, por lo que no requerirán presupuesto para las visitas de capacitación, dado que las actividades están dirigidas a sensibilizar al personal del OIJ sobre los derechos y acceso a la justicia de la población indígena.*

***Programa 929. Ministerio Público***

***Ministerio Público***

* *Subpartida 10701 Actividades de Capacitación: La Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI), en conjunto con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), imparte talleres enfocados en la problemática que enfrenta cada territorio; para el periodo 2021 se planea la visita de 23 territorios indígenas del país para la atención de las mujeres y los hombres de cada comunidad indígena, con el objetivo de comunicar la función especializada de la FAI y su diferenciación de otras jurisdicciones, así como las funciones de la OAPVD, se brindan talleres enfocados en la necesidad de cada territorio, estos talleres les permiten empoderarse y conocer las conductas delictivas que pueden denunciar.*

*Para el año 2019, participó un total de trescientas cincuenta y nueve personas (359), 183 hombres y 176 mujeres. El Ministerio Público ha realizado esfuerzos para brindar una merienda a quienes asisten a los talleres, la cual consiste en galletas y refrescos, refrigerio que se encuentra acorde al presupuesto de la Fiscalía, no obstante, esta merienda no es suficiente, por cuanto la población meta realiza un gran esfuerzo físico para participar en estos talleres, ello por cuanto hay que valorar las circunstancias geográficas de cada territorio.*

*Por lo que se proyecta impactar la cantidad de personas que se atendieron en el 2019 y por lo tanto se* *requiere un monto de ¢1.500.000 colones (un millón quinientos mil de colones) para el servicio de alimentación de los talleres que se impartirán.*

***Programa 930. Defensa Pública***

***Defensa Pública***

* *Subpartida 10701 Actividades de Capacitación: "Taller intercultural de Acceso a la Justicia y Defensa Pública para personas indígenas", cuatro talleres para 40 personas aproximadamente, se requiere el servicio de alimentación para los cuatro talleres, es decir, un total de 160 almuerzos y 160 refrigerios, se* *proyecta un presupuesto de ¢602.000,00 (seiscientos dos mil colones con 00/100).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nombre de curso*** | ***Fechas, hora y lugar*** | ***Recursos solicitados*** | ***Motivo*** | ***Estimación presupuestaria*** |
| *"Taller inter cultural de Acceso a la Justicia y Defensa Pública para personas indígenas"*  *Se comparte con las personas indígenas sobre sus necesidades de atención, además, se explican las funciones que realizan las personas defensoras públicas en todas las materias. Se comparte sobre la Ley de Acceso a la Justicia de las Personas Indígenas, los derechos y deberes de las personas indígenas; el Poder Judicial y su atención con personas indígenas, etc.*  *En los talleres normalmente se invita a las administraciones regionales y las contralorías de servicio.* | *Son 4 fechas por definir, dos entre los meses de febrero y marzo; otra entre mayo y junio; y la última entre setiembre y octubre de 2021.*  *Los lugares dependen en algunas ocasiones del clima y la posibilidad real de poder ingresar. Son las siguientes: Comunidad del territorio Conte Burica; Comunidad de territorio Abrojos Montezuma; Comunidad Talamanca Telire; Comunidad de Territorio Cabécar Chirripó.*  *Todos estos lugares son poblaciones ubicadas en áreas de intermedio a difícil de ingreso y egreso.*  *Personas indígenas participantes: cabécar, bribris, ngäbes y guaymíes.*  *En virtud de tratarse de talleres en territorio indígena, y para ingresar y salir hay que utilizar normalmente uno o varios medios de transporte, se inicia a las 9:00 am y se termina a las 13:00 pm.*  *Normalmente la comida (almuerzo) la preparan las personas indígenas por un tema cultural, y se les paga por los materiales para la preparación, la mano de obra, la cocción, de tal forma que se consuma la comida de acuerdo a su cosmovisión.*  *No hay facturas en casi ningún lugar.*  *Para la merienda de entrada normalmente se le solicitan jugos y galletas.* | *En cada taller llega un aproximado de 40 personas. Depende no de la invitación, sino del clima y lugar; así como de lo que se lleve y ofrezca, que se contará con más personas. Dependiendo de la comunidad: Libros para biblioteca, útiles escolares, pupitres, ropa, etc.*  *Lo que se solicita es el dinero equivalente al valor de la merienda (jugos y galletas) y el almuerzo de todas las personas indígenas participantes.*  *Por taller se pueden cotizar para 40 personas indígenas, si llegan más personas entre las personas funcionarias se solicita dinero para pagar la diferencia.* | *Realización de cuatro talleres en territorios indígenas de mediano a difícil acceso.*  *Refrigerio para 40 personas indígenas participantes en cada uno de los talleres inter culturales al inicio de la actividad. (Jugos y galletas)-*  *Almuerzos para las 40 personas indígenas participantes al final de la actividad.*  *Esto para cada una de las actividades, sea para un total de 160 personas indígenas en los 4 talleres.*  *Se requieren 160 almuerzos y 160 refrigerios, estos últimos solo incluyen un jugo y una galleta. Los almuerzos normalmente se les solicitan a las personas indígenas que los preparen, por un tema de respeto a su comida, lejanía, y difícil transporte.* | *-Para el refrigerio se estima un total de ¢122,000.00 para los 4 talleres.*  *-Para el almuerzo, se estima el costo de ¢3,000.00 c/u para 40 personas, lo que determina un costo de ¢120,000.00, siendo un total de ¢480,000.00.* |
|  |  |  |
| ***Estimación total del costo de la actividad***  ***\* Monto calculado con base en las erogaciones en las que podría incurrir la Administración de la Defensa Pública (puede estar sujeto a cambios por circunstancias imprevistas)*** | | | | ***Total ¢602,000.00 para subpartida 1.07.01 Actividades de Capacitación, Programa 930 Defensa Pública*** |
|  | | | |  |
| ***Nota: Las personas participantes de esta actividad reciben su salario ordinario.*** | | | | |

***Conclusiones y recomendaciones:***

1. *Cada programa presupuestario proyecta lo siguiente:*

* ***Programa 926:******Subpartida 10701*** *Actividades de Capacitación por un monto de ¢900.000,00 (novecientos mil colones con 00/100).* ***Subpartida 10502*** *Viáticos dentro del país por un monto de ¢399.600,00 (trescientos noventa y nueve mil seiscientos colones con 00/100).* ***Subpartida 10499*** *Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de ¢434.400,00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos colones con 00/100).*
* ***Programa 927:******Subpartida 10701*** *Actividades de Capacitación por un monto de ¢3.318.000,00 (tres millones trescientos dieciocho mil colones con 00/100).*
* ***Programa 929:******Subpartida 10701*** *Actividades de Capacitación por un monto de ¢1.500.000 colones (un millón quinientos mil de colones)*
* ***Programa 930:******Subpartida 10701*** *Actividades de Capacitación por un monto de ¢602.000,00 (seiscientos dos mil colones con 00/100).*

*En síntesis, se requiere un presupuesto total de:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Subpartida*** | ***Actividad*** | ***Monto*** |
| *10701* | *Actividades de Capacitación* | *₡6.320.000,00* |
| *10502* | *Viáticos al interior* | *₡ 399.600,00* |
| *10499* | *Otros servicios de gestión y apoyo* | *₡ 434.400,00* |

* *Es importante destacar que como parte de la experiencia que ha tenido el Ministerio Público durante los 11 años en las visitas a esos territorios, se determina que en las ocasiones en las que se contrata servicios de alimentación, por ejemplo, para cumplir con los requerimientos culturales de cada pueblo, se hace necesario efectuar las coordinaciones con los grupos organizados a lo interno de cada comunidad y no cuentan en todos los casos con facturas timbradas o facturas electrónicas, por lo que se requiere se considere este aspecto con el fin de que se pueda valorar una excepción en la gestión de la alimentación para los efectos del pago de este tipo de servicios en el entorno de cada territorio indígena. (…)”.*

Resumen de requerimientos:



***- 0 -***

En esta misma sesión, la Licda. Waiman Hin hizo una presentación del tema de becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para el personal judicial becado. Se explican las razones de la baja ejecución en la subpartida 6.02.01 becas a funcionarios, especialmente en el Programa 927 Servicio Jurisdiccional. Indica que los recursos que no se ejecutarán son comunicados al Departamento Financiero Contable. Sin embargo, por las restricciones legales impuestas por la Asamblea Legislativa, no se pudieron realizar los traslados de recursos entre subpartidas, por lo que los recursos no se pudieron ejecutar. Menciona la importancia de que el Consejo Superior apoye en mayor medida al Consejo de Personal, en cuanto a la aprobación de las recomendaciones que se emiten para ayudas económicas. Finalmente, doña Waiman explica la coordinación que se realizó con las Unidades de Capacitación para formular el presupuesto del 2021 y propone que cada programa a través de las Unidades de Capacitación, realicen obligatoriamente un cronograma que propicie una mayor ejecución de los recursos asignados para capacitación.

El Lic. Fernando Cruz señala la importancia de becar al personal y aprovechar la oportunidad que representa, a pesar de las dificultades que a veces se presentan para poder optar.

El Lic. Juan Carlos Sebiani, comentó que el poco aprovechamiento de las becas y ayudas económicas por parte de las y los compañeros judiciales dada la situación económica en muchas ocasiones es muy difícil, tomar un permiso o costear un viaje y continuar con sus obligaciones económicas, por lo que debe ser un sistema más flexible a las necesidades reales de la organización.

La Licda. Ana Eugenia Romero indicó que se debe hacer un recorte parcial, propone que se otorgue lo que ejecutaron, máxime un 30%.

El Lic. Carlos Montero propone omitir para el 2021 la solicitud de recursos para becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para el personal judicial becado, dada la situación económica país, esto deberá motivarse en la agenda de presupuesto a realizarse en una sesión formal.

El Lic. Fernando Cruz plantea que se debe hacer una consulta institucional de previo a eliminar completamente los recursos, tal como lo propone don Carlos Montero. Considera que no se debe hacer una supresión tan radical a la población.

Al respecto, la Licda. Nacira Valverde señala que como parte de los ajustes derivados del impacto del IVA la institución sacrificó algunas necesidades prioritarias como limpieza, alquileres y otros en servicios esenciales, aspecto que debe considerarse al momento de formular las becas para el 2021 y el Ministerio de Hacienda hará una revisión de las subpartidas superfluas y que hacer el ejercicio de revisión en este momento podría ser importante para redireccionar hacia otras necesidades prioritarias.

El Lic. Gary Amador considera que el tema de capacitación es estratégico y es importante mantenerlo en procura de continuar mejorando la prestación de los servicios, especialmente en el ámbito jurisdiccional.

La Licda. Waiman Hin expuso los factores de riesgo psicosocial, en donde destacan la capacitación y el compromiso. Sugiere devolver las propuestas para dar prioridad a lo virtual, valorar el impacto de la crisis y presentar una nueva propuesta en la sesión del próximo viernes 3 de abril. Considerando que en los permisos se incluyen los permisos del personal especialistas en contenido que participan de los cursos de formación de la Escuela Judicial aspecto que se deberá individualizar.

Por su parte, la Licda. Roxana Arrieta propuso que el Consejo Superior defina un porcentaje y cómo se recuperaría esta subpartida en el futuro. Doña Nacira aclaró que la idea es redireccionar los recursos hacia otras subpartidas de la misma línea de ingresos corrientes.

En cuanto a los recursos para las actividades de capacitación con poblaciones indígenas, doña Waiman Hin explica que se procura lograr la participación activa de estas poblaciones, así como que el refrigerio debe ser acorde con las costumbres alimenticias de las poblaciones indígenas.

La Licda. Sara Castillo reiteró la importancia del abordaje diferenciado que requieren estas poblaciones.

Doña Nacira Valverde propuso trasladar los recursos para la subpartida de alimentos y bebidas, dadas las características especiales de este servicio.

Finalmente, don Hugo Porter señaló la importancia de la capacitación en algunas áreas, especialmente en apego a acuerdos de Corte Plena que exigen perfiles específicos y que esta herramienta permite caminar en esa dirección.

Como resultado de la discusión y el análisis se dispuso lo siguiente:

***Se acordó:1)*** *La DGH debe precisar los recursos para los especialistas en contenido de los cursos de formación de la Escuela Judicial****. 2)*** *La DGH debe desarrollar escenarios de rebajo para ser conocidos por el Consejo Superior en la sesión del próximo 3 de abril, considerando entre ellos la alternativa de capacitación definida a partir de la muerte del Dr.Luis Paulino Mora, la cual no se ha ejecutado; lo anterior con el propósito de ajustar la solicitud de recursos en al menos un 30% de lo solicitado inicialmente.* ***3)*** *Aprobar la inclusión en la subpartida de Alimentos y Bebidas de los requerimientos solicitados por la* ***Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas,*** *respecto de dotar a las**Unidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, Escuela Judicial, Dirección de Justicia Restaurativa, y las Comisiones, entre otros, de recursos para las actividades de capacitación en las que participa la población indígena. 4) El Integrante Montero salva el voto, porque considera que el Poder Judicial no está aislado de la realidad nacional y que nuestros recursos provienen del presupuesto nacional que se nutre de los impuestos que pagamos todos los habitantes. Que ante la pandemia que sufre el país, y que además se sabe que esta situación será de meses, luego vendrá un proceso de recuperación económica muy fuerte para el país y la economía mundial, que al ser una economía pequeña y abierta, estamos muy expuestos a los efectos de los mercados internacionales. De ahí que es de esperar una afectación importante en la actividad económica y una reducción de los ingresos fiscales, que derivarán en un mayor déficit fiscal, del cual el Poder Judicial no es ajeno. De ahí que debemos ser sumamente responsables con la presupuestación del año 2021, donde primero podamos garantizar a la ciudadanía la administración de justicia y dejar para otras épocas temas adicionales como las becas y capacitaciones en el exterior, que esos casi mil millones de colones se deberían utilizar para labores esenciales del Poder Judicial y que tengan impacto directo y generalizado en la administración de Justicia. Que las personas profesionales que laboran en este Poder de la Republica, se contratan luego de estrictos procesos de contratación y verificación de atestados académicos que los acreditan para las labores en que fueron contratados, de ahí que la suspensión por un año del plan de becas no afectará la calidad del servicio.*

***- 0 -***

Por otra parte, en el punto 5 de la reunión de trabajo del pasado 27 de marzo, la Licda. Nacira Valverde, expuso la información relativa con la Subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud. Luego de la exposición de la Licda. Valverde, el análisis y la discusión de los integrantes, se dispuso entre otros, lo siguiente:

***“(…) 3)*** *Solicitar a la DGH un escenario relacionado con la posibilidad de asignar la posible reducción en Becas para la ampliación de servicios de salud."*

***- 0 -***

# En virtud de los aspectos anteriores, en la reunión del pasado 3 de marzo, la Dirección de Gestión Humana, presentó los escenarios elaborados.

# Doña Waiman Hin expone en primera instancia la separación del presupuesto asignado a los especialistas en contenido, por programa institucional, por un total de ¢582.865.098. Doña Waiman Hin dice que estos recursos son para garantizar los programas de capacitación de las Unidades de Capación existentes.

# Don Carlos Montero comenta la posibilidad de ajustar el rubro para especialistas en contenido.

# Doña Sandra Pizarro comenta que se debe mantener los recursos para mantener el funcionamiento de los programas anuales de capacitación. Si fuera capacitaciones emergentes, considera que esa capacitación sí se podría recortar.

# Doña Nacira plantea la importancia de vincular estos recursos a planes de capacitación, que deberían solicitarse a las Unidades y que la ejecución de los recursos se dejará sujeta a la aprobación de planes de trabajo que deberán presentar para aprobación del Consejo Superior, lo anterior en virtud de la incertidumbre vigente.

# Doña Sara Castillo comenta que participó de la aprobación de los planes de capacitación 2020 de las Unidades, los cuales responden a diagnósticos actualizados y vigentes. No aprobar estos recursos condenaría a las Unidades a cerrar su funcionamiento. Considera se deben aprobar los recursos.

# Doña Roxana Arrieta aclara que desde la Dirección de Gestión Humana se reservan los dineros y se van descargando conforme las solicitudes en el transcurso del año.

# Don Carlos Montero señala que si los recursos son para los permisos de los encargados de brindar la capacitación entonces los considera necesarios y que aprobaría la iniciativa de los planes de trabajo por parte del Consejo Superior para garantizar la dirección de los recursos, es decir que se revisará la ejecución de los recursos.

# En segunda instancia, la Licda. Waiman Hin expuso sobre la necesidad de recursos para ayudas económicas para participar de programas de capacitación en los temas de proyectos y fondo de jubilaciones (inversiones y riesgos). Estos rubros totalizan ¢16.516.087 en el Técnico en Administración de Proyectos para 65 personas y ¢10.000.000 para 15 personas en el tema de inversiones y riesgos.

# Don Carlos Montero considera que lo relativo a la Junta de Jubilaciones debería omitirse, ya que la Junta se está haciendo cargo de este tema.

# Don Juan Carlos Sebiani consulta sobre el tema de la capacitación en materia de proyectos, si será necesario seguir capacitando en la temática.

# Al respecto doña Nacira aclara que se ha estado trabajando a nivel institucional, que hay mucha rotación del personal, pero dadas las condiciones se podría limitar la participación.

# Doña Sara Castillo plantea la importancia de aparejar la capacitación con el licenciamiento. Doña Nacira Valverde explica que se ha tratado de mejorar en este tema y actualmente las personas que tienen licencia están capacitadas y en las oficinas que trabajan bajo proyectos sí se tienen las licencias necesarias y la capacitación correspondiente.

# Doña Waiman propone eliminar los recursos para capacitación del Fondo (riegos e inversiones) y dejar sólo ¢10 millones en proyectos.

# Por su parte, en el tema de BECAS expone sobre los convenios existentes y las becas que tienen compromiso de continuar para el 2021.

# En el caso de la Beca “Doctorado Luis Paulino Mora” se plantea asignar un cupo para el 2021.

# Además, expone los rubros que se eliminan, aquellas que se incluyeron por primera vez, aquellas en donde no ha habido participación, actividades internacionales por invitación.

# Doña Waiman Hin, expone que en la sesión del pasado 27 de marzo los datos fueron:

# 

# Luego del análisis realizado se propone por parte de la Dirección de Gestión Humana lo siguiente:

# En la subpartida 00105 Permisos para Sustitución, se propone mantener ¢111.521.449, rebajando ¢144.977.918; manteniendo además lo relativo a los especialistas en contenido.

# En la subpartida 10701 Capacitación, se propone mantener ¢6.509.300 y rebajar ¢47.727.265.

# En la subpartida 60201 Becas, se propone mantener ¢27.847.159 y rebajar ¢56.496.821.

Lo anterior conforme el detalle adjunto:



# El rebajo total sería del 63.8%, equivalente a ¢249.202.004, manteniendo dentro del presupuesto lo relativo a los especialistas en contenido por ¢582.865.098.

# Como resultado de la discusión y el análisis se dispuso lo siguiente:

# ***Se acordó:*** *1) Aprobar la propuesta de la Dirección de Gestión Humana: En la subpartida 00105 Permisos para Sustitución, se propone mantener ¢111.521.449, rebajando ¢144.977.918; manteniendo además lo relativo a los especialistas en contenido. En la subpartida 10701 Capacitación, se propone mantener ¢6.509.300 y rebajar ¢47.727.265. En la subpartida 60201 Becas, se propone mantener ¢27.847.159 y rebajar ¢56.496.821. El rebajo total sería del 63.8%, equivalente a ¢249.202.004, manteniendo dentro del presupuesto lo relativo a los especialistas en contenido por ¢582.865.098. 2) En el caso de los recursos para los especialistas en contenido, deberán las Unidades de Capacitación presentar al Consejo Superior un Plan de Trabajo que permita asegurar la ejecución de los recursos. 3) Aprobar ¢10 millones para capacitación en proyectos y eliminar los recursos para capacitación del Fondo de Jubilaciones en temas de riesgos e inversiones.*

***- 0 -***

Informa la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, que “La propuesta de los servicios médicos la trae ya doña Waiman Hin Herrera, Subdirectora de Gestión Humana.”



Se concede el uso de la palabrada a la licenciada Waiman Hin Herrera, de calidades citadas, quien manifiesta: “Buenos días, con respecto al acuerdo que ustedes habían tomado en marzo, que nos comunicaron esta semana, lo que hicimos fue retomar cual fue el monto que se había rebajado específicamente para becas, lo que el Consejo nos solicita es que revisemos si hay la posibilidad de asignar esa reducción de la subpartida de becas, para la ampliación de los servicios de salud, lo que hicimos fue tomar concretamente, el monto de reducción, que se aprobó ya para el programa 926, y a partir de ese monto estimar si es viable una ampliación de servicios, en concreto comentarles, que la reducción que se aplico al 926, en el cuadrito que está en sus pantallas a mano derecha, corresponde alrededor de 31.000.000.00 colones, este fue el rebajo que se aplico a la subpartida de permisos en becas específicamente, en el programa 926.

La inversión de apertura de un servicio de salud en las mismas condiciones que se tienen en este momento en los diversos circuitos judiciales, requiere como mínimo el personal de un medico, un profesional en enfermería y un administrativo, ese es el mínimo de personal que se requiere para poderlo habilitar, este servicio en los circuitos judiciales se da por medio tiempo, el auxiliar administrativo por un tiempo completo, sin embargo para que pudiera ajustarse la propuesta a los 31 millones, la propuesta sería que los 3 puestos se puedan abrir únicamente por medio tiempo, de manera que el monto anual por medio tiempo de este equipo de trabajo es de alrededor de 29 millones, lo que daría una holgura para poder destinar ese presupuesto que se rebajo a la ampliación de algún servicio de salud.

Con respeto al tema de insumos y equipos, estaríamos asumiéndolo con la ejecución del 2020 si se aprobara, y 2021 para no tener que generar un adicional en formulación con respecto a insumos y equipos de manera que redistribuiríamos aprovechando la crisis de este año, que hay un consumo menor por la cantidad de personas que se están atendiendo y podríamos reorientar algún equipo que se en este momentos tenemos en algunas zonas duplicado, porque siempre se mantiene por si hay algo que se descompone hay que mandarlo a reparación, entonces valorando el inventario de activos e insumos consideramos que se podría asumir de esta forma. Para poder orientar la decisión de ustedes les compartimos este detalle que tiene que ver con la cantidad o la frecuencia con la que las personas servidoras del Poder Judicial se incapacitan, para tomar de alguna manera la decisión en donde podría ser más oportuno abrir un servicio de salud en medio tiempo. Si observan los cajones en amarillo registran las áreas en donde en este momento no hay servicio de salud institucional y hay una frecuencia mayor de incapacidades, ¿Qué quiere decir este cuadro?; que la primera línea por decirlo así, cada día una persona se incapacita en San Ramón, en la segunda línea cada 2 días hay una persona incapacitada en Guápiles, hay una persona incapacitada en Pérez Zeledón, y en el área por ejemplo de San Carlos o en el área de Liberia no hay servicios de salud. A partir de este detalle estadístico de la cantidad de incapacidades y tomando en consideración que uno de los objetivos primordiales de los servicios de salud es disminuir el ausentismo laboral producto de la enfermedad consideramos que la propuesta podría orientarse a esos circuitos que tienen mayor frecuencia de personal incapacitado; de manera que la propuesta concreta seria que con el monto correspondiente que se rebajó de becas del programa 926, se realice la apertura de un servicio de salud en el 2021, mediante la asignación de permisos con goce de salario, sería duplicando por ejemplo los puestos que tenemos en algún otro puesto de servicio de salud o la ampliación de los medios tiempos a tiempo completo, pero haciendo la observación que como esto tiene que ir, cuando usted amplía el tiempo de puesto, tiene que meterlo en la Ley, entonces de alguna forma habría que incluirlo la formulación 2021, aumentando la cantidad de horas, no por permiso, sino aumentando la cantidad de horas. En este caso proponemos que la ubicación se realice en algunas de estas 3 localidades que sería San Ramón, Guápiles o Pérez Zeledón; sabemos y este consejo ha visto en diferentes ocasiones una propuesta del Circuito de Guápiles indicando que ellos tienen espacio físico que tienen toda la disposición para que allá se les habrá el servicio de salud sin embargo por temas presupuestarios esto no ha sido posible y en el caso específico de San Ramón y Pérez Zeledón tendríamos que indagar si ellos tienen espacio físico, les voy a ser honesta no quisimos preguntarlo para no generar alguna expectativa inadecuada por eso me disculpo por no tráeles la información, pero no quisimos alertar que se está conociendo este tema, esto siempre genera alguna aspiración. Entonces en este caso habrá que valorar si en estos circuitos abría alguna posibilidad. Esto sería la propuesta, entendiendo si habrá alguna iniciativa que podría cubrir como ustedes nos lo pidieron con los recursos de becas que no se están formulando específicamente en el 926, muchas gracias”

Expresa la integrante Castillo: “Señor Presidente, magistrado Cruz, me parece recordar que en San Ramón se iba a abrir la medicatura forense y no pudimos, hubo que quitarla porque se vino la crisis de los médicos, recuerda, me parece que ahí ya hay hasta un consultorio instalado, tal vez la Directora Ejecutiva Romero Jenkins, nos puede recordar eso pero me parece que ya está hasta amueblado.”

Manifiesta doña Ana Romero Jenkins: “Habría que valorarlo porque el tema es que ese espacio se abrió dentro del área del OIJ, por ser Medicatura Forense y lo equipó completamente el OIJ y entiendo que en los planes del Dr. Franz Vega, de ampliación servicios para lo que tiene médicos en proceso de formación, estaba atender esto, porque ya había un compromiso, pero podríamos averiguarlo porque pensar en otro espacio es difícil.  Tenemos en un local alquilado, pero ahora con toda esta demanda de salas de juicio, estamos habilitando 2 salas de juicio.

En Guápiles ellos habían confirmado que si disponían del espacio.

En Pérez Zeledón me parece que no, ellos están en algunos procesos de alquiler pero más bien eso apenas lo que les está dando un respiro para reubicarse en el edificio porque tienen muchas limitaciones, pero podría hacer la consulta”

Al respecto, Guápiles si tiene espacio, hasta se había conocido una gestión en el Consejo, ellos tienen espacio en un local alquilado, para la materia Civil y Laboral.”

Prosigue la integrante Pizarro, quien consulta si: “Guápiles ya tiene las condiciones o que faltaría para ubicarlo, porque son zonas alejadas, está el hospital de Limón que queda a una distancia bastante lejos, si considero que es una zona para valorar.”

Seguido, la licenciada Waiman Hin Herrera, responde una consulta del Presidente, Magistrado Cruz: “Al respecto señor Presidente, si los 3 circuitos que estamos analizando, tienen todos el servicio mínimo de atención médica por contrato, Guápiles también y Pérez Zeledón”

Manifiesta, la máster Ana Eugenia Romero Jenkins: “En esa medida abogaría porque como vamos a dejar de contratar, en alguna de estas 3 localidades, valoremos disponer de estos recursos para llevar la contratación a otra localidad, porque de lo contrario no estaríamos ganando como institución, entonces si resulta de suma importancia que este Consejo lo entre a valorar, porque, aunque sea 1 hora en atención a la salud para todos es importantísimo”

Expresa la licenciada Nacira Valverde Bermúdez; “Que la propuesta que hacía doña Waiman es en el sentido de ampliar los medios tiempos o hacerlo con permiso con goce de salario, yo diría que se debería ampliar los medios tiempos, porque es una actividad rutinaria del Poder Judicial, entonces para dejarlo de forma estable la propuesta se debería de valorar con los medios tiempos y no con permisos con goce de salario y sustitución, conforme lo regula la normativa.”

Interviene la licenciada Waiman Hin Herrera: “Efectivamente y en ese caso lo que podríamos tener por cercanía es la ampliación de los puestos que están destinados a Limón, pero habría que hacer la misma consideración que se hizo en su momento con Grecia, que es la atención la cual tendría que ser en la tarde, porque no podría duplicarse con las mismas 8 horas, verdad una doble atención en la mañana, tendría que ser que en la mañana se use el puesto en Limón y se nombren otras personas para que atiendan en Guápiles pero durante la tarde como se está haciendo en Grecia ”

Se concede el uso de la palabra al integrante Montero Zúñiga: “En esa misma línea, la operatividad de los permisos que otorga el artículo 44 de la LOPJ, es media complicada, porque para cumplir con un 44 habría que darle permiso a la gente de Limón y mandarla a trabajar a Guápiles y sustituirlo en Limón, entonces posiblemente el médico de Limón no va a querer irse para Guápiles, podría ser que sí, pero no necesariamente la operatividad del 44 es bien compleja, y también ayer vimos una nota que nos mandó la Contraloría sobre un estudio que están haciendo y cuestiono los permisos que han sido otorgados bajo el citado artículo, entonces pienso que en esto lo mejor es dejarlo no depender de los 44 porque podría ser una relación muy inestable, al rato es más estable ampliar los permisos para la tarde, conforme lo cita la licenciada Waiman, para que sea para la tarde para que no se duplique los códigos en la mañana ”

Interviene la licenciada Waiman Hin Herrera: “Si la decisión fuera ampliar a 8 horas esos puestos igual tendríamos que resolver el administrativo, porque el administrativo en Limón si está a 8 horas, si hay una labor administrativa en los servicios de salud, porque durante las tardes que no hay atención, el administrativo es el que se encarga de ir y dejar las recetas al área de salud que corresponde para que los medicamentos se pueden entregar en el edificio, hay una serie de trámite administrativo que hace, en esta propuesta pensando en el costo, habíamos valorado el medio tiempo del administrativo con un permiso, eso no entraría dentro de la ampliación porque en realidad este puesto ya está a 8 horas, salvo que se tome la decisión pero ya hay una persona nombrada en propiedad, 8 horas no creo que sea tan fácil de trasladarse de un Circuito a otro, la situación administrativa habría que valorarla si por ejemplo se hace igual que como se está haciendo con Grecia, no sé si habría opción con la administración de tener alguna colaboración por lo menos durante el tiempo de la mañana por el llenado la papelería, el llevado la agenda podríamos trabajar con algunas horas o medio tiempo. Pero digamos eso habría que valorarlo y tal vez por la premura y por no exponer la oportunidad de conversarlo con la administración de Guápiles, es una situación que abría que resolver. Si creo que ganaríamos mucho ya teniendo los puestos profesionales, y administrativo podríamos buscar cómo resolverlo, si me interesa aclarárselos porque, para que de alguna manera se comprenda que no estaría completamente resuelto la situación de la atención, porque todavía faltaría el tema administrativo”

Consulta el integrante Montero Zúñiga: “¿los puestos administrativos de los servicios médicos hay algunos similares en las administraciones regionales que uno pueda pensar en clonarlo o ampliar algún medio tiempo que exista en otro lugar?”

Al respecto la licenciada Waiman Hin Herrera, evacua la consulta: “Es la categoría más baja la administrativa, regularmente en las administraciones lo que hay son asistentes o técnicos, dependiendo de lo robusta que sea la administración, pero podríamos buscar si en el circuito hay algún otro puesto similar que permita con un permiso inclusive hasta por medio tiempo asumir esta labor”

El integrante Montero Zúñiga, consulta: “La duda que me queda, es que hay si pienso que mejor aplicaríamos un permiso de acuerdo con el artículo 44, que un medio tiempo, porque el medio tiempo tendríamos que crear un nuevo código para poder reforzar ese circuito-”

Contesta la licenciada Waiman Hin Herrera: “Si, efectivamente integrante Montero, para el medio tiempo si habrá que crear una plaza, no se puede crear plazas”

Agrega la licenciada Nacira Valverde Bermúdez: “Conocida la propuesta, siento que es del interés de todos ustedes que se dé la posibilidad del servicio medio en esas zonas extendiendo los códigos, se podría dejar que se apruebe y que se afine la propuesta parte de la Dirección de Gestión Humana ya de forma más concreta. Si es la intensión de ustedes, con esa aprobación para que ellos ya afinen la propuesta si ya ustedes les parece”

El Presidente, magistrado Cruz: “Me parece lo señalado por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, lo que estamos pendientes son detalles que son importantes pero hay una voluntad, todavía no definiríamos el lugar porque no tenemos el lugar y los datos.”

Expresa la licenciada Waiman Hin Herrera: “Por lo que le comentaba de los puestos en Limón consideramos que puede ser Guápiles un poco por el uso del puesto en la zona, pero perfectamente podemos afinar dentro de esta propuesta, afinar otras variables, la cercanía de los servicios de salud, público del lugar un poco de lo que la integrante Pizarro indicaba y otros elementos que quizá por la premura esta semana no se pudieron valorar; pero podríamos perfectamente traer. Mi preocupación es que doña Roxana me comento que hoy se suponía que ya tenía la limitación para generar cualquier inclusión al presupuesto, esto específicamente habría que aumentar las plazas en este momento habría que aumentar las 2 plazas a 8 horas, porque eso sí tendría que irse en la propuesta de presupuesto, entonces no se si al final, un poco en la línea de que se puede afinar, eso sí se podría acordar como usted lo está mencionando para poderlo incluir ya en el archivo dándole la indicación a Alejandra que lo haga y afinando ya después donde se va a abrir el servicio y buscando las alternativas del puesto administrativo.”

Se le concede el uso de la palabra a la máster Ana Eugenia Romero Jenkins: “Indagando con los 2 administradores, en Guápiles efectivamente tenemos todo acondicionado porque hubo una remodelación que concluyó el año pasado y la sala de lactancia se reubico, entonces eso permitió que quedara un espacio que incluso dispone de servicio sanitario que eso es uno de los requerimientos del Ministerio de Salud y esto es, rectifico en el edificio principal no es en el alquilado; y en el caso de San Ramón, me dice doña Aura que bueno recordemos que el doctor Vega incluso había solicitado dejar sin efecto el código de la oficina una gestión que hizo ante el Consejo y si es una área también que pese a las necesidades de espacio que hay, se mantiene desocupada y está habilitada específicamente para un consultorio, que tiene todas las condiciones, entonces tendríamos 2 localidades que tienen los que requieren. Ahora escuche el tema de las medicinas, con las medicinas nosotros no tendríamos ningún inconveniente en dar el servicio de trasladar las medicinas, lo hemos hecho, me parece que lo hemos hecho en otros servicios, entonces nosotros lo coordinaríamos, lo que si ya no podría comprometerme es tener una persona administrativa permanentemente como secretaria o como apoyo administrativo del servicio tendríamos, que buscar una solución para valorarlo, pero lo podríamos ver más en detalle la parte operativa”

Manifiesta la licenciada Nacira Valverde Bermúdez: “Solo para resumir Waiman, la propuesta para un solo médico, para 2, o los 3, las 8 horas si tenemos disponible para extender, ¿en cuántos puestos?”

Al respecto la licenciada Waiman Hin Herrera, contesta: “En concreto seria para ampliar las 8 horas de un medio tiempo de medico de empresa, a 8 horas un puesto de un profesional en enfermería, que hay que incluir, y valorar porque aquí lo habíamos calculado a medio tiempo, si podríamos darle el permiso con goce de salario a un administrativo de la zona, que nos pueda apoyar precisamente por lo que decía doña Ana Eugenia de no recargarle a la administración una labor más, algún administrativo de la zona que se le pueda dar permiso hasta podríamos valorarlo hasta por medio tiempo, 2 ampliaciones de puesto por 8 horas y un permiso en realidad para un administrativo, un solo servicio médico que sería lo que alcanzaría, pensando lo que al final lo que se rebajó de becas, la propuesta del consejo destinar ese dinero a financiar un ampliación de servicio solamente alcanzaría para un solo equipo, porque el costo aproximado, proyectado son alrededor de veintinueve millones al año.”

Consulta la máster Ana Eugenia Romero Jenkins: “Quería consultar si tenemos, otras plazas de medico de medio tiempo que también podríamos utilizar con el mismo propósito, como para pensar en hacer otro equipo, ósea 2, porque aquí hemos visto el esfuerzo que se ha hecho como institución en rebajar algunas otras subpartidas; ya que cuando estaba leyendo la agenda, venia específicamente de varias donde rebajamos y me parece que ante las circunstancias que vivimos podríamos hacer el esfuerzo de reorientar los recursos para hacer esto mismo, siempre manteniéndonos dentro de un tope general pero hacer esto, con otro equipo en otra localidad, máxime tenemos 2 edificaciones donde cumplimos con los requisitos para la apertura de los consultorios ”

Agrega la licenciada Waiman Hin Herrera: “Si señora, en efecto, estarían los puestos disponible de Heredia, así como los de Cartago, Puntarenas y los de Limón; que son los otros lugares en donde hay medios tiempos, precisamente porque ya tenemos el de Alajuela, el cual se amplió para cubrir Grecia, incluso del presupuesto que se rebajó en becas quisimos mantener el orden por el programa y hay una cantidad de recursos importantes que se rebajó en becas en otros programas que por ejemplo eso podría ayudarnos a financiar un segundo equipo”

Al respecto la licenciada Nacira Valverde Bermúdez: “Nosotros también fuera de agenda traemos un artículo al final con una propuesta de rebajar los recursos de capacitación en el tema de proyectos de la Dirección de Planificación que se había conversado la semana pasada, entonces para que lo tengan en consideración al final, hay también podría tomarse dinero porque es del 926, para tomar la consideración tan importante que doña Waiman está diciendo y que doña Ana lo termina de decir de poderle dar la oportunidad que esas 2 zonas tengan los servicios médicos ”

Agrega el Presidente, magistrado Cruz: “Porque no lo aprobamos así, para San Ramón y Guápiles.”

Expresa la licenciada Nacira Valverde Bermúdez: “Con la observación adicional también dijo doña Ana que se debería utilizar los recursos que se dejan de canalizar de las contrataciones que ya se tienen en esa zona, para otras 2 zonas donde no exista el servicio médico, para mantener también la extensión de los servicios en los otros lugares.”

Seguido, la máster Romero Jenkins, manifiesta: “En esa línea sería también muy importante el estudio técnico por parte de la licenciada Waiman Hin Herrera, que tiene a cargo el Área de Salud para poder determinar con estadísticas y con información adecuada cuales serían esas localidades donde convergen una cantidad importante de servidores judiciales y que podríamos dar apertura al servicio, aunque sea en la modalidad contratada, pero para hacerlo con un respaldo técnico”

Al respecto la licenciada Waiman Hin Herrera, señala: “Este año si logramos mapear todos los contratos que hay en otros circuitos y precisamente estamos coordinando con los médicos contratados en las zonas para unificar la estadística de atención y conocer más detalle sobre las condiciones de enfermedad que hay en cada uno de esos circuitos porque al no ser un servicio institucional el médico que se contrata es él quien históricamente a resguardado los expedientes y la información de atención. Esto se está haciendo a través de una herramienta tecnológica que esperamos se va a implementar este año y efectivamente podríamos incluso valorar si hay que ampliar la atención de algunos de esos contratos y cuales áreas, precisamente en el porcentaje de incapacidades que les mostraba están al descubierto ya con esa frecuencia mayor que existe del personal que se incapacita en algunos circuitos versus otros”

Prosigue la máster Ana Eugenia Romero Jenkins: “Si en esa línea de acuerdo con nuestra experiencia en todos los circuitos el servicio es muy limitado, entonces en todos nos van a pedir ampliar las horas, para tener cuidado, porque yo creo que también el objetivo es extender el servicio, porque a mí me parece que eso implica un acceso mayor o sea que el servicio sea más democrático, porque ahorita se está concentrando en ciertas poblaciones, entonces aunque sea 1 hora, me parece que es importante que diferentes circuitos y localidades puedan tener acceso de forma igualitaria al servicio de salud.”

**Se acordó: 1)** Acoger la propuesta definitiva presentada por la Dirección de Gestión Humana en la reunión de trabajo del pasado 3 de abril, es decir: en la subpartida 00105 Permisos para Sustitución, se propone mantener ¢111.521.449, rebajando ¢144.977.918; manteniendo además lo relativo a los especialistas en contenido por ¢582.865.098. En la subpartida 10701 Capacitación, se propone mantener ¢6.509.300 y rebajar ¢47.727.265. En la subpartida 60201 Becas, se propone mantener ¢27.847.159 y rebajar ¢56.496.821. **2)** Aprobar la inclusión en la subpartida de Alimentos y Bebidas de ¢7.154.000 correspondiente a los requerimientos solicitados por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, respecto de dotar a las Unidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, Escuela Judicial, Dirección de Justicia Restaurativa, y las Comisiones, entre otros, de recursos para las actividades de capacitación en las que participa la población indígena. **3)** Previo a la ejecución de los recursos por parte de las Unidades de Capacitación en el año 2021 se deberá remitir para aprobación del Consejo Superior los planes de trabajo respectivos. **4)** Aprobar la propuesta presentada por la Dirección de Gestión Humana para que con la redistribución de los recursos disminuidos del programa de Becas y Capacitación se amplíen a 8 horas los puestos ordinarios de medio tiempo de Médico y Profesional en Enfermería de los Servicios de Salud de Limón y Heredia, para dar apertura en la segunda audiencia, a dos nuevos Servicios de Salud Institucional en los Circuitos de Guápiles y San Ramón. **5)** Solicitar a la Dirección de Gestión Humana determine en coordinación con las Administraciones Regionales de San Ramón y Guápiles que puesto administrativo del circuito puede ser considerado para otorgar un permiso de salario por el artículo 44 de forma que se complete el equipo mínimo para la apertura de servicio. **6)** Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que destine los recursos que actualmente financian el servicio de medicina de empresa contratado de los Circuitos de Guápiles y San Ramón a la apertura de dos nuevos contratos en Circuitos Judiciales en los que no existe este servicio, para lo cual se considerará la recomendación que gire la Dirección de Gestión Humana según los índices de incapacidades y población judicial. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO II**

**SALE LA LICENCIADA WAIMAN HIN HERRERA, SUBDIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA**

**DOCUMENTO N°** **4534-2020**

En reunión de trabajo del Consejo Superior del pasado 27 de marzo la licenciada Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana presenta  [la estimación del Salario Escolar 2021](file://\\sjointpro02\sitio\subsitios\planificacion\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\malvarado\AppData\Local\Microsoft\Windows\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Presupuesto%202011\27-04-2011\Presupuesto%20PLA\SESION%2028-04-2010%20(I%20PARTE)\Calculo%20Salario%20Escolar.XLS).

El cálculo se realizó con base en el comportamiento del gasto real al 28 de febrero del 2020 y la proyección del gasto por remuneraciones a diciembre del 2020. El cálculo se basa en la información sobre los aumentos por costo de vida de 1% de incremento por costo de vida anual para el año 2020 y 2021. Además, según lo indicado, se consideró el faltante que se presentó en enero del 2020, que se subsanó mediante la modificación externa 01-2020.

Conforme el acuerdo del Consejo Superior de la sesión de presupuesto 2021 del pasado 13 de febrero, artículo IX, según el cual se acogió la recomendación de que la Dirección de Gestión Humana deberá trabajar y presentar dos escenarios, el primero, tomando en consideración el acuerdo tomado por la Corte Plena en donde acogió el criterio de la Contraloría General de la República relativo a la “nominalización” de los componentes salariales y el segundo, aplicando la metodología histórica o tradicional de cálculo, por consiguiente a continuación se presentan dos escenarios de Salario Escolar.

Cabe indicar que estas proyecciones se encuentran ajustadas según el comportamiento de la ejecución de los últimos 2 años y la planilla esperada para este 2020.

* **Escenario de Cálculo Tradicional**

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Gestión Humana, el monto por presupuestar sería de **¢21.907.537.040**, según el siguiente detalle:

**Proyección Salario Escolar 2021 (1 % anual, con base del 8.33%).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Pagado 2019** | **Pagado 2020** | **Aprobado 2020** | **Proyección 2021** | **Diferencia Aprobado 2020 vrs Proyección 2021** |
| 926 | 3 377 115 102 | 3 418 139 639 | 3 467 426 105 | 3 507 088 103 | 39 661 998 |
| 927 | 8 197 205 503 | 8 358 019 888 | 8 385 885 524 | 8 493 267 154 | 107 381 630 |
| 928 | 4 140 714 388 | 4 292 556 082 | 4 248 469 505 | 4 420 695 405 | 172 225 900 |
| 929 | 2 745 958 482 | 2 778 012 114 | 2 838 090 437 | 2 848 941 823 | 10 851 386 |
| 930 | 2 074 587 267 | 2 093 789 649 | 2 159 100 776 | 2 162 673 545 | 3 572 769 |
| 950 | 433 207 778 | 444 985 338 | 474 095 164 | 474 871 010 | 775 846 |
| **TOTAL** | **20 968 788 521** | **21 385 502 714** | **21.573.067.511** | **21.907.537.040** | **334 469 529** |

**Observación de la Dirección de Planificación**

Es importante señalar que en la sesión del pasado 13 de marzo, al conocerse las proyecciones de remuneraciones, en este escenario de cálculo tradicional, la Dirección de Gestión Humana realizó una proyección de salario escolar, aplicada sobre la planilla de pleno empleo 2021, de **¢**21 754 537 041, es decir, un monto inferior al que ahora se presenta.

Según indicó la Dirección de Gestión Humana esto se debe a las proyecciones realizadas a partir del pago del salario escolar el pasado mes de enero 20202, más las proyecciones correspondientes a los pagos que históricamente se realizan en el transcurso del año con posterioridad al pago del salario escolar por jubilaciones o renuncias a la institución, que implican un adelanto del pago de este componente.

* **Escenario Nominalización**

En este segundo caso, de nuevo, a partir de las proyecciones realizadas por la Dirección de Gestión Humana, el monto por presupuestar sería de **¢21.838.798.186**, según el siguiente detalle:

**Proyección Salario Escolar 2021 (1 % anual, con base del 8.33%).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Pagado 2019** |  | **Pagado**  **2020** | **Aprobado 2020** | **Proyección 2021** | **Diferencia Aprobado 2020 vrs Proyección 2021** |
| 926 | 3 377 115 102 |  | 3 418 139 639 | 3 467 426 105 | 3 502 100 366 | 34 674 261 |
| 927 | 8 197 205 503 |  | 8 358 019 888 | 8 385 885 524 | 8 469 744 379 | 83 858 855 |
| 928 | 4 140 714 388 |  | 4 292 556 082 | 4 248 469 505 | 4 390 954 200 | 142 484 695 |
| 929 | 2 745 958 482 |  | 2 778 012 114 | 2 838 090 437 | 2 846 471 341 | 8 380 904 |
| 930 | 2 074 587 267 |  | 2 093 789 649 | 2 159 100 776 | 2 160 691 783 | 1 591 007 |
| 950 | 433 207 778 |  | 444 985 338 | 474 095 164 | 468 836 115 | - 5 259 049 |
| **TOTAL** | **20 968 788 521** |  | **21 385 502 714** | **21.573.067.511** | **21 838 798 186** | 2**65 730 675** |

**Observación de la Dirección de Planificación**

Es importante señalar que en la sesión del pasado 13 de marzo, al conocerse las proyecciones de remuneraciones, en este escenario de cálculo tradicional, la proyección de salario escolar, aplicada sobre la planilla de pleno empleo 2021 fue de ¢21 581 398 205, es decir, un monto inferior al que ahora se presenta.

Según indicó la Dirección de Gestión Humana esto se debe a las proyecciones realizadas a partir del pago del salario escolar el pasado mes de enero 20202, más las proyecciones correspondientes a los pagos que históricamente se realizan en el transcurso del año con posterioridad al pago del salario escolar por jubilaciones o renuncias a la institución, que implican un adelanto del pago de este componente.

Como requerimiento final es necesario que se autorice a la Dirección de Planificación a actualizar el monto aprobado en caso de que se realice algún ajuste que afecte directamente esta Subpartida.

Como resultado de la discusión y el análisis se dispuso lo siguiente:

***Se acordó:1)*** *Aprobar el anteproyecto de presupuesto para salario escolar por la suma de ¢****21 838 798 186****, considerando el* ***escenario de nominalización*** *conforme lo aprobado por Corte Plena y mantener el escenario de cálculo tradicional como alternativo.****2)*** *La Dirección de Gestión Humana debe recalcular los montos de los dos escenarios en función del reciente decreto del gobierno según el cual se eliminó el aumento salarial al sector público.*

***- 0 -***

En virtud de lo anterior, en la reunión de trabajo del pasado 3 de abril, la Dirección de Gestión Humana expuso la información correspondiente.

En primera instancia doña Roxana Arrieta presenta la actualización de los dos escenarios totales de Remuneraciones, considerando la nueva base de cálculo 2020 debido al decreto de no aumento salarial recién tomado por el Gobierno de la República.

# 

En cuanto al Salario Escolar presentado en la sesión del 27 de marzo, el monto estimado para el escenario nominalizado fue de ¢21.838.798.186, mientras que el monto para el escenario tradicional fue de ¢21.907.537.040.

De acuerdo con las nuevas estimaciones, los montos serían los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nominal** | **Tradicional** |
| 3 484 589 864,22 | 3 489 552 662,86 |
| 8 427 395 657,34 | 8 450 800 817,92 |
| 4 368 999 429,05 | 4 398 591 928,20 |
| 2 832 238 984,66 | 2 834 697 113,76 |
| 2 149 888 324,84 | 2 151 860 177,91 |
| 466 491 935,06 | 472 496 654,68 |
| **21 729 604 195,18** | **21 797 999 355,33** |

# Como resultado de la discusión y el análisis se dispuso lo siguiente:

**Se acordó**: 1) Aprobar los nuevos escenarios de Remuneraciones presentados por la Dirección de Gestión Humana. 2) Tener por conocidos los dos nuevos escenarios de Salario Escolar presentados por la Dirección de Gestión Humana.3) Para efectos de la presentación a la Corte Plena se registrará el monto con el escenario nominal.

**- 0 -**

**Se acordó: 1)** Acoger la propuesta definitiva de escenarios 2021 de Remuneraciones y Salario Escolar presentados por la Dirección de Gestión Humana en la reunión de trabajo del pasado 3 de abril de 2020. **2)** Para efectos de la presentación a la Corte Plena se registrará el monto con el escenario nominal. **Se declara acuerdo firme**.

# **ARTÍCULO III**

**DOCUMENTO N°** **4537-2020**

En reunión de trabajo del Consejo Superior del pasado 27 de marzo de 2020, la licenciada Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana presentó las estimaciones de la Subpartida 60301 Prestaciones Legales por programa presupuestario para la formulación 2021, considerando los siguientes parámetros:

* Una población de 111 personas que cumpliendo el requisito jubilatorio aún se mantienen activas y además solo 2 de ellas han presentado solicitud de jubilación para el 2020.
* Como parte de la proyección y ante el particular escenario que se atraviesa institucionalmente, se estimó el monto promedio pagado de los últimos 3 años por concepto de prestaciones legales por motivos distintos a jubilación, los cuales salvo alguna eventualidad mantendrían un comportamiento relativamente estable.

Las estimaciones se realizan con la referencia del eventual pago de 8 años de cesantía., según lo estipulado en la Ley 9635 y acogido por Corte Plena, en la sesión N° 10-2020 celebrada el 2 de marzo del año en curso “ARTÍCULO VIII, según orden emanada de la Contraloría General de la Republica.

Señala que la estimación realizada no debe considerarse como un dato exacto, sino que corresponden a estimaciones, ya que no se cuenta con una metodología establecida que considere la intención de las personas por jubilarse. De igual forma, los montos consideran los salarios diarios al día de la estimación, por lo que estos están sujetos a variables como costo de vida, ascensos, asignación de componentes salariales, entre otros, lo que implica que la cuantía fijada podría considerarse como referencia.

Mediante correo electrónico del 18 de marzo enviado por la Licda. Alejandra García Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales de la Dirección de Gestión Humana, se remite el desglose final de la estimación de prestaciones legales para el 2021.





De acuerdo con lo indicado por la Dirección de Gestión Humana, si bien se aprecia una disminución en los requerimientos presupuestarios para el 2021 en comparación con lo aprobado para el 2020, esto se explica por la reducción del impacto provocado por los ajustes aprobados a las pensiones judiciales, que provocó un importante aumento en el rubro de componentes legales durante los últimos años, concretamente en el número de pensionados y jubilados; situación que se proyecta no sucederá para el próximo año.

# Como parte de la discusión y el análisis doña Roxana Arrieta manifiesta su preocupación por la disminución cercana a los ¢1.300 millones de colones. Doña Ana Romero sugiere manejar un escenario alternativo, dado que el tema está aún pendiente de criterio de la Sala Constitucional.

Don Carlos Montero propone manejar dos escenarios durante el proceso.

Doña Nacira Valverde propone que se debe hacer el análisis en función de las personas que han realizado trámites y están sujetos de resolución y aprobación; ampliando el escenario estimado de los 8 años.

**En esta sesión de trabajo se dispuso:**

**Se acordó:** **1)** La Dirección de Gestión Humana deberá realizar un análisis de las solicitudes pendientes de estudio con la finalidad de poder realizar alguna estimación en relación con el posible impacto en estos resultados, para lo cual deberá ser presentado para la próxima sesión del 03 de abril.

***- 0 -***

En virtud de lo anterior, en la reunión de trabajo del pasado 3 de abril, la Dirección de Gestión Humana expuso la información correspondiente.

Doña Roxana Arrieta, señala que en la sesión del pasado 27 de marzo el monto propuesto fue de ¢2.284.883.333, una vez revisado el tema se propone un monto de ¢3.380.341.719, conforme el siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Total (8 años)** |
| **926** | 592,573,903.39 |
| **927** | 2,093,107,592.57 |
| **928** | 205,862,810.70 |
| **929** | 236,623,920.35 |
| **930** | 218,370,075.06 |
| **950** | 33,803,417.19 |
| **Total** | **3,380,341,719.27** |

Doña Nacira plantea el porqué de la diferencia entre el escenario presentado en la sesión del 27 de marzo y el que ahora se presenta. Doña Roxana Arrieta indica que se incorporó la posible jubilación de 73 personas que tienen posibilidad de acogerse a partir de la resolución que adopte la Sala Constitucional, en virtud del período de tiempo que tenían estos servidores al momento de la reforma.

Como resultado de la discusión y el análisis se dispuso lo siguiente:

# **Se acordó**: 1) Aprobar como primer escenario el presentado en la sesión del 27 de marzo por ¢2.284 millones y mantener como segundo y alternativo el escenario de ¢3.380 millones.

**- 0 -**

# **Se acordó:** Aprobar por concepto de Prestaciones Legales el primer escenario presentado en la sesión del 27 de marzo de 2020, por ¢2.284.883.333 y mantener como segundo y alternativo el escenario de ¢3.380.341.719, de acuerdo con lo dispuesto en la reunión de trabajo del pasado 3 de abril de 2020. **Se declara acuerdo firme**.

# **ARTÍCULO IV**

**DOCUMENTO N°** **4540-2020**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 27 de marzo de 2020, la estimación de recursos del Aporte Patronal a la Asociación Solidarista del Poder Judicial y Coopejudicial R.L. para el ejercicio económico 2021, Subpartida 00505 "Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entidades Privadas".

Al igual que para la formulación presupuestaria 2020, conforme el voto 1529-2018 de la Sala Constitucional que da la posibilidad a las personas trabajadoras, de que además de las asociaciones solidaristas, sean las organizaciones cooperativas quienes puedan administrar el aporte patronal de su cesantía, para el 2021 se incluye las proyecciones del aporte patronal que correspondería a la Coopejudicial R.L.

La proyección fue realizada con base en la información suministrada vía correo electrónico por Coopejudicial R.L. el 12 de marzo 2020, Dirección de Gestión Humana el 11 de marzo de 2020, además de datos aportados por la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales el 10 de marzo 2020 y finalmente, el Macroproceso Financiero Contable el 17 de marzo 2020.

Conforme lo indicado por la Dirección de Gestión Humana, con respecto a los factores o porcentajes por costo de vida, el cálculo se realizó considerando un incremento salarial anual del 1% para el 2020 y 2021, según decreto Único aprobado por el Ministerio de Hacienda.

1. **Para la ASOSEJUD se tomaron las siguientes consideraciones en el cálculo:**

* Se utilizó el monto cancelado por Programa a la ASOSEJUD, considerando las planillas de enero y febrero 2020, por concepto de porcentaje del Aporte Patronal a la Asociación Solidarista (2,33%), aplicado a la planilla ordinaria y el salario escolar de las personas afiliadas, dato proporcionado por el Departamento Financiero Contable.
* Se incluye un **0,37%** como promedio mensual de crecimiento de la planilla de asociados, considerando el comportamiento presentado en esta variable durante el período de febrero de 2019 a enero de 2020. Este promedio decreció en un 0.1% en comparación con el promedio utilizado para la estimación del monto formulado para el 2020 (0.38%); lo anterior en virtud que para el 2020 y 2021, se ha presentado una leve disminución de asociados.
* El monto por presupuestar para el 2021 para la ASOSEJUD se estima en ¢4.166.051.615, monto que refleja una variación porcentual del 12.1% en comparación con el monto aprobado para el 2020, tal como se aprecia a continuación:



* Al comparar el Aporte Patronal a la Asociación Solidarista formulado en el 2021 con el monto aprobado para el 2020, se presenta un crecimiento de ¢450.050.000 aproximadamente, producto de que las proyecciones realizadas para determinar el aporte patronal para el 2020 se consideraron aumentos de ¢4.000, para el I y II semestre del 2019 y 2020, mientras que, para la estimación del 2021, se tiene por decreto un Único aumento anual escalonado. Al respecto, la Dirección de Gestión Humana estima que este aumento para 2021 equivale a un 1% del salario base, por lo que, para efecto de proyecciones en remuneraciones, se estima un costo de vida de 1% anual (sea desde el primer semestre y 0% en el segundo semestre) e igual que para la formulación 2021.

1. **Para la COOPEJUDICIAL R.L. se tuvieron los siguientes aspectos en consideración para el cálculo del aporte de la Institución a esta entidad financiera por concepto de cesantía:**

* Se utilizó el monto cancelado por Programa a Coopejudicial R.L. considerando las planillas de enero y febrero 2020, por concepto de porcentaje del Aporte Patronal a Coopejudicial (2,33%), aplicado a la planilla ordinaria y el salario escolar de las personas afiliadas, dato que fue proporcionado por el Departamento de Financiero Contable.
* Se incluye un **0,98%** como promedio mensual de crecimiento de la planilla de asociados, considerando el comportamiento presentado en esta variable durante el período de junio 2019 a febrero 2020. Además, se realizó una proyección para los meses de marzo, abril y mayo de 2020, considerando que solo se tienen 9 meses reales. Este promedio creció en 0.89% en comparación con el promedio utilizado para la estimación del monto formulado para el 2020 (0.09%); en virtud de que para el 2019 y 2020, los cálculos se realizaron sobre supuestos, mientras que para la estimación del 2021, ya se cuenta con datos reales correspondientes a los meses de junio 2019 a febrero del 2020.
* El Departamento Financiero Contable suministró las planillas mensuales a cancelar por programa presupuestario, correspondiente a la planilla judicial afiliada a la Coopejudicial R.L.
* Por otro lado, se estima un monto a presupuestar para el 2021 para la Coopejudicial R.L. de ¢614.738.000, distribuido entre los distintos programas presupuestarios, como se aprecia a continuación:



* Al comparar el Aporte Patronal formulado en el 2021 para Coopejudicial con el monto aprobado para el 2020, se presenta un decrecimiento de ¢336.262.000 aproximadamente, producto de que para el 2020 el cálculo se realizó sobre supuestos iniciales, mientras que la proyección del 2021 se realiza a partir de datos reales.

1. **Monto total a Presupuestar 2021**

Finalmente, el monto total proyectado para el presupuesto 2021 que conforma la Subpartida 00505 "Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entidades Privadas" es de ¢4.780.788.000, distribuidos por Programa presupuestario de la siguiente manera:



1. **Escenario Plena Afiliación**

Es importante mencionar que según datos proporcionados por la Dirección de Gestión Humana; si en este 2020 la totalidad de la planilla estuviera afiliada, el monto del aporte patronal requerido habría sido de ¢6.025.662.665, es decir, habría un faltante de ¢2.309.662.665, dado que se formularon para el 2020 ¢3.716.000.000 en esta subpartida.

No obstante, lo anterior sería bajo el supuesto de que toda la población judicial solicitaría la administración de la cesantía, aspecto que no es posible proyectar en este momento; por lo que la cifra de ¢6.025 millones podría representar un mínimo a formular bajo el supuesto de plena afiliación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partida/Subpartida** | **Descripción** | **Monto Aprobado 2020** | **Cesantía 2,33%** |
| **1** | Remuneraciones Básicas | 116 442 539 940 | 2 713 111 181 |
| **2** | Remuneraciones Eventuales | 7 351 574 996 | 171 291 697 |
| **00301** | Retribución de Años Anteriores | 35 296 017 807 | 822 397 215 |
| **00302** | Retribución al Ejercicio Liberal de la Profesión | 39 524 994 424 | 920 932 370 |
| **00399** | Otros Incentivos Salariales | 59 997 004 400 | 1 397 930 203 |
| **Total:** | | **258 612 131 567** | **6 025 662 666** |

Como requerimiento final es necesario que se autorice a la Dirección de Planificación a actualizar el monto aprobado en caso de que se realice algún ajuste que afecte directamente esta Subpartida producto de variaciones en el porcentaje del costo de vida que pudiese indicar el Ministerio de Hacienda.

**Se acordó:** Se aprueba el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2021 correspondiente al Aporte Patronal del Poder Judicial (Subpartida 00505 "Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entidades Privadas") por la suma de ¢4.780.788.000, distribuidos por Programa presupuestario de la siguiente manera:



La Dirección de Planificación tomará nota para lo que corresponda. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO V**

**DOCUMENTO N°** **4541-2020**

# La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 27 de marzo de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de la Subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud.

# **Subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud**

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Tabla 1. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 390 584 607 | 402 274 235 | 421 212 954 | 473 587 909 | 463 560 121 |
| **Variación** |  | 3% | 5% | 12% | -2% |

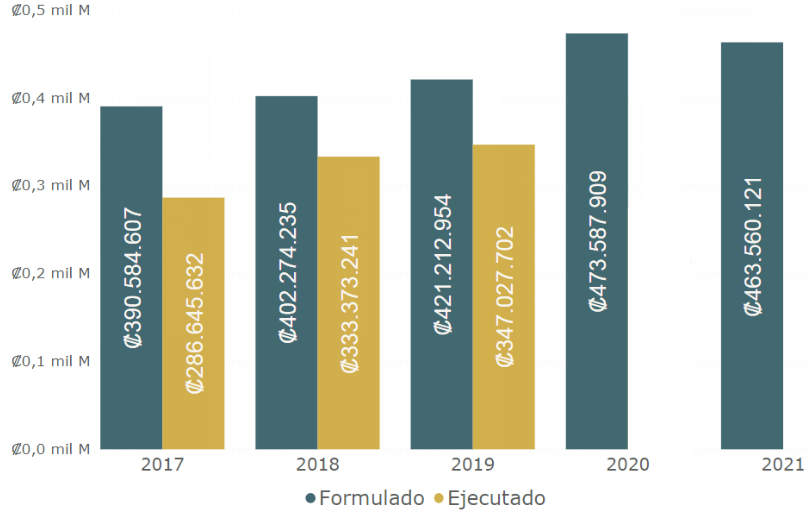
Fuente: SIGA PJ

De la tabla anterior, se puede observar que durante los periodos 2017 – 2020 la subpartida ha presentado un incremento con porcentajes de variación del 3%, 5% y 12% respectivamente. sin embargo, para el periodo 2021 el comportamiento disminuye con una variación del 2%.

**Figura N° 1. Formulación Periodos 2017 – 2021**

Según se muestra en el gráfico anterior, el mayor crecimiento de la subpartida se presenta en el periodo 2020. Lo anterior, ya que en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur se incrementó el contrato para la atención de servicio médico que cubre a Pérez Zeledón y Buenos Aires. Además, en el Tercer Circuito Judicial de Alajuela se incrementó dicho servicio. Por otra parte, en ese mismo año en el Organismo de Investigación Judicial se formulan recursos en el artículo de Servicios Médicos y de Laboratorio por un monto de ¢24.720.000 para afrontar el pago del médico para los detenidos del Primer Circuito Judicial de San José.

**Figura N° 2. Formulación y Ejecución Periodos 2017 – 2021**

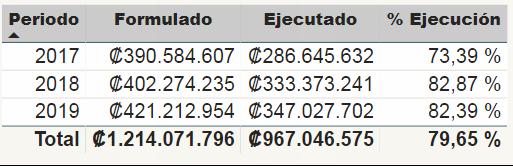


Fuente: SIGA PJ

En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida de Servicios en Ciencias de la Salud, tanto en la formulación, como en la ejecución. Para el 2020 se presenta el punto más alto en la formulación, mientras que la ejecución fue en ascenso durante el período 2017 a 2019.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria periodos 2017 - 2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante los periodos 2017 al 2019 el porcentaje de ejecución estuvo por debajo del 100%, siendo el 2017 el periodo con menor ejecución con un total del 73,39%. Para los periodos 2018 y 2019 la ejecución fue de un 82,87% y 82,39% respectivamente. Lo que representó a nivel global una ejecución del 79,65% durante los tres periodos analizados.

### Variación por programa 2020-2021

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que presenta la mayor formulación de recursos en la subpartida Servicios en Ciencias de la Salud, con una variación del 7% en relación con el periodo 2020, seguido del Programa 928 Organismo de Investigación Judicial con una disminución en su variación del 11%.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 3. Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

Fuente: SIGA PJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **Variación %** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 32,421,576,206 | 261,570,135 | 281,134,008 | 19,563,873 | 7% |
| Organismo de Investigación Judicial | 17,210,959,816 | 200,940,876 | 178,988,913 | - 21,951,963 | -11% |
| Servicio Jurisdiccional | 12,437,691,450 | 9,472,395 | 3,337,200 | - 6,135,195 | -65% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 938,028,205 | 104,503 | 100,000 | - 4,503 | -4% |
| Ministerio Público | 2,817,647,728 | 1,500,000 | - | - 1,500,000 | -100% |
| Defensa Pública | 1,986,532,822 | - | - | - | 0% |
| **Total general** | **67,812,436,225** | **473,587,909** | **463,560,121** | **- 10,027,788** | -2% |
| Fuente: SIGA PJ | | | | | |

En el programa 928 Organismo de Investigación Judicial se presenta un decrecimiento del 11%, equivalente a ¢21.951.963, debido a la no inclusión por parte de la Administración del OIJ, de una línea presupuestada en 2020 en el artículo 19635 ¨Servicios Médicos y de Laboratorio¨ por ¢24.720.000, la que en su momento se justificó para afrontar el pago de médico para los detenidos del Primer Circuito Judicial de San José. Realizada la consulta a la Administración del OIJ, se indica que no se presupuesta para 2021, debido a que el proyecto no se ha podido concretar y falta bastante para hacerlo.

Por su parte, el programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, presenta un incremento con relación a la formulación del periodo 2020 y es producto que la Dirección de Gestión Humana incluye por primera vez un monto de ¢16.000.000, que se requieren para cancelar a la CCSS  las valoraciones médicas que se le realizan al personal del Poder Judicial para los funcionarios  que requieren  o solicitan incapacitarse de modo permanente. Según se indicó, en 2020 esta necesidad será cubierto con recursos propios de la Dirección, no obstante ya para 2021 sí se considera necesario incluir la solicitud.

**Figura N° 3. Distribución de recursos por programa, para la subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud**

Según se muestra en la figura N° 3, el programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢281.134.008, lo que representa un 61% del total de los recursos de la subpartida; seguido del Programa 928 Organismo de Investigación Judicial con un total de ¢ 178.988.913 para un 38% de los recursos.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

Centros de responsabilidad con los montos más representativos dentro de la subpartida.

**Tabla 4. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2020** | **2021** | **Representación** |
| Organismo de Investigación Judicial | 200 940 876 | 178 988 913 | 39% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 43 260 000 | 44 080 923 | 10% |
| Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores | 27 810 000 | 27 698 889 | 6% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Sur | 25 496 827 | 26 516 700 | 6% |
| Tercer Circuito Judicial Alajuela | 25 956 391 | 24 246 372 | 5% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica | 20 519 917 | 20 108 353 | 4% |
| Administración de Sarapiquí | 14 194 717 | 16 876 237 | 4% |
| Dirección Gestión Humana |  | 16 000 000 | 3% |
| Primer Circuito Judicial San José | 15 614 333 | 15 614 328 | 3% |
| Administración de Santa Cruz | 14 194 717 | 15 532 114 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial Alajuela | 17 400 003 | 15 392 619 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 12 360 000 | 14 762 505 | 3% |
| Administración de Turrialba | 13 937 266 | 14 760 263 | 3% |
| Circuito Judicial Cartago | 11 673 525 | 10 883 396 | 2% |
| Segundo Circuito Judicial Guanacaste | 7 974 050 | 9 364 221 | 2% |
| Administración de Quepos | 11 178 389 | 9 297 088 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 9 472 395 | 3 337 200 | 1% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 104 503 | 100 000 | 0% |
| Ministerio Público | 1 500 000 |  | 0% |
| **Total general** | **473 587 909** | **463 560 121** | **100%** |

Fuente: SIGA PJ

En el caso del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, se incluye lo necesario para atender los contratos 046119 Servicio médico para empleados de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón y 061118 Servicios médicos para empleados de los Tribunales de Buenos Aires. En el caso de la Dirección de Gestión Humana, los ¢16.000.000, que se requieren para cancelar a la CCSS  las valoraciones médicas que se le realizan al personal del Poder Judicial para los funcionarios  que requieren  o solicitan incapacitarse de modo permanente.

Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre el Organismo de Investigación Judicial con un monto de ¢178.988.913, el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur con ¢44.080.923, la Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores con ¢27.698.889 y la Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur con ¢26.516.700; estos Centros de Responsabilidad representan un 61% de la totalidad de recursos de la subpartida.

Como parte del análisis y la discusión, Don Fernando Cruz propone que se valore la posibilidad de ampliación de estos servicios, los cuales se vuelven estratégicos ante la situación planetaria de salud. Doña Nacira Valverde manifiesta que la posible reducción en Becas y Capacitación podría sumar a este rubro.

Al respecto se dispuso:

**Se acordó**: 1) Aprobar los recursos solicitados en la Subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud. 2) Aprobar los recursos formulados por la Dirección de Gestión Humana para cancelar a la CCSS  las valoraciones médicas, que se le realizan al personal del Poder Judicial para los funcionarios  que requieren  o solicitan incapacitarse de modo permanente por un monto de ¢16.000.000, los cuales provocan un crecimiento en los recursos formulados para el programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo.

* 0 -

**Se acordó**: **1)** Aprobar los recursos solicitados en la Subpartida 10401 Servicios en Ciencias de la Salud. **2)** Aprobar los recursos formulados por la Dirección de Gestión Humana para cancelar a la CCSS las valoraciones médicas, que se le realizan al personal del Poder Judicial para los funcionarios que requieren o solicitan incapacitarse de modo permanente por un monto de ¢16.000.000, los cuales provocan un crecimiento en los recursos formulados para el programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO VI**

**DOCUMENTO N°** **4542-2020**

# La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 27 de marzo de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de las Subpartidas **10805 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, 20101 Combustible y Lubricantes.**

**1. Subpartidas relacionadas con Transportes**

En las dos subpartidas presupuestarias relacionadas con mantenimiento, reparación, combustibles y lubricantes para los equipos de transporte, se presentó una disminución en la solicitud de recursos del periodo 2021 en comparación con lo formulado en el 2020, generando un decrecimiento general del 15.16%. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**Figura N° 1. Comparativo del presupuesto de las subpartidas 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte y 20101 Combustibles y Lubricantes, período 2020-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Presupuesto 2020** | **Formulado 2021** | **Diferencia Absoluta** | **Variación %** |
| **10805- Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte** | ¢563.611.633 | ¢ 487.325.800 | -76.285.833 | -13.54% |
| **20101- Combustibles y Lubricantes** | ¢1.424.811.758 | ¢1.400.195.066 | -24.616.692 | -1.71% |

Fuente: SIGA PJ

Como se observa en la tabla anterior, estas subpartidas presupuestarias tuvieron un decrecimiento importante en este bienio. En términos absolutos representó para la subpartida 10805 una disminución de ¢76.285.833, mientras que en la subpartida 20101 una disminución de ¢24.616.692.

A continuación, se analiza el comportamiento individual de cada una de las subpartidas mostradas anteriormente:

## Subpartida 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte

Lo recursos formulados en esta subpartida se destinan al mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular del Poder Judicial, en los distintos Centros de Responsabilidad en todo el territorio nacional.

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Figura N° 2. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 515.660.339 | 597.205.961 | 561.687.602 | 563.611.633 | 487.325.800 |
| **Variación** |  | 16% | -6% | 0.34% | -13.54% |

Fuente: SIGA PJ

El decrecimiento que se presenta para el año 2021, se explica por los siguientes aspectos:

En esta subpartida cuando se presenta un aumento, es usual encontrar como justificación que este crecimiento obedece a que se tiene vehículos muy viejos y que año con año las reparaciones son más costosas y frecuentes. Por lo tanto, dado que en la formulación del periodo 2020, se solicitaron recursos para la adquisición de 69 vehículos de primer ingreso y la sustitución de 232 vehículos, es de esperar que para el 2021, los costos de mantenimiento de los vehículos disminuyan, dado a su reciente adquisición.

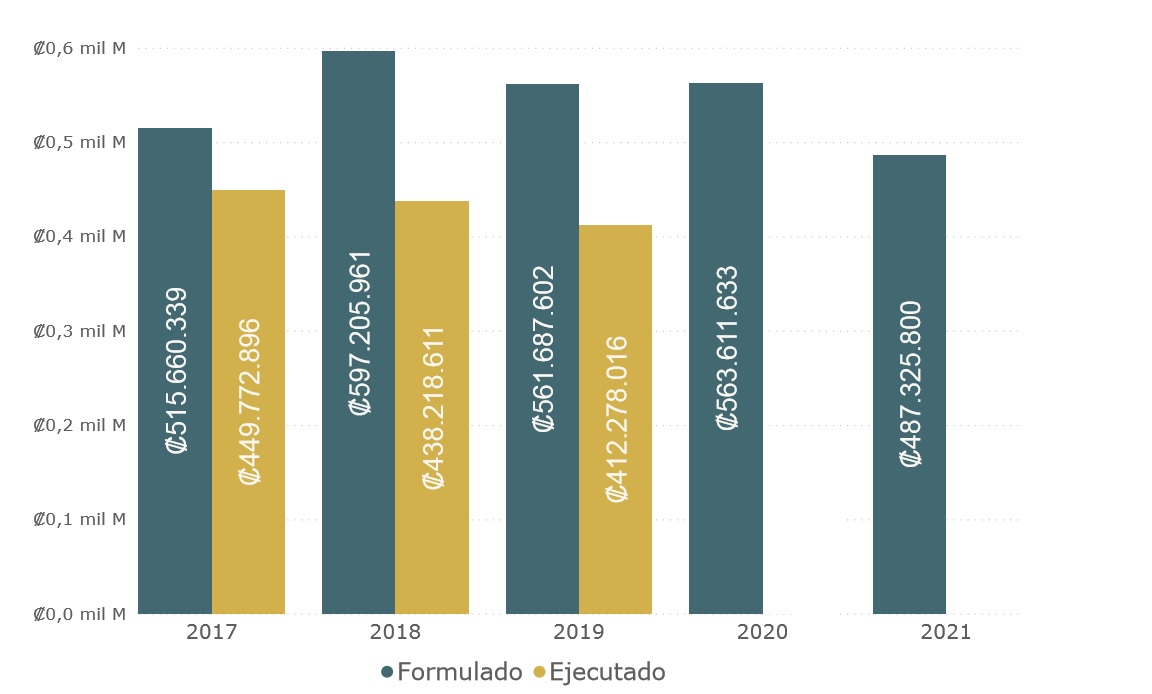
* Considerando que la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas implicó limitaciones sobre la formulación presupuestaria 2021, bajo el supuesto de que se mantendrán las mismas medidas de contención del gasto que se tuvieron para el 2020, y que nuevamente no habrá posibilidad de un incremento en el presupuesto 2021, se solicitó a los Centros de Responsabilidad de los distintos programas presupuestarios ajustarse en el límite de sus solicitudes de gasto, considerando a lo sumo el mismo monto formulado para el 2020 e incluyendo el impuesto al valor agregado como parte de este límite”, situación que obligó a los Centros de Responsabilidad a distribuir los recursos priorizando sus necesidades.

A continuación, se muestra el gráfico correspondiente a los montos formulados y ejecutados dentro de los periodos 2017-2021:

**Figura N° 3.**

**Subpartida 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte**

**Formulación y Ejecución Periodos 2017 - 2021**



Fuente: SIGA PJ

Del gráfico anterior, podemos visualizar que entre el 2017 y el 2019 existe una diferencia importante de recursos sin ejecutar, lo que se traduce en un monto promedio por año de ¢124.761.459. En cuanto a la formulación del 2021, el monto requerido disminuye en ¢76.285.833, en comparación con lo aprobado para el 2020.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la ejecución respecto a lo formulado:

**Figura N°4.**

**Subpartida 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte**

**Ejecución presupuestaria periodos 2017 -2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Formulado** | **Ejecutado** | **Diferencia Absoluta** | **% Ejecución** |
| 2017 | 515 660 339 | 449 772 896 | -65 887 443 | 87,22% |
| 2018 | 597 205 961 | 438 218 611 | -158 987 350 | 73,38% |
| 2019 | 561 687 602 | 412 278 016 | -149 409 586 | 73,40% |
| **Total:** | **1 674 553 902** | **1 300 269 523** | **-374 284 379** | **77,65%** |

Fuente: SIGA PJ

Como se observa en el gráfico anterior, los montos ejecutados están por debajo de lo formulado, mientras que para el 2018 es el período donde se tiene la ejecución más baja con un 73.38%, de los recursos formulados, y en términos absolutos la suma de ¢158.987.350. La ejecución más alta en ese trienio fue de un 87.22% en el año 2017, no obstante; los recursos sin ejecutar fueron de ¢65.887.443.

### Variación por programa 2020-2021

En el siguiente cuadro, se puede apreciar una redistribución dentro de los programas respecto a los montos formulados, donde se muestra el detalle de la variación porcentual para cada uno de los programas presupuestarios:

**Figura N°5.**

**Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**

**Subpartida 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte**

**–**



Fuente: SIGA PJ

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de la subpartida por programa presupuestario:

**Figura N° 6.**

**Distribución de recursos por programa para la subpartida 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte para el 2021**



Fuente: SIGA PJ

Del gráfico anterior se concluye que, el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial es el principal solicitante de recursos en esta subpartida siendo que su requerimiento representa actualmente el 53.48%, lo cual responde a que este programa presupuestario cuenta con la mayor cantidad de Vehículos de la flotilla vehicular del Poder Judicial.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la distribución de los recursos formulados por los **10 primeros Centros de Responsabilidad** más representativos.

**Figura N° 7 Distribución por Centro de Responsabilidad de la Subpartida 10805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte.**



Fuente: SIGA PJ

De los 10 primeros Centros de Responsabilidad el más representativo corresponde al programa presupuestarios 928 “Organismo de Investigación Judicial” con un 61% de los recursos formulados para el 2021, le sigue la Dirección Ejecutiva con un 16% y el Programa 929 “Ministerio Público” con un 5%.

## Subpartida 2.01.01 Combustibles y Lubricantes

En esta subpartida se formulan recursos principalmente para la compra de combustible para uso de la flotilla vehicular el cual se realiza por medio del Sistema Flota 2.0 mediante el uso de las tarjetas que se tienen para estos fines. En esta subpartida se formulan los recursos correspondientes a gasolina súper, gasolina regular y Diesel.

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Figura N° 9 Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 2.01.01 Combustibles y Lubricantes, Período 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 1.228.916.591 | 1.192.890.241 | 1.343.483.310 | 1.424.811.758 | 1.400.195.066 |
| **Variación** |  | -3% | 13% | 6% | -1.71% |

Fuente: SIGA PJ

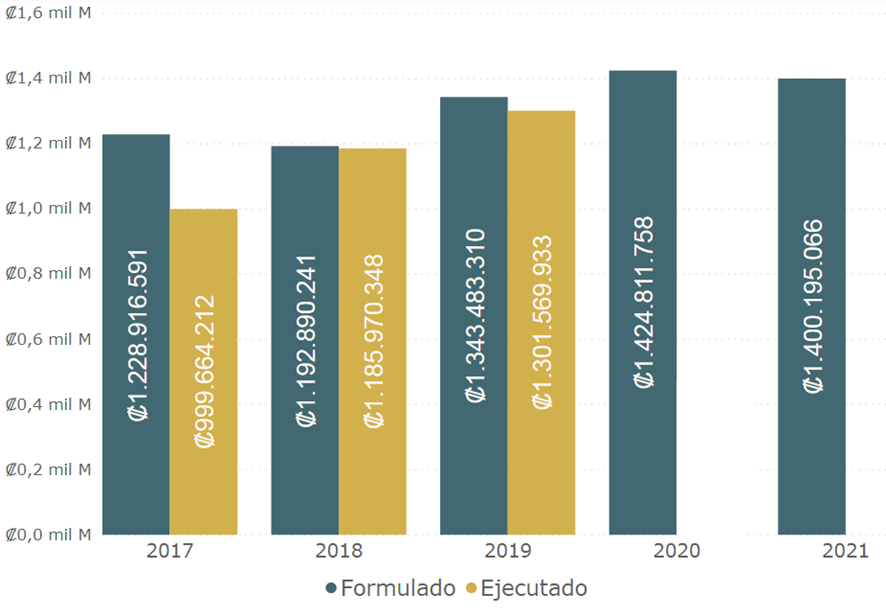
Como se observa en el cuadro anterior, el comportamiento de la subpartida es bastante fluctuante, sin embargo; entre el año 2017 y el 2021, en términos absolutos, se presenta un aumento de ¢171.278.475. Entre los aspectos que han influido en este aumento se tienen:

* + Incremento en el costo de los combustibles.
  + Aumento de la flotilla vehicular, principalmente la del Organismo de Investigación Judicial, por tanto un mayor consumo.
  + La incorporación del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a partir de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

**Figura N° 10.**

**Subpartida 2.01.01 Combustibles y Lubricantes**

**Formulación y Ejecución Periodos 2017 - 2021**



Fuente: SIGA PJ

El gráfico anterior muestra que los recursos formulados en esta subpartida resultaron suficientes para costear los requerimientos solicitados en este rubro durante el 2017 al 2019.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Figura N°11**

**Subpartida 2.01.01 Combustibles y Lubricantes**

**Ejecución presupuestaria periodos 2017 -2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Formulado** | **Ejecutado** | **Diferencia Absoluta** | **% Ejecución** |
| 2017 | 1 228 916 591 | 999 664 212 | -229 252 379 | 81,35% |
| 2018 | 1 192 890 241 | 1 185 970 348 | -6 919 893 | 99,42% |
| 2019 | 1 343 483 310 | 1 301 569 933 | -41 913 377 | 96,88% |
| **Total:** | **3 765 290 142** | **3 487 204 493** | **-278 085 649** | **92,61%** |

Fuente: SIGA PJ

Del cuadro anterior se deduce que la menor ejecución se presentó en el año 2017, donde se dejó de ejecutar la suma de ¢229.252.379 (18.65%), mientras que, en los restantes periodos se ejecutó un promedio del 98.15% de los recursos formulados; cifra que se considera aceptable.

### Variación por programa 2020-2021

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Figura N°12.**

**Subpartida 2.01.01 Combustibles y Lubricantes**

**Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**



Del análisis del cuadro anterior se desprende que el programa presupuestario que presenta el mayor porcentaje de reducción es la Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo con un 9% de disminución y un decrecimiento de ¢30.577.459 en términos absolutos. Los restantes programas muestran una disminución en la formulación de recursos 2021 versus 2020; sin embargo, el Programa 927 “Servicio Jurisdiccional” nuestro un crecimiento de ¢12.043.055, en relación con los recursos aprobados en el 2020, el cual se justifica con la apertura de las OCN y la compra de nuevos vehículos que se han adquirido para atender sus necesidades.

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de la subpartida por programa presupuestario:

**Figura N° 13. Distribución de recursos por programa para la subpartida 201Combustibles y Lubricantes**

Fuente: SIGA PJ

Del gráfico anterior se concluye, que el programa presupuestario 928 Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es el principal solicitante de recursos, absorbiendo el 64.32% de los recursos formulados para el 2021(¢901.655.289), seguido por el Programa 926, Dirección y Administración con un 21.13% (¢296.233.500). Lo anterior responde a que el OIJ, es el programa que mantiene la mayor flotilla vehicular a nivel institucional y por ende el que consume más combustible.

**Distribución por Centro de Responsabilidad**

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la distribución de los recursos formulados por los **10 primeros Centros de Responsabilidad** más representativos.

**Figura N°14 Distribución por Centro de Responsabilidad de la Subpartida 20101 Combustibles y Lubricantes**

 Fuente: SIGA PJ

Es oportuno indicar que en el caso particular de los combustibles no se visualiza el efecto o impacto del IVA debido al efecto provocado por la estimación del tipo de cambio, ya que el costo de los combustibles se calcula según el tipo de cambio por dólar que se estima para cada año. En este sentido, para la formulación presupuestaria del 2020, se estimó el costo del dólar en ¢628.44, mientras que para la formulación presupuestaria del 2021, se estimó en ¢608.66. Esta disminución, permitió a los Centros de Responsabilidad formular las mismas cantidades sin afectar el crecimiento de la subpartida y asumir el IVA. Este rubro es el más importante en la subpartida, en el caso de lubricantes, estos si tienen una afectación del IVA, pero debido a su cuantía, no impactan de forma importante el total de los recursos solicitados.

Como parte del análisis y la discusión doña Sara Castillo expone su preocupación por la disminución en combustibles, sin embargo, doña Ana Romero le aclara que las cantidades no se disminuyen, sino que se trata de un efecto derivado de la caída en el precio de los combustibles.

**Se acordó:** Aprobar los recursos formulados en la subpartida 10805 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte”, y en la 20101 “Combustibles y Lubricantes”. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO VII**

**DOCUMENTO N°** **4544-2020.**

# La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 27 de marzo de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de las Subpartidas **10201 Servicio de Agua y Alcantarillado, 10202 Servicio de Energía Eléctrica y 10204 Servicio de Telecomunicaciones.**

Los datos de análisis para los Servicios Públicos fueron suministrados por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio N°4394-DE-2019 del 23 de setiembre del 2019. En este se detallan los montos correspondientes para 2021 (acueducto y alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones). Así mismo se indica:

*“el monto proyectado contempla como base el valor real de consumo durante el 2019, el incremento de costo de vida proyectado para el 2020 (3%), así como el 13% del impuesto al valor agregado.*

*Por su lado, la distribución del monto adicional para alcanzar el monto meta para la formulación en servicios públicos para el año 2021, debe ser lo más objetiva posible, de modo tal que se consideren las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, para que los recursos asignados a un programa sean para cubrir sus servicios y se acerque lo más posible a la realidad del gasto”.*

### -0-

### Debe considerarse a manera de recapitulación, que los servicio públicos se vieron afectados por la aplicación del impuesto al valor agregado, de tal manera que los centros de responsabilidad a nivel general, debieron asumir estos costos, ya sea mediante la aplicación general de algunos recortes en el gasto corriente o de manera específica disminuyendo las solicitudes en algunas subpartidas, las cuales a su vez ya tienen el impacto del IVA en sus precios, lo que finalmente se constituye un doble castigo a los recursos.

# **Subpartidas relacionadas con servicios públicos**

En lo que corresponde al comportamiento de las subpartidas relacionadas con servicios públicos, según se puede apreciar en la tabla 1, se tiene un incremento global del 6% para el 2021 en comparación con el presupuesto formulado para el 2020.

**Tabla 1. Comparativo del presupuesto de las subpartidas de servicios públicos período 2020-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Presupuesto 2020** | **Formulado 2021** | **Dif Absoluta** | **Variación** |
| 10201 servicio de agua y alcantarillado | 671.965.866 | 862.870.656 | 190.904.790 | 28% |
| 10202 servicio de energía eléctrica | 2.560.918.327 | 2.918.372.222 | 357.453.895 | 14% |
| 10204 servicio de telecomunicaciones | 3.716.322.703 | 3.565.742.823 | -150.579.880 | -4% |
| **Total** | **6.949.206.896** | **7.346.985.701** | **397.778.805** | **6%** |

Fuente: SIGA PJ

El análisis de las subpartidas relacionadas con servicios públicos muestra que tanto el servicio de agua y alcantarillado como el servicio de energía eléctrica, presentan un crecimiento para el periodo 2021, esto realizando una comparación con el periodo 2020. En el caso del servicio de telecomunicaciones se presenta una disminución del 4%.

A continuación, se analiza el comportamiento individual de cada una de las subpartidas mostradas anteriormente:

## Subpartida 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado

Lo estimado dentro de esta subpartida es para responder al pago para aquellas instituciones públicas o empresas que prestan servicio al Poder Judicial en materia de servicios públicos de agua y alcantarillado. Información que suministra el Departamento de Financiero Contable conforme a las proyecciones realizadas y avaladas por la Dirección Ejecutiva.

Durante los últimos cuatro años el comportamiento de esta subpartida ha sido creciente, esto se puede visualizar en el gráfico de la Figura 1.

### Comportamiento histórico de la subpartida

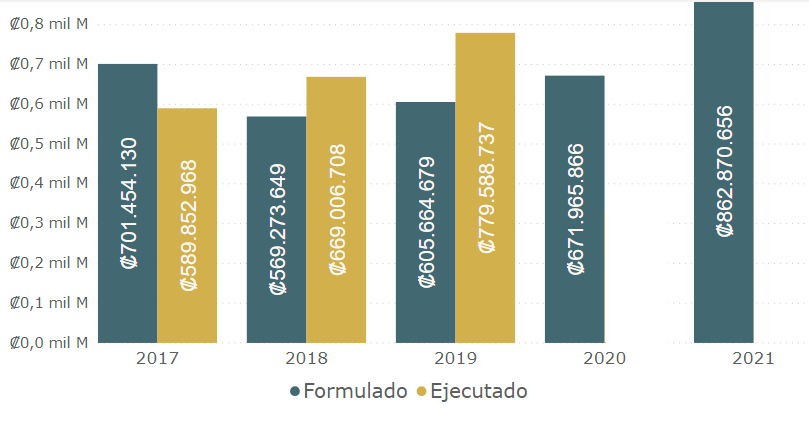
**Tabla 2. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10201 Servicio de agua y alcantarillado. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 701,454,130 | 569,273,649 | 605,664,679 | 671,965,866 | 862,870,656 |
| **Variación** |  | -19% | 6% | 11% | 28% |

Fuente: SIGA PJ

De lo anterior, se logra observar que entre el periodo 2017 y 2018 se dio una disminución del 19%, sin embargo, a partir del 2018 y hasta el periodo 2021 la formulación presupuestaria viene presentando un crecimiento.

**Figura N° 1. Formulación y Ejecución Periodos 2017 - 2021**

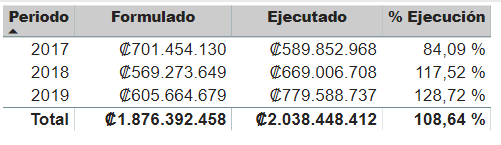


Fuente: SIGA PJ

En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida de servicios de agua y alcantarillado, tanto en la formulación, así como en la ejecución. Es importante indicar, que a nivel institucional se ha tenido que tomar medidas para hacer frente a los incrementos presentados durante el periodo 2019 y 2020. Para los periodos 2017 y 2018 no se dieron problemas porque la formulación estuvo por encima de la ejecución presupuestaria.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 3. Ejecución presupuestaria periodos 2017 – 2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante el periodo 2017 el porcentaje de ejecución estuvo por debajo del 100%, siendo este de un 84.09%, no obstante, para los periodos 2018 y 2019 se presentó una ejecución superior al 100% con porcentajes de 117,52% y 128,72% respectivamente.

### Variación por programa 2020-2021

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 927 Servicio Jurisdiccional, es el que presenta el mayor incremento en la formulación de Servicio de Agua y Alcantarillado, teniendo una variación del 18%, seguido del Programa 928 con una variación del 37% y el Programa 926 con un 43%.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 4. Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **Variación %** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 121.543.598,46 | 110.964.108 | 158.173.921 | 47.209.813 | 43% |
| Servicio Jurisdiccional | 392.110.890,30 | 284.532.491 | 336.644.673 | 52.112.182 | 18% |
| Organismo de Investigación Judicial | 125.751.604,00 | 131.650.776 | 180.242.300 | 48.591.524 | 37% |
| Ministerio Público | 79.572.688,00 | 94.861.682 | 116.037.488 | 21.175.806 | 22% |
| Defensa Pública | 53.103.508,00 | 40.450.359 | 58.278.848 | 17.828.489 | 44% |
| Serv. Atenc - Protec Víctimas y Testigos | 7.506.448,00 | 9.506.450 | 13.493.426 | 3.986.976 | 42% |
| **Total general** | **779.588.736,76** | **671.965.866** | **862.870.656** | **190.904.790** | **28%** |

Fuente: SIGA PJ

En lo que concierne a los programas 929, 930 y 950 la variación en el servicio de agua y alcantarillado fue de 22%, 44% y 42% respectivamente.

**Figura N° 2. Distribución de recursos por programa, para la subpartida 10201 Servicio de Agua y Alcantarillado.**

Según se muestra en la figura N° 2, el programa 927 Servicio Jurisdiccional, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢336.644.673, lo que representa un 39% del total de los recursos de la subpartida. Por otra parte, el Programa 928 y 926 representan un 21% y 18% de los recursos.

En un menor porcentaje los programas 929, 930 y 950 representan un 22% del total de recursos formulados.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

Centros de responsabilidad con los montos más representativos dentro de la subpartida.

**Tabla 5. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2020** | **2021** | **Representación** |
| Organismo de Investigación Judicial | 131,650,776 | 180,242,300 | 21% |
| Primer Circuito Judicial San José | 116,842,443 | 148,345,501 | 17% |
| Ministerio Público | 94,861,682 | 116,037,488 | 13% |
| Dirección Ejecutiva | 28,183,224 | 65,326,445 | 8% |
| Defensa Pública | 40,450,359 | 58,278,848 | 7% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 32,928,372 | 36,753,709 | 4% |
| Tercer Circuito Judicial San José | 22,710,456 | 25,348,759 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 16,204,805 | 18,087,336 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 16,002,858 | 17,861,928 | 2% |
| Departamento de Trabajo Social y Psicología | 15,017,158 | 16,761,716 | 2% |
| Circuito Judicial Heredia | 12,306,968 | 13,736,683 | 2% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 9,506,450 | 13,493,426 | 2% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 10,945,162 | 12,216,673 | 1% |
| Salas | 9,473,778 | 10,574,361 | 1% |

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre el Organismo de Investigación Judicial con un 21%, el Primer Circuito Judicial de San José 17%, el Ministerio Público 13% y la Dirección Ejecutiva con un 8%; estas representan un 59% del total de recursos formulados.

## Subpartida 1.02.02 Servicio de energía eléctrica

En cuanto a la subpartida 1.02.02 para los últimos cinco años, se contemplan los gastos de electricidad, por servicios que prestan empresas como: Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Coopeguanacaste, Coopesantos S.A, Coopelesca S.A, Jasec, Coopealfaro Ruiz, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Costarricense de Electricidad a los diferentes programas que conforman el Poder Judicial.

### Comportamiento histórico de la subpartida

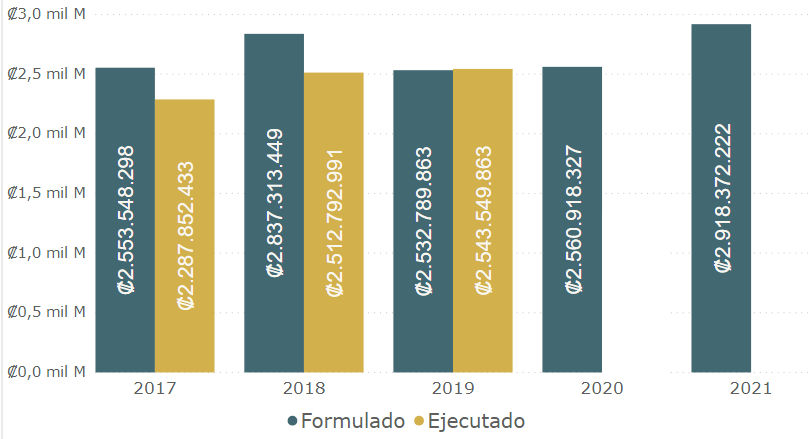
**Tabla 6. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10202 Servicio de energía eléctrica. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 2.553.548.298 | 2.837.313.449 | 2.532.789.863 | 2.560.918.327 | 2.918.372.222 |
| **Variación** |  | 11% | -11% | 1% | 14% |

Fuente: SIGA PJ

Del cuadro anterior, se puede observar que la conducta de la subpartida de energía eléctrica no es constante a través de los años, a partir del periodo 2019 la subpartida tiende a aumentar según los cálculos ingresados al sistema SIGA-PJ por parte del Departamento de Financiero Contable.

**Figura N° 3. Formulación y Ejecución Periodos 2017 - 2021**



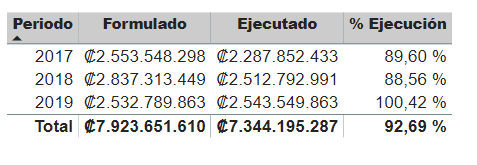
Fuente: SIGA PJ

En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida de servicio de energía eléctrica, tanto en la formulación como en la ejecución.

El comportamiento en el periodo 2018 presentó una formulación superior a la ejecución, no así para el periodo 2019, donde el monto formulado estuvo muy cercano a lo ejecutado. **Para el periodo 2020 se estimó una formulación acorde a la ejecución del periodo 2019 y para el periodo 2021 se presenta un incremento, considerando los montos establecidos por concepto del impuesto al valor agregado.**

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 7. Ejecución presupuestaria periodos 2017 -2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante los periodos 2017 y 2018, el porcentaje de ejecución estuvo por debajo del 100%, siendo este de un 89.60% y 88.56% respectivamente; no obstante, para el periodo 2019 se presentó una ejecución superior al 100%.

### Variación por programa 2020-2021

Con el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que presenta el mayor incremento en la formulación del Servicio de energía eléctrica con relación al periodo anterior, con una diferencia de ¢ 255.743.420 y una variación del 52%, seguido del Programa 927 y 928 con un incremento de ¢47.999.145 y ¢25.982.912 y una variación del 4% para dichos programas.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 8. Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **Variación %** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 468.566.278,00 | 487.176.842 | 742.920.262 | 255.743.420 | 52% |
| Servicio Jurisdiccional | 1.044.021.807,00 | 1.089.364.945 | 1.137.364.090 | 47.999.145 | 4% |
| Organismo de Investigación Judicial | 600.926.816,00 | 616.881.438 | 642.864.350 | 25.982.912 | 4% |
| Ministerio Público | 259.452.618,00 | 255.187.226 | 252.632.854 | - 2.554.372 | -1% |
| Defensa Pública | 150.564.366,00 | 98.808.632 | 107.997.492 | 9.188.860 | 9% |
| Serv. Atenc - Protec Víctimas y Testigos | 20.017.978,00 | 13.499.244 | 34.593.174 | 21.093.930 | 156% |
| **Total general** | **2.543.549.863,00** | **2.560.918.327** | **2.918.372.222** | **357.453.895** | **14%** |

Fuente: SIGA PJ

**Figura N° 4. Distribución de recursos por programa para la subpartida 10202 Servicio de Energía Eléctrica.**

Tal como se muestra en la figura N° 4, el programa 927 Servicio Jurisdiccional, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢1.137.364.090, lo que representa un 39% del total de los recursos de la subpartida, seguido del Programa 926 y 928 que representan un 25% y 22% de los recursos formulados en esta subpartida. Los programas 929, 930 y 950 representan un 14%.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

**Tabla 9. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2020** | **2021** | **Representación** |
| Organismo de Investigación Judicial | 616.881.438 | 642.864.350 | 22% |
| Dirección Ejecutiva | 108.084.651 | 318.278.194 | 11% |
| Ministerio Público | 255.187.226 | 252.632.854 | 9% |
| Primer Circuito Judicial San José | 182.566.382 | 179.630.449 | 6% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 143.181.404 | 130.431.681 | 4% |
| Defensa Pública | 98.808.632 | 107.997.492 | 4% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 76.759.581 | 85.676.861 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 75.895.173 | 84.712.037 | 3% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 66.043.795 | 73.716.208 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica | 65.154.597 | 72.723.709 | 2% |
| Circuito Judicial Cartago | 64.843.363 | 72.376.319 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Alajuela | 57.310.130 | 63.967.938 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 48.571.564 | 56.103.616 | 2% |
| Departamento de Trabajo Social y Psicología | 47.281.754 | 52.774.541 | 2% |

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre el Organismo de Investigación Judicial con un 22%, la Dirección Ejecutiva con un 11%, el Ministerio Público 9% y el Primer Circuito Judicial de San José con un 6%, estos representan en conjunto un 48% del total de recursos formulados.

## Subpartida 1.02.04 Servicios de Telecomunicaciones

### Comportamiento histórico de la subpartida

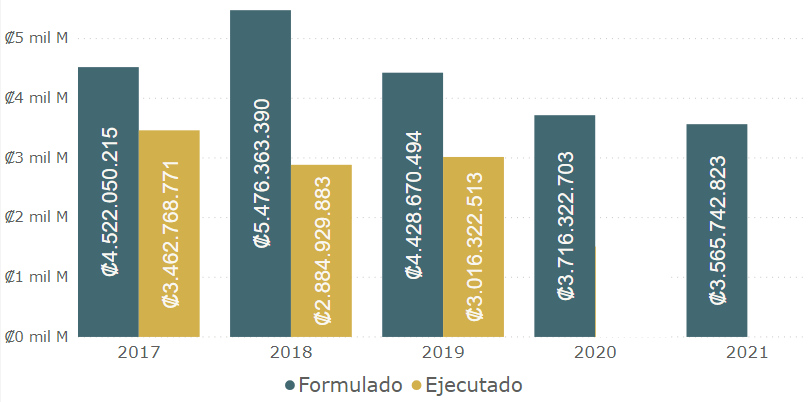
**Tabla 10. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10204 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 4.522.050.215 | 5.476.363.390 | 4.428.670.494 | 3.716.322.703 | 3.565.742.823 |
| Variación |  | 21% | -19% | -16% | -4% |

Fuente: SIGA PJ

De la tabla anterior, se puede observar que la formulación de recurso del periodo 2018 presenta un incremento de un 21% en relación con el periodo 2017, sin embargo, a partir del periodo 2018 y hasta el periodo 2021 la formulación presupuestaria está decreciendo significativamente.

**Figura N° 5. Formulación y Ejecución Periodos 2017 - 2021**



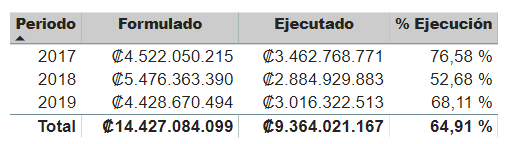
Fuente: SIGA PJ

En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida de servicio de telecomunicaciones, tanto en la formulación como en la ejecución.

Es posible observar que la constante predomina de los periodos 2017 al 2019 donde la formulación es mayor que la ejecución. Para los periodos 2020 y 2021 las estimaciones se fundamentan en las proyecciones del Departamento de Financiero Contable.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 11. Ejecución presupuestaria periodos 2017 -2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante los periodos 2017 – 2019 el porcentaje de ejecución estuvo por debajo del 100%, siendo que entre los tres periodos la ejecución fue del 64,91%. Es importante señalar que la ejecución más baja en estos periodos se presentó en el año 2018, con un 52.68%.

### Variación por programa 2020-2021

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial, es el que presenta el mayor incremento en la formulación del Servicio de Telecomunicaciones con relación al periodo anterior, con una diferencia de ¢ 212.494.775 y una variación del 33%, seguido del Programa 929 y 930 con un incremento de ¢68.929.239 y ¢12.299.010 y una variación del 4% para dichos programas.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 12. Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **Variación %** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 854.288.880,00 | 1.408.737.619 | 991.795.480 | - 416.942.139 | -30% |
| Servicio Jurisdiccional | 1.097.735.074,21 | 1.356.259.979 | 1.332.475.027 | - 23.784.952 | -2% |
| Organismo de Investigación Judicial | 680.306.508,00 | 640.938.500 | 853.433.275 | 212.494.775 | 33% |
| Ministerio Público | 185.204.202,00 | 159.756.499 | 228.685.738 | 68.929.239 | 43% |
| Defensa Pública | 154.252.496,00 | 108.848.538 | 121.147.548 | 12.299.010 | 11% |
| Serv. Atenc - Protec Víctimas y Testigos | 44.535.353,00 | 41.781.568 | 38.205.755 | - 3.575.813 | -9% |
| **Total general** | **3.016.322.513,21** | **3.716.322.703** | **3.565.742.823** | **- 150.579.880** | **-4%** |

**Figura N° 6. Distribución de recursos por programa para la subpartida 10204 Servicio de Telecomunicaciones.**

### Tal como se muestra en la figura N° 6, el programa 927 Servicio Jurisdiccional, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢1.332.475.027, lo que representa un 37% del total de los recursos de la subpartida, seguido del programa 926 con un 28% y el programa 928 con un 24%. En un menor porcentaje, los programas 929, 930 y 950 representan un 11% de los recursos.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

**Tabla 13. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2020** | **2021** | **Representación** |
| Organismo de Investigación Judicial | 640.938.500 | 853.433.275 | 24% |
| Primer Circuito Judicial San José | 717.093.143 | 597.061.427 | 17% |
| Dirección Ejecutiva | 377.221.248 | 332.843.746 | 9% |
| Ministerio Público | 159.756.499 | 228.685.738 | 6% |
| Dirección de Tecnología de Información | 763.905.394 | 213.618.041 | 6% |
| Área de Informática | - | 187.000.000 | 5% |
| Defensa Pública | 108.848.538 | 121.147.548 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 80.802.580 | 90.189.548 | 3% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 64.170.158 | 71.624.906 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Alajuela | 3.549.983 | 70.982.403 | 2% |
| Tercer Circuito Judicial San José | 8.871.045 | 65.710.185 | 2% |
| Circuito Judicial Heredia | 58.862.335 | 65.700.467 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 44.904.832 | 50.121.493 | 1% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 39.081.527 | 43.621.689 | 1% |
| Dirección Gestión Humana | 36.159.169 | 40.791.239 | 1% |

### Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre el Organismo de Investigación Judicial con un 24%, el Primer Circuito Judicial de San José con un 17%, la Dirección Ejecutiva con un 9%, el Ministerio Público y la Dirección de Tecnología de la Información con un 6% para ambos centros, estos representan en conjunto un 62% del total de recursos formulados.

Como parte del análisis y la discusión, doña Ana Romero comenta que hay contratos actuales en edificios periféricos que pronto no serán necesarios, por lo que podrían redireccionarse para atender la necesidad de un mayor ancho de banda a nivel institucional.

En este sentido, don Juan Carlos Sebiani comenta sobre la importancia de la previsión correspondiente dada la necesidad institucional actual de tener un mayor ancho de banda.

La Dirección de Planificación debe coordinar con la Dirección de Tecnología para revisar y proponer si se van a requerir recursos adicionales para el presupuesto 2021 relacionado a solventar las necesidades producto de la pandemia generada por el Coronavirus COVIT-2019.

**Se acordó: 1)** Aprobar los recursos formulados en las subpartidas 10201 “Servicios de Agua y alcantarillado”, 10202 “Servicios de Electricidad” y 10204 “Servicios de Telecomunicaciones”. **2)** La Dirección de Planificación revisará con la Dirección de Tecnología de la información los contratos asociados a mejorar la conectividad de la institución a internet, en vista de la mayor cantidad de personas haciendo teletrabajo; así como lo relativo a poder contar con una mayor cantidad de licencias para ampliar también la posibilidad de las personas teletrabajando. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO VIII**

**DOCUMENTO N°** **4548-2020**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 27 de marzo de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de la **Subpartida 20203 Alimentos y Bebidas**.

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Tabla 1. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 20203 Alimentos y bebidas. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Monto Formulado | 484.302.851 | 490.432.063 | 569.632.194 | 582.373.843 | 613.869.873 |
| Variación | - | 1.3% | 16.1% | 2.2% | 5.4% |

Fuente: SIGA PJ

De la tabla anterior, se puede observar que durante los periodos 2017 – 2021 el comportamiento de la subpartida ha presentado un crecimiento con porcentajes de variación del 1%, 16%, 2% y 5% respectivamente.

**Figura N° 1. Formulación 2017 – 2021**

Según se muestra en la figura anterior, el crecimiento de la subpartida se da a partir del periodo 2019 producto que el servicio de alimentación de detenidos del Organismo de Investigación Judicial. En el 2018 con el artículo 11443 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE DETENIDOS se formularon ¢380.693.911, para el periodo 2019 se formulan ¢451.940.022.

Lo anterior, dado que se dio un aumento de ¢71.336.111 en los diferentes contratos de alimentación de detenidos, siendo el principal caso el de la Unidad de Cárceles del I Circuito de San José, contrato que venció en noviembre 2017 y para el cual en el 2018 se solicitaron ¢57.425.779, siendo que finalmente para el 2019 el nuevo contrato asignó ¢98.709.058.

Para el periodo 2020 se presenta un incremento de ¢19.753.887 que corresponde a un 4,27%. y en el año 2021 el incremento es de ¢33.875.546 que equivale a un 7,17%.

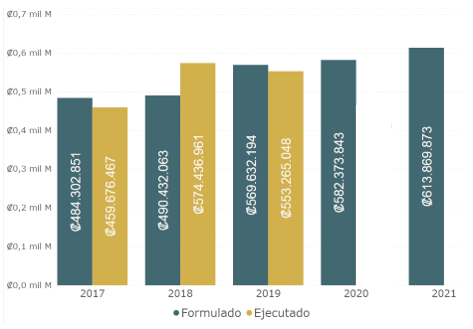
En ambos casos son incrementos que se presentan por tratarse de contratos en cerca de 35 oficinas diferentes, los que van venciendo y se deben renovar.  Los rubros más importantes son los de Cárceles del Primer y Segundo Circuito de San José que para 2021 formulan ¢90.265.043 y ¢68.202.451, respectivamente.

Es importante indicar que esta subpartida está regulada por la directriz de formulación N°25 que indica que solo es permitido formular un monto igual o inferior al del periodo 2020, por lo que los centros de responsabilidad se ven restringidos a crecer en esta subpartida.

Cabe señalar que en esta subpartida se incluye lo correspondiente al contrato de la Escuela Judicial bajo el artículo 11486 SERVICIO DE RESTAURANTE formula durante los periodos 2017 - 2021 los siguientes recursos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Formulación 2017-2021**  **Servicio de Restaurante Escuela Judicial** | |
| **Año** | **Monto Formulado** |
| 2017 | ¢ 39.490.617 |
| 2018 | ¢ 42.036.999 |
| 2019 | ¢46.880.721 |
| 2020 | ¢44.205.453 |
| 2021 | ¢44.205.453 |

**Figura N° 2. Formulación y Ejecución Periodos 2017 – 2021**



Fuente: SIGA PJ

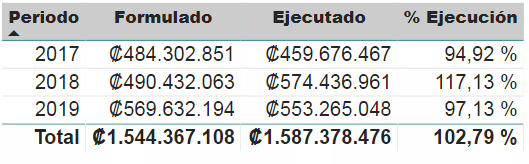
En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida 20203 Alimentos y Bebidas, tanto en la formulación, como en la ejecución. De los años que se presentan en la figura 1, el periodo 2021 es el que representa el punto más alto en la formulación.

Para los periodos 2017 y 2019 la formulación se mantuvo muy acorde con la ejecución, sin embargo, durante el periodo 2018 la ejecución fue mayor a la formulación.

Según las Normas de Contención del Gasto y las directrices de formulación esta subpartida mantiene un análisis profundo de tal forma que se presupueste lo estrictamente necesario.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria periodos 2017 - 2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante los periodos 2017 y 2019 el porcentaje de ejecución estuvo por debajo del 100%, siendo estos del 94,92% y 97,13% respectivamente; no obstante, para el periodo 2018 la ejecución estuvo por encima del 100%, con un 117.13%. Lo que representó a nivel global una ejecución de 102,79% para los tres periodos presupuestarios.

En línea con lo anterior, se presenta el detalle de la ejecución para el periodo 2019 por programa presupuestario.

Tabla 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | ¢ 66.939.182,98 |
| Servicio Jurisdiccional | ¢ 1.591.228,62 |
| Organismo de Investigación Judicial | ¢ 462.533.024,46 |
| Ministerio Público | ¢ 7.339.088,29 |
| Defensa Pública | ¢ 598.785 |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | ¢ 14.263.738,92 |

Si se considera lo ejecutado en el 2019 para el programa 928 Organismo de Investigación Judicial, Alimentación de Detenidos, la suma de 462.533.024 más el incremento del 13% por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 60.129.293, el monto a formular sería de 522.662.317. Este monto es inferior al que se está solicitando para el 2021.

### Variación por programa 2020-2021

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial, es el que presenta la mayor formulación de recursos en la subpartida de Alimentos y Bebidas, con un monto superior al del periodo 2020, y una variación del 7%; seguido del Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo y el Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con la directriz de formulación presupuestaria N°25 señala:

1. Los recursos solicitados en la **Subpartida 20203 Alimentos y Bebidas** deben ser iguales o inferiores al monto aprobado para el 2020, excepto las líneas relacionadas con la alimentación de privados de libertad, así como la alimentación de personas víctimas y testigos solicitadas por el Programa 950 “Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos”. Se debe valorar que lo solicitado sea estrictamente necesario, justificado y se demuestre el valor agregado que se va a obtener en el servicio.

-0-

Cuando haya personas detenidas a la orden de los Tribunales de Justicia o del Ministerio Público en las celdas de la policía administrativa, el Poder Judicial debe cubrir el costo de su alimentación, considerando los recursos previstos por los contratos de alimentación de detenidos tramitados por el Organismo de Investigación Judicial.

Según se indicó con anterioridad, el crecimiento de la subpartida a nivel institucional se da por el incremento en el servicio de alimentación de detenidos del Organismo de Investigación Judicial. En este sentido es importante señalar que la alimentación de detenidos es un gasto ineludible en el que se deben considerar no solamente las necesidades de los privados de libertad cuando se encuentran a la orden de los Tribunales de Justicia, sino también las detenciones que gira el Ministerio Público en las celdas de la policía administrativa.

Precisamente la directriz N°25 señala que los recursos solicitados en esta subpartida deben ser iguales o inferiores al monto aprobado para el 2020, excepto las líneas relacionadas con la alimentación de privados de libertad, así como la alimentación de personas víctimas y testigos solicitadas por el Programa 950 “Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos”.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 3. 1 Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

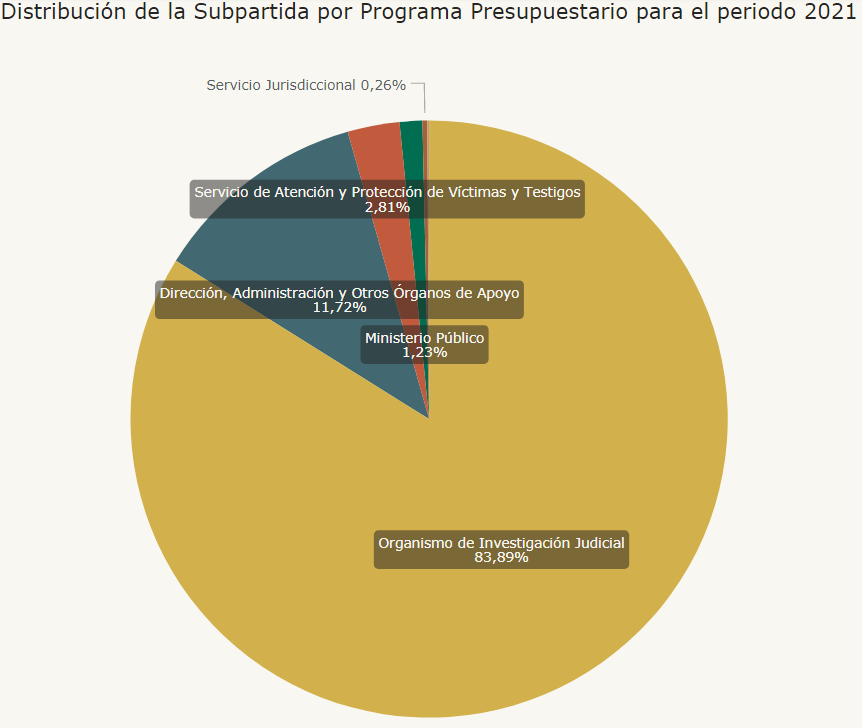
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 66.939.183 | 72.555.761 | 71.675.746 | -880.015 | -1% |
| Servicio Jurisdiccional | 1.591.229 | 1.868.468 | 1.845.794 | -22.674 | -1% |
| Organismo de Investigación Judicial | 462.533.024 | 482.090.511 | 514.972.591 | 32.882.080 | 7% |
| Ministerio Público | 7.339.088 | 8.007.778 | 7.534.012 | -473.766 | -6% |
| Defensa Pública | 598.785 | 597.614 | 588.140 | -9.474 | -2% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 14.263.739 | 17.253.711 | 17.253.590 | -121 | 0% |
| **Total** | **553.265.048** | **582.373.843** | **613.869.873** | **31.496.030** | **100%** |

Fuente: SIGA PJ

Según se indicó con anterioridad, el crecimiento de la subpartida a nivel institucional se da por el incremento en el servicio de alimentación de detenidos del Organismo de Investigación Judicial.

El programa 927 Servicios Jurisdiccional presenta una variación del -1%; además, el programa 929 Ministerio Público y Programa 930 Defensa Pública disminuyen la formulación de recursos para el periodo 2021 con variaciones del -6% y -2% respectivamente.

**Figura N° 3. Distribución de recursos por programa, para la subpartida 20203 Alimentos y bebidas**



Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en la figura N° 3, el programa 928 Organismo de Investigación Judicial, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢514.972.591, lo que representa un 83,89% del total de los recursos de la subpartida; seguido del Programa 926 Administración y Otros Órganos de Apoyo con un total ¢71.675.746 para un 11,72% y el Programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos con ¢17.253.590 los cuales, en su mayoría son para ayudas a víctimas.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

Centros de responsabilidad con los montos más representativos dentro de la subpartida.

**Tabla 4. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de responsabilidad** |  | **2021** | **Porcentaje** |
| Organismo de Investigación Judicial | | 514.972.591 | 83,89% |
| Escuela Judicial |  | 47.432.619 | 7,73% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | | 17.253.590 | 2,81% |
| Despacho de la Presidencia | | 8.717.200 | 1,42% |
| Ministerio Público |  | 7.534.012 | 1,23% |
| Consejo Superior |  | 3.400.000 | 0,55% |
| Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | | 3.087.342 | 0,50% |
| Comisiones Institucionales | | 1.982.071 | 0,32% |
| Dirección Ejecutiva | | 1.000.000 | 0,16% |
| Primer Circuito Judicial San José | | 849.664 | 0,14% |
| Oficina de Control Interno | | 840.000 | 0,14% |
| Segundo Circuito Judicial San José | | 752.000 | 0,12% |
| Dirección Gestión Humana | | 739.355 | 0,12% |
| Defensa Pública |  | 588.140 | 0,10% |
| Centro de Gestión de la Calidad | | 503.500 | 0,08% |
| Contraloría de Servicios | | 456.889 | 0,07% |
| Salas |  | 450.000 | 0,07% |
| Circuito Judicial Puntarenas | | 330.000 | 0,05% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | | 321.257 | 0,05% |
| Secretaría Técnica de Ética y Valores | | 301.040 | 0,05% |
| Centro de Conciliación del Poder Judicial | | 254.399 | 0,04% |
| Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores | | 250.000 | 0,04% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Sur | | 247.176 | 0,04% |
| Auditoría |  | 200.000 | 0,03% |
| Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | | 174.724 | 0,03% |
| Presidencia de la Corte | | 146.150 | 0,02% |
| Dirección de Planificación | | 120.000 | 0,02% |
| Administración de Quepos | | 106.000 | 0,02% |
| Programa Justicia Restaurativa | | 100.460 | 0,02% |
| Circuito Judicial Cartago | | 100.000 | 0,02% |
| Segundo Circuito Judicial Guanacaste | | 97.000 | 0,02% |
| Administración de Santa Cruz | | 86.467 | 0,01% |
| Circuito Judicial Heredia | | 85.000 | 0,01% |
| Administración de Turrialba | | 70.040 | 0,01% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | | 63.600 | 0,01% |
| Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia | | 61.800 | 0,01% |
| Dirección de Tecnología de Información | | 53.049 | 0,01% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | | 50.000 | 0,01% |
| Primer Circuito Judicial Alajuela | | 50.000 | 0,01% |
| Departamento de Trabajo Social y Psicología | | 42.738 | 0,01% |
| **Total** |  | **613.869.873** | **100%** |

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre el Organismo de Investigación Judicial con un monto de ¢514.972.591, seguido de la Escuela Judicial con ¢47.432.619. Estos dos centros representan un 92% de los recursos formulados en esta subpartida.

En el caso del crecimiento de esta subpartida con relación al periodo anterior, el centro de responsabilidad que hace diferencia es el Organismo de Investigación Judicial y como anteriormente se mencionó, corresponde al crecimiento del contrato de alimentación de detenidos, que estima los respectivos porcentajes de crecimiento para cada periodo presupuestario.

**1.5 Requerimientos Adicionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **Subpartida** | **Monto Adicional** | **Justificación** | **Observaciones** |
| Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | 20203 Alimentos y bebidas | ¢1.000.000 | Para cubrir actividades en que participan las personas facilitadoras, en virtud de que estas se trasladan desde zonas alejadas y suelen salir muy temprano de sus casas para atender a las convocatorias de los juzgados. | Este Centro de Responsabilidad ejecutó en 2019 ¢3.410.585(monto que representó un 6% del presupuesto actual), formuló para 2020 ¢3.087.342 y para 2021 solicita ¢3.087.342. |

**En caso de aprobarse estos requerimientos adicionales, el presupuesto total de la subpartida 20203 Alimentos y Bebidas sería de ¢614.869.873, con una variación definitiva del 5.6% respecto al 2020.**

Como se indicó con anterioridad, para el 2019 se dio una ejecución presupuestaria del 97,13%; se presenta el detalle de la ejecución para el periodo 2019 por programa presupuestario.

Tabla 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | ¢ 66.939.182,98 |
| Servicio Jurisdiccional | ¢ 1.591.228,62 |
| Organismo de Investigación Judicial | ¢ 462.533.024,46 |
| Ministerio Público | ¢ 7.339.088,29 |
| Defensa Pública | ¢ 598.785 |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | ¢ 14.263.738,92 |

Finalmente, como **complemento del análisis realizado**, se consultó al **Departamento Financiero Contable** sobre el comportamiento de los contratos de alimentación de detenidos. Al respecto, el Lic. Luis Abarca Padilla, sobre los contratos de alimentación de detenidos, indicó:

*… se adjunta análisis del comportamiento de la subpartida 20203 con el que se evidencia que el monto que se está proponiendo es cercano al comportamiento de la ejecución del 2019 más el IVA con un faltante estimado de 11 millones según comportamiento.*

*Importante indicar, que no se puede comprobar este comportamiento con los pedidos tramitados en el 2020 ya que todavía se tiene un faltante por IVA, pero se verificó la razonabilidad de la cuantía del rubro de contratos contra la proyección de seguimiento para el 2020 y se visualiza similar.*



Como parte del análisis y la discusión es importante recordar que en la reunión de trabajo del pasado 27 de marzo, el Consejo Superior conoció el contenido del OFICIO PJ-DGH-CAP-116-2020 RELACIONADO CON ACUERDO DE LA SUBCOMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS, en el cual propone una serie de requerimientos presupuestarios por ¢7.154.000 necesarios para atender lo dispuesto por la **Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas,** respecto de dotar a lasUnidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, Escuela Judicial, Dirección de Justicia Restaurativa, y las Comisiones, entre otros, de un rubro bajo las partidas de capacitación, viáticos y transportes, a efecto de contar con recursos para la alimentación en las visitas a territorios indígenas. Al respecto, finalmente se dispuso:

***“(…) 3)*** *Aprobar la inclusión en la subpartida de Alimentos y Bebidas de los requerimientos solicitados por la* ***Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas,*** *respecto de dotar a las**Unidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, Escuela Judicial, Dirección de Justicia Restaurativa, y las Comisiones, entre otros, de recursos para las actividades de capacitación en las que participa la población indígena”.*

**-0-**

**Se acordó**: **1)** Aprobar los requerimientos solicitados por los distintos Centros de Responsabilidad en la subpartida 20203 Alimentos y Bebidas. **2)** Se aprueba los requerimientos adicionales solicitados para CONAMAJ destinados al Programa Nacional de Facilitadores Judiciales. **3)** Incorporar la suma de ¢7.154.000 en la subpartida de Alimentos y Bebidas solicitados por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, respecto de dotar a las Unidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, Escuela Judicial, Dirección de Justicia Restaurativa, y las Comisiones, entre otros, de recursos para las actividades de capacitación en las que participa la población indígena. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO IX**

**DOCUMENTO N°** **4553-2020**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 27 de marzo de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de las **Subpartidas 10301 Información y 10302 Publicidad y Propaganda**

**Subpartida 1.03.01 Información**

**Los recursos formulados en la subpartida 10301 Información se requieren para cubrir los gastos por servicios de publicación y divulgación de información a través de medios de comunicación masiva (escritos, radiales, audiovisuales, entre otros), con el fin de informar a la ciudadanía.**

1. **Comportamiento Histórico de la Subpartida**

Las Directrices Técnicas para la Programación Anual y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021, en la directriz N°39 establece para esta subpartida lo siguiente:

*“Según acuerdo de Consejo Superior en sesión Nº12-13, artículo VII y Corte Plena en sesión Nº13-13, artículo XLIV, las publicaciones en medios nacionales proceden únicamente cuando sean estrictamente necesarias. En la medida que sea posible, la información se divulgará a través del sitio web del Poder Judicial y redes sociales. El monto formulado en la* ***subpartida 10301 Información*** *debe ser igual o menor a la ejecución presupuestaria del 2019, más los porcentajes de crecimiento definidos para el 2020 y 2021.”*

**Tabla 1. Detalle del Comportamiento Histórico de la Subpartida 10301**

**Información, Periodos 2017-2021**



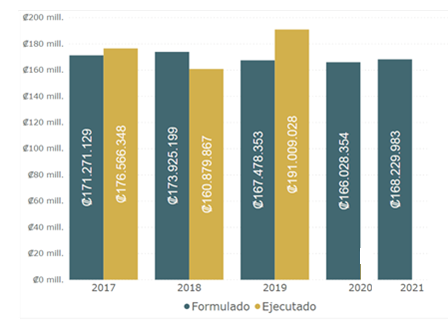
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En la tabla anterior se muestran los montos formulados en la subpartida 10301 Información para los últimos 5 años, presentando montos muy similares en los diferentes periodos. Para el 2021 se incrementa en un 1,33% lo cual significa que se incluyen ¢2,201,629 más que el año anterior. No obstante, como se aprecia seguidamente el monto requerido para el 2021 es inferior al monto ejecutado para el 2019.

El aumento que se presenta se debe a que en el Programa 927 Servicio Jurisdiccional se presenta un incremento con respecto a lo formulado en el 2020, esto debido a que se incluyen los recursos para las publicaciones de edictos de tránsito, lo cual es un gasto ineludible y que se incrementa a partir del 2020 por la aplicación del 13% del impuesto al valor agregado (IVA).

**Figura N°1. Formulación y Ejecución Subpartida 10301**

**Periodos 2017 - 2021**

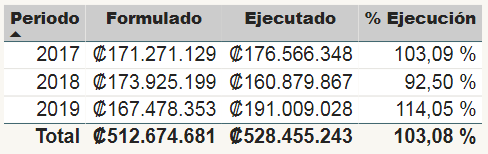


**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En el gráfico anterior se representa la formulación y ejecución presupuestaria de la subpartida 10301 Información para el periodo del 2017 al 2021. Esta subpartida se muestra variable con respecto a la ejecución presupuestaria, esto por cuanto en el 2017 y 2019 la ejecución fue mayor a lo presupuestado, pero en el 2018 estuvo por debajo de los recursos formulados. En el 2019 la diferencia de lo ejecutado con respecto a lo formulado es de ¢23.530.675.

1. **Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Subpartida**

**Tabla 2. Ejecución Presupuestaria Periodos 2017-2019**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Como se indicó anteriormente, en la tabla se observa que para el 2017 y 2019 la ejecución presupuestaria estuvo por encima del 100%, a pesar de que para el 2018 está por debajo de lo formulado con un 92,50%.

1. **Variación por Programa 2020-2021**

Al realizar el análisis comparativo 2020 y 2021 de los recursos formulados en esta subpartida por programa presupuestario, se determina que el que presenta el mayor incremento es el 928 Organismo de Investigación Judicial con un 22% y el 927 Servicio Jurisdiccional incrementa un 13%. Por su parte, el programa 926 Dirección y Administración disminuye un 3%.

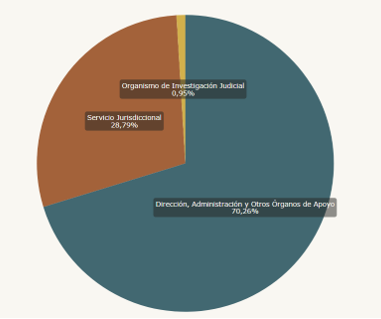
**Tabla 3. Porcentaje de Variación por Programa 2020–2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

El programa 927 Servicio Jurisdiccional presenta un incremento con respecto a lo formulado en el 2020, esto debido a que se incluyen los recursos para las publicaciones de edictos de tránsito, lo cual es un gasto ineludible y que se incrementa a partir del 2020 por la aplicación del 13% del impuesto al valor agregado (IVA).

**Figura N°2. Distribución de la Subpartida por Programa Presupuestario 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

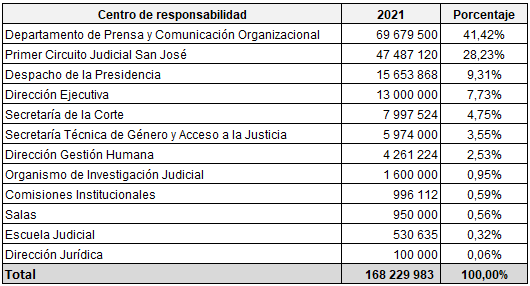
Como lo muestra el gráfico anterior, el programa presupuestario con más recursos formulados para el 2021 en la subpartida 10301 Información, es el 926 Dirección y Administración con un total de ¢118.192.863 que representa un 70,26%, seguido por el 927 Servicio Jurisdiccional con ¢48.437.120 es decir un 28,79% y el 928 Organismo de Investigación Judicial con ¢1.600.000 un 0,95%.

1. **Distribución por Centro de Responsabilidad**

En la siguiente tabla se muestran la distribución por centro de responsabilidad de los recursos formulados para el 2021 en la subpartida 10301 Información.

**Tabla 4. Distribución de la Subpartida por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2021**

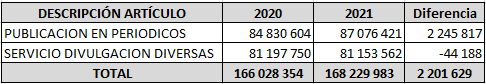


**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

La distribución según tipo de artículo es la siguiente:

**Tabla 5. Distribución por Artículo**

**Periodos 2020-2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

**Figura 3.  Distribución de la Subpartida por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en el gráfico anterior los centros de responsabilidad con más recursos formulados en esta subpartida para el 2021 son el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional con ¢69.679.500, el Primer Circuito Judicial de San José ¢47.487.120 para la publicación de los edictos de tránsito, el Despacho de la Presidencia con ¢15.653.868 y la Dirección Ejecutiva con ¢13.000.000.

**Subpartida 1.03.02 Publicidad y Propaganda**

**Los recursos formulados en la subpartida 10302 Publicidad y Propaganda son requeridos para servicios de publicidad para la producción y publicación de anuncios, cuñas, avisos, producciones audiovisuales, entre otros. Se incluyen recursos para la divulgación de los servicios del Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, para el Centro de Gestión de la Calidad y para el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional por servicios de publicación e información a través de medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales, entre otros, que tienen el fin de informar a la ciudadanía en general, sobre los servicios y otras acciones que implementa el Poder Judicial.**

**Comportamiento Histórico de la Subpartida**

**Tabla 6. Detalle del Comportamiento Histórico de la Subpartida 10302**

**Publicidad y Propaganda, Periodos 2017-2021**

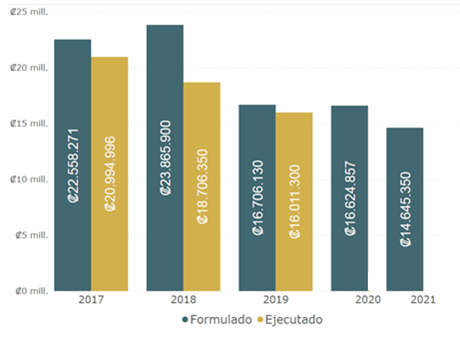


**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En la tabla anterior se muestran los montos formulados en la subpartida 10302 Publicidad y Propaganda para los últimos 5 años, la cual se observa que ha ido disminuyendo a partir del 2019.

**Figura N°4. Formulación y Ejecución Subpartida 10302**

**Periodos 2017 - 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En el gráfico anterior se representa la formulación y ejecución presupuestaria de la subpartida 10502 Publicidad y Propaganda para el periodo del 2017 al 2021. Se observa que los recursos formulados han ido disminuyendo, especialmente en el 2019 se presenta una disminución en esta subpartida debido a recortes aplicados por restricciones del Ministerio de Hacienda. En esta subpartida se observa que la ejecución presupuestaria ha estado por debajo de la formulación; sin embargo, para el 2019 el monto ya fue más ajustado quedándose sin ejecutar solamente ¢695.050.

**Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Subpartida**

**Tabla 7. Ejecución Presupuestaria Periodos 2017-2019**



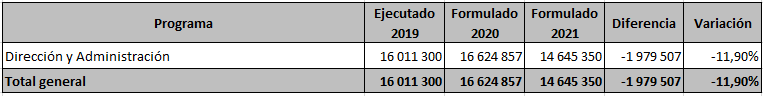
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Durante los tres periodos presupuestarios que se muestran en la tabla, se observa una ejecución presupuestaria por debajo del 100%; sin embargo, el 2017 y 2019 se encuentran por encima del 90%.

1. **Variación por Programa 2020-2021**

Los recursos formulados en la subpartida 10302 Publicidad y Propaganda solamente se formulan para el programa 926 Dirección y Administración.

**Tabla 8. Porcentaje de Variación por Programa 2020–2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

1. **Distribución por Centro de Responsabilidad**

En la siguiente tabla se muestran la distribución por centro de responsabilidad de los recursos formulados para el 2021 en la subpartida 10302 Publicidad y Propaganda.

**Tabla9. Distribución de la Subpartida por Centro de Responsabilidad**

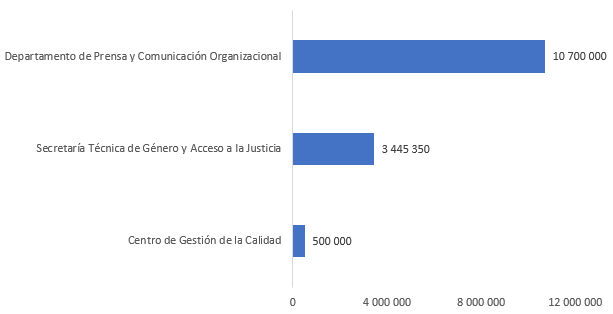
**Periodo 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

**Figura 5.  Distribución de la Subpartida por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en el gráfico anterior el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional con ¢10.700.000 es el centro de responsabilidad que más solicita recursos en esta subpartida, luego la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia con ¢3.445.350 y por último, el Centro Gestión de la Calidad con ¢500.000.

**Se acuerda:** Aprobar los recursos solicitados en las Subpartidas 10301 Información y 10302 Publicidad y Propaganda. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO X**

**DOCUMENTO N°** **4556-2020**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 3 de abril de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de las **Subpartidas 10701 Actividades de Capacitación y 10702 Actividades Protocolarias y Sociales**

# **Subpartida 10701 Actividades de Capacitación**

### Comportamiento histórico de la subpartida

Es importante indicar que los recursos que se incluyen en esta subpartida corresponden a los gastos por la prestación de servicios destinados a la inauguración y clausura, formación, actualización y desarrollo del conocimiento, que se contratan con personas físicas y jurídicas. Además, contempla conceptos relacionados con servicios y bienes inherentes a la realización de eventos de capacitación y aprendizaje tales como seminarios, charlas, congresos, simposios, cursos, talleres y similares.

**Tabla 1. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10701 Actividades de Capacitación. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Monto | 434.850.782 | 582.458.231 | 519.741.879 | 527.555.048 | 433.332.314 |
| Variación | - | 34% | -11% | 2% | -18% |

Fuente: SIGA PJ

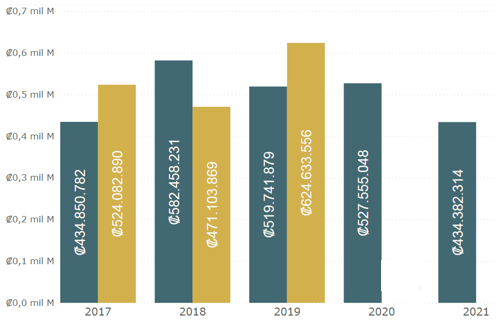
De la tabla anterior, se puede observar que en el periodo 2018 se presentó un incremento en la subpartida, con una variación de un 34%, ocasionado por los recursos que fue necesario incluir para atender las capacitaciones de las reformas procesales; sin embargo, para el periodo 2019 el comportamiento de esta disminuye en un 11%; ya para el periodo 2020 se presentó un leve crecimiento en la variación con un 2% y finalmente en el 2021 se visualiza una caída de la subpartida en un 18%.

**Figura N° 1. Comportamiento de la subpartida 10701 en los Periodos 2017 – 2021.**

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en la figura anterior, el mayor crecimiento de la subpartida se presenta en el periodo 2018 y es producto que la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales solicitó recursos para atender tres actividades del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. A partir del periodo 2019 el comportamiento de la subpartida tiende a disminuir, debido a que es regulada por las directrices de formulación presupuestaria.

**Figura N° 2. Formulación y Ejecución Periodos 2017 – 2021**



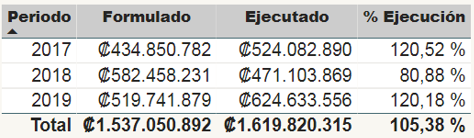
Fuente: SIGA PJ

En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida de Actividades de Capacitación, tanto en la formulación, como en la ejecución. De los años que se presentan en el gráfico, durante los periodos 2017 y 2019 se refleja que la formulación no fue suficiente para cubrir la ejecución, lo que provocó que a nivel de Centros de Responsabilidad se tuvieron que inyectar recursos para cubrir las necesidades de la subpartida.

Por el contrario, en el periodo 2018 la formulación fue mayor que la ejecución. Según las Normas de Contención del Gasto y las directrices de formulación esta subpartida mantiene un análisis profundo de tal forma que se presupueste lo estrictamente necesario. El cumplimiento de la directriz de formulación N° 41 indica que el monto a formular debe ser igual o inferior a lo aprobado en el periodo 2020.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria periodos 2017 – 2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante los periodos 2017 y 2019 el porcentaje de ejecución estuvo por encima del 100%, siendo este de un 120,52% y un 120,18%; no obstante, para el periodo 2018 se presentó una ejecución inferior al 100%, con un porcentaje del 80,88%. Lo que representó a nivel global una ejecución del 105,38%.

Es importante señalar que en el 2019 se reforzó la subpartida para atender necesidades institucionales. Por ejemplo, en el programa 926 se incluyeron ¢8.500.000, para capacitar al personal del Departamento de Seguridad en el manejo de las máquinas de rayos x. Esto por cuanto es un requisito del Ministerio de Salud para los operadores de estos equipos.

### Variación por programa 2020-2021

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que presenta la mayor formulación de recursos en la subpartida de Actividades de Capacitación, con un monto menor al periodo 2020, seguido del Programa 927 Servicio Jurisdiccional y el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 3. Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | | **Variación %** | |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 370.630.584 | 379.468.230 | 344.474.554 | | - 34.993.676 | | -9% |
| Servicio Jurisdiccional | 194.039.276 | 89.435.307 | 41.095.328 | | - 48.339.979 | | -54% |
| Organismo de Investigación Judicial | 16.181.672 | 21.972.836 | 20.685.896 | | - 1.286.940 | | -6% |
| Ministerio Público | 28.647.948 | 21.893.346 | 15.976.536 | | - 5.916.810 | | -27% |
| Defensa Pública | 8.265.771 | 9.753.777 | 6.600.000 | | - 3.153.777 | | -32% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 6.868.304 | 5.031.552 | 4.500.000 | | - 531.552 | | -11% |
| **Total general** | **624.633.556** | **527.555.048** | **433.332.314** | | **- 94.222.734** | | **-18%** |

Fuente: SIGA PJ

En síntesis, los requerimientos anteriores se solicitan para atender las siguientes necesidades:

* **Programa 926**

Los recursos solicitados en esta subpartida asciende a ¢344.474.554, de los cuales los montos más significativos, se detallan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **Monto** | **Descripción** |
| Escuela Judicial | ¢25.000.000 | Convenio FUNDEVI - UCR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección de Gestión Humana | ¢21.518.000 | Capacitaciones de la DGH |
| ¢45.339.037 | Capacitaciones DTI (Aprobado por el Consejo Superior en sesión 38-2018, artículo X. |
| ¢191.303.951 | Necesidades de capacitación externas al la DGH. |
| ¢18.778.523 | Ensamblaje de Cursos Virtuales |

**Programa 927**

En este Programa se incluyen recursos por la suma de ¢41.095.308, de los cuales el rubro más significativo lo solicita la Presidencia de la Corte (¢18.200.000) para atender ayudas económicas autorizadas por el Consejo Superior y Corte Suprema de Justicia y para atender las necesidades de capacitación del ámbito jurisdiccional.

Además, las Comisiones Institucionales solicitan recursos por la suma de ¢10.028.631, para atender actividades de capacitación en la materia que les compete, según detalle:



* **Programa 928**

Los recursos formulados en este programa (¢20.685.896) se requieren para capacitar el personal del Laboratorio de Ciencias Forenses, Departamento de Medicina Legal, Administración del OIJ y Dirección General, tal y como se muestra en el cuadro adjunto:



* **Programa 929**

Los recursos formulados por el Ministerio Público (¢15.976.536) se tienen destinados para realizar contrataciones de cursos enfocados a la gestión pública, incorporando temas como indicadores de desempeño, planeamientos estratégicos de la gestión pública, contratación de voceros fiscales, entre otros.

Además se requiere atender temas referentes como manejo de situaciones de crisis, comunicación asertiva, manejo efectivo del tiempo, entre otros. .De igual manera se requiere adquirir los insumos (galletas, Café, azúcar) que se necesitan para atender el Plan de Capacitación 2021, donde se definen las diferentes necesidades del programa y cuyo alcance es bastante amplio.

* **Programa 930**

En esta subpartida se incluyen recursos por la suma de ¢6.600.000, para desarrollar el Plan de capacitación de la Defensa Pública donde se atienden las necesidades de capacitación del personal administrativo, Técnicos Judiciales, Unidad de Investigación, Defensores, Unidad de Defensa de la Violencia contra las mujeres y profesionales entre otros.

Es importante indicar que, el Plan de capacitación es producto de un diagnóstico que se realiza aproximadamente en el mes de agosto para determinar las necesidades de capacitación de las diferentes oficinas que conforman la Defensa Pública. Una vez elaborado se remite al Consejo Directivo de la Escuela Judicial para su aprobación y finalmente entre noviembre y diciembre se remite al Consejo Superior para su conocimiento y aprobación final, por lo que en este momento no se tienen definidas las necesidades y por ende las capacitaciones a realizar.

* **Programa 950**

Las actividades de capacitación en atención al cumplimiento de la directriz de formulación N° 74, son requeridas por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima de Delito, debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan.

Se argumentó por parte del Programa que en muchas ocasiones la carga laboral se convierte en una carga emocional, mental y física, en vista de ello resulta necesario acudir actividades que contribuyan a fortalecer la salud y minimicen la posibilidad que el personal sufra el síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado, el cual podría llegar a incidir negativamente en el desempeño del personal, generándose una posible baja en la calidad del servicio público que se presta.

Precisamente con el fin de evitar la afectación del servicio que se presta, anualmente la OAPVD incluye recursos para atender primordialmente el programa actividades de auto cuidado, las cuales cumplen un rol clave en la cultura de la prevención y la seguridad en el trabajo, siendo que resultan la base para que cada persona adopte conductas seguras en los ambientes laborales, asimismo contribuye con su propio cuidado y el de sus compañeras y compañeros.

A continuación se incluye un detalle de las capacitaciones que se tiene programadas para el 2021, con los recursos solicitados:



Es importante indicar que además de las capacitaciones antes mencionadas se aprovechan los recursos tecnológicos (Oni Line) para capacitar al personal en temas como Ciberdelincuencia, Victimología, Técnicas Psicoterapeutas para trabajar el Stress Postraumático, entre otros, que son de gran ayuda al personal en el desempeño de sus funciones.

**Figura N° 3. Distribución de recursos por programa, para la subpartida 10701 Actividades de Capacitación con la estimación de los recursos adicionales.**

Según se muestra en la figura N° 3, el programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢344.474.554, lo que representa un 79% del total de recursos de la subpartida; seguido del Programa 927 Servicio Jurisdiccional con un total de ¢41.095.328 para un 10% y el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial con ¢ 20.685.896 y un porcentaje del 5%. En un menor porcentaje los programas 929, 930 y 950 representan un 7% del total de recursos formulados.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

Centros de responsabilidad con los montos más representativos dentro de la subpartida.

**Tabla 6. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2021** | **Representación** |
| Dirección Gestión Humana | 276.939.511 | 63,9% |
| Escuela Judicial | 31.782.356 | 7,3% |
| Despacho de la Presidencia | 22.437.700 | 5,2% |
| Organismo de Investigación Judicial | 20.685.896 | 4,8% |
| Comisiones Institucionales | 18.183.605 | 4,2% |
| Presidencia de la Corte | 18.200.000 | 4,2% |
| Ministerio Público | 15.976.536 | 3,7% |
| Salas | 11.140.697 | 2,6% |
| Defensa Pública | 6.600.000 | 1,5% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 4.500.000 | 1,0% |
| Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | 2.799.111 | 0,6% |
| Unidad de Adiestramiento | 1.050.481 | 0,2% |
| Oficina de Cumplimiento | 1.000.000 | 0,2% |
| Oficina de Control Interno | 770.400 | 0,2% |
| Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | 720.021 | 0,2% |
| Programa Justicia Restaurativa | 546.000 | 0,1% |
| **Total general** | **433.332.314** | **100%** |

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre la Dirección de Gestión Humana con un monto de ¢276.939.511, lo que representa un 64% de la totalidad de recursos, seguido de la Escuela Judicial con ¢31.782.356 y la del Despacho de la Presidencia con ¢22.437.700.

La mayor representación de recursos, como se mencionó anteriormente, pertenece a la Dirección de Gestión Humana, dicho monto se viene formulando periodos anteriores y corresponde, al monto por capacitación de los diferentes centros de responsabilidad que conforman el programa 926; es importante indicar, que el mismo incluye las capacitaciones para la Dirección de Tecnología de la Información.

* **Requerimientos solicitados a través de la DGH**

El panorama en la subpartida Actividades de Capacitación para el periodo 2021, es el que se muestra en la tabla 3; sin embargo, se debe mencionar que está pendiente de aprobación por parte del Consejo Superior, los recursos afines a las ayudas económicas que se brindan al personal que participa en actividades de capacitación y que se agregan al presupuesto a partir del análisis que realiza la Dirección de Gestión Humana. Este rubro se debe incluir dentro de esta subpartida para cada uno de los programas presupuestarios y que corresponden a un total de ¢ 54.236.565, distribuidos de la siguiente manera:

**Tabla 4. Distribución de recursos por programa, pendientes de aprobación. periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programa presupuestario** | **Monto aproximado a cancelar 2021** |  |
|  |
| Programa 926 Dirección y Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional | 31.567.965,00 |  |
| Programa 927 Servicio Jurisdiccional | 13.266.840,00 |  |
| Programa 928 Organismo de Investigación Judicial | 1.460.784,00 |  |
| Programa 929 Ministerio Público | 5.249.800,00 |  |
| Programa 930 Defensa Pública | 1.217.320,00 |  |
| Programa 950 Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito | 1.473.856,00 |  |
| **TOTALES** | **54.236.565,00** |  |

**En caso de aprobarse los recursos antes indicados, el presupuesto de la subpartida 10701 Actividades de capacitación sería de ¢487.568.879, mostrando una variación porcentual del -8% y quedaría de la siguiente manera:**

**Tabla 5. Porcentaje de variación con la nueva estimación por programa Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **Variación %** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 379.468.230 | 376.042.519 | - 3.425.711 | -1% |
| Servicio Jurisdiccional | 89.435.307 | 54.362.168 | - 35.073.139 | -39% |
| Organismo de Investigación Judicial | 21.972.836 | 22.146.680 | 173.844 | 1% |
| Ministerio Público | 21.893.346 | 21.226.336 | - 667.010 | -3% |
| Defensa Pública | 9.753.777 | 7.817.320 | - 1.936.457 | -20% |
| Servicio de Atenc - Protec de Víctimas y Testigos | 5.031.552 | 5.973.856 | 942.304 | 19% |
| **Total general** | **527.555.048** | **487.568.879** | **- 39.986.169** | **-8%** |

Fuente: SIGA PJ

**Finalmente, doña Nacira Valverde explica que los montos indicados con anterioridad se vieron afectados por la disminución propuesta por la Dirección de Gestión Humana, siendo que finalmente por concepto de ayudas económicas el Consejo Superior aprobó los siguientes montos, conforme la segunda propuesta presentada por la Dirección de Gestión Humana en la reunión de trabajo del viernes 3 de abril**:



1. **Requerimientos Adicionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Responsabilidad | Subpartida | Monto Adicional | Justificación | Observaciones |
| Centro Electrónico de Información Jurisprudencial | 10701 | ¢1.000.000 | Recursos solicitados para cubrir las necesidades de capacitación en los diversos proyectos (Leguaje claro, Nexux Móvil, Despersonalización de las Sentencias, entre otros Centros durante el 2021 en los diferentes Circuitos a nivel nacional. | Este Centro de Responsabilidad no formuló recursos en esta subpartida durante los periodos 2019 y 2020. |

# **Subpartida 10702 Atividades Protocolarias y Sociales**

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Tabla 1. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etiquetas de fila** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Monto | 23.381.835 | 35.008.600 | 17.504.408 | 19.483.675 | 19.322.511 |
| Variación |  | 49,7% | -50,0% | 11,3% | -0,8% |

Fuente: SIGA PJ

De la tabla anterior, se puede observar que en el periodo 2018 se presentó un incremento en la subpartida, con una variación de un 49,7%, sin embargo, para el periodo 2019 el comportamiento de la misma disminuye en un 50%; para el 2020 de nuevo se presenta un leve incremento, en este caso del 11.3% y para el 2021 la formulación disminuye en el orden del menos 0.8%.

**Figura N° 1.**

**Comportamiento de la subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales.**

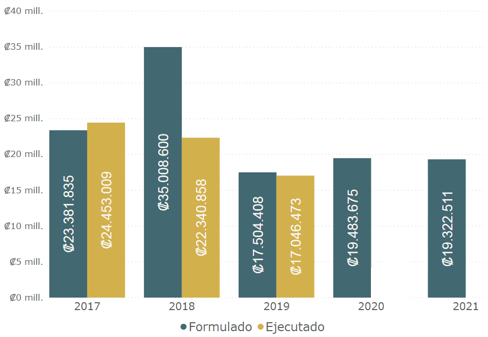
**Periodos 2017 – 2021.**

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en la figura anterior, el mayor crecimiento de la subpartida se presenta en el periodo 2018 y es producto que la Auditoría Judicial solicitó recursos para la celebración del 40 aniversario. Por otra parte, la Fiscalía General incrementó los recursos para cubrir la celebración del aniversario del Ministerio Público y la respectiva atención de las delegaciones internacionales.

A partir del periodo 2019 y hasta el periodo 2021 el comportamiento de la subpartida se mantiene ya que la misma es regulada por la directriz de formulación N° 41, la cual indica, que se debe formular un monto igual o inferior al aprobado en el periodo 2020.

**Figura N° 2. Formulación y Ejecución Periodos 2017 – 2021**



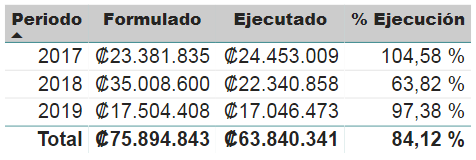
Fuente: SIGA PJ

En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida de Actividades Protocolarias y Sociales, tanto en la formulación, como en la ejecución. De los años que se presentan en el gráfico, el periodo 2018 es el que muestra el punto más alto en la formulación; sin embargo, la ejecución estuvo muy por debajo. A partir del periodo 2019 la subpartida mantiene una formulación equiparada con los periodos 2020 y 2021. Además, su ejecución fue muy cercana al monto formulado.

Según las Normas de Contención del Gasto y las directrices de formulación esta subpartida mantiene un análisis profundo de tal forma que se presupueste lo estrictamente necesario. El cumplimiento de la directriz de formulación N° 41 indica que el monto a formular debe ser igual o inferior a lo aprobado en el periodo 2020.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria periodos 2017 – 2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante el periodo 2017 el porcentaje de ejecución estuvo por encima del 100%, siendo este de un 104.58%; no obstante, para los periodos 2018 y 2019 se presentó una ejecución inferior, con porcentajes del 63,82% y 97,38% respectivamente. Lo que representó a nivel global una ejecución de 84,12% para los tres periodos presupuestarios.

### Variación por programa 2020-2021

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que presenta la mayor formulación de recursos en la subpartida de Actividades Protocolarias y Sociales, con un monto muy similar al del periodo 2020, por lo que no existe un porcentaje de variación entre ambos periodos; seguido del Programa 929 Ministerio Público y 927 Servicio Jurisdiccional.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 3. Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 13.422.487,52 | 14.350.741 | 14.303.190 | -47.551 | -0,3% |
| Servicio Jurisdiccional | 370.000,00 | 1.002.191 | 926.075 | -76.116 | -8,2% |
| Organismo de Investigación Judicial | | 462.045 | 462.045 | 0 | 0,0% |
| Ministerio Público | 2.835.685,78 | 3.165.201 | 3.165.698 | 497 | 0,0% |
| Defensa Pública | 264.700,00 | 295.503 | 295.503 | 0 | 0,0% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 153.600,00 | 207.994 | 170.000 | -37.994 | -22,3% |
| **Total General** | **17.046.473,30** | **19.483.675** | **19.322.511** | **- 161.164** | **-1%** |

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en la figura N° 3, el programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢14.303.190, lo que representa un 74% del total de los recursos de la subpartida; lo anterior, por cuanto este programa incluye al Despacho de la Presidencia y la Presidencia de la Corte, oficinas que por su particularidad necesitan recursos para atender las siguientes actividades:

* Apertura del Año Judicial
* Almuerzos para supremos poderes que visitan el Poder Judicial
* Tributos a funcionarios
* Cortesías para embajadores y jueces que visitan la Corte Suprema de justicia (Souvenir)

Le sigue el Programa 929 Ministerio Público con un total de ¢3.165.698 que representa el 16% de los recursos formulados. En un menor porcentaje los programas 927 Servicio Jurisdiccional, 928 Organismo de Investigación Judicial, 930 Defensa Pública y 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos representan un 10% del total de recursos formulados.

**Figura N° 3. Distribución de recursos por programa, para la subpartida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales**

### Distribución por Centro de Responsabilidad

Centros de responsabilidad con los montos más representativos dentro de la subpartida.

**Tabla 4. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2020** | **2021** | **Representación** |
| Despacho de la Presidencia | 5.695.797 | 5.693.732 | 29% |
| Presidencia de la Corte | 4.655.004 | 4.654.054 | 24% |
| Ministerio Público | 3.165.201 | 3.165.698 | 16% |
| Comisiones Institucionales | 1.779.442 | 1.702.714 | 9% |
| Escuela Judicial | 1.161.452 | 1.161.452 | 6% |
| Dirección Gestión Humana | 599.681 | 599.127 | 3% |
| Secretaría Técnica de Ética y Valores | 498.170 | 498.170 | 3% |
| Organismo de Investigación Judicial | 462.045 | 462.045 | 2% |
| Centro de Gestión de la Calidad | 402.102 | 402.102 | 2% |
| Defensa Pública | 295.503 | 295.503 | 2% |
| Salas | 226.228 | 182.858 | 1% |
| Serv Atenc y Protec Víctimas y Testigos | 207.994 | 170.000 | 1% |
| Secret Téc de Género y Acc a la Justicia | 164.910 | 164.910 | 1% |
| Conamaj | 103.701 | 103.701 | 1% |
| Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | 66.445 | 66.445 | 0% |
| **Total general** | **19.483.675** | **19.322.511** | **100%** |

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre el Despacho de la Presidencia con un monto de ¢5.693.732, la Presidencia de la Corte con ¢4.654.054 y el Ministerio Público con ¢3.165.698, lo que representa un 69% de la totalidad de recursos de la subpartida.

Lo anterior, por cuanto el Despacho de la Presidencia, la Presidencia de la Corte y el Ministerio Público, debido a la particularidad de estas oficinas se vuelve necesario mantener recursos en esta subpartida para atender cualquier pago de servicios, útiles, materiales y suministros diversos, que se contraten de manera integral o adquieran en forma separada, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales a organismos institucionales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones, participación de nuevas experiencias y Buenas Prácticas, entre otros.

Al respecto, se anexa la nota de cita, que literalmente dice:

“En atención a lo acordado por el Consejo Superior en la pasada sesión de trabajo del 27 de marzo de 2020, en la cual se conoció lo relativo a las necesidades formuladas dentro del presupuesto de capacitación para el 2021. Dentro de los puntos destacados, se indicó que para el 2021 uno de los movimientos realizados corresponde a los montos formulados para cubrir las necesidades de capacitación en materia de administración de proyectos, en relación con este tema literalmente se indicó lo siguiente:

*“1. En el Programa Administrativo se reduce de ¢16.227.164 a ¢10.000.000 el presupuesto para capacitación especializada en inversiones y riesgos y se incrementa de 25 a 65 la cantidad de participantes para la actividad denominada. “Técnico en Administración de Proyectos, Capacitación en Habilidades Directivas y Uso de Microsoft Project” línea que pasa de ¢10.000.000 a ¢16.516.087.”*

Durante esa sesión de trabajo, el Consejo Superior tomo el acuerdo que menciona:

***“1)*** *La DGH debe precisar los recursos para los especialistas en contenido de los cursos de formación de la Escuela Judicial****. 2)******La DGH debe desarrollar escenarios de rebajo para ser conocidos por el Consejo Superior en la sesión del próximo 3 de abril,*** *considerando entre ellos la alternativa de capacitación definida a partir de la muerte del Dr.Luis Paulino Mora, la cual no se ha ejecutado; lo anterior con el propósito de ajustar la solicitud de recursos en al menos un 30% de lo solicitado inicialmente.* ***3)*** *Aprobar la inclusión en la subpartida de Alimentos y Bebidas de los requerimientos solicitados por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, respecto de dotar a las**Unidades de Capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ, Escuela Judicial, Dirección de Justicia Restaurativa, y las Comisiones, entre otros, de recursos para las actividades de capacitación en las que participa la población indígena. 4) El Integrante Montero salva el voto, porque considera que el Poder Judicial no está aislado de la realidad nacional y que nuestros recursos provienen del presupuesto nacional que se nutre de los impuestos que pagamos todos los habitantes. Que ante la pandemia que sufre el país, y que además se sabe que esta situación será de meses, luego vendrá un proceso de recuperación económica muy fuerte para el país y la economía mundial, que al ser una economía pequeña y abierta, estamos muy expuestos a los efectos de los mercados internacionales.  De ahí que es de esperar una afectación importante en la actividad económica y una reducción de los ingresos fiscales, que derivarán en un mayor déficit fiscal, del cual el Poder Judicial no es ajeno. De ahí que debemos ser sumamente responsables con la presupuestación del año 2021, donde primero podamos garantizar a la ciudadanía la administración de justicia y dejar para otras épocas temas adicionales como las becas y capacitaciones en el exterior, que esos casi mil millones de colones se deberían utilizar para labores esenciales del Poder Judicial y que tengan impacto directo y generalizado en la administración de Justicia. Que las personas profesionales que laboran en este Poder de la Republica, se contratan luego de estrictos procesos de contratación y verificación de atestados académicos que los acreditan para las labores en que fueron contratados, de ahí que la suspensión por un año del plan de becas no afectará la calidad del servicio.”* (Subrayado en negrita no corresponde al original).

En atención al punto 2 del acuerdo citado supra, en la reunión del pasado 3 de abril, según consta en la minuta de dicha sesión, se tuvieron las siguientes apreciaciones por parte de las personas asistentes a dicha sesión:

* *“la Licda. Waiman Hin expuso sobre la necesidad de recursos para ayudas económicas para participar de programas de capacitación en los temas de proyectos y fondo de jubilaciones (inversiones y riesgos). Estos rubros totalizan ¢16.516.087 en el Técnico en Administración de Proyectos para 65 personas y ¢10.000.000 para 15 personas en el tema de inversiones y riesgos.*
* *Don Carlos Montero considera que lo relativo a la Junta de Jubilaciones debería omitirse.*
* *Don Juan Carlos Sebiani consulta sobre el tema de la capacitación en materia de proyectos, si será necesario seguir capacitando en la temática.*
* *Al respecto doña Nacira aclara que se ha estado trabajando a nivel institucional, que hay mucha rotación del personal, pero dadas las condiciones se podría limitar la participación.*
* *Doña Sara Castillo plantea la importancia de aparejar la capacitación con el licenciamiento. Doña Nacira Valverde explica que se ha tratado de mejorar en este tema y actualmente las personas que tienen licencia están capacitadas y en las oficinas que trabajan bajo proyectos sí se tienen las licencias necesarias y la capacitación correspondiente.*
* *Doña Waiman propone eliminar los recursos para capacitación del Fondo (riegos e inversiones) y dejar sólo ¢10 millones en proyectos.  “*

Durante esa sesión de trabajo, se tomó el acuerdo que literalmente indica lo siguiente:

*“1) Aprobar la propuesta de la Dirección de Gestión Humana: En la subpartida 00105 Permisos para Sustitución, se propone mantener ¢111.521.449, rebajando ¢144.977.918; manteniendo además lo relativo a los especialistas en contenido. En la subpartida 10701 Capacitación, se propone mantener ¢6.509.300 y rebajar ¢47.727.265. En la subpartida 60201 Becas, se propone mantener ¢27.847.159 y rebajar ¢56.496.821. El rebajo total sería del 63.8%, equivalente a ¢249.202.004, manteniendo dentro del presupuesto lo relativo a los especialistas en contenido por ¢582.865.098.  2) En el caso de los recursos para los especialistas en contenido, deberán las Unidades de Capacitación presentar al Consejo Superior un Plan de Trabajo que permita asegurar la ejecución de los recursos.* ***3) Aprobar ¢10 millones para capacitación en proyectos y eliminar los recursos para capacitación del Fondo de Jubilaciones en temas de riesgos e inversiones.”*** (Subrayado en negrita no corresponde al original).

En vista de lo anterior, la Dirección de Planificación teniendo presente las limitaciones presupuestarias que atraviesa el país, así como la incertidumbre que se vive ante el escenario de la pandemia internacional del COVID-19, lo cual puede agravar más las limitaciones presupuestarias para el 2021, plantea la siguiente propuesta, a fin de someter a valoración por parte del Consejo Superior el destinar los recursos aprobados , específicamente los ¢10 millones para capacitación en proyectos para la atención de otras necesidades, para ellos se plantean las siguientes consideraciones relevantes que respaldan dicha propuesta:

# **Capacitaciones internas impartidas por la Dirección de Planificación:**

Según consta en los informes remitidos al Consejo Superior número 1881-PLA-PE-2019 y 474-PLA-PE-2020, los cuales fueron conocidos y aprobados por dicho Consejo en las sesiones 108-2019 artículo LV y 30-2020 artículo XLIII, respectivamente, a nivel interno se han promovido una serie de capacitaciones, las cuales han abordado diferentes temas relacionados con la gestión de proyectos. A continuación, se resumen los principales antecedentes que se encuentran plasmados en los citados informes.

## Capacitaciones impartidas en el 2019:

Durante el 2019 el personal de la Unidad del Portafolio de Proyecto, a fin de implementar el seguimiento de los proyectos estratégicos por medio del Project Online impartió una serie de capacitaciones relacionadas con el uso de la Plataforma Online de Microsoft Project.

Se debe tener en cuenta que esta capacitación difiere a la impartida por el TEC, dado que las aplicaciones tecnológicas que se emplean en cada capacitación son diferentes y su uso y aplicación se realiza en diferentes etapas del proceso de administración de proyectos, a continuación, se resumen las características de cada una de estas capacitaciones:

**Tabla 1. Diferencias entre las capacitaciones impartidas por la Dirección de Planificación versus la capacitación del TEC en materia de MS Project.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Software** | **Ente que impartió la capacitación** | **Duración de la capacitación** | **Temática de la capacitación** |
| Microsoft Project Professional 2016 | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 20 horas | Contempla el uso de la herramienta para la elaboración del cronograma de un proyecto, incluyen temas relacionados al uso de calendarios, asignación de recursos, definición de líneas base. |
| Project Online / Plataforma Sharepoint Office 365 | Dirección de Planificación | 4 horas | Se aborda el procedimiento que deben seguir los líderes de los proyectos estratégicos para incorporar los cronogramas en la plataforma online, así como los pasos para alimentar el expediente del proyecto. |

**Fuente:** Elaboración propia según lo indicado en el informe 1881-PLA-PE-2019.

En la tabla 2 se resumen las capacitaciones impartidas por el personal de la Dirección de Planificación, las cuales fueron dirigidas a las personas líderes de proyectos estratégicos.

**Tabla 2. Detalle de las capacitaciones impartidas por el personal de la Dirección de Planificación en el 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Capacitación** | **Fechas** | **Cantidad de personas capacitadas** |
| Project On Line | Julio – Agosto 2019 | 35 personas |
| Acompañamiento en el proceso de elaboración de los Estudios de Factibilidad y Planes de Gestión de los proyectos | Continuo, desde marzo de 2019 hasta diciembre de ese mismo año | Personas líderes de proyectos estratégicos que han debido completar los documentos de la metodología de administración de proyectos |
| Sesión de nivelación en administración de proyectos | 06 de agosto 2019 | 32 personas |

**Fuente:** Elaboración propia según lo indicado en el informe 1881-PLA-PE-2019.

## Capacitaciones impartidas en el 2020

Por otro lado, como parte del plan de trabajo relacionado con la implementación del Modelo de Gestión del Portafolio de Proyectos Estratégicos, para el primer trimestre del 2020 se tenía programado cumplir con la meta de incorporar a la plataforma del Project Online el 100% de los cronogramas de los proyectos estratégicos, para ello fue necesario abordar a todas aquellas oficinas que a esa fecha desconocían tanto del uso del Project Online, como del Project Professional, asimismo, a fin de dar un uso eficiente a las licencias que dispone la institución, como medida alterna se ha fomentado el uso del software libre denominado Project Libre, el cual es usado por oficinas o líderes que sólo tienen a cargo 1 proyecto estratégico.

Por tal motivo, fue necesario también impartir capacitaciones sobre el uso de esta herramienta. En la tabla 3 se resumen el total de participantes que asistieron a estas capacitaciones.

**Tabla 3. Detalle de las capacitaciones impartidas por el personal de la Dirección de Planificación en el 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Capacitación** | **Fechas** | **Cantidad de personas capacitadas** |
| Project Online | Enero / Febrero 2020 | 25 personas |
| Uso del Project Libre | Enero / Febrero 2020 | 33 personas |

**Fuente:** Elaboración propia según lo indicado en el informe 474-PLA-PE-2020.

Asimismo, por parte del personal de la Unidad del Portafolio de Proyectos Estratégicos, se han elaborado una serie de manuales, los cuales buscan ser una guía para las personas usuarias de los citados sistemas de información. Estos documentos pueden ser consultados en la página de la Dirección de Planificación por medio del siguiente enlace:

<http://intranet/planificacion/index.php/component/phocadownload/category/2816-manuales-de-la-administracion-de-proyectos>

Todo lo citado anteriormente corresponde a los esfuerzos realizados por la Dirección de Planificación para complementar los conocimientos y capacitaciones externas recibidas por el personal judicial en materia de proyectos, dichos esfuerzos han sido fundamentalmente necesarios para poder operacionalizar la administración de proyectos a lo interno de la institución.

# **Propuesta para el abordaje de las necesidades de capacitación**

En vista de lo anteriormente indicado, se debe tener en consideración que las capacitaciones impartidas a nivel interno no reemplazan el cimiento teórico que se ha impartido por medio de las capacitaciones brindadas por el TEC, las cuales tienen una duración mayor y un contenido teórico bastante robusto, según se detalla a continuación:

**Tabla 4. Detalle de las capacitaciones impartidas por el TEC desde el año 2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la capacitación** | **Duración** | **Contenido** |
| Especialista en administración de proyectos | 224 horas | Módulo 1: Competencias Contextuales para la dirección de proyectos.  Módulo 2: Competencias Técnicas para la administración de proyectos I. (Áreas de conocimiento según el PmBOK)  Módulo 3: Competencias Técnicas para la administración de proyectos II. (Áreas de conocimiento según el PmBOK)  Módulo 4: Competencias Comportamiento para la dirección de proyectos. |
| Project Básico | 20 horas | Contempla el uso de la herramienta para la elaboración del cronograma de un proyecto, incluyen temas relacionados al uso de calendarios, asignación de recursos, definición de líneas base. |

No obstante, la Dirección de Planificación siendo consciente de la situación actual del país, considera oportuno postergar la continuidad de estas capacitaciones a sabiendas de las siguientes razones:

1. **Disminución en la brecha de personas pendientes de capacitación:** Gracias a los esfuerzos realizados en años anteriores, la brecha que debe cerrarse entre la cantidad de personas líderes de proyectos que se encuentran pendientes de recibir esta capacitación es menor en comparación con algunos años atrás.
2. **Creación de una cultura orientada a la administración de proyectos**: A raíz de la labor realizada en los últimos años, se ha creado una sensibilización en la importancia de la aplicación de la administración de proyectos, por lo cual el tema ya no es tan desconocido dentro de la población judicial, esto ha permitido que por iniciativa de las mismas personas líderes de proyectos se siga adquiriendo conocimiento teórico-práctico sin necesidad de esperar a recibir una capacitación formal.
3. **Cobertura de casi el 100% de Centros de Responsabilidad:** con las promociones anteriores se ha logrado cubrir caso el 100% de los centros de responsabilidad, de forma tal que en **casi todos los centros líderes de proyectos estratégicos poseen al menos 1 persona con capacitación en el tema** (Se exceptúan el Centro de Conciliación y el Centro de Información Jurisprudencial los cuales no poseen a ninguna persona con formación teórica en el tema).

## Consideraciones para la ejecución del presupuesto 2020:

Es importante considerar que la Dirección de Planificación en coordinación con la Dirección de Gestión Humana han estado gestionando lo correspondiente para cubrir algunas necesidades de capacitación plasmadas en el informe 1881-PLA-PE-2019 **con el presupuesto del 2020.** A continuación, se resumen indican los elementos principales relacionados con las necesidades de capacitación para el 2020:

1. **Coordinaciones previas con la DGH:**

Según consta en el informe 1881-PLA-PE-2019, para el mes de noviembre de 2019 se tenían las siguientes necesidades de capacitación en materia de administración de proyectos:

**Tabla 5. Necesidad de capacitación para las personas líderes de Proyectos estratégicos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalle del curso de capacitación** | **Cantidad de personas pendientes de capacitar** |
| Especialista en Administración de Proyectos | 31 |
| Microsoft Project Básico | 17 |
| **Total** | **48** |

**Fuente:** informe 1881-PLA-PE-2019.

El día 25 de febrero del año en curso, se sostuvo una reunión entre el personal de la Dirección de Planificación y la Dirección de Gestión Humana, donde se coordinó con la Licda. Cheryl Bolaños, Jefa del Subproceso de Gestión de la Capacitación cotejar los listados de personas que eventualmente estarían recibiendo los citados cursos. Dentro de los principales acuerdos tomados en dicha sesión se encuentran:

* La Dirección de Planificación debía revisar nuevamente la lista de personas que debían recibir las capacitaciones, considerando las rotaciones reportadas de noviembre de 2019 a la fecha.
* Dicho listado debía ser cotejado son las solicitudes de capacitación que había recibido la Dirección de Gestión Humana por parte de diversas oficinas, a fin de construir una lista definitiva de participantes.

No obstante, posterior a esa fecha el país ha tenido que afrontar la incertidumbre del escenario de pandemia COVID-19, para lo cual se considera oportuno evaluar nuevas posibilidades para cubrir estas necesidades de capacitación.

1. **Situación COVID-19**

Como se indicó anteriormente, debido a la situación de pandemia que atraviesa el país, se considera oportuno evaluar las posibilidades que ofrece el mercado a fin de poder continuar con los procesos de contratación de la capacitación empleando los recursos del presupuesto 2020, pero que los mismos sean impartidos en modalidad virtual. Asimismo, por parte de la Dirección de Planificación se seguirían cubriendo las necesidades de capacitación prioritarias relacionadas con el Uso del Project Online y la aplicación de la metodología de administración de proyectos con base en la metodología aprobada, principalmente en aquellos casos como los siguientes:

* Rotación de personal o asignación de una nueva persona como líder de algún proyecto, aplicaría en los casos en que la persona no cuente con formación en el uso de los sistemas de información utilizados para la gestión de los proyectos estratégicos.
* Surgimiento de nuevos proyectos en oficinas o centros de responsabilidad que no cuenten con personal capacitado en el tema.

En esa misma línea, la Dirección de Planificación deberá evaluar ante el escenario actual impartir dichas sesiones en modalidad virtual, empleando las diferentes herramientas tecnológicas que posee la institución.

## Consideraciones para la formulación del presupuesto 2021:

En lo que corresponde al presupuesto aprobado en la sesión del 3 de abril del año en curso, correspondiente a ¢10 millones de colones, se recomienda que tomando en consideración para cubrir otras necesidades de mayor urgencia a nivel institucional, no obstante, se considera oportuno que para futuros procesos formulación presupuestaria, específicamente el 2022, se someta a valoración nuevamente esta necesidad, con el objetivo de evaluar si para dicho período resultará volver a incorporar recursos para este tipo de actividades formativas.

# **Propuesta de formulación de un programa formal de capacitación interna en Administración de proyectos:**

Adicionalmente a las propuestas planteadas en el apartado 2, se plantea como una opción adicional valorar por parte de la Dirección de Planificación la posibilidad de diseñar un Programa para Formación de Líderes de Proyectos Estratégicos, de forma tal que el mismo cuente con un diseño curricular que permita ofrecer un perfil de entrada así como un perfil de salida, esto le permitiría a la institución formar sus propios líderes de proyecto, garantizando que los mismos cuenten con las competencias técnicas para asumir el rol de liderazgo en la gestión de proyectos.

Para la formulación de esta propuesta se debe considerar tanto los requerimientos técnicos como los recursos humanos que se desempeñarían como facilitadores, considerando todas las labores extracurriculares que demanda impartir un curso, con la formalidad que amerita un proceso de formación educativo, así como lo realiza la Escuela Judicial o las diferentes unidades de capacitación que posee actualmente la Institución.

El desarrollo de una propuesta de este tipo beneficiará a la institución, garantizando la formación de las personas líderes acorde con los lineamientos, procesos y estándares institucionales, asimismo, permitirá eliminar la dependencia de contrataciones externas, lo cual generará un ahorro en la subpartida 1.07.01 Actividades de Capacitación.

# **Conclusiones**

Del análisis realizado se puede concluir que:

* 1. La Dirección de Planificación teniendo presente las limitaciones presupuestarias que atraviesa el país, así como la incertidumbre que se vive ante el escenario de la pandemia internacional del COVID-19, plantea una propuesta para prescindir del presupuesto del 2021 los recursos aprobados para capacitación en proyectos.
  2. Durante el 2019 el personal de la Unidad del Portafolio de Proyecto, realizó una serie de capacitaciones relacionadas con el uso de la Plataforma Online de Microsoft Project.
  3. Las capacitaciones que imparte la Dirección de Planificación difieren a las capacitaciones impartidas por el TEC tanto en duración como en contenido, las capacitaciones del TEC tienen un contenido teórico más robusto, por ende una duración mayor, en el caso de las capacitaciones de la Dirección de Planificación se encuentran enfocadas en brindar y explicar de manera detallada a las personas participantes los lineamientos, procesos y estándares institucionales que se deben cumplir como parte de la gestión de cada proyecto estratégico.
  4. Debido a la situación de pandemia que atraviesa el país, se considera oportuno que la Dirección de Gestión Humana evalué las posibilidades que ofrece el mercado a fin de poder ejecutar el presupuesto 2020 destinado para cubrir las necesidades de capacitación en materia de proyecto, para ello es necesario considerar la opción de capacitaciones virtuales.
  5. la Dirección de Planificación deberá evaluar ante el escenario actual impartir dichas sesiones en modalidad virtual, empleando las diferentes herramientas tecnológicas que posee la institución.
  6. La Dirección de Planificación seguirá cubriendo las necesidades de capacitación prioritarias relacionadas con el Uso del Project Online y la aplicación de la metodología de administración de proyectos, para lo cual deberá considerar la opción de la modalidad virtual para dichas necesidades.

# **Recomendaciones:**

**Al Consejo Superior**

* 1. Destinar los recursos aprobados para cubrir las necesidades de capacitación en materia de proyectos, los cuales ascienden a de ¢10 millones para cubrir otras necesidades de mayor urgencia a nivel institucional.

**A la Dirección de Planificación**

* 1. Ante la situación actual de emergencia, se debe considerar la opción de seguir cubriendo las necesidades de capacitación prioritarias relacionadas con el Uso del Project Online y la aplicación de la metodología de administración en modalidad virtual, empleando las diferentes herramientas tecnológicas que posee la institución.
  2. Coordinar con la Dirección de Gestión Humana y la Escuela Judicial para valorar la posibilidad de diseñar un Programa para Formación de Líderes de Proyectos Estratégicos, de forma tal que el mismo cuente con un diseño curricular que considere ofrecer un perfil de entrada, así como un perfil de salida, con el objetivo de que la institución tenga la opción de formar sus propios líderes de proyecto, garantizando que cuentan con las competencias técnicas para asumir el rol de liderazgo en la gestión de proyectos.

**A la Dirección de Gestión Humana**

* 1. Evaluar las posibilidades que ofrece el mercado a fin de poder continuar con los procesos de contratación de capacitación en materia de proyectos por medio de la ejecución del presupuesto 2020, para ello será necesario definir como requisito que los cursos sean impartidos en modalidad virtual.

-0-

La Directora de Planificación Valverde Bermúdez, indica: “En lo que les indiqué anteriormente, nosotros estamos mandando la propuesta en esta subpartida de capacitación para rebajar la suma de 10 millones de capacitación en administración de proyectos, no sé si lo dejamos de último o lo vemos de una vez. La propuesta la Dirección de Planificación la redactó, se le hizo toda la fundamentación y le exponemos como lo hemos venido trabajando con la Dirección de Gestión Humana y hacemos un recuento de los recursos que estaban que eran los 16 millones y que la segunda propuesta fue dejar los 10 millones, explicamos todo lo que se ha venido haciendo con este proyecto de capacitación a nivel institucional desde el 2016, la propuesta es fortalecer en este periodo lo que está presupuestado para el 2020 que se nos ayude por parte de Dirección de Gestión Humana el fortalecer o terminar los cursos de forma virtual es decir tratar de coordinar con el TEC de que lo que se está realizando se termine de hacer de forma virtual, entonces que se realice esas coordinaciones. Segundo, destinar los 10 millones para otras necesidades institucionales y la propuesta es para 2021 es generar un curso interno a nivel del Poder Judicial de capacitación en especialista de proyectos pero en casa, generar todo un diseño curricular con la ayuda de Dirección de Gestión Humana, Escuela Judicial que tiene amplia experiencia en el diseño curricular y entonces, generar esa capacitación de esa forma para el 2021, nosotros lo hemos venido haciendo en este periodo, sin embargo, la idea es que lo que nos queda de 2020 terminar de hacer ese diseño curricular y plantearle a la Dirección de Gestión Humana y la Escuela Judicial que nos ayude y ya para el 2021 implementar esa capacitación en casa y con esa propuesta estaríamos cediendo esos 10 millones para el año 2021 y pensando que también quedaría todo un diseño curricular para que se siga dando la capacitación de forma interna, obviamente sabemos que no es una capacitación tan robusta pero sabemos que tal vez para el 2022 y si las condiciones cambian valoraremos si se puede retomar alguna capacitación más fuerte. Disculpe, si ustedes están de acuerdo de aprobar la disminución en la capacitación mencionada les solicito muy respetuosamente, dejar el artículo firme porque eso no era como parte del acuerdo, para que quede consignado que se tienen que agregar en el acuerdo que aprueban la propuesta de la Dirección de Planificación, en el entendido de que esos recursos, con la propuesta de la Dirección de Gestión Humana que se podría emplear el servicio en dos zonas esto sigue siendo el sobrante que queda es parte del gasto variable, entonces, eso podría irse a ese contenido de esa nueva necesidad de los servicios médicos.”

# **Se acordó**: **1)** Aprobar los recursos formulados en las subpartidas 10701 Actividades de Capacitación y 10702 Actividades Protocolarias y Sociales. **2)** Aprobar los requerimientos adicionales por ¢1.000.000 solicitados por el Centro Electrónico de Información Jurisdiccional en la subpartida 10701 Actividades de Capacitación. **3.)** Acoger las recomendaciones señaladas; en consecuencia: **a.)** Destinar los recursos aprobados para cubrir las necesidades de capacitación en materia de proyectos, los cuales ascienden a de ¢10 millones para cubrir otras necesidades de mayor urgencia a nivel institucional. **b)** La Dirección de Planificación, ante la situación actual de emergencia, deberá considerar la opción de seguir cubriendo las necesidades de capacitación prioritarias relacionadas con el Uso del Project Online y la aplicación de la metodología de administración en modalidad virtual, empleando las diferentes herramientas tecnológicas que posee la institución. **c.)** La Dirección de Planificación, coordinará con la Dirección de Gestión Humana y la Escuela Judicial para valorar la posibilidad de diseñar un Programa para Formación de Líderes de Proyectos Estratégicos, de forma tal que el mismo cuente con un diseño curricular que considere ofrecer un perfil de entrada, así como un perfil de salida, con el objetivo de que la institución tenga la opción de formar sus propios líderes de proyecto, garantizando que cuentan con las competencias técnicas para asumir el rol de liderazgo en la gestión de proyectos. **d.)** La Dirección de Gestión Humana, deberá evaluar las posibilidades que ofrece el mercado a fin de poder continuar con los procesos de contratación de capacitación en materia de proyectos por medio de la ejecución del presupuesto 2020, para ello será necesario definir como requisito que los cursos sean impartidos en modalidad virtual. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XI**

**DOCUMENTO N°** **4559-2020**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 03 de abril de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de la **Subpartida 10406 Servicios Generales.**

# **Subpartida 1.04.06 Servicios Generales:**

Como se puede observar en la tabla 1 el comportamiento global de esta subpartida presenta un incremento significativo para el 2021 del 8.4%, lo que equivale a un monto adicional de aproximadamente ¢573 millones.

**Tabla 1. Comparativo 2020-2021 de la subpartida**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| 1.04.06 Servicios Generales | 6,838,886,602 | 7,411,838,545 | 572,951,943 | 8.4% |

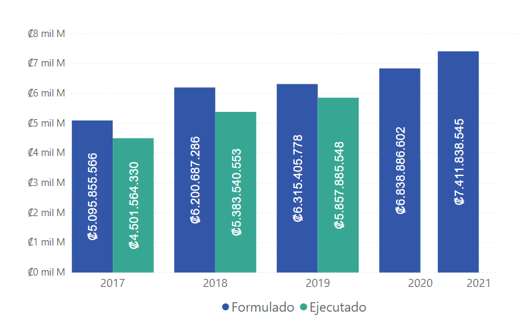
Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 10-3-2020

Como se explicará más adelante, el incremento se debe al aumento natural de los contratos y la incorporación del IVA al costo de estos servicios, con especial énfasis en los servicios de vigilancia, dada la contratación de una nueva empresa con un costo mayor, debido a que la anterior no renovó el contrato a finales del 2019.

## Comportamiento histórico de la subpartida

Durante los últimos cinco años el comportamiento global de la subpartida ha presentado crecimiento constante, no obstante, en lo que concierne a los montos ejecutados, estos han estado por debajo de lo formulado, esta situación se replicó en los años 2017, 2018 y 2019, según se puede apreciar en la Figura 1.

**Figura 1. Comportamiento histórico de la subpartida**

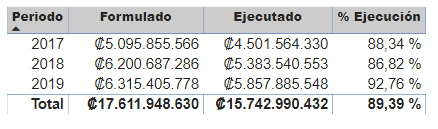


## Ejecución presupuestaria

Como se mencionó anteriormente, específicamente la ejecución de la subpartida en los últimos tres años ha sido de 88,34%, en el 2017, 86.82% para el 2018 y 92.76% para el 2019, siendo este último año el que presentó un porcentaje mayor en relación con los anteriores. El detalle se puede observar a continuación:

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria de la subpartida 1.04.06**

**Servicios generales, período 2017- 2019**



Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 10-3-2020

## Artículos más representativos de la subpartida

Para el análisis de esta subpartida es importante considerar los artículos que concentran la mayor cantidad de recursos, como se puede visualizar en la Tabla 2 estos artículos corresponden a los Servicios de Vigilancia con un 57% del total de la subpartida (¢4,261,830,567) y los Servicios de Limpieza con un monto formulado para el 2021 de ¢2,789,629,260, lo cual equivale a un 38%.

**Tabla 2. Artículos con la mayor concentración de recursos dentro de la subpartida 1.04.06 Servicios generales**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Artículo** | **Monto formulado 2021** | **Peso porcentual en la subpartida** |
| Servicios de vigilancia | 4,261,830,567 | 57% |
| Servicio limpieza | 2,789,629,260 | 38% |
| Servicio de jardinería | 73,905,002 | 1% |
| Servicios generales | 71,054,057 | 1% |
| Lavado de vehículos a presión | 42,653,323 | 1% |

Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 10-3-2020

En la Figura 2 se puede observar gráficamente el peso que tienen estos dos artículos dentro del monto total de esta subpartida, por lo anterior, el análisis de esta subpartida se concentrará en analizar el comportamiento de los citados artículos, servicios de vigilancia y servicios de limpieza, respectivamente.

**Figura 2. Distribución por artículos de la**

**Subpartida 1.04.06 Servicios Generales**

# **Análisis de la formulación del artículo “Servicios de Vigilancia”:**

## Comportamiento histórico

La formulación de este artículo ha venido en aumento durante los últimos cinco años, presentando de esta forma un incremento para el 2021 de ¢578,883,121, lo que tiene incidencia directa en el comportamiento global de la subpartida 1.04.06, esto representa un aumento del 16% en relación con lo formulado para el 2020.

**Tabla 2.**

**Servicios de Vigilancia**

**Detalle del comportamiento histórico periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto** | 2,622,842,274 | 3,364,046,220 | 3,564,421,735 | 3,682,947,446 | 4,261,830,567 |
| **Variación** | - | 28% | 6% | 3% | 16% |

Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 10-3-2020

En la Figura 3 se puede visualizar gráficamente los montos formulados para el servicio de vigilancia, en un período de cinco años, el incremento que ha tenido este servicio ha sido de un 62%.

De forma particular, para el 2021 el incremento presentado se asocia a la aplicación del IVA y a la contratación de una nueva empresa con un costo mayor, debido a que la anterior no renovó el contrato a finales del 2019.

**Figura 3. Comportamiento histórico de la formulación del artículo Servicios de Vigilancia**

## Análisis por programa presupuestario

En lo que concierne a la variación por programa presupuestario, el principal incremento se da en el 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, esto debido a que este tipo de servicios es formulado por las Administraciones Regionales, pertenecientes a este programa. Para el 2021 el incremento es de ¢375,878,167 lo que equivale a un 18%.

**Tabla 3. Variación por programa presupuestario 2020 – 2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Direc, Adm y Otros Órganos de Apoyo | 2,115,577,166 | 2,491,455,333 | 375,878,167 | 18% |
| Servicio Jurisdiccional | 738,881,271 | 795,775,178 | 56,893,907 | 8% |
| Organismo de Investigación Judicial | 411,626,266 | 488,035,241 | 76,408,975 | 19% |
| Ministerio Público | 122,676,929 | 180,674,553 | 57,997,624 | 47% |
| Defensa Pública | 222,085,814 | 216,634,541 | -5,451,273 | -2% |
| Serv. Atenc. Protec. Víctimas-Testigos | 72,100,000 | 89,255,721 | 17,155,721 | 24% |

En la misma línea, según se puede apreciar en el gráfico de la Figura 4 el programa con la mayor concentración de los recursos de vigilancia es el 926 con un 59%, seguido del Organismo de Investigación Judicial con un 19%.

**Figura 4. Distribución del servicio de vigilancia por programa presupuestario**

## Distribución por Centro de Responsabilidad

En cuanto a la distribución del Servicio de Vigilancia para el 2021 por Centro de Responsabilidad en la Tabla 3 se muestran los centros con la mayor cantidad de recursos, donde se puede apreciar que los montos mayores corresponden al Organismo de Investigación Judicial y la Dirección Ejecutiva con un 11% cada uno, en el caso de la Dirección Ejecutiva el monto mayor es formulado por el Departamento de Seguridad, responsable de lo relativo a la vigilancia.

**Tabla 4. Centros de Responsabilidad con la mayor cantidad de recursos formulados en el artículo de servicio de vigilancia para el 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2021** | **Peso %en la distribución de recursos** |
| Organismo de Investigación Judicial | 488,035,241 | 11% |
| Dirección Ejecutiva | 454,341,866 | 11% |
| Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores | 346,080,000 | 8% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 333,720,002 | 8% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 262,866,237 | 6% |
| Primer Circuito Judicial Alajuela | 234,748,330 | 6% |
| Tercer Circuito Judicial San José | 229,206,526 | 5% |
| Primer Circuito Judicial San José | 226,678,462 | 5% |
| Defensa Pública | 216,634,541 | 5% |
| Ministerio Público | 180,674,553 | 4% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 158,051,951 | 4% |
| Segundo Circuito Judicial Guanacaste | 143,990,433 | 3% |
| Circuito Judicial Heredia | 122,457,047 | 3% |

## Oficio N°862-DE-2020 de la Dirección Ejecutiva sobre revisión de Servicios de Vigilancia

Es importante indicar que mediante el oficio N°862-DE-2020 con fecha 03 de marzo del 2020, suscrito por la Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, se remitió para conocimiento del Consejo Superior un informe sobre las medidas que se han tomado por parte de la Dirección Ejecutiva para asumir el impacto del impuesto al valor agregado (IVA) en el presupuesto del 2020, específicamente en el contrato del servicio de vigilancia. Como parte de estas acciones, se remitió el oficio N°61-DS-2020 del Departamento de Seguridad que informa sobre los ajustes que tuvieron que realizarse en los puestos de vigilancia. En este oficio se indica que el monto total que debe ser formulado en el anteproyecto de presupuesto 2021 es ¢3.538.308.399,96.

*“Para el año 2021 y para la cobertura de los 12 meses el monto requerido sin darse incremento de puestos y sin considerar el aumento de ley sería de ¢3.538.308.399,96. lo que se estaría coordinando con la Dirección de Planificación para revisar los montos formulados para ese año, aprovechando la revisión de los presupuestos que se lleva a cabo en este momento del año.”*

Como parte de la coordinación para verificar que los recursos incluidos en el anteproyecto de presupuesto 2021 sean los requeridos, mediante correo electrónico dirigido a doña Ana Eugenia, el 13 de marzo, se remitió la información del Sistema SIGA-PJ en el que se observa que se encuentran formulados un total de ¢4.271.382.567 para el pago del servicio de vigilancia, es decir, un monto superior en aproximadamente ¢733 millones al indicado por el Departamento de Seguridad.

Al respecto, el Departamento de Seguridad indicó que el monto general está correcto, pero que la distribución se debe modificar.

# **Análisis de la formulación del artículo “Servicios de Limpieza”:**

Como se indicó anteriormente, el artículo denominado “Servicios de Limpieza” representa un 38% de los recursos formulados en la subpartida 1.04.06 para el 2021, por tal motivo, a continuación, se analiza el comportamiento histórico en la formulación de este servicio.

## Comportamiento histórico

Al igual que el servicio de vigilancia, los recursos formulados para el pago de los servicios de limpieza han venido creciendo paulatinamente en los últimos 5 años, este incremento desde el 2017 es de un 102%, es decir, se ha duplicado en el período citado. En la tabla 6 se puede visualizar el detalle anual de los recursos formulados para este artículo, donde a pesar del incremento indicado, para el 2021 en comparación con el 2021 se tiene una leve disminución del 0.4%.

**Tabla 6. Detalle del comportamiento histórico periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto** | 1,379,479,489 | 2,389,700,567 | 2,421,597,156 | 2,801,543,493 | 2,789,629,260 |
| **Variación** |  | 73.2% | 1.3% | 15.7% | -0.4% |

Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 10-3-2020

En relación con la baja o disminución que se presenta, es importante señalar que esto se debe al efecto de algunas de las medidas adoptadas por la Dirección Ejecutiva, conforme el detalle incluido en los oficios N°2082-PLA-2019 y N°5562-DE-2019 y que atienden la solicitud del Consejo Superior de analizar en forma conjunta la Dirección de Planificación y la Dirección Ejecutiva, medidas institucionales para minimizar el impacto del IVA:

1. Política restrictiva de no ampliar los servicios por concepto de contratos de seguridad y limpieza, por el impacto que generaría en los gastos corrientes.
2. Como medida de control para que no se incluyeran nuevos servicios, para la formulación del 2021 en el sistema de formulación presupuestaria SIGA-PJ, se generaron los contratos y se completó su continuidad en los casos que correspondía, hasta diciembre 2021. Además, se inactivaron los artículos asociados, es decir, no se podían incluir montos adicionales a los que se generaron a través de los contratos existentes.
3. Se estableció que cualquier requerimiento adicional en el servicio de limpieza tenía que enviarse a la Dirección de Planificación que consolidó y remitió a la Dirección Ejecutiva para su valoración y aprobación.
4. Las líneas aprobadas por la Dirección Ejecutiva en limpieza suman un total de ¢59.439.562, esto hace que el monto actual pase a ser ¢2.849.068.822, monto mayor al formulado para el 2020.
5. También se debe considerar que en los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia, se aprobó que conforme al comportamiento histórico se ajustará el porcentaje de incremento anual de un 11% a un 5% para los contratos de limpieza y 6% en el contrato de vigilancia.

En la Figura 5 se puede visualizar gráficamente los montos formulados para el servicio de limpieza desde el 2017 hasta el 2021.

**Figura 5. Comportamiento histórico de la formulación del artículo Servicios de Limpieza**

## Análisis por programa presupuestario

Según se muestra en la tabla 7 el único programa presupuestario que presenta un incremento para el 2021 es el 926 con un 6.1%, en el caso de los demás programas todos muestra una disminución en la formulación de los servicios de limpieza.

**Tabla 7. Variación por programa presupuestario 2020 – 2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Direc, Adm y Otros Órganos de Apoyo | 1,749,150,482 | 1,863,506,852 | 114,356,370 | 6.1% |
| Servicio Jurisdiccional | 603,974,343 | 515,540,948 | -88,433,395 | -17.2% |
| Organismo de Investigación Judicial | 154,696,047 | 134,312,924 | -20,383,123 | -15.2% |
| Ministerio Público | 92,539,523 | 83,109,311 | -9,430,212 | -11.3% |
| Defensa Pública | 164,732,067 | 160,689,813 | -4,042,254 | -2.5% |
| Serv. Atenc. Protec. Víctimas-Testigos | 36,451,031 | 32,469,412 | -3,981,619 | -12.3% |

Al igual que el servicio de vigilancia, el programa que concentra la mayor cantidad de recursos en servicios de limpieza es el 926, las razones son similares a las indicadas anteriormente, debido a que las administraciones regionales concentran la formulación de estos recursos.

**Figura 6. Distribución del servicio de limpieza por programa presupuestario**

## Distribución por Centro de Responsabilidad

En cuanto a la distribución del Servicio de Limpieza Vigilancia para el 2021 por Centro de Responsabilidad en la Tabla 8 se muestran los centros con la mayor cantidad de recursos, donde se puede apreciar que la Administración de San Joaquín es la que posee la mayor cantidad de recursos con un 13%, seguida de la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José con un 11.9%.

**Tabla 8. Centros de Responsabilidad con la mayor cantidad de recursos formulados en el artículo de servicio de vigilancia para el 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2021** | **Porcentaje** |
| Administración Judicial San Joaquín Flores | 363,114,223 | 13.0% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 331,734,227 | 11.9% |
| Primer Circuito Judicial San José | 180,235,309 | 6.5% |
| Primer Circuito Judicial Alajuela | 176,544,888 | 6.3% |
| Defensa Pública | 160,689,813 | 5.8% |
| Organismo de Investigación Judicial | 134,312,924 | 4.8% |
| Circuito Judicial Cartago | 132,038,607 | 4.7% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 129,831,564 | 4.7% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 106,687,249 | 3.8% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica | 93,884,671 | 3.4% |
| Ministerio Público | 83,109,311 | 3.0% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 83,034,823 | 3.0% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 81,714,875 | 2.9% |
| Tercer Circuito Judicial San José | 79,731,107 | 2.9% |
| Circuito Judicial Heredia | 77,982,162 | 2.8% |

* + **Otros Requerimientos Operativos aprobados por el Consejo Superior**

Finalmente, se considera oportuno señalar que de forma complementaria en la sesión del Consejo Superior del pasado 13 de febrero, se dispuso aprobar una serie de requerimientos operativos que no se generaron mediante un contrato, pero que para el 2020 se encuentran considerados los servicios y cuentan con contenido presupuestario, estos fueron solicitados por los Administradores de los centros de responsabilidad y fueron a valoración y aprobación de la Dirección Ejecutiva. De manera general se aprobaron ¢80.312.498 para el servicio de vigilancia y ¢59.439.562 para el servicio de limpieza.

**Con estos requerimientos el presupuesto total de la subpartida 10406 Servicios Generales para el 2021 asciende a ¢7.551.590.605, para un crecimiento porcentual del 10,42%.**

* + **Requerimientos Adicionales**

Finalmente, se señala que en la subpartida 10406 ¨Servicios Generales¨ la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Guanacaste solicita **¢6.000.000** en el artículo 24772 ¨Diseño y Decoración de Jardines (Paisajismo)¨ con la justificación de que se requiere para mejorar la estética externa del edificio de Tribunales de Liberia, específicamente de las áreas verdes, ya que indica la administradora que se han recibido muchas críticas de las mismas autoridades de la institución por el estado actual de esta zona.

**En caso de aprobarse este requerimiento, el monto total de la subpartida 10406 Servicios Generales a nivel institucional sería de ¢7.557.590.605, para un crecimiento porcentual del 10,51%.**

*Como parte de la discusión y el análisis* Doña Ana Romero señala que la necesidad planteada por la Administración Regional de Guanacaste se puede solventar con la capacidad instalada a nivel institucional, por lo que no sería necesario formular los recursos adicionales.

**Se acordó**: **1)** Aprobar los recursos formulados en la subpartida 1.04.06 Servicios Generales. **2)** No aprobar los requerimientos adicionales solicitados por la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Guanacaste en virtud de las restricciones presupuestarias que existen, la administración debe buscar otras alternativas para cumplir con la mejora estética de las áreas verdes. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XII**

**DOCUMENTO N°** **4563-2020**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 03 de abril de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de las **Subpartidas 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos; 10801 Mantenimiento de edificios y locales; 50201 Edificios**

La Corte Plena en la sesión 40-19 celebrada el 23 de setiembre del año 2019, artículo XX, conoció el oficio 1356-PLA-2019 /3870-DE-2019 de 26 de agosto de 2019 sobre los efectos que tendrá la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre la ejecución del Presupuesto 2020 y en la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2021.

Dentro de este contexto, mediante oficio 5562-DE-2019 la Dirección Ejecutiva informó respecto a una serie de medidas en torno a la formulación del presupuesto del 2021, específicamente lo correspondiente a la subpartida de Alquileres se indicó en el punto N 3:

*Debido al comportamiento histórico que se han presentado en esta subpartida, se determinó realizar los siguientes cambios:*

*3.1. Para los contratos de alquiler de locales con reajuste de precios basado en el IPC (índice de precios al consumidor), de acuerdo con el comportamiento histórico de este macro precio, se propone disminuir el porcentaje de incremento anual de un 10% al 5%.*

*3.2. Los contratos de alquiler de local que se detallan se deben formular por 6 meses, considerando que se sustituirán por el edificio Anexo E, que se construirá con recursos del Fideicomiso Inmobiliario:*

*a. Contrato N° 001218-2018, Arrendamiento de local para ubicar los despachos que alojaran la Reforma Procesal Civil.*

*b. Contrato N° 011217-2017, Arrendamiento de local para ubicar al Tribunal de apelaciones laborales, Juzgado Primero Laboral de San José, Juzgado Segundo Laboral de San José y Defensa Pública Laboral.*

*c. Contrato N° 0009-02-2009, Alquiler de local para alojar al Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José (primer piso).*

*d. Contrato N° 005217 Alquiler de local para alojar al Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José (segundo piso).*

*3.3. En el caso de los procedimientos de contratación de nuevos alquileres que se encuentran en trámite de inicio en el Departamento de Proveeduría, resulta necesario que se avale tomar las siguientes medidas:*

1. *No dar orden inicio a los siguientes procedimientos y por ende, no formular recursos para el año 2021 por los motivos que se indican en cada caso:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Procedimiento*** | | | ***Objeto de la contratación*** | ***Monto estimado anual con IVA*** | ***Justificación*** |
| ***2019*** | ***CD*** | ***000008*** | *Alquiler de local para albergar la Oficina de Crimen Organizado del O.I.J.* | *166 371 030,00* | *Debe ser financiado mediante un presupuesto extraordinario* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000040*** | *Alquiler de un inmueble para alojar la Fiscalía de Corredores* | *104 975 065,44* | *Se requieren los recursos para cubrir el impacto del IVA.* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000046*** | *Alquiler de un local para alojar a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD) de Santa Cruz* | *56 168 699,70* | *Se requieren los recursos para cubrir el impacto del IVA.* |
| ***2019*** | ***LN*** | ***000015*** | *Alquiler de un local que permita alojar la Oficina de Atención y Protección a Víctima de Delito de la Sede Central, ubicada en el I Circuito Judicial de San José* | *431 136 648,74* | *Se requieren los recursos para cubrir el impacto del IVA.* |
|  |  |  | ***Total*** | ***758 651 443,89*** |  |

*Adicionalmente se debe señalar que no será posible formular nuevos alquileres ni en el 2020 ni en el año 2021, tal como lo dispuso Corte Plena en la sesión 40-19 del 23 de setiembre del año en curso, artículo XX.*

*b. Formular en los siguientes procedimientos solamente los recursos necesarios para cubrir la diferencia respecto al contrato que sustituye, dado que corresponde a procedimientos que vienen a atender necesidades de reformar legales y que a la fecha se encuentran en un estado avanzado de trámite:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Procedimiento*** | | | ***Objeto de la contratación*** | ***Monto formulado  contrato sustituye*** | ***Monto***  ***Formular 2021***  ***con IVA*** |
| ***2017*** | ***LA*** | ***000069*** | *Alquiler del local para ubicar el Juzgado Civil y Laboral, Tribunal Civil y Laboral de Cañas* |  | *45 910 775,10* |
| ***2017*** | ***LN*** | ***000020*** | *Alquiler de local que albergue el Juzgado Laboral, Juzgado Civil, Defensa Pública Laboral, Juzgado Agrario, Juzgado de Cobro y Médico Legal Laboral San Carlos* | *- 321 475 173,12* | *- 131 949 522,00 1)* |
| ***2018*** | ***LA*** | ***000043*** | *Alquiler de edificio para instalación de la Fiscalía de Santiago de Puriscal* | *- 10 706 230,61* | *88 959 769,39* |
| ***2018*** | ***LN*** | ***000008*** | *Contratación de local para ubicar despachos judiciales de materia Civil en Heredia* | *- 30 776 908,80* | *315 157 339,45* |
| ***2018*** | ***LA*** | ***000071*** | *Alquiler de un local para albergar la Oficina Regional de la Fortuna (OIJ)* | *- 11 994 545,73* | *65 867 415,38* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000013*** | *Alquiler de local para el Juzgado Civil y de Trabajo, Medicina Legal y Juzgado de Tránsito, en Liberia* | *-* | *105 669 649,58* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000014*** | *Alquiler de local para albergar el Tribunal Colegiado Civil de Primera instancia y Tribunal de Apelaciones civil y de trabajo Liberia* | *-* | *66 365 827,41* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000015*** | *Alquiler para el Juzgado Contravencional de Hatillo* | *- 14 176 980,18* | *32 808 419,82* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000032*** | *Alquiler de inmueble para ubicar al Tribunal Civil, Juzgado Civil, Juzgado Agrario y Juzgado de Cobros de Puntarenas* | *-* | *175 064 485,66* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000039*** | *Alquiler de inmueble para alojar a la Fiscalía y el Tribunal Penal de Upala* | *- 29 202 876,93* | *39 056 373,15* |
| ***2019*** | ***LA*** | ***000044*** | *Alquiler de local para albergar la Defensa Publica de Quepos* | *-* | *60 483 024,00* |
|  |  |  | ***Total*** | ***- 418 332 715,37*** | ***863 393 556,94*** |

# **Subpartida 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos**

1. **Comportamiento Histórico de la Subpartida**

# Los recursos formulados en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios Locales y Terrenos, responden a las necesidades Institucionales para abarcar en la medida de lo posible todo el territorio nacional. Además, producto del crecimiento de los servicios que brinda la institución, con el pasar de los años el hacinamiento del personal se ha vuelto una problemática, que se ha tenido que solventar con el alquiler de nueva infraestructura. Además, la subpartida de alquileres se ha visto fuertemente afectada por la estimación del pago del IVA.

**Tabla 1. Detalle del Comportamiento Histórico de la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos.**

**Periodos 2017-2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Monto Formulado | 9.093.019.067 | 12.243.454.041 | 12.775.531.151 | 12.006.678.198 | 11.802.227.411 |
| Variación | - | 35% | 4% | -6% | -2% |

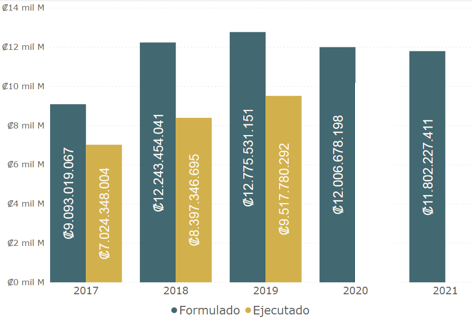
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ

En la tabla anterior se muestran los montos formulados en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos para los últimos 5 años, siendo el periodo 2019 el de mayor crecimiento. Para los años 2020 y 2021 la subpartida presenta una disminución con porcentajes de variación del 6% y 2% respectivamente.

**Figura N°1. Formulación y Ejecución**

**Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos**

**Periodos 2017 - 2021**

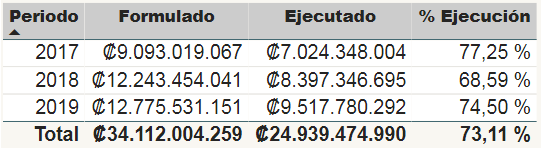


**Fuente:** Sistema SIGA-PJ

En el gráfico anterior se representa la formulación y ejecución presupuestaria de la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos para los periodos 2017 al 2021. A nivel institucional esta subpartida muestra que la ejecución presupuestaria ha estado por debajo de lo que se ha formulado. Se puede observar que durante los periodos 2017 – 2019 la ejecución fue de un 73,11% de los recursos. Es Importante indicar, que los datos mencionados anteriormente, estiman los recursos correspondientes las modificaciones realizadas al presupuesto, para cada uno de los periodos mencionados

1. **Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Subpartida**

**Tabla 2. Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Durante los tres periodos presupuestarios que se muestran en la tabla se observa una ejecución presupuestaria por debajo del 100%, lo que quiere decir que se están formulando recursos de más, producto de las estimaciones de los Centros de Responsabilidad.

1. **Variación por Programa 2020-2021**

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario de esta subpartida, se determina que el programa 927 Servicio Jurisdiccional es el que presenta el mayor incremento con una variación del 2%, seguido del 928 Organismo de Investigación Judicial y el 929 Ministerio Público.

**Tabla 3. Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**

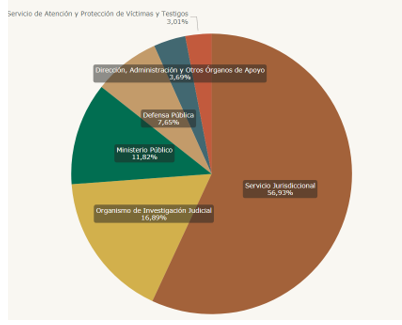
**Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Dirección, Administración | 351.439.210 | 653.710.524 | 435.505.357 | -218.205.167 | -33% |
| Servicio Jurisdiccional | 5.395.997.139 | 6.561.932.871 | 6.719.136.969 | 157.204.098 | 2% |
| Organismo de Investigación Judicial | 1.606.029.083 | 1.952.948.965 | 1.993.795.750 | 40.846.785 | 2% |
| Ministerio Público | 1.099.146.896 | 1.270.536.236 | 1.394.867.722 | 124.331.486 | 10% |
| Defensa Pública | 767.404.818 | 1.107.773.474 | 903.294.075 | -204.479.399 | -18% |
| Servicio de Atención y Protección | 297.763.146 | 459.776.128 | 355.627.538 | -104.148.590 | 0% |
| Total | 9.517.780.292 | 12.006.678.198 | 11.802.227.411 | -204.450.787 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |

El incremento en el Programa 927 “Servicio Jurisdiccional” se da principalmente por las siguientes solicitudes:

1. **Administración de Heredia:** El incremento en la subpartida 10101 se da principalmente por la inclusión de un exceso de ¢119.833.203 con relación al monto aprobado para el 2020, para el alquiler del Edificio que alberga el Juzgado Civil, Juzgado de Trabajo, Tribunal de Apelación y Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil de Heredia, según el procedimiento 2018-LN-00008 y que se encuentra autorizado en oficio 5562-DE-2019 de la Dirección Ejecutiva.
2. **Circuito Judicial de Puntarenas:** El crecimiento de ¢66.852.634 con relación al monto aprobado en el 2020 se da por la inclusión de ¢42.080.000 adicionales para cubrir el aumento del contrato 2019-LA-000032 que asciende a ¢176.880.000 y que albergará al Juzgado Civil de Puntarenas, Juzgado de Cobro de Puntarenas, Juzgado Agrario y el Tribunal Colegiado. Estos recursos fueron autorizados en el oficio número 5562-DE-2019 de la Dirección Ejecutiva. Los restantes ¢24.000.000 corresponden aumentos normales de alrededor de 15 contratos de alquiler de edificio que tiene este circuito.
3. Por su parte el Programa 929 “Ministerio Público”, muestra un incremento ¢124.331.486 con relación a lo aprobado para el 2020 y la principal causa es el aumento en los contratos de arrendamiento cuya moneda de pago es el colón, ya que, el aumento automático que se realizó fue mediante el indicado del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

**Figura N°2 Distribución se la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos por Programa Presupuestario**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Como lo muestra el gráfico anterior, el programa presupuestario con más recursos formulados para el 2021 en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, es el 927 Servicio Jurisdiccional con un total de ¢6.719.136.969 que representa un 56,93%, seguido por el programa 928 Organismo de Investigación Judicial con un total de ¢1.993.795.750 y un porcentaje de 16,89% y el 929 Ministerio Público con ¢1.394.867.722 lo que representa un 11.82%. En un menor porcentaje los programas 930 Defensa Pública con ¢903.294.075, con un 7,65%, el 926 Dirección y Administración con ¢435.505.357 un 3,69% y por último, el programa 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos con ¢355.627.538 y un 3.01%.

1. **Distribución por Centro de Responsabilidad**

En la siguiente tabla se muestran los **10 centros de responsabilidad** con más recursos formulados para el 2021 en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos.

**Tabla N° 4. Distribución de la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos de los 10 Centros de Responsabilidad con más recursos.**

**Periodos 2020–2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de responsabilidad** | **2021** | **Porcentaje** |
| Organismo de Investigación Judicial | 1.993.795.750 | 17% |
| Ministerio Público | 1.394.867.722 | 12% |
| Primer Circuito Judicial San José | 1.274.290.143 | 11% |
| Tercer Circuito Judicial San José | 1.042.796.900 | 9% |
| Defensa Pública | 903.294.075 | 8% |
| Salas | 844.090.808 | 7% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 633.933.822 | 5% |
| Circuito Judicial Heredia | 469.927.711 | 4% |
| Circuito Judicial Cartago | 402.355.408 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 367.875.483 | 3% |

**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en la tabla anterior, los centros de responsabilidad con más recursos formulados en esta subpartida para el periodo 2021 son: el Organismo de Investigación Judicial con ¢1.993.795.750, el Ministerio Público con ¢ 1.394.867.722, el Primer Circuito Judicial de San José con ¢1.274.290.143 y el Tercer Circuito Judicial de San José con ¢1.042.796.900.

**Detalle de contratos más representativos en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos**

**Periodo 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Descripción Contrato** | **Monto** | **Representatividad** |
| **2016** | 7 - SALA CONSTITUCIONAL | 844.090.807,93 | 7,2% |
| **2010** | 1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL | 653.490.048,87 | 5,6% |
| **2017** | 1178 - JUZGADO DE TRABAJO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | 307.517.104,45 | 2,6% |
| **2013** | 489 - JUZGADO TRANSITO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | 225.917.958,14 | 1,9% |
| **2018** | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 208.112.199,42 | 1,8% |
| **2017** | 561 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA | 186.455.600,41 | 1,6% |
| **2018** | 1338 - JUZGADO TERCERO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | 184.875.225,99 | 1,6% |
| **2018** | 1044 - JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | 184.819.774,52 | 1,6% |
| **2018** | 1170 - JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | 184.819.774,52 | 1,6% |
| **2017** | 1384 - SECCION ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA SOCIAL | 171.499.923,63 | 1,5% |
| **2008** | 523 - TRIBUNAL PENAL DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, SEDE SUROESTE | 167.050.875,89 | 1,4% |
| **2013** | 716 - UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION (MINISTERIO PUBLICO) | 163.144.957,44 | 1,4% |
| **2017** | 431 - FISCALIA ADJUNTA PUNTARENAS | 150.047.350,13 | 1,3% |
| **2016** | 937 - SECCION DE TRANSPORTES DEL O.I.J. | 140.275.289,48 | 1,2% |
| **2018** | 70 - SUBDELEGACION REGIONAL SIQUIRRES | 127.395.450,00 | 1,1% |
| **2011** | 60 - DELEGACION REGIONAL DE LIBERIA | 123.801.444,00 | 1,1% |
| **2008** | 718 - OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS | 123.100.570,67 | 1,0% |
| **2017** | 1527 - TRIBUNAL DE APELACION DE TRABAJO I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | 112.362.018,93 | 1,0% |
| **2015** | 332 - FISCALIA DEL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON) | 107.011.844,00 | 0,9% |
| **2017** | 643 - JUZGADO DE TRABAJO DE PUNTARENAS | 100.031.566,75 | 0,9% |

* **Otros Requerimientos Operativos.**

En relación con los recursos operativos, los cuales fueron conocidos por el Consejo Superior en la sesión de Presupuesto 2021 del pasado 13 de febrero se acordó su aprobación con la siguiente distribución.

**Tabla N° 5. Distribución de Requerimientos Operativos aprobados por el Consejo Superior para la Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos**

**Periodos 2020–2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Oficina** | **Formulado** | **Total** | **Observaciones Dirección Ejecutiva** |
| Juzgado Penal III Circuito Judicial San José Tribunal Penal III Circuito Judicial San José | 61.281.714 | 31.000.000 | ...2) Deberá la Administración Regional del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José, mantener el contrato actual y continuar con el trámite para implementar los requerimientos técnicos y mejoras indicadas en el estudio de referencia, el cual tomó en cuenta la viabilidad, conveniencia y oportunidad del proyecto, aunado a que fue solicitado y avalado por los departamentos técnicos del Poder Judicial, al ser acorde con los exigencias institucionales y la normativa aplicable. |
| ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE | 5.473.014 | 10.752.684 | Procedimiento en proceso en la PROV. Muchas prevenciones al propietario, el pasado lunes se indicó a SG que hay que esperar que el señor conteste. Si el propietario no contesta se archivan la diligencias (Yurli Arguello). |
| Juzgado Contravencional de Puerto Jiménez | 11.142.130 | 5.571.065 | No se cuenta con recursos para el 2020. El incremento ya fue aprobado por SG, están buscando recursos para iniciar el incremento. Pasó de $10 a $15 metro cuadrado. |
| Defensa de Puerto Jiménez | 11.142.130 | 5.571.065 | No se cuenta con recursos para el 2020. El incremento ya fue aprobado por SG, están buscando recursos para iniciar el incremento. Pasó de $10 a $15 metro cuadrado. |
| Fiscalía de Puerto Jiménez | 11.142.130 | 5.571.065 | No se cuenta con recursos para el 2020. El incremento ya fue aprobado por SG, están buscando recursos para iniciar el incremento. |
| Defensa Pública de Heredia | 80.138.540 | 35.800.000 | Formular 2021 |
| Juzgado Contravencional de San Isidro |  | 2.940.000 | Para el 2020 se cuenta con recursos para este incremento, dificultades en la localidad para encontrar otro local. Se debe formular para el 2021 por incremento solicitado, el cual se encuentra en estudio en el Departamento de Proveeduría oficio N°90-ARH-20. |
| Administración del Organismo de Investigación Judicial |  | 47.638.796 | Mediante correo del 4 de marzo de la Licda. Carolina Castillo, Coordinadora de la Administración del OIJ solicita la incorporación de estos recursos. Ampliación del contrato N°006218 el cual tendría un costo adicional de $5.772 mensuales (este se solicita en virtud de la necesidad urgente que hay de espacios de parqueo y que es necesario conseguir espacio adicional, de momento se hizo el procedimiento; sin embargo, se está a la espera de que el Departamento Financiero indique si quedó algún remanente, de lo contrario se deben incluir los recursos en la próxima SME. |
|  | 33.905.527 | Mediante correo del 4 de marzo de la Licda. Carolina Castillo, Coordinadora de la Administración del OIJ solicita la incorporación de estos recursos. Incremento del contrato N°004216 el cual tendría un costo adicional de $4.108,05 mensuales. Este procedimiento está en revisión en la Dirección Jurídica, de momento no se cuenta con el estudio. |
| Fiscalía de Bribrí |  | 38.259.540 | Formular 2021 Según necesidad indicada en oficio FGR-126-2020 |
| **Total** | | **217.009.742** |  |

Ante este panorama, con la formulación de los ¢217.009.742 aprobados por Consejo Superior como requerimientos operativos, la subpartida a nivel de programa queda distribuida de la siguiente manera:

**Tabla 6. Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**

**Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos con Requerimientos Operativos aprobados.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 351.439.210 | 653.710.524 | 446.258.041 | -207.452.483 |
| Servicio Jurisdiccional | 5.395.997.139 | 6.561.932.871 | 6.758.648.034 | 196.715.163 |
| Organismo de Investigación Judicial | 1.606.029.083 | 1.952.948.965 | 2.075.340.073 | 122.391.108 |
| Ministerio Público | 1.099.146.896 | 1.270.536.236 | 1.438.698.327 | 168.162.091 |
| Defensa Pública | 767.404.818 | 1.107.773.474 | 944.665.140 | -163.108.334 |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 297.763.146 | 459.776.128 | 355.627.538 | -104.148.590 |
| **Total** | **9.517.780.292** | **12.006.678.198** | **12.019.237.153** | **12.558.955** |

**Con la incorporación de estos recursos, el presupuesto total de la subpartida 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos para el 2021 es de ¢12.019.237.153, con una variación porcentual del 0.1% con respecto al monto aprobado para el 2020.**

# **Subpartida 1.08.01: Mantenimiento de edificios y locales**

## Comportamiento histórico de la subpartida

Para el 2021 está subpartida presenta un decrecimiento del 7% en comparación con los recursos formulados en el 2020, según se puede apreciar en la tabla 1.

**Tabla 1. Comportamiento histórico de la subpartida período 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto** | 2,243,692,342 | 2,425,092,168 | 2,611,573,587 | 2,243,152,565 | 2,082,275,621 |
| **Variación** | - | 8% | 8% | -14% | -7% |

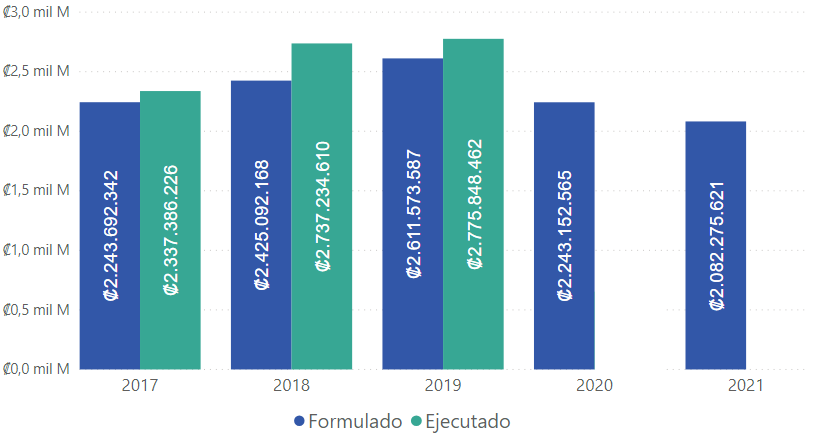
Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 13-3-2020.

Según se observa en el gráfico de la Figura 1, donde se pueden visualizar tanto los recursos formulados versus los montos ejecutados, se observa que, en los años 2017, 2018 y 2019 los montos ejecutados en esta subpartida fueron mayores a los formulados.

Figura 3.

Comportamiento histórico de la subpartida

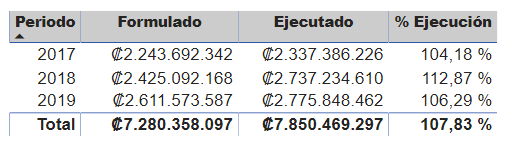
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales



## Ejecución presupuestaria

En línea con lo señalado anteriormente se tiene que los porcentajes de ejecución para los años 2017, 2018 y 2019 han sido 104%, 112% y 106%, respectivamente, lo que indica que se han realizado modificaciones presupuestarias para la inyección de recursos en esta subpartida.

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria de la subpartida 1.04.06 períodos 2017, 2018 y 2019**



Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 13-3-2020.

## Análisis por programa presupuestario

En lo que corresponde a la distribución de los recursos por programa, la mayor concentración de estos se encuentra en el 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, esto debido a que este tipo de servicios es formulado por las administraciones regionales, pertenecientes a este programa. Asimismo, este es el único programa que presenta un incremento en la subpartida en comparación con los recursos formulados en el 2021.

**Tabla 3. Variación por programa presupuestario 2020 – 2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etiquetas de fila** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Direc, Adm y Otros Órganos de Apoyo | 1,743,963,596 | 1,866,590,504 | 122,626,908 | 7% |
| Servicio Jurisdiccional | 101,199,066 | 50,617,390 | -50,581,676 | -50% |
| Organismo de Investigación Judicial | 126,184,157 | 109,724,535 | -16,459,622 | -13% |
| Ministerio Público | 182,332,350 | 33,276,192 | -149,056,158 | -82% |
| Defensa Pública | 89,002,686 | 21,667,000 | -67,335,686 | -76% |
| Serv. Atención-Protección Víctimas y Testigos | 470,710 | 400,000 | -70,710 | -15% |
| **Total** | **2,243,152,565** | **2,082,275,621** | **-160,876,944** | **100%** |

# Además, en la subpartida de mantenimiento de edificios se mantiene una apropiación similar al 2020, luego de que para ese año se disminuyó en más de ¢600 millones para asumir los servicios de ingeniería, rubro que se rebajó en su totalidad en el 2021, para tratar de ajustar los gastos corrientes a nivel global.

## Distribución por Centro de Responsabilidad

En cuanto a la distribución por Centro de Responsabilidad, en la Tabla 4 se muestran los centros con la mayor cantidad de recursos, donde se puede apreciar que los montos mayores corresponden a la Dirección Ejecutiva, Administración de San Joaquín de Flores y Organismo de Investigación Judicial.

**Tabla 4. Distribución de los recursos de la subpartida por Centros de Responsabilidad para el 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de responsabilidad** | **2021** | **Porcentaje** |
| Dirección Ejecutiva | 533,996,547 | 26% |
| Administración San Joaquín de Flores | 309,926,000 | 15% |
| Organismo de Investigación Judicial | 180,878,015 | 9% |
| Primer Circuito Judicial San José | 166,949,156 | 8% |
| Primer Circuito Judicial Alajuela | 96,486,800 | 5% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 93,108,804 | 4% |
| Administración de Santa Cruz | 82,800,000 | 4% |
| Circuito Judicial Cartago | 69,163,770 | 3% |
| Defensa Pública | 64,667,000 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 63,223,584 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 57,719,276 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial Guanacaste | 47,495,800 | 2% |
| Circuito Judicial Heredia | 46,431,170 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 40,884,179 | 2% |

Es importante indicar, que la razón del crecimiento por la cual la Dirección Ejecutiva presenta la mayor cantidad de recursos en esta subpartida, se debe a que es por medio del Departamento de Servicios Generales que incluyen los recursos de mantenimiento, formulados por medio del Área de Construcciones.

Asimismo, en lo formulado por la Dirección Ejecutiva, se contemplan los requerimientos de servicio de mano de obra por mantenimiento de edificio y locales, así como el mantenimiento correctivo básico de edificios (reparación de techos, reparaciones eléctricas, instalación de vidrios, reparación aleros y canoas, reparaciones de fontanería, entre otros).

En esta subpartida se prevé el contenido económico a los mantenimientos correctivos y preventivos de los ascensores de todas las Administraciones Regionales del país.

Los artículos más representativos formulados dentro de esta subpartida son los que se detallan a continuación, ocupando el 53% el artículo de precio cero denominado Mantenimiento de edificios y locales, seguido de remodelaciones con un 14% y en tercer lugar los servicios de mantenimiento correctivos y preventivo de los ascensores con un 7% de los recursos de la subpartida

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Artículo** | **Monto** | **%** |
| Mantenimiento de edificios y locales | 1,113,701,636 | 53% |
| Remodelación | 285,610,133 | 14% |
| Servicio mant correc prev de ascensores | 196,808,488 | 9% |
| Pintura de edificios y locales | 152,578,685 | 7% |
| Mantenimiento de edificios y locales (repuestos contrato) | 106,932,119 | 5% |
| Servicio mano obra mant.edificios y locales | 72,460,950 | 3% |
| Reparación de techos | 30,000,000 | 1% |
| Limpieza de tanque de agua | 21,395,823 | 1% |
| Servicio de limpieza de tanque séptico | 15,938,475 | 1% |
| Reparación de fontanería | 13,882,300 | 1% |
| Servicio de impermeabilización en edificios | 10,815,000 | 1% |
| Servicio mantenimiento de portones eléctricos | 10,737,373 | 1% |

# **Subpartida 5.02.01: Edificios**

Se debe destacar que los datos que se presentan a continuación corresponden a los recursos que fueron formulados dentro del área de construcciones, la cual fue conocida por el Consejo Superior en la Sesión Extraordinaria de presupuesto 21-2020 del 13 de marzo, artículo XIII.

Comportamiento histórico de la subpartida

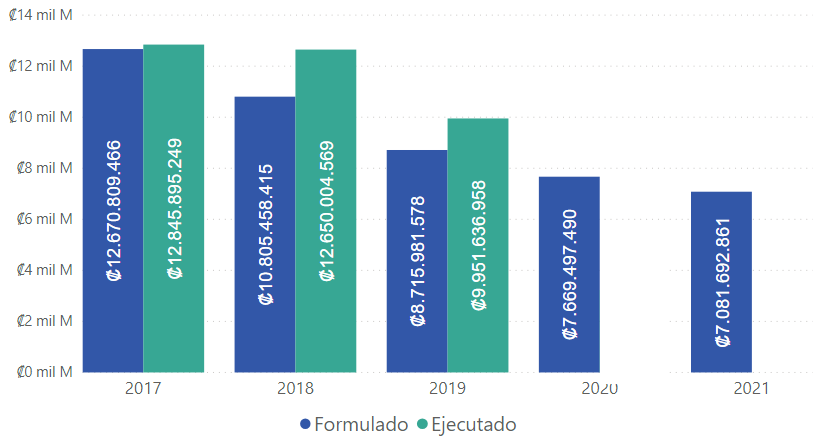
El comportamiento de esta subpartida ha decrecido significativamente en los últimos cinco años, tal como se observa en la tabla 1 para el 2021 el decrecimiento en relación con el 2020 es de un 8%.

**Tabla 1. Comportamiento histórico de la subpartida período 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto** | 12,670,809,466 | 10,805,458,415 | 8,715,981,578 | 7,669,497,490 | 7,081,692,861 |
| **Variación** | - | -15% | -19% | -12% | -8% |

Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 13-3-2020.

Según se observa en el gráfico de la Figura 1, si se compara el comportamiento de esta subpartida con el de hace cinco años el decrecimiento que se ha tenido es de un 44%, una de las principales razones de este comportamiento se debe al financiamiento de las obras constructivas de alto impacto por medio del fideicomiso.



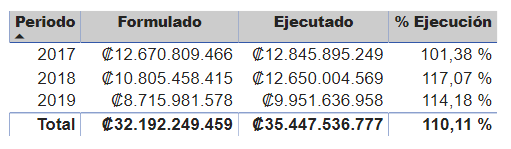
**Figura 3. Comportamiento histórico de la subpartida 5.02.01**

## Ejecución presupuestaria

En cuanto a la ejecución presupuestaria, como se puede apreciar en el gráfico anterior, así como en la tabla 2, para los años 2017, 2018 y 2019 el porcentaje ha sido mayor del 100%, lo que indica que se han realizado modificaciones presupuestarias para la inyección de recursos en esta subpartida.

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria de la subpartida 5.02.01**

**período 2017- 2019**



Fuente: Consulta realizada al sistema SIGA PJ el 13-3-2020.

## Análisis por programa presupuestario

En lo que corresponde a la distribución de los recursos por Programa, la mayor concentración de estos se encuentra en el Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, seguido del Programa 928 Organismo de Investigación Judicial, asimismo según se puede apreciar en la tabla 3, el comportamiento para todos los programas en el 2021, en relación con el 2020, es hacia la baja.

**Tabla 3. Variación por programa presupuestario 2020 – 2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etiquetas de fila** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Direc, Adm y Otros Órganos de Apoyo | 5,331,263,490 | 4,911,234,635 | -420,028,855 | -8% |
| Servicio Jurisdiccional | 8,755,000 | 1,500,000 | -7,255,000 | -83% |
| Organismo de Investigación Judicial | 2,307,119,000 | 2,168,958,226 | -138,160,774 | -6% |
| Ministerio Público | 12,360,000 | 0 | -12,360,000 | -100% |
| Defensa Pública | 10,000,000 | 0 | -10,000,000 | -100% |
| Serv. Atención-Protección Víctimas y Testigos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Total** | **7,669,497,490** | **7,081,692,861** | **-587,804,629** | **100%** |

## Distribución por Centro de Responsabilidad

En cuanto a la distribución por Centro de Responsabilidad en la Tabla 4 se muestran los centros con la mayor cantidad de recursos, donde se puede apreciar que los montos mayores corresponden al Organismo de Investigación Judicial, por motivo de los proyectos de Reacondicionamiento de la Morgue Judicial y la finalización de la segunda etapa del área de toma de muestras de la Sección de Bioquímica.

En el caso del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, los recursos formulados son para la construcción de la torre anexa a los Tribunales de Justicia de San Ramón.

**Tabla 4. Distribución de los recursos de la subpartida por Centros de Responsabilidad para el 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de responsabilidad** | **Formulado 2021** | **Porcentaje** |
| Organismo de Investigación Judicial | 2,168,958,226 | 31% |
| Tercer Circuito Judicial Alajuela | 1,318,545,000 | 19% |
| Primer Circuito Judicial San José | 880,671,519 | 12% |
| Dirección Ejecutiva | 831,882,038 | 12% |
| Administración de Turrialba | 627,690,000 | 9% |
| Segundo Circuito Judicial Alajuela | 313,125,000 | 4% |
| Dirección de Tecnología de Información | 300,000,000 | 4% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 237,805,641 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 200,000,000 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Sur | 80,000,000 | 1% |
| Administración de Santa Cruz | 60,000,000 | 1% |
| Administración de Sarapiquí | 46,760,000 | 1% |
| Segundo Circuito Judicial Guanacaste | 10,000,000 | 0% |
| Unidad de Adiestramiento | 4,755,437 | 0% |
| Circuito Judicial Heredia | 1,500,000 | 0% |
| **TOTAL** | **7,081,692,861** | **100%** |

-0-

**Se acordó:** Aprobar los requerimientos solicitados por los distintos Centros de Responsabilidad en las subpartidas 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos; 10801 Mantenimiento de edificios y locales; y 50201 Edificios. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XIII**

**DOCUMENTO N°** **4567-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 03 de abril de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de la **Subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo**

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Tabla 1. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Monto Formulado | 1.215.744.317 | 824.011.808 | 809.331.213 | 833.379.048 | 960.455.760 |
| Variación | - | -32% | -2% | 3% | 15% |

Fuente: SIGA PJ

El incremento que se presenta para 2021 responde principalmente a la inclusión de recursos por ¢181.527.000 requeridos para hacerle frente al servicio que demandan los usuarios a nivel nacional, se estima realizar una compra de horas técnicos por demanda, lo anterior previendo la disminución en permisos con goce de salario para la Dirección de Tecnología de la Información.

**Figura N° 1. Formulación 2017 – 2021**

Para el año 2021 se incluyen recursos en el Área de Informática para dar continuidad al proyecto de desarrollo de los servicios institucionales, la contratación de servicio NOC(Centro de Operaciones de Red) remoto y el Proyecto de SOC(Centro de Operaciones de Seguridad) para el Poder Judicial, para lo que se incluyen ¢83.870.000.

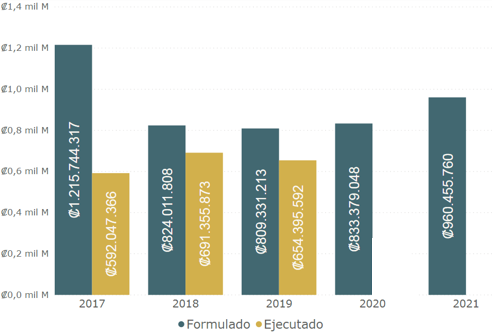
Por parte del Área de Seguridad se requieren los recursos para el Departamento de Seguridad con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Ejecutivo 24037 del Ministerio de Salud, el cual rige lo concerniente al uso de máquinas de rayos en materia de protección radiológica, para lo que se incluye ¢23.427.612.

Es importante señalar que estos recursos fueron presentados como parte del presupuesto del Área de Seguridad y se incluyen por primera vez los recursos (¢23.427.612) para el alquiler de dosímetros, según lo establecido en el artículo N°73 del Reglamento Sobre Protección contra las Radiaciones Ionizantes del Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N° 24037-S, para los oficiales de seguridad que mantienen contacto con las máquinas de rayos x.

Además se indica:

*“Todo trabajador ocupacionalmente expuesto que trabaje en una zona controlada deberá portar su dosímetro personal durante toda la jornada laboral aquellos que sólo lo hagan en zonas supervisadas quedarán sujetas, en cuanto al uso del dosímetro, a la evaluación y decisión de la autoridad competente”*

**Figura N° 2. Formulación y Ejecución Periodos 2017 – 2021**



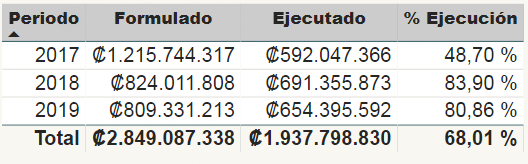
Fuente: SIGA PJ

En la figura anterior, se puede observar el comportamiento de la subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, tanto en la formulación, como en la ejecución. De los años que se presentan en el gráfico, el periodo 2017 presentó el punto más alto en la formulación, sin embargo, la ejecución estuvo muy por debajo.

Para los periodos 2018 al 2020 la formulación se mantiene equiparada y en el periodo 2021 se presenta un crecimiento. En cuanto a la ejecución de recursos para estos periodos el comportamiento se ha mantenido por debajo de la formulación.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Tabla 2. Ejecución presupuestaria periodos 2017 – 2019**



Fuente: SIGA PJ

Durante los periodos 2017 - 2019 el porcentaje de ejecución estuvo por debajo del 100%, siendo el periodo 2017 el que representó la menor ejecución con un 48.70%; ya para los periodos 2018 y 2019 la ejecución creció, con porcentajes del 83.90% y 80,86% respectivamente; lo que representó a nivel global una ejecución de 68,01% para dichos periodos presupuestarios.

### Variación por programa 2020-2021

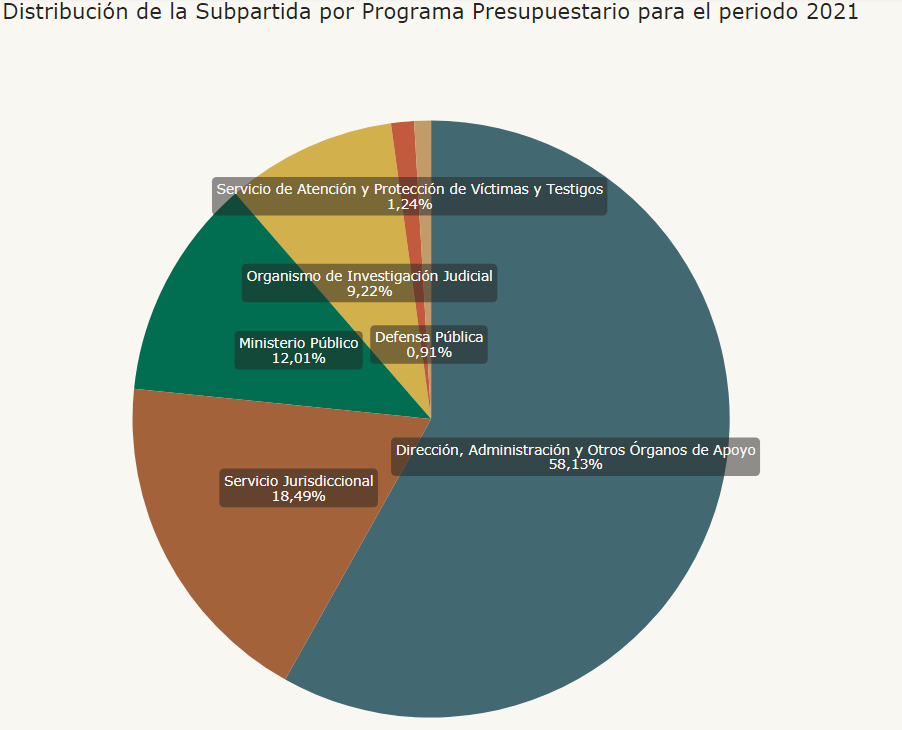
Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario, se determina que el Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que presenta la mayor formulación de recursos en la subpartida Otros Servicios de Gestión y Apoyo, con un monto superior al del periodo 2020, y un porcentaje de variación del 39%; seguido del Programa 927 Servicio Jurisdiccional con una variación del 3% y el Programa 929 Ministerio Público con 13%.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Tabla 3. Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución 2019** | **2020** | **2021** | **Diferencia** | **% Variación** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 326.211.640 | 402.793.732 | 558.278.612 | 155.484.880 | 39% |
| Servicio Jurisdiccional | 160.936.394 | 172.675.452 | 177.598.330 | 4.922.878 | 3% |
| Organismo de Investigación Judicial | 48.674.805 | 136.035.659 | 88.554.733 | -47.480.926 | -35% |
| Ministerio Público | 105.132.039 | 102.569.428 | 115.392.545 | 12.823.117 | 13% |
| Defensa Pública | 7.538.636 | 7.133.679 | 8.729.540 | 1.595.861 | 22% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 5.902.077 | 12.171.098 | 11.902.000 | -269.098 | -2% |
| Total | 654.395.592 | 833.379.048 | 960.455.760 | 127.076.712 | 15% |

Fuente: SIGA PJ

**Figura N° 3. Distribución de recursos por programa, para la subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo**

Según se muestra en la figura N° 3, el programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, es el que formula la mayor cantidad de recursos para el periodo 2021, con un total de ¢558.278.612, lo que representa un 58,13% del total de los recursos de la subpartida; seguido del Programa 927 Servicio Jurisdiccional con ¢177.598.330 para un total del 18,49% y el Programa 929 Ministerio Público con ¢115.392.545 y un porcentaje del 12,01%.

En un menor porcentaje los programas 928, 930 y 950 representan un 11.37% del total de recursos formulados.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

Centros de responsabilidad con los montos más representativos dentro de la subpartida.

**Tabla 4. Distribución de la subpartida por Centro de Responsabilidad Periodos 2020 – 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de responsabilidad** | **2021** | **Porcentaje** |
| Dirección de Tecnología de Información | 210.212.000 | 22% |
| Ministerio Público | 115.392.545 | 12% |
| Organismo de Investigación Judicial | 88.554.733 | 9% |
| Área de Informática | 83.870.000 | 9% |
| Dirección Ejecutiva | 66.731.550 | 7% |
| Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | 39.057.621 | 4% |
| Primer Circuito Judicial San José | 35.329.003 | 4% |
| Área de Seguridad | 26.887.612 | 3% |
| Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | 25.750.000 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Zona Atlántica | 22.844.639 | 2% |
| Dirección Gestión Humana | 21.609.400 | 2% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Sur | 17.210.028 | 2% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 16.785.267 | 2% |
| Circuito Judicial Heredia | 15.890.183 | 2% |
| Administración de Santa Cruz | 13.573.258 | 1% |

Fuente: SIGA PJ

Según se muestra en el cuadro anterior, la concentración de recursos para el periodo 2021 por Centro de Responsabilidad, recae sobre la Dirección de Tecnología de la Información con ¢210.212.000, el Ministerio Público con ¢115.392.545, el Organismo de Investigación Judicial con ¢88.554.733 y el Área de Informática con ¢ 83.870.000, lo que representa un 52% de la totalidad de recursos de la subpartida.

En el caso de la Dirección de Tecnología de la Información, quien es el centro de responsabilidad que provoca el incremento de la subpartida se indica que los recursos solicitados se encuentran justificados y distribuidos de la siguiente manera:

* Un monto de ¢181.527.000 es requerido, previendo la disminución en el personal, por permisos con goce que ya no se estarán brindando y es necesario hacerle frente al servicio que demandan los usuarios a nivel nacional, se estima realizar una compra de horas técnicos por demanda.
* Además, se formularon ¢28.250.000 para consultorías en otros servicios de gestión de apoyo, debido a la cantidad de procesos de COBIT implantados en la Dirección de Tecnología de Información desde el año 2019, es necesario aplicar la mejora continua a los mismos, por ende, se necesita apoyo de consultorías para aplicar las evaluaciones y las oportunidades de mejoras que las mismas indiquen.

**Al respecto, es importante señalar que la Dirección de Planificación estima que las labores afines a las consultorías relacionadas con COBIT, deberían ser abordada por el Subproceso de Normas y Estándares de DTI, siendo que esta oficina tiene la capacidad humana para realizar tales labores.**

***Detalle de artículos para la subpartida 10499 Servicios de Gestión y Apoyo***

***Periodo 2021***

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalle de Artículos** | **Cantidad** |
| SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 430.688.354 |
| PERITAJES | 170.021.271 |
| TRADUCCIONES | 101.259.572 |
| SERVICIO DE MONITOREO POR GPS | 61.218.459 |
| SERVICIO DE FUMIGACION | 59.661.324 |
| CONSULTORIA EN OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 44.062.423 |
| SERVICIO DE TRADUCCIONES | 24.035.336 |
| ALQUILER DE DOSIMETRO | 23.814.577 |
| REVISION TECNICA VEHICULAR (RITEVE) | 21.429.658 |
| SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION | 8.666.274 |
| SERVICIO DE CEMENTERIO PARA ENTIERRO DE CADAVERES | 5.892.858 |
| SERVICIO DE INSTALACION Y/O REUBICACION DE CAMARAS DE VIDEO | 3.460.000 |
| PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR DE CO2 | 1.970.320 |
| SERVICIO DE INSTALACION | 1.500.000 |
| PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR DE POLVO QUIMICO | 945.863 |
| PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR DE AGUA | 667.726 |
| SERVICIO ENMARCADO CUADROS | 570.000 |
| PERITAJE DE UNIFORMES INSTITUCIONALES | 380.245 |
| SERVICIO DE DESTRUCCION DE BIENES DECOMISADOS | 111.500 |
| SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS | 100.000 |
| **Total general** | **960.455.760** |

A continuación se presenta el detalle de los requerimientos o servicios que pretenden adquirir los Centros de Responsabilidad que formulan recursos en el artículo denominado “***Servicios de Gestión y Apoyo***”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servicios de Gestión y Apoyo** | | |
| **Artículos** | **Total** | **Observaciones** |
| Dirección de Tecnología de Información | 181.527.000 | Estos recursos se solicitan para hacerle frente al servicio que demandan los usuarios a nivel nacional, se estima realizar una compra de horas técnicos por demanda, lo anterior previendo la disminución en permisos con goce de Salario para la Dirección de Tecnología de la Información. |
| Área de Informática | 83.870.000 | Detalle de los recursos solicitados: ¢23.870.000 para continuar con el proyecto de desarrollo del plan de continuidad de los servicios institucionales; ¢30.000.000 para la contratación de servicio NOC(Centro de Operaciones de Red) remoto y ¢30.000.000 para el Proyecto de SOC(Centro de Operaciones de Seguridad) para el Poder Judicial |
| Organismo de Investigación Judicial | 46.829.960 | Estos recursos son requeridos para el pago de auditorías y evaluaciones por parte del ente acreditador (ANAB), para efectos de  contar con certificación de calidad en el Laboratorio Forense. Para uso en acreditación norma ISO en Medicina Legal. Para contrato EBI en la Oficina de Depósito de Objetos, para el contrato para la destrucción de evidencias que por orden del juez quedan eliminadas del proceso. |
| Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | 30.391.347 | Los recursos se requieren para el pago del contrato 032119 ¨Servicio de difusión, monitoreo y análisis de las interacciones en redes sociales sobre temas del Poder Judicial¨. |
| Dirección Ejecutiva | 26.189.132 | Los recursos son para la atención del servicio que brinda el proceso de Inversiones de Financiero Contable. |
| Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | 25.750.000 | Los recursos se requieren para las consultorías de la Política de Justicia Abierta y la Política de Participación Ciudadana. Además, para la Consultoría de Apoyo a la Subcomisión de personas migrantes y refugiadas con la finalidad de complementar las responsabilidades como ente coordinador de la Subcomisión. |
| Dirección Gestión Humana | 21.609.400 | Se detalla distribución de los recursos: ¢20.600.000 para realizar dos estudios socios laborales en circuitos judiciales a definir, que permita conocer y comprender mejor la realidad interna actual y recomendar mejoras en la calidad de vida laboral por medio de análisis de datos cualitativos y cuantitativos. ¢1.009.400 para atender el Contrato que presta el servicio de profesionales para realizar encuestas de mercado sobre los salarios y beneficios del Poder Judicial con otras entidades públicas y privadas. |
| Escuela Judicial | 6.500.000 | Los recursos son necesarios para la contratación de servicios profesionales de apoyo a los Programas de Formación Inicial de Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), y de especialización y actualización para juezas y jueces. |
| Despacho de la Presidencia | 2.163.900 | Despacho de la Presidencia: Servicios profesionales en fotografía, interpretación Lesco. Sección de Gestión Administrativa: Contratación de interprete en lenguaje de señas según se requieran en actividades oficiales. Sección de Cooperación: Contratación de intérpretes en lenguaje de señas para atender las distintas actividades que se realizan durante el año, importante indicar que por la naturaleza de esta oficina se realizan gran cantidad de foros, cumbres judiciales, talleres y otras actividades oficiales. |
| Circuito Judicial Puntarenas | 2.000.000 | Los recursos son para Peritajes, Traducciones y Servicios de Monitoreo por GPS. |
| Comisiones Institucionales (Salud Ocupacional). | 1.891.186 | Estos recursos se requieren para confeccionar afiches, comunicados, volantes, despegables, entre otros, para promover el Modelo y Programa de Salud Ocupacional a nivel institucional. |
| Ministerio Público | 1.360.789 | Estos recursos se requieren para atender la contratación del nuevo arte para el carnet de funcionarios del Ministerio Público, configuración de software del equipo e incluye la confección de troquel, para cumplir con los lineamientos del nuevo manual de identidad del Ministerio Público. |
| Presidencia de la Corte | 605.640 | Para el pago de servicios fotográficos con motivo del informe de labores y servicios de curador en arte, en los casos que se adquieran obras o alguna restauración y se tenga que hacer un avalúo. |
| **Total general** | **430.688.354** |  |

A continuación se presenta el detalle de los requerimientos o servicios que pretenden adquirir los Centros de Responsabilidad que formulan recursos en el artículo denominado “***Consultoría en otros Servicios de Gestión y Apoyo***”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Consultoría en otros Servicios de Gestión y Apoyo** | | |
| **Artículos** | **Total** | **Observaciones** |
| Dirección de Tecnología de Información | 28.250.000 | Los recursos son para consultorías en otros servicios de gestión de apoyo, debido a la cantidad de procesos de COBIT implantados en la Dirección de Tecnología de Información desde el año 2019, es necesario aplicar la mejora continua a los mismos, por ende, se necesita apoyo de consultorías para aplicar las evaluaciones y las oportunidades de mejoras que las mismas indiquen |
| Organismo de Investigación Judicial | 9.312.423 | Estos recursos se requieren para el pago del contrato 034118 ¨Contratación del servicio de recepción de los desechos resultantes de las destrucciones realizadas por el Depósito de Objetos del OIJ¨ |
| Contraloría de Servicios | 6.500.000 | Los recursos se requieren para la contratación de una consultoría que permita dar seguimiento al proyecto denominado "Modelo Integral de Atención de la Persona Usuaria en el Poder Judicial". |
| **Total general** | **44.062.423** |  |

**Se acordó**: Aprobar los recursos solicitados en la subpartida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XIV**

**DOCUMENTO N°** **4569-20**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 03 de abril de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de las **Subpartidas 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo y 50105 Equipo de Cómputo**

# **Subpartidas relacionadas con informática**

En las dos subpartidas presupuestarias relacionadas con Informática, ambas presentaron una disminución en la solicitud de recursos del periodo 2021 en comparación con lo formulado en el año anterior, generando un decrecimiento general del 20,34%. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**Figura n° 1. Comparativo del presupuesto de las subpartidas de informática período 2020-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Presupuesto 2020** | **Formulado 2021** | **Diferencia Absoluta** | **Variación Relativa** |
| 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo | ¢1.801.100.453 | ¢1.611.602.435 | (¢189.498.018) | -10,52% |
| 50105 Equipo de Cómputo | ¢4.319.778.407 | ¢3.264.385.605 | (¢1.055.392.802) | -24,43% |
| **Total** | **¢6.120.878.860** | **¢4.875.988.040** | (¢1.244.890.820) | **-20,34%** |

Fuente: SIGA PJ

Estas subpartidas presupuestarias tuvieron un decrecimiento importante, en términos absolutos esta disminución representó ¢1.055.392.802 en la subpartida 50105 Equipo de Cómputo y 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo tuvo una reducción de ¢189.498.018. En este sentido se debe considerar que el Consejo Superior en el presupuesto del 2020, aprobó la propuesta de la Dirección de Tecnología de la Información de trasladar los recursos del alquiler de equipo de cómputo para la compra de equipo propio.

En cuanto al alquiler del equipo de cómputo en el 2020 se formularon los contratos N°054118 con la cantidad de 6.140 computadoras y el contrato N°061115 con la empresa GBM para el alquiler de 3.658 computadoras. Para este último contrato solamente se incluyeron los recursos de los primeros 6 meses del año, mientras se realizaba la compra y distribución de las computadoras institucionales. Esta situación que implicó sustituir el alquiler de equipo de cómputo por equipo propio, hizo que para el 2020, se tuviera que hacer una gran inversión que incrementó la subpartida 50105 Equipo de cómputo.

En el anteproyecto de presupuesto del 2021 ya solamente se generaron los recursos de un contrato que es el N°054118 y la subpartida 50105 Equipo de cómputo disminuye porque la inversión de compra de computadoras se realizó con recursos del 2019 y 2020.

Es importante indicar que los recursos formulados en la subpartida 50105 Equipo de Cómputo representa un 67%, el restante 33% corresponde a la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo

## Subpartida 1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo

Lo recursos formulados en esta subpartida se destinan al pago del contrato relacionado con el arrendamiento de los equipos de cómputo que utiliza los funcionarios judiciales. Durante los últimos tres periodos presupuestarios el comportamiento de este rubro ha sido principalmente hacia la baja, por las razones expuestas anteriormente.

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Figura n° 2. Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 1.799.086.395 | 2.432.732.682 | 2.027.094.851 | 1.801.100.453 | 1.611.602.435 |
| **Variación** |  | 35% | -17% | -11% | -11% |

Fuente: SIGA PJ

El decrecimiento que se viene dando en los últimos dos años se debe a los siguientes aspectos:

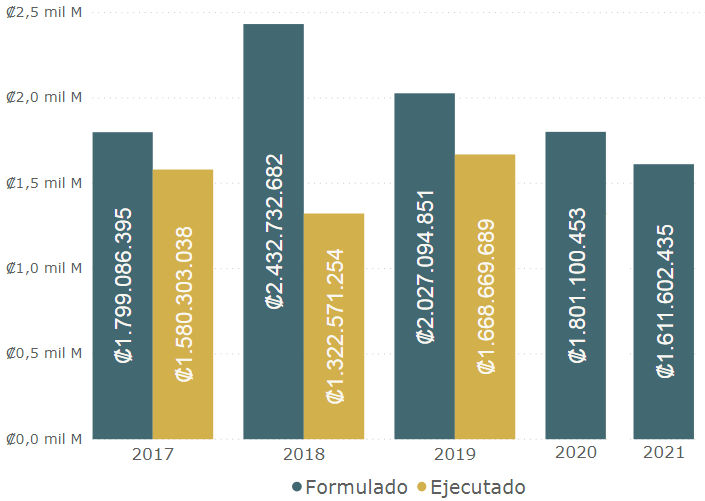
* En el periodo 2020, se formuló originalmente un monto de ¢2.230.398.880, sin embargo; se trasladaron recursos para la subpartida 50105 equipo de cómputo por un monto de ¢429.298.427 para adquirir las unidades en lugar de alquilarlas, según estudio de costo beneficio realizado por la Dirección de Tecnología de la Información.
* Para el 2021 se formularon los recursos para dos contratos, el primero relacionado con el arrendamiento de las computadoras, el cual representa el 99,4% del total formulado en esta subpartida (contrato N°054118) y el otro que corresponde a una contratación de terminales electrónicas de recolección de información para uso de la Contraloría de Servicios (contrato N°079118). Ambos contratos están pactados en dólares, lo cual implicó una disminución en el monto solicitado de un periodo a otro, ya que el tipo de cambio del dólar en el 2020 fue de ¢628,44 y para el 2021 se estableció en ¢608,66 según las estimaciones realizadas por el Departamento de Financiero Contable.

A continuación, se muestra el gráfico correspondiente a los montos formulados y ejecutados dentro de los periodos 2017-2021.

**Figura n° 3.**

**Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo**

**Formulación y Ejecución Periodos 2017 - 2021**



Fuente: SIGA PJ

Del gráfico anterior, podemos visualizar que existe una diferencia importante en cada año, lo que se traduce en un monto pendiente de ejecutar.

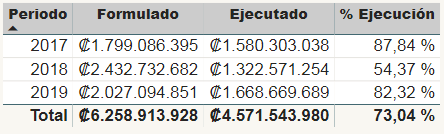
### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la ejecución respecto a lo formulado:

**Figura n°4.**

**Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo**

**Ejecución presupuestaria periodos 2017 -2019**



Fuente: SIGA PJ

Como se observa en el gráfico anterior, los montos ejecutados están por debajo de lo formulado, para el 2018 es donde se tiene la ejecución más baja con un 54%, lo que representó un monto de ¢1.110.161.428 en términos absolutos. La ejecución más alta en ese trienio fue de un 88% en el 2017, no obstante; los recursos sin ejecutar fueron de ¢218.783.357.

### Variación por programa 2020-2021

En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución de los recursos formulados en esta subpartida para el periodo 2021. Se puede observar una disminución muy importante en el programa 926 Dirección y Administración, en este sentido se debe detallar que en la formulación del presupuesto del 2020 se presentó la particularidad de que para el contrato N°054118 con 6.140 computadoras, no se tenía la distribución por oficina y programa de 1.000 de éstas,

Esto conllevó a que se incluyeran temporalmente durante el 2020, los costos del alquiler de estas 1.000 computadoras en la Dirección de Tecnología de la Información (Programa 926), esta situación generó para este periodo un incremento en esta subpartida y este programa. Para el 2021 el contrato ya fue distribuido como correspondía en cada una de las oficinas y programas presupuestarios, lo cual se muestra precisamente en esta disminución del programa 926 e incremento en los otros programas.

**Figura n°5.**

**Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo.**

**Porcentaje de variación por programa periodos 2020 – 2021**

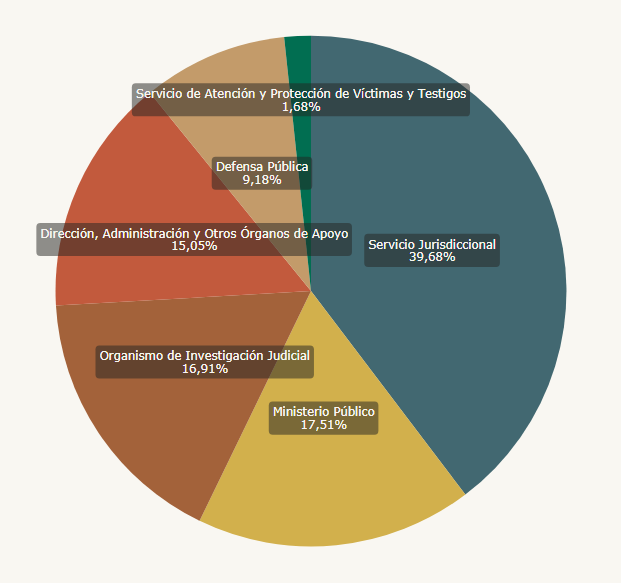
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecutado 2019** | **Aprobado 2020** | **Formulado 2021** | **Diferencia** | **Variación %** |
| Dirección, Administrac. y Otros Órganos Apoyo | 743.739.711 | 528,357,002 | 242,517,168 | (285,839,834) | -54% |
| Servicio Jurisdiccional | 544.007.678 | 658,810,313 | 639,405,247 | (19,405,066) | -3% |
| Organismo de Investigación Judicial | 193.313.674 | 269,046,210 | 272,536,939 | 3,490,729 | 1% |
| Ministerio Público | 81.531.688 | 217,735,268 | 282,135,899 | 64,400,631 | 30% |
| Defensa Pública | 93.533.370 | 98,942,172 | 147,978,442 | 49,036,270 | 50% |
| Serv. Atenc – Protec. Víctimas y Testigos | 12.543.568 | 28,209,488 | 27,028,740 | (1,180,748) | -4% |
| **Total general** | 1.668.669.689 | 1,801,100,453 | 1,611,602,435 | (189,498,018) | -11% |

Fuente: SIGA PJ

Es importante señalar que en los casos del Ministerio Público y la Defensa Pública, además del tema de la distribución de computadoras que se tiene en el 2021, el alquiler de portátiles es más caro que aquellas unidades de escritorio. El contrato viejo tenía un costo promedio de $22 por computadora, el contrato N°054118 tiene un costo de $25,46 en el caso de computadoras de escritorio y $46,61 para los portátiles. Además del incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de la subpartida por programa presupuestario:

**Figura N° 6. Distribución de recursos por programa para la subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo.**



Fuente: SIGA PJ

Del gráfico anterior se concluye que, el Programa 927 Servicio Jurisdiccional es el principal solicitante de recursos en esta subpartida siendo que su requerimiento representa actualmente el 39,68%, lo cual responde a que este programa presupuestario cuenta con la mayor cantidad de funcionarios, en el 2019 representó el 36% del total del personal judicial según la Relación de Puestos de ese periodo.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

Centros de responsabilidad con los montos más representativos dentro de la subpartida.

**Figura n°7**

**Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo**

**Distribución por Centro de Responsabilidad de la Subpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2020** | **2021** | **Representación** |
| Ministerio Público | 217,735,268 | 282,135,899 | 18% |
| Organismo de Investigación Judicial | 269,046,210 | 272,536,939 | 17% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 177,756,645 | 201,893,277 | 13% |
| Defensa Pública | 98,942,172 | 147,978,442 | 9% |
| Circuito Judicial Cartago | 62,775,567 | 81,148,523 | 5% |
| Circuito Judicial Heredia | 58,170,409 | 61,979,094 | 4% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 49,312,602 | 55,461,076 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 39,301,224 | 50,938,779 | 3% |
| Segundo Circuito Judicial Alajuela | 40,719,279 | 48,817,939 | 3% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 35,871,748 | 46,614,201 | 3% |

Fuente: SIGA PJ

Tres de los primeros cinco centros de responsabilidad más representativos corresponden a aquellos que son programas presupuestarios, entiéndase; el Ministerio Público (18%), Organismos de Investigación Judicial (17%), y la Defensa Pública (9%).

## Subpartida 5.01.05 Equipo de Cómputo

En esta subpartida se formulan los recursos para la adquisición de equipo computacional, inicialmente las oficinas deben solicitar los artículos tecnológicos menores o de tipo estratégico asociados a este rubro, a través del Área de Informática que administra la Dirección de Tecnología de Información, posteriormente los recursos aprobados por el Consejo Superior son distribuidos entre aquellos centros de responsabilidad que plantearon el requerimiento.

### Comportamiento histórico de la subpartida

**Figura n° 9 Detalle del comportamiento histórico de la subpartida 50105 Equipo de Cómputo. Periodo 2017 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Monto formulado** | 2.863.552.088 | 3.888.567.523 | 3.830.478.908 | 4.319.778.407 | 3.263.117.745 |
| **Variación** |  | 36% | -1% | 13% | -32% |

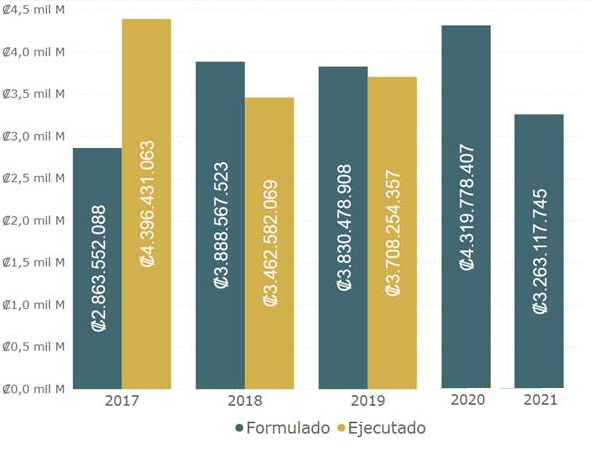
Fuente: SIGA PJ

Como se observa en el cuadro anterior, el comportamiento de la subpartida es bastante fluctuante entre los aumentos y reducciones. Al considerar la diferencia del primer año con respecto al último en términos absolutos, este rubro incrementó en ¢399.765.667. Siendo que, para los años 2018 y 2021 se presenta el incremento más importante con un 36%, mientras que en el 2021 se presentó la reducción más representativa con un 24%. Como se observa en el cuadro, es el periodo 2020 en el que se formuló el monto más representativo de este quinquenio, lo anterior se debe a la adquisición de computadoras portátiles por un monto de ¢604.616.293.

**Figura N° 10.**

**Subpartida 50105 Equipo de Cómputo**

**Formulación y Ejecución Periodos 2017 - 2021**



Fuente: SIGA PJ

El gráfico anterior muestra que, para el 2017 se tuvo que reforzar la subpartida mediante modificaciones presupuestarias, no obstante; en los siguientes periodos los recursos formulados fueron suficientes para costear los requerimientos solicitados en este rubro. Se puede visualizar la premisa expuesta inicialmente en este apartado respecto al incremento entre el primer año y el último fue modesto, el cual representó un 14%.

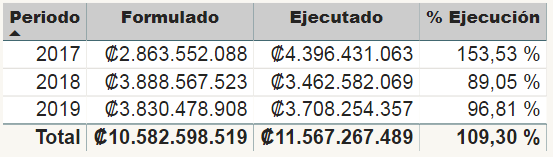
En este punto, es oportuno señalar que la Dirección de Tecnología a la luz de la emergencia nacional en el tema del Coronavirus, visualiza que en el corto plazo la modalidad del teletrabajo representa la alternativa para dirigir los principales esfuerzos en materia tecnológica, con la consecuente necesidad de invertir en el fortalecimiento de enlaces y no necesariamente en la adquisición de equipo de cómputo.

### Análisis de la ejecución presupuestaria de la subpartida

**Figura n°11**

**Subpartida 50105 Equipo de Cómputo**

**Ejecución presupuestaria periodos 2017 -2019**



Fuente: SIGA PJ

Del cuadro anterior se puede deducir que en el período 2017-2019 se logró una ejecución del 109.3% de los recursos formulados.

### Variación por programa 2020-2021

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la variación para cada uno de los programas presupuestarios:

**Figura n°12.**

**Subpartida 50105 Equipo de Cómputo**

**Porcentaje de variación por programa periodos 2020 - 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecutado 2019** | **Aprobado 2020** | **Formulado 2021** | **Diferencia** | **Variación %** |
| Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 2 706 787 340 | 2 979 141 990 | 2 251 106 291 | (728 035 699) | -24% |
| Servicio Jurisdiccional | 241 113 336 | 360 423 558 | 371 941 159 | 11 517 601 | 3% |
| Organismo de Investigación Judicial | 364 220 656 | 475 796 395 | 485 728 972 | 9 932 577 | 2% |
| Ministerio Público | 229 779 208 | 303 690 990 | 60 447 527 | (243 243 463) | -80% |
| Defensa Pública | 137 916 298 | 146 780 150 | 69 002 597 | (77 777 553) | -53% |
| Serv. Atenc - Protec Víctimas y Testigos | 28 437 519 | 53 945 324 | 24 891 199 | (29 054 125) | -54% |
| **Total general** | 3 708 254 357 | 4 319 778 407 | 3 263 117 745 | (1 056 660 662) | -24% |

Fuente: SIGA PJ

Al analizar el cuadro anterior, se puede determinar que el Programa Presupuestario 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo tiene un decrecimiento de ¢727,835,689 en términos absolutos, siendo el monto más considerable. Lo anterior, se debe a que en el 2020 se destinaron recursos para equipos y programas por un monto de ¢259.560.000 y ¢196.287.100 computadores de tipo tableta, además de los ¢341.065.601 que se destinaron para la compra de computadoras portátiles, lo cual consecuentemente disminuye para el 2021.

Por otro lado, se puede identificar una reducción importante de recursos formulados por el Programa Presupuestario 929 Ministerio Público, esto se debe a la baja o nula en la solicitud en ciertos artículos tales como UPS para microcomputadoras (¢14.159.410), impresoras láser a color (¢13.438.271), escáner de alta resolución (¢12.694.587) y equipo multifuncional(¢14.463.260), pero el decrecimiento más considerable se dio en la disminución de recursos que se destinan para la adquisición de computadoras (portátiles y de escritorio), el cual pasó de ¢177.366.000 en el 2020, a tan solo ¢28.389.917, es decir; una disminución de 84% en la solicitud de este artículo, por la misma razón explicada en el punto anterior.

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de la subpartida por programa presupuestario:

**Figura n° 13.**

**Subpartida 50105 Equipo de Cómputo**

**Distribución de recursos por programa**

Fuente: SIGA PJ

Del gráfico anterior se concluye, que el programa presupuestario 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo es el principal solicitante de recursos, absorbiendo el 68,99% de los recursos formulados, seguido por el Organismo de Investigación Judicial con un 14,89%.

Lo anterior responde mucho a que en estos programas se encuentran oficinas especializadas en el área tecnológica tales como la Dirección de Tecnología de Información en el Programa 926, mientras que, en el Programa 928 se encuentran la Unidad Tecnológica de Informática, la Plataforma de Información Policial y la Sección Especializada contra el Cibercrimen.

### Distribución por Centro de Responsabilidad

En el siguiente cuadro se muestra el detalle la distribución de los recursos formulados por centro de responsabilidad:

**Figura n°14 Distribución por Centro de Responsabilidad de la Subpartida 50105 Equipo de Cómputo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Responsabilidad** | **2020** | **2021** | **Representación** |
| Dirección de Tecnología de Información | 2 353 509 476 | 1 722 058 986 | 52,8% |
| Organismo de Investigación Judicial | 475 796 395 | 485 728 972 | 14,9% |
| Dirección Ejecutiva | 152 514 214 | 411 522 440 | 12,6% |
| Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento Función Jurisdiccional | 2 987 000 | 362 191 125 | 11,1% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 11 484 500 | 111 723 934 | 3,4% |
| Defensa Pública | 146 780 150 | 69 002 597 | 2,1% |
| Ministerio Público | 303 690 990 | 60 447 527 | 1,9% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 53 945 324 | 24 891 199 | 0,8% |
| Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) | 26 025 600 | 6 771 001 | 0,2% |
| Departamento de Trabajo Social y Psicología | 5 731 825 | 2 945 379 | 0,1% |

Fuente: SIGA PJ

Como se observa en el cuadro anterior, la Dirección de Tecnología de Información es quien formuló poco más del 50% de recursos que pertenecen a esta subpartida, seguido del Organismo de Investigación Judicial con un 14,9% y con una solicitud de recursos un poco menor, la Dirección Ejecutiva formuló el 12,6% del monto de esta subpartida.

**Se acordó:**  Aprobar los recursos formulados en las subpartidas 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo y 50105 Equipo de Cómputo. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XV**

**DOCUMENTO N°** **4570-2020**

La Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presentó en la sesión del pasado 03 de abril de 2020, la información concerniente a la formulación presupuestaria para el 2021 de las **Subpartidas 10501 Transporte dentro del país, 10502 Viáticos dentro del país, 10503 Transporte en el exterior y 10504 Viáticos en el exterior**

**Tabla 1. Subpartidas Gastos de Viaje y Transporte**

**Comparativo Presupuesto 2020-2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Las Directrices Técnicas para la Programación Anual y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021, establecen para estas subpartidas lo siguiente:

* Con relación a los Gastos de Viaje y Transporte en el Interior del País, de acuerdo con los lineamientos para formulación presupuestaria 2014, aprobados por Consejo Superior en la sesión N°12-13, artículo VII y acogidos por Corte Plena en sesiones Nº13-13, artículo XLIV y Nº28-2017, artículo XV, se aprobó que se deben limitar las giras y en su lugar, hacer uso de medios tecnológicos para realizar reuniones, conversatorios, actividades de capacitación y diligencias judiciales. De manera que, en todos los casos, los montos formulados se comparan con los ejecutados y se aprueba la formulación únicamente de lo ejecutado en el 2019 más el porcentaje de aumento definidos para los años 2020 y 2021.
* Con relación a los Gastos de Viaje y Transporte al Exterior del país, como medida de contención del gasto, la Corte Plena en sesión N°28-2017, artículo XV, aprobó restringir las autorizaciones para viajes al exterior, realizando únicamente aquellos viajes oficiales de interés institucional que sean estricta y absolutamente necesarios, en los cuales todos los gastos sean cubiertos por la entidad organizadora, se exceptúa de lo anterior, los viajes para atender compromisos previamente adquiridos relacionados con las Cumbres Judiciales y la Interpol. Al igual que restringir el pago de diferencias o viáticos complementarios cuando sea procedente.[[1]](#footnote-1) Posteriormente, el Consejo Superior en la sesión N°12-13, artículo VII y Corte Plena en la sesión N°13-13, artículo XLIV, aprueban los lineamientos para formulación presupuestaria 2014, en donde se acuerda que, **en Gastos de Viaje y Transporte en el Exterior del País, se debe mantener el mismo monto del presupuesto aprobado para el año anterior**.

Adicionalmente debe considerarse que los gastos que se autoricen por estas subpartidas deben corresponder a aquellos compromisos a nivel internacional previamente adquiridos por el Poder Judicial y se debe justificar explicando claramente la necesidad y el beneficio que recibirá la Institución.

1. **Subpartida 1.05.01 Transporte dentro del País**
2. **Comportamiento Histórico de la Subpartida**

Los recursos formulados en la subpartida 10501 Transporte dentro del País, responden a las necesidades de traslado dentro del territorio nacional cuando los servidores judiciales se desplazan de su lugar de trabajo para realizar sus actividades laborales. También se incluyen recursos para personas externas a la Institución, a través de ayudas económicas para víctimas y testigos y a facilitadores judiciales.

**Tabla 2. Detalle del Comportamiento Histórico de la Subpartida 10501**

**Transporte dentro del País, Periodos 2017-2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En la tabla anterior se muestran los montos formulados en la subpartida 10501 Transporte dentro del País para los últimos 5 años, presentando un decrecimiento para el 2019 y 2020, pero para el 2021 se incrementa en un 15,25% lo cual significa que se incluyen **¢16.977.985** más que el año anterior.

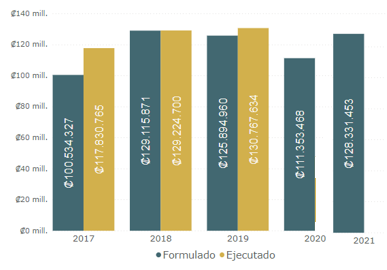
Al revisar el detalle de los Centros de Responsabilidad debe indicarse que todos se ajustaron a la directriz institucional, no obstante, en el caso de la Dirección Ejecutiva se presenta un exceso del límite correspondiente por un total de ¢1.504.511 que según indicó obedece a las crecientes necesidades que se han presentado.

En el caso de la Dirección Ejecutiva tuvo que asumir el Programa de Descongestionamiento de Vehículos, por parte de la Proveeduría se indica que las labores realizadas por el Almacén responden a las necesidades que tenga la institución y de eso dependerá la cantidad de giras y visitas que se realicen a las oficinas judiciales, esto fuera de las programadas en el cronograma anual, lo cual incluye la apertura de edificios y oficinas nuevas; además se requieren los recursos por los costos en los peajes debido al frecuente uso que se hace de la ruta 27 para la realización de giras a todo al territorio nacional.

En el caso del Departamento de Artes Gráficas se debe a las constantes giras a provincias que hace el personal, donde lo usual es que se vayan en vehículo oficial, pero su regreso lo hacen en transporte público.

**Figura N°1. Formulación y Ejecución Subpartida 10501**

**Periodos 2017 - 2021**



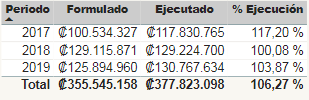
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En el gráfico anterior se representa la formulación y ejecución presupuestaria de la subpartida 10501 Transporte dentro del País para el periodo del 2017 al 2021. A nivel institucional esta subpartida muestra que la ejecución presupuestaria ha estado por encima de lo que se ha formulado.

1. **Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Subpartida**

**Tabla 3. Ejecución Presupuestaria Periodos 2017-2019**

**Subpartida 10501 Transporte dentro del País**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Durante los tres periodos presupuestarios que se muestran en la tabla se observa una ejecución presupuestaria por encima del 100%; aunque no son diferencias muy elevadas, reflejan que lo que se está formulando ha sido necesario reforzarlo para poder cumplir con las necesidades.

1. **Variación por Programa 2020-2021**

Al realizar el análisis comparativo por programa presupuestario de esta subpartida, se determina que el programa 926 Dirección y Administración es el que presenta el mayor incremento con un 28,29%, seguido del 927 Servicio Jurisdiccional con un 27,44% y el 930 Defensa Pública con un 10,55%. Los programas 928 Organismo de Investigación Judicial, 929 Ministerio Público y 950 Programa de Atención y Protección, muestran un decrecimiento de lo formulando en comparación con el 2020.

**Tabla 4**

**Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**

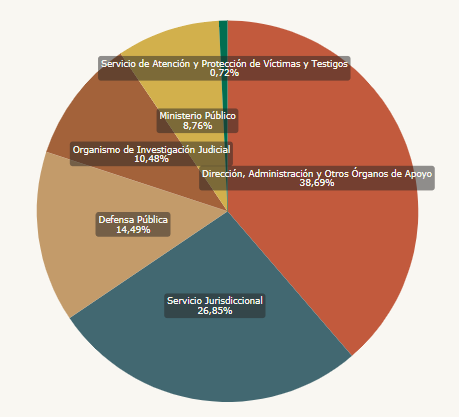
**Subpartida 10501 Transporte dentro del País**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Es importante indicar que el incremento que se aprecia en esta subpartida no responde a alguna nueva necesidad, sino a la aplicación de la directriz presupuestaria correspondiente, según la cual, en este caso, el monto máximo a formular para el 2021, puede ser igual a lo ejecutado para el 2019, dado que para el 2020 y el 2021 no hay porcentajes de crecimiento.

**Figura N°2. Distribución de la Subpartida 10501 Transporte dentro del País por Programa Presupuestario 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Como lo muestra el gráfico anterior, el programa presupuestario con más recursos formulados para el 2021 en la subpartida 10501 Transporte dentro del País, es el 926 Dirección y Administración con un total de ¢49.656.459 que representa un 38,69%, seguido por el 927 Servicio Jurisdiccional con ¢34.461.617 es decir un 26,85% y el 930 Defensa Pública con ¢18.600.000 que es un 14,49% del total. En un menor porcentaje los programas 928 Organismo de Investigación Judicial con ¢13.447.296 un 10,48%, 929 Ministerio Público con ¢11.241.893 un 8,76% y por último, el 950 Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos con ¢924.188 un 0,72%.

1. **Distribución por Centro de Responsabilidad**

En la siguiente tabla se muestran los 10 centros de responsabilidad con más recursos formulados para el 2021 en la subpartida 10501 Transporte dentro del País.

**Tabla 5.**

**Distribución de la Subpartida 10501 Transporte dentro del País de los 10 Centros de Responsabilidad con más recursos,**

**Periodos 2020–2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En el caso de la Defensa Pública, según consulta realizada a Melania Soto, Administradora señaló que en esta subpartida se reservan los recursos para atender las necesidades a nivel nacional, para el pago de transporte de los usuarios de los servicios que no cuentan con recursos y requieren asistir a audiencias o alguna diligencia en medicatura, que principalmente son de zona rurales lejanas y de bajos recursos económicos.

Por su parte, en el caso del OIJ la Licda. Carolina Castillo señaló que en torno a Transporte se prevén los recursos necesarios para funcionarios que se encuentran en capacitaciones o que por sus funciones no tengan vehículos asignados. Además, también se incluyen traslados en ferry y en este caso los costos son altos. Además, se incluyen ayudas económicas para las víctimas a retornar a sus lugares de procedencia y es necesario dotarlos de estos recursos. Se trata tanto de personas detenidas que son puestas en libertad, como también de personas que se tienen que presentar a Medicina Legal a realizar algún tipo de examen y luego no tienen recursos para regresarse a su lugar de residencia.

**Figura 3.  Distribución de la Subpartida por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2021**



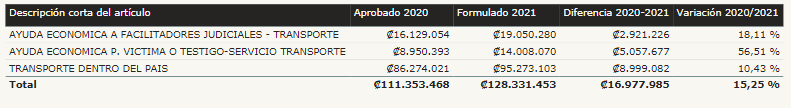
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en el gráfico anterior, los centros de responsabilidad con más recursos formulados en esta subpartida para el 2021 son: la Defensa Pública con ¢18.600.000, el Organismo de Investigación Judicial ¢13.447.296, el Ministerio Público con ¢11.241.893, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia con ¢8.996.510 y el Primer Circuito Judicial de Guanacaste con ¢8.470.160.

1. **Variación Distribución por Artículo**

En la siguiente tabla se representa la variación en la formulación detallada por artículo entre el año 2020 y 2021.

**Tabla 6. Variación de Recursos Presupuestados por Artículo**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

1. **Síntesis**

En síntesis, en la Subpartida 10501 Transporte dentro del País, el monto formulado para 2021 por ¢128.331.453 presenta un incremento de 15.25% con respecto al aprobado para el 2020 que es de ¢111.353.468. No obstante, se debe considerar que en el 2019 se ejecutó un monto de ¢130.767.634, por lo que el monto que se solicita para 2021, resulta inferior al máximo que permite la aplicación de la Directriz Institucional, según la cual se puede formular el mismo monto ejecutado en el 2019.

**Requerimientos Adicionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Responsabilidad | Subpartida | Monto Adicional | Justificación | Observaciones |
| Administración Regional del Segundo Circuito de la Zona Atlántica (Guápiles) | 10501 Transporte dentro del País | ¢373.285 | El Administrador Regional solicita aumentar el monto de esta subpartida, esto debido a que las giras a las Barras de Tortuguero y Colorado son de vital importancia en el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables y el costo por lancha por gira es cercano a los ¢280.000. | Este Centro de Responsabilidad ejecutó en 2019 ¢3.125.115 (monto que representó un 100% del presupuesto actual), formuló para 2020 ¢2.836.115 y para 2021 solicita ¢3.125.115. |
| Dirección de Tecnología de Información | 10501 Transporte dentro del país | ¢5.463.860 | Estos viáticos se solicitan para las labores relacionadas con la implantación del nuevo Sistema de Gestión de Despachos Judiciales. | En relación con este tema es oportuno señalar que la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información, en la sesión del pasado 24 de enero, artículo VII, al conocer la presentación de la Licda. Vivian Rímola Soto, Jefa del Subproceso de Sistemas Jurisdiccionales y el Lic. Jonathan Montiel Álvarez, Jefe del Subproceso de Gestión del Servicios, ambos de la Dirección de Tecnología, relacionado con la propuesta de Planificación para el desarrollo y la implementación del nuevo sistema de gestión de despachos judiciales.    Se acordó:   1.) Comisionar a la DTIC para que en conjunto con la Dirección de Planificación analicen los escenarios de implementación del nuevo sistema de gestión y presenten en la próxima sesión las alternativas viables consensuadas.  Es importante señalar que en relación con este tema, efectivamente es un requerimiento necesario para la DTI, por cuanto se deben cerrar brechas tecnológicas en relación a despachos con modalidad física a electrónica, esto  según los requerimientos de los compañeros profesionales, que se destacan en los Modelos de Sostenibilidad de Heredia, Liberia, Alajuela, Limón, Puntarenas y próximamente en Perez Zeledón, lo cual ya fue solicitado a la Dirección de Tecnología como parte de los requerimientos de la Dirección de Planificación, sin embargo, aun se está estableciendo la metodología de trabajo para la implantación de sistemas informáticos, en relación a las necesidades de implementación del expediente electrónico antes indicadas vrs las necesidades de la implantación del nuevo sistema (SIAGPJ), lo cual se desconoce si se llevará en paralelo o con algunas otra forma de trabajo que maximice los tiempos, y por ende los costos, además de cubrir los requerimientos de la Dirección de Planificación indicados en línea con el Plan Estratégico y las necesidades de la Institución. |
| Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | 10501 Transporte dentro del país | ¢2.000.000 | Las personas facilitadoras habitan en comunidades alejadas de los centros del cantón, con difícil acceso y servicios de trasporte limitados. Este presupuesto se utiliza para el pago de ayuda económica en transporte público y en casos excepcionales transporte privado, a las actividades de capacitación o convocatorias que realiza el Poder Judicial. | Este Centro de Responsabilidad ejecutó en 2019 ¢1.996.664 (monto que representó un 100% del presupuesto inicial), formuló para 2020 ¢8.996.510 y para 2021 solicita ¢8.996.510. Si bien es cierto que el Presupuesto inicial de la subpartida 10501 es de ¢6.270.000 y la ejecución fue de ¢1.996.664, corresponde mencionar que está oficina tiene la particularidad de distribuir los recursos en las Administraciones Regionales ya que es la manera de brindar los recursos a las personas que asisten con el Programa de Facilitadores Judiciales distribuidos en el territorio nacional. |

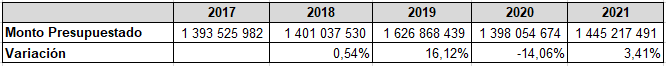
**De incorporase los requerimientos antes indicados que asciende a la suma de ¢7.837.145, lo presupuestado para esta subpartida para el 2021 pasaría a ser ¢136.168.598 con un incremento del 22,3% con respecto al monto aprobado para el 2020.**

1. **Subpartida 1.05.02 Viáticos dentro del País**
2. **Comportamiento Histórico de la Subpartida**

Los recursos formulados en la subpartida 10502 Viáticos dentro del País, responden a las necesidades de hospedaje y alimentación para los servidores judiciales cuando estos se desplazan de su lugar de trabajo para realizar actividades laborales. Además, se incluyen recursos para personas externas a la Institución a través de ayudas económicas para víctimas y testigos y para facilitadores judiciales.

**Tabla 7. Detalle del Comportamiento Histórico de la Subpartida 10502**

**Viáticos dentro del País, Periodos 2017-2021**



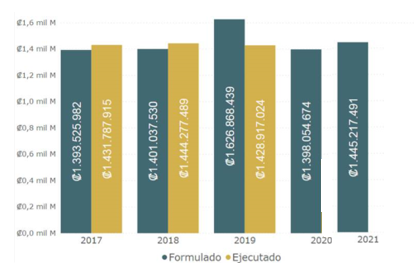
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En la tabla anterior se muestran los montos formulados en la subpartida 10502 Viáticos dentro del País para los últimos 5 años, presentando un decrecimiento para el 2020, pero para el 2021 se incrementa en un 3,41% lo cual significa que se incluyen ¢47.162.817 más que el año anterior.

**Figura N°4. Formulación y Ejecución**

**Subpartida 10502 Viáticos dentro del País**

**Periodos 2017 - 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En el gráfico anterior se representa la formulación y ejecución presupuestaria de la subpartida 10502 Viáticos dentro del País para el periodo del 2017 al 2021. A nivel institucional esta subpartida para el 2017 y 2018 muestra que la ejecución presupuestaria estuvo por encima de lo formulado, pero para el 2019 el monto ejecutado fue menor a los recursos formulados, quedando sin ejecutarse ¢197.951.415.

1. **Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Subpartida**

**Tabla 8.**

**Subpartida 10502 Viáticos dentro del País**

**Ejecución Presupuestaria Periodos 2017-2019**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en la tabla anterior, en el 2017 y 2018 se presenta una ejecución presupuestaria por encima del 100%, pero para el 2019 el porcentaje de ejecución está por debajo, ejecutando un 87,83% de lo formulado.

Los centros gestores que no ejecutaron todos sus recursos en esta subpartida para el 2019 son los siguientes: Secretaría General de la Corte, Sala Constitucional, Dirección de Gestión Humana, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Departamento de Trabajo Social y Psicología, Centro de Gestión de la Calidad. Auditoría, Secretaría Técnica de Género, Secretaría Técnica de Ética y Valores, Administración del Primer Circuito Judicial de San José, Administración Regional de Heredia, Administración de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, Administración Regional de Sarapiquí y Administración Regional de Santa Cruz.

1. **Variación por Programa 2020-2021**

Al realizar el análisis comparativo de los recursos formulados en esta subpartida por programa presupuestario, se determina que el programa 930 Defensa Pública presenta un incremento del 24,03%, programa 950 Programa de Atención y Protección a Víctimas y Testigos un 13,59%, programa 928 Organismo de Investigación Judicial un 4,35% y el 926 Dirección y Administración con un 2,31%. Los programas 927 Servicio Jurisdiccional (-2,66%) y 929 Ministerio Público (-16,37%) formularon menos recursos en comparación con el 2020.

**Tabla 9.**

**Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**

**Subpartida 10502 Viáticos dentro del País**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

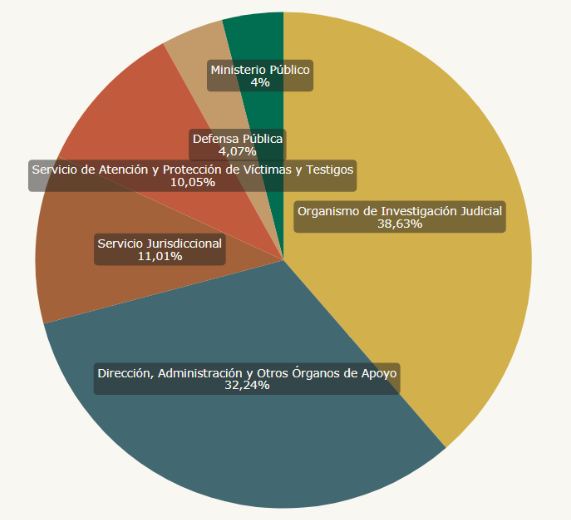
En el caso del Programa 926, debe señalarse que los Centros de Responsabilidad se ajustaron a la directriz institucional, no obstante, en el caso de la Dirección Ejecutiva se presenta un exceso del límite correspondiente por un total de ¢12.388.582 que tal como se indicó en el caso de transportes dentro del país, obedece a las crecientes necesidades que se han presentado.

Específicamente se señaló que tuvo que asumir el Programa de Descongestionamiento de Vehículos, por parte de la Proveeduría se indica que las labores realizadas por el Almacén responden a las necesidades que tenga la institución y de eso dependerá la cantidad de giras y visitas que se realicen a las oficinas judiciales, esto fuera de las programadas en el cronograma anual, lo cual incluye la apertura de edificios y oficinas nuevas; además se requieren los recursos por los costos en los peajes debido al frecuente uso que se hace de la ruta 27 para la realización de giras a todo al territorio nacional. Además, se indicó que en el caso del Departamento de Artes Gráficas se debe a las constantes giras a provincias que hace el personal, donde lo usual es que se vayan en vehículo oficial, pero su regreso lo hacen en transporte público.

En el caso del 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas de Testigos, se presenta la particularidad de que el monto ejecutado en el 2019 es menor a lo que se encuentra formulado para el 2021; el ajuste sería de ¢28,888,380, sin embargo, el Programa 950 indica que se deben mantener dentro de su presupuesto, porque se requieren para la atención de víctimas y testigos de las personas que se acogen a la medida extraprocesal de reubicación.

**Figura N°5. Distribución de la Subpartida 10502 Viáticos dentro del País**

**por Programa Presupuestario 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En el gráfico anterior se muestra la distribución de los recursos formulados en el 2021 en la subpartida 10502 Viáticos dentro del País distribuida por programa presupuestario. El programa 928 Organismo de Investigación Judicial solicita la mayor cantidad de recursos con ¢558.352.811 es decir un 38,63%, seguido por el 926 Dirección y Administración con un total de ¢465.975.467 que representa un 32,24%, luego el 927 Servicio Jurisdiccional con ¢159.092.615 un 11,01% y el 950 Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos ¢145.200.000 para un 10,05%. Los programas 930 Defensa Pública ¢58.800.000 y 929 Ministerio Público ¢57.795.598 suman el restante 8,07%.

1. **Distribución por Centro de Responsabilidad**

En la siguiente tabla se muestran los **10 centros de responsabilidad con más recursos** formulados para el 2021 en la subpartida 10502 Viáticos dentro del País.

**Tabla 10. Distribución de la**

**Subpartida 10502 Viáticos dentro del País por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2020–2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

**Figura 6.  Distribución de la Subpartida 10502 Viáticos dentro del País**

**por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en el gráfico anterior, los centros de responsabilidad con más recursos formulados en esta subpartida para el 2021 son: el Organismo de Investigación Judicial con ¢558.352.811, Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos ¢145.200.000, Unidad de Adiestramiento ¢117.474.255, la Dirección Ejecutiva con ¢65.380.989, la Defensa Pública ¢58.800.000 y el Ministerio Público con ¢57.796.598.

Es importante señalar que en el caso de la Escuela Judicial, según estimaciones del Departamento Financiero Contable realizadas en 2019, el contrato de soda comedor que brinda el servicio de alimentación a las personas participantes de los cursos de capacitación que se imparten en la Escuela Judicial y a todas las personas funcionarias que realizan diligencias y actividades propias de su función en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, genera un ahorro aproximado anual de ¢53.000.000. Esto considerando la diferencia entre el costo de cada tiquete y el costo del viático.

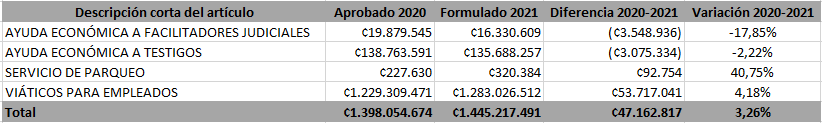
1. **Variación Distribución por Artículo**

En la siguiente tabla se representa las variaciones en la formulación detallada por artículo entre el año 2020 y 2021.

**Tabla 11.**

**Subpartida 10502 Viáticos dentro del País**

**Variación de Recursos Presupuestados por Artículo**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En cuanto a los servicios de parqueo, cabe señalar que son formulados por la Unidad de Patrimonio del Departamento de Proveeduría incluye recursos porque cuenta con dos vehículos asignados para diligencias varias, entre las cuales se encuentran realizar los trámites de la flotilla de vehículos en el INS, COSEVI, Registro y el Ministerio de Hacienda. Además, se realizan giras para el levantamiento de partes en los Juzgados y Tribunales por citar algunos ejemplos. Las Administraciones Regionales para cuando vienen a San José en vehículos oficiales y ocupan del servicio de parqueo.

1. **Síntesis**

En síntesis, en la Subpartida 10502 Viáticos dentro del País, el monto formulado para 2021 por ¢1.445.217.491 presenta un incremento de 3.41% con respecto al aprobado para el 2020 que es de ¢1.398.054.674. No obstante, se debe considerar que en el 2019 se ejecutó un monto de ¢1.428.917.024.

Como se explicó con anterioridad, en el caso del Programa 926, la Dirección Ejecutiva presenta un exceso del límite correspondiente por un total de ¢12.388.582 que obedece a las crecientes necesidades que se han presentado. En el caso del 950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas de Testigos, dada la particularidad de que el monto ejecutado en el 2019 es menor a lo que se encuentra formulado para el 2021, el exceso es de ¢28,888,380. No obstante, a pesar de la solicitud de ajustar la solicitud, en ambos casos se indicó que se solicita mantenerlos.

1. **Requerimientos Adicionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Responsabilidad | Subpartida | Monto | Justificación | Observaciones |
| Centro Electrónico de Información Jurisprudencial | 10502 Viáticos dentro del País | ¢500.000 | Recursos solicitados para cubrir las necesidades de capacitación en los diversos proyectos (Leguaje claro, Nexus Móvil, Despersonalización de las Sentencias, entre otros Centros durante el 2021 en los diferentes Circuitos a nivel nacional. | El Presupuesto aprobado para el 2020 fue de ¢8.432.300, el cual fue ajustado conforme las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2020, en coordinación con la Licda. Patricia Bonilla Rodriguez de la siguiente forma:  a. Se hizo un ajuste de rebajo por ¢80.713, tal como se aprecia a continuación:    b. Adicionalmente se realizaron rebajos al anteproyecto de presupuesto por la suma de ¢1.493.453 solicitados por la Lic. Bonilla Rodriguez según el detalle adjunto:  10806 Mant. y Rep. de Equipo y Equipo de Comunicación ¢97.850  10807 Mant. y Rep. de Equipo y Mob. Oficina ¢721.000  10808 Mant. y Rep. de Equipo cómputo y sist. Inform. ¢309.000  20104 Tintas, pinturas y diluyentes ¢112.249  50104 Equipo y Mobiliario de Oficina ¢253.354  Es importante indicar que los rebajos se realizaron con la finalidad de incluir dentro de presupuesto la suma de ¢1.500.000 en la subpartida de capacitación y viáticos dentro del país, para cubrir diversos proyectos de este Centro tales como: Lenguaje claro, Nexus móvil, despersonalización de Sentencias entre otros, adicional a los rebajos de la tabla anexa se limitaron las solicitudes del presupuesto en general a fin de incluir mediante el requerimiento adicional lo necesario para la capacitación y los viáticos, pero, la petición fue rechazada por el Consejo Superior. Debido a esto, el presupuesto 2021 se vio afectado al percibir una disminución ¢4.975.636 al pasar de un presupuesto de ¢14.010.383 para el 2019 a ¢9.034.747 para el 2021.  3. Petición:  Mediante oficio 176-CIJ-2019, del 19 de diciembre 2019, Por lo antes expuesto, la Licenciada Patricia Bonilla Rodríguez, jefa del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, solicita al Consejo Superior autorizar recuperar el monto disminuido en el presupuesto del 2020 y que se ve reflejado en el presupuesto 2021, permitiéndole incluir los siguientes recursos:  Viáticos dentro del País ¢500.000 Recursos solicitados para cubrir las necesidades de capacitación en los diversos proyectos (Lenguaje claro, Nexus Móvil, Despersonalización de Sentencias, entre otros de Centro durante el 2021 en los diferentes Circuito a nivel nacional.  10701 Actividades de Capacitación ¢1.000.000  29903 Productos de Papel, Cartón e Impresos ¢321.728 Total ¢1.371.728 |
| Centro de Conciliación del Poder Judicial | 10502 Viáticos dentro del País | ¢9.775.018 | Corte Plena aprueba en la sesión N°56-18 del 10 de diciembre, artículo XXIII, el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, que incluye como tema estratégico la resolución oportuna de conflictos, siendo una de las acciones estratégicas primordiales el fortalecer la aplicación de las medidas alternas en la solución de conflictos. Es así como se incluyó en el portafolio proyectos institucionales la creación de una política institucional integral para el tratamiento de los diferentes métodos alternos de solución de conflictos. Para impulsar la creación de la política institucional integral sobre el tratamiento de los diferentes métodos alternos de solución de conflictos se solicitan estos recursos adicionales. | Se consultó al despacho sobre la programación de las giras a realizar que justifiquen el monto solicitado, al respecto el Lic. Alfonso González, Juez Subcoordinador General del Centro de Conciliación, indicó que según cronograma del Proyect Libre, la próxima plantilla del proyecto sería la construcción del Plan de Gestión, que está previsto entregarse a finales de julio del año en curso, por tratarse de un documento que detalla el trabajo que se va a realizar antes y después de la aprobación de la Política. Sin embargo, aclara que la primera etapa de la Política es la de DIAGNÓSTICO que está previsto llevarse a cabo en el transcurso del próximo año. Son 18 talleres presenciales con todos los circuitos judiciales del país, en razón que se busca obtener el insumo necesario para la elaboración de la misma. Para los efectos don Alfonso indica que deberá trasladarme a diferentes partes del país y es probable que requiera el apoyo de alguna persona técnica o profesional para la elaboración y compilación de toda la información.  Además, se consultó sobre la posibilidad de implementar medidas alternativas, como sesiones virtuales, entre otros, sin embargo, no se recibió respuesta. |
| Dirección de Tecnología de Información | 10502 Viáticos dentro del País | ¢16.783.725 | Se requieren ¢2.500.000 adicionales para atender la periferia y los tres Circuitos Judiciales de San José, el apoyo de inspecciones a nivel nacional al Departamento de Servicios Generales en edificios nuevos, para el 2021 está previsto el nuevo Edificio de Puntarenas. No disponer de estos recursos imposibilitaría al área técnica de telecomunicaciones poder realizar las inspecciones y supervisiones de obras.  Además de ¢14.283.725 para las labores relacionadas con la implantación del nuevo Sistema de Gestión de Despachos Judiciales. | En relación con este tema es oportuno señalar que la Comisión Gerencial de Tecnologías de la Información, en la sesión del pasado 24 de enero, artículo VII, al conocer la presentación de la Licda. Vivian Rímola Soto, Jefa del Subproceso de Sistemas Jurisdiccionales y el Lic. Jonathan Montiel Álvarez, Jefe del Subproceso de Gestión del Servicios, ambos de la Dirección de Tecnología, relacionado con la propuesta de Planificación para el desarrollo y la implementación del nuevo sistema de gestión de despachos judiciales.    Se acordó:   1.) Comisionar a la DTIC para que en conjunto con la Dirección de Planificación analicen los escenarios de implementación del nuevo sistema de gestión y presenten en la próxima sesión las alternativas viables consensuadas.  Es importante señalar que en relación con este tema, efectivamente es un requerimiento necesario para la DTI, por cuanto se deben cerrar brechas tecnológicas en relación a despachos con modalidad física a electrónica, esto  según los requerimientos de los compañeros profesionales, que se destacan en los Modelos de Sostenibilidad de Heredia, Liberia, Alajuela, Limón, Puntarenas y próximamente en Perez Zeledón, lo cual ya fue solicitado a la Dirección de Tecnología como parte de los requerimientos de la Dirección de Planificación, sin embargo, aun se está estableciendo la metodología de trabajo para la implantación de sistemas informáticos, en relación a las necesidades de implementación del expediente electrónico antes indicadas vrs las necesidades de la implantación del nuevo sistema (SIAGPJ), lo cual se desconoce si se llevará en paralelo o con algunas otra forma de trabajo que maximice los tiempos, y por ende los costos, además de cubrir los requerimientos de la Dirección de Planificación indicados en línea con el Plan Estratégico y las necesidades de la Institución. |
| Comisión Nacional Mejoramiento de Justicia | 10502 Viáticos dentro del País | ¢2.000.000 | El personal de CONAMAJ debe trasladarse a los Circuitos Judiciales que implementan el SNFJ con el fin de supervisar, acompañar, asesorar y capacitar al personal judicial. Asimismo, de este rubro se asume el pago de las ayudas económicas de las personas facilitadoras judiciales. | Este Centro de Responsabilidad ejecutó en 2019 ¢5.466.006 (monto que representó un 10% del presupuesto actual), formuló para 2020 ¢7.374.791 y para 2021 solicita ¢7.374.790.  El presupuesto inicial de esta subpartida para el 2019 fue de ¢10.032.000 y la ejecución fue de ¢5.466.006, al respecto es importante señalar que está oficina tiene la particularidad de distribuir los recursos en las Administraciones Regionales ya que es la manera de brindar los recursos a las personas que asisten con el Programa de Facilitadores Judiciales distribuidos en el territorio nacional. |

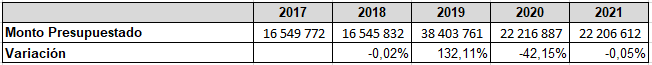
**De incorporase los requerimientos antes indicados que ascienden a la suma de ¢29.058.743, lo presupuestado para esta subpartida para el 2021 pasaría a ser ¢1.474.276.234 con un incremento del 5,45% con respecto al monto aprobado para el 2020.**

1. **Subpartida 1.05.03 Transporte en el Exterior**
2. **Comportamiento Histórico de la Subpartida**

Los recursos formulados en la subpartida 10503 Transporte en el Exterior, responden a las necesidades de traslado al exterior del país cuando los servidores judiciales se encuentran desarrollando sus actividades laborales.

**Tabla 12. Detalle del Comportamiento Histórico de la Subpartida 10503**

**Transporte en el Exterior, Periodos 2017-2021**



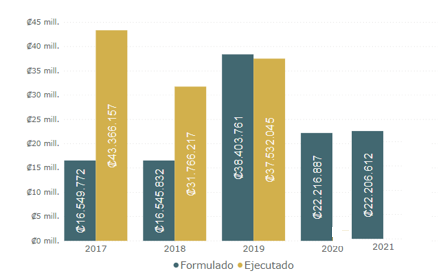
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En la tabla anterior se muestran los montos formulados en la subpartida 10503 Transporte en el Exterior para los últimos 5 años. En general se presenta montos muy similares entre un año y otro, excepto para el 2019 que se incrementó un 132,11% debido a que se incluyeron ¢15.928.182 para el Proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa Corte-Europa AID. En el 2020 y 2021 los montos formulados son prácticamente iguales.

**Figura N°7. Formulación y Ejecución**

**Subpartida 10503 Transporte en el Exterior**

**Periodos 2017 – 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

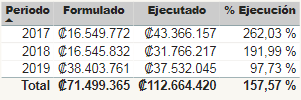
En el gráfico anterior se representa la formulación y ejecución presupuestaria de la subpartida 10503 Transporte en el Exterior para el periodo del 2017 al 2021. A nivel institucional esta subpartida para el 2017 y 2018 muestra una ejecución presupuestaria del 262,03% y 191,99% respectivamente. Para el 2019 la ejecución fue del 97,73%, quedando sin ejecutar ¢871.716.

1. **Análisis de la Ejecución Presupuestaria**

**Tabla 13.**

**Subpartida 10503 Transporte en el Exterior**

**Ejecución Presupuestaria Periodos 2017-2019**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en la tabla anterior en el 2017 y 2018 se presenta una ejecución presupuestaria muy por encima del 100%, pero para el 2019 el porcentaje de ejecución está por debajo de los recursos formulados siendo un 97,73%.

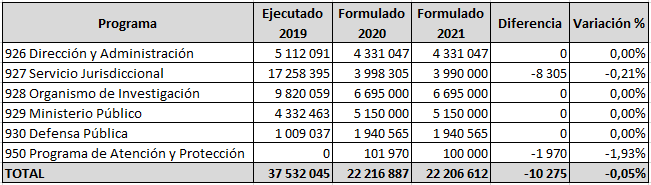
1. **Variación por Programa 2020-2021**

Al realizar el análisis comparativo de los recursos formulados en esta subpartida por programa presupuestario, se determina que de manera generalizada los montos se mantienen prácticamente igual a los formulados para el 2020.

**Tabla 14.**

**Subpartida 10503 Transporte en el Exterior**

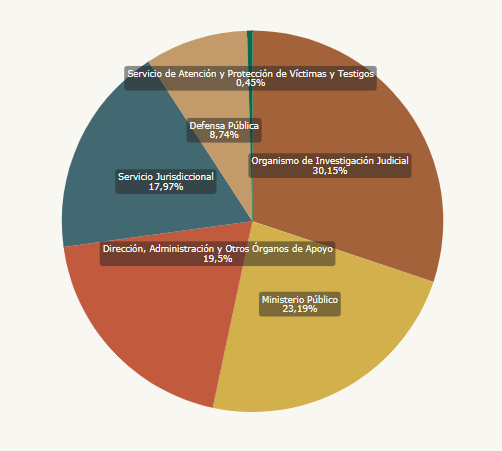
**Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

1. **Análisis de la Distribución por Programa para el 2021**

**Figura N°8. Distribución de la Subpartida por Programa Presupuestario 2021**



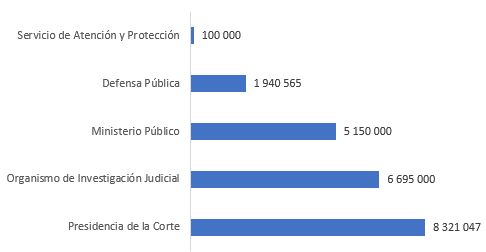
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

El programa 928 Organismo de Investigación Judicial presupuesta para el 2021 ¢6.695.000, cifra que representa el 30,15% del total de esta subpartida. En el segundo lugar se encuentra el programa 929 Ministerio Público con ¢5.150.000 es decir un 23,19%, seguido por el 926 Dirección y Administración con ¢4.331.047 (19,5%), el 927 Servicio Jurisdiccional con ¢3.990.000 (19,97%), el 930 Defensa Pública ¢1.940.565 (8,74%) y por último, el 950 Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos con ¢100.000 (0,45%).

1. **Distribución por Centro de Responsabilidad**

**Figura 9.  Distribución de la Subpartida por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

**Nota:** Presidencia de la Corte incluye recursos de los programas 926 Dirección y Administración y 927 Servicio Jurisdiccional.

Según se muestra en el gráfico anterior, los centros de responsabilidad con más recursos formulados en esta subpartida para el 2021 son: la Presidencia de la Corte con ¢8.321.047, el Organismo de Investigación Judicial con ¢6.695.000, el Ministerio Público con ¢5.150.000, la Defensa Pública con ¢1.940.565 y el Programa de Atención y Protección a Víctimas y Testigos que formuló ¢100.000.

En el caso de la Presidencia de la Corte se formulan los recursos para la adquisición de tiquetes aéreos autorizados por Consejo Superior para funcionarios administrativos y para la compra de tiquetes aéreos autorizados por Corte Plena para funcionarios del ámbito jurisdiccional.

1. **Variación Distribución por Artículo**

En la subpartida 10503 Transporte en el Exterior solamente se formula un artículo. A continuación se representa la variación en la formulación del artículo Transporte en el Exterior entre el 2020 y 2021.

**Tabla 15. Variación de Recursos Presupuestados por Artículo**



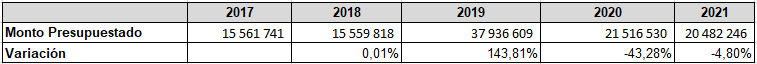
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

1. **Subpartida 1.05.04 Viáticos en el Exterior**
2. **Análisis Comparativo del Crecimiento de la Subpartida**

Los recursos formulados en la subpartida 10504 Viáticos en el Exterior, responden a las necesidades de alimentación y hospedaje en el exterior del país cuando los servidores judiciales se encuentran desarrollando sus actividades laborales.

**Tabla 16. Detalle del Comportamiento Histórico de la Subpartida 10504**

**Viáticos en el Exterior, Periodos 2017-2021**



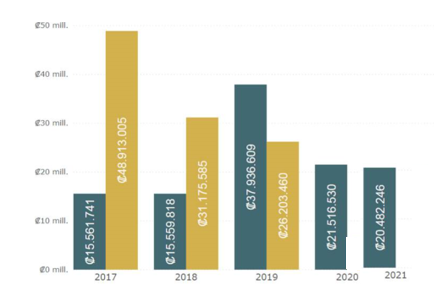
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

En la tabla anterior se muestran los montos formulados en la subpartida 10504 Viáticos en el Exterior para los últimos 5 años, en general se presentan montos muy similares entre un año y otro, excepto que **para el 2019 que se incrementó un 143,81% debido a que se incluyeron ¢16.261.138 para el Proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa Corte-Europa AID**.

**Figura N°10.**

**Subpartida 10504 Viáticos en el Exterior**

**Formulación y Ejecución Periodos 2017 – 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

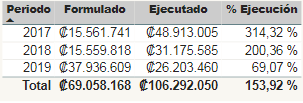
En el gráfico anterior se representa la formulación y ejecución presupuestaria de la subpartida 10504 Viáticos en el Exterior para el periodo del 2017 al 2021. A nivel institucional esta subpartida para el 2017 y 2018 muestra una ejecución presupuestaria por encima de lo formulado. Para el 2019 la ejecución presupuestaria fue menor a los recursos formulados, quedando ¢11.733.149 sin ejecutar.

1. **Análisis de la Ejecución Presupuestaria**

**Tabla 16.**

**Subpartida 10504 Viáticos en el Exterior**

**Ejecución Presupuestaria Periodos 2017-2019**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

Según se muestra en la tabla anterior en el 2017 y 2018 se presenta una ejecución presupuestaria muy por encima de los recursos formulados, pero para el 2019 el porcentaje de ejecución está por debajo, alcanzando solamente un 69,07%.

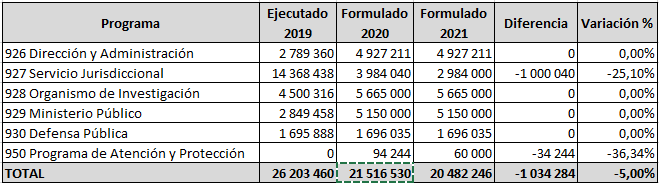
1. **Variación por Programa 2020-2021**

Al realizar el análisis comparativo de los recursos formulados en esta subpartida por programa presupuestario, se determina que los montos son los mismos entre un año y otro, excepto los programa 927 Servicio Jurisdiccional y el 950 Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos que disminuyen lo formulado para el 2021.

**Tabla 17.**

**Subpartida 10504 Viáticos en el Exterior**

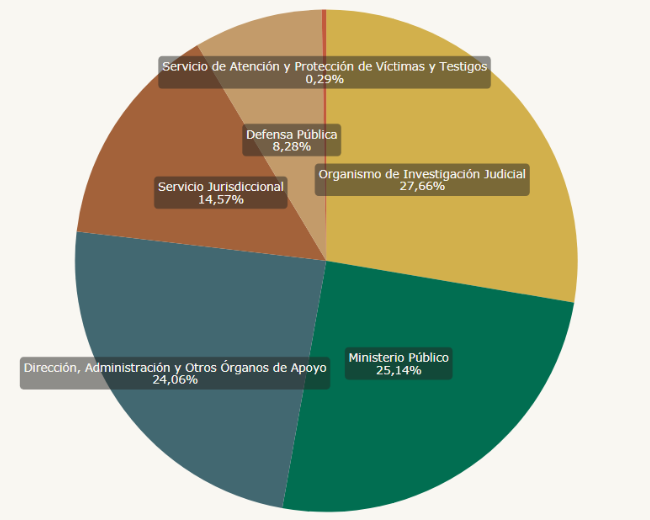
**Formulación Presupuestaria por Programa 2020–2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

1. **Análisis de la Distribución por Programa para el 2021**

**Figura N°11. Distribución de la Subpartida por Programa Presupuestario 2021**



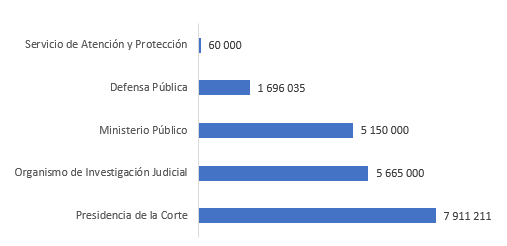
**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

El programa 927 Organismo de Investigación Judicial formula para el 2021 ¢5.665.000 es decir un 27,66% del total de esta subpartida, el 929 Ministerio Público presupuesta ¢5.150.000 que representa el 25,14%, el 926 Dirección y Administración con ¢4.927.211 (24,06%), el 927 Servicio Jurisdiccional con ¢2.984.000 (14,57%), el 930 Defensa Pública ¢1.696.035 (8,28%), y por último, el 950 Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos con ¢60.000 (0,29%).

1. **Distribución por Centro de Responsabilidad**

**Figura 12.  Distribución de la Subpartida por Centro de Responsabilidad**

**Periodo 2021**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

**Nota:** Presidencia de la Corte incluye recursos de los programas 926 Dirección y Administración y 927 Servicio Jurisdiccional.

Según se muestra en el gráfico anterior, los centros de responsabilidad con más recursos formulados en esta subpartida para el 2021 son: la Presidencia de la Corte con ¢7.911.211, el Organismo de Investigación Judicial con ¢5.665.000 y el Ministerio Público con ¢5.150.000. Por último, con montos menores se encuentran la Defensa Pública con ¢1.696.035 y el Programa de Atención y Protección a Víctimas y Testigos con ¢60.000.

1. **Variación Distribución por Artículo**

En la subpartida 10504 Viáticos en el Exterior solamente se formula un artículo, a continuación se representa la variación en la formulación entre el 2020 y 2021.

**Tabla 18. Variación de Recursos Presupuestados por Artículo**



**Fuente:** Sistema SIGA-PJ.

**-0-**

**Se acordó:** **1)** Aprobar los recursos solicitados en las subpartidas de Gastos de Viaje y Transporte en el Interior y Exterior del País. **2)** Aprobar los requerimientos adicionales solicitados; en el caso de los requerimientos solicitados por la Dirección de Tecnología de la Información para la implantación del nuevo Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, se aprueban para el proyecto como tal, dada la coordinación que se requiere efectuar con la Dirección de Planificación, por lo que los recursos deben ser utilizados conforme las necesidades que tengan las instancias participantes y el plan de trabajo que se debe elaborar. **3)** Aprobar a la Dirección Ejecutiva y al Programa 950 el exceso solicitado en las subpartidas de viáticos y transporte dentro del país, partiendo de las necesidades verificadas en la ejecución presupuestaria. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XVI**

**DOCUMENTO N°** **4571-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presentó el **Informe 434-PLA-RH-OI-2020**, estudio de Requerimiento Humano del Modelo de Tramitación Juzgados de Ejecución de la Pena.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subproceso Organización Institucional**  **Dirección de Planificación** | | **Fecha:** | 12/03/2020 |
| **Informe de Requerimiento Humano** | | **# Informe:** | 434-PLA-RH-OI-2020 |
| **Proyecto u oficinas analizadas:** | Rediseño de Procesos del modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información.  *Modelo de Tramitación Juzgados de Ejecución de la Pena.* | | |

|  |
| --- |
| **I. Plazas por Analizar**   * 2 plazas Jueza o Juez 2 para el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. * 1 plaza de Jueza o Juez Supernumerario especializado en Ejecución de la Pena, en apoyo itinerante en todos los juzgados de Ejecución de la Pena del país. |
| **II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada**  Los recursos se solicitan con el propósito de atender el crecimiento registrado en la carga de trabajo debido a la celeridad alcanzada en los Tribunales de Juicio rediseñados y que han aumentado la cantidad de personas sentenciadas. En los últimos 24 años (1995 a 2019), el factor humano solo creció 63% en Ejecución de la Pena; en tanto la entrada de casos nuevos lo hizo en 89% y el circulante en 108%.  Igualmente, previniendo la alta entrada de incidentes y el incremento de recurso humano que reorganizó la Defensa Pública en los Tribunales de Alajuela para abordar la demanda del servicio, atendiendo también la resolución de la Sala Constitucional para dar una respuesta oportuna a la población privada de libertad. Igualmente, se debe hacer frente al aumento de la carga de trabajo en estos Tribunales por el incremento de los brazaletes electrónicos que se han brindado como medidas alternas de las penas, lo que provoca mayor demanda de servicios es los Tribunales de la Ejecución de la Pena. |
| III. Información Relevante  **3.1. ANTECEDENTES**  En sesión de Corte Plena 37-12 celebrada el 29 de octubre de 2012, artículo VIII, se solicitó a la Dirección de Planificación definir el modelo de gestión de despachos, posteriormente en la sesión también de Corte Plena 15-16 del 16 de mayo de 2016, artículo XVII, se aprobó el informe 259-66-SAO-2016 “Estudio Operativo de los Tribunales Penales” elaborado por la Auditoría Judicial, donde se plantea la conveniencia del rediseño de procesos en materia Penal.  La Dirección de Planificación atendiendo ambos acuerdos de Corte Plena, en coordinación con el Despacho de la Presidencia, desarrollan el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal que persigue dos objetivos:   1. Mejorar los tiempos de respuesta para la persona usuaria de toda la jurisdicción penal 2. Incrementar la efectividad de los debates.   Los resultados alcanzados en este proyecto tienen un impacto directo en la materia de Ejecución de la Pena, por un crecimiento en la cantidad de sentencias condenatorias dictadas en todo el país.  Según los estudios del Subproceso de Estadística, para 2016 (sin plan) en todos los tribunales penales del país, se terminaron 19915 asuntos incluidos en flagrancia, de los cuales 11016 fueron sentencias y 7491(67%) fueron condenatorias. Para 2019 (con plan), en estos tribunales se terminaron 25520 expedientes penales, de los cuales 14876 fueron mediante sentencia que bajo el histórico de 67% condenatorias, alcanzarían 10116 para este año; es decir, un aumento del 35%, en el número de personas condenadas por año.  En el siguiente gráfico se puede visualizar el comportamiento de las sentencias en los Tribunales Penales del país entre 2014 y 2018, de las cuales el 67% son condenatorias:  GRÁFICO 1  RESULTADO DE LAS SENTENCIAS EN TRIBUNALES PENALES  cid:image001.jpg@01D5CADB.8267D8B0  Fuente: Anuarios Estadísticos periodo 2014-2018.  Adicionalmente, el Consejo Superior en sesión 107-16 celebrada el 29 de noviembre 2016, artículo XLIX, aprobó el informe 1317-PLA-2015 sobre el Modelo de Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño, a partir del cual, la Dirección de Planificación en cada Circuito Judicial rediseñado designa una persona profesional responsable de dar sostenibilidad y madurar los proyectos de rediseño, por lo cual los resultados hasta ahora alcanzados continuarán a largo plazo a partir del modelo de sostenibilidad.  En el proyecto de rediseño de procesos en materia Penal, se incluyó la etapa procesal de Ejecución de la Pena y en el informe 34-PLA-OI-2019 se expuso la situación actual del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, al tiempo que se propuso un Modelo de Tramitación para los Juzgados de Ejecución de la Pena del país, que fue acogido por el Consejo Superior en sesión 19-19 del 1 de marzo del 2019, artículo XLVI.  En el informe 34-PLA-OI-2019 de esta Dirección antes citado, igualmente se establece la necesidad de dos plazas adicionales de Jueza o Juez para el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ya que incluso la Sala Constitucional ha declarado con lugar recursos de Habeas Corpus contra este despacho por plazo excesivo en la definición de la libertad condicional; afectando la imagen internacional de la institución respecto del abordaje de derechos humanos.  En procura de solventar la necesidad identificada en Alajuela, se solicitó apoyo al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdicción (CACMFJ), para el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, ante lo cual, mediante oficio 360- CACMFJ-AGA-2018 informó que no disponía de recursos para apoyar en esta materia.  Por lo anterior, en el informe 677-PLA-RH-OI-2019 elaborado por la Dirección de Planificación se analizó la situación integral en materia de Ejecución de la Pena, donde se recomendó la creación extraordinaria de tres plazas de Jueza o Juez a partir del 6 de enero de 2020, dos para apoyar al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela y la tercera para que en forma itinerante apoye los restantes Juzgados del país. Sugerencia que fue acogida por el Consejo Superior en sesión 44-19 celebrada el 16 de mayo de 2019, artículo XII, y estos recursos surgieron de la recalificación de plazas tomadas de otra oficina.  Con base en lo antes descrito por todo el 2020, se han creado las tres plazas de Jueza o Juez 2, requeridas en Ejecución de la Pena y a continuación, se analiza la conveniencia de mantener estas tres plazas durante el 2021.  **3.2. PERSONAL PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA**  A continuación, se detalla la cantidad de personal profesional que históricamente atiende Ejecución de la Pena desde 2012 y hasta 2019 en todo el país y la cantidad de asuntos entrados por año.  GRÁFICO 2  Fuente: Anuarios Estadísticos y Relación de Puestos del Poder Judicial 2012-2019  El gráfico 2 identifica que mientras la cantidad de plazas profesionales asignadas a Ejecución de la Pena no aumentan desde el 2013, de ese año (10328) al año 2019 (13883), la cantidad de asuntos entrados por año creció en un 34,4%.  En lo que respecta a la cantidad de asuntos entrados, en años recientes se han presentado situaciones que aumentan la carga de trabajo para los despachos de Ejecución de la Pena:  a). - La modificación al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales que entró en vigencia en 2016, varió los parámetros de cancelación de los antecedentes penales, propiciando en forma simultánea la cancelación de condenas previas de un alto porcentaje de la población carcelaria, permitiéndoles solicitar cambios en su condición legal en forma adelantada.  Al respecto, cabe agregar que los incidentes de modificación de pena rechazados por falta de requisitos generan quejas solicitando que Adaptación Social a la brevedad les facilite alcanzar esos requisitos; por lo cual, la modificación implica, hasta cuatro incidentes por cada persona privada de libertad susceptible de los beneficios de la modificación de ley.  b). - La entrada en vigencia de la ley 9271, denominada "Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal", que introduce en el artículo 486 bis, la posibilidad de sustituir la prisión por arresto domiciliario durante la ejecución de la pena, ha implicado un aumento de la carga de trabajo en tres direcciones:   * El deseo de la población carcelaria, para ser analizada con esta medida aumenta la cantidad de solicitudes remitidas. * Las personas ya favorecidas con ese dispositivo constantemente procuran ampliar su área de acción, por lo cual, presentan solicitudes, para poder trabajar, salir a hacer compras, ir a cortarse el cabello, entre otras solicitudes que diariamente presentan al despacho. Debido a lo novedoso de esta modalidad, implica especial atención y por consiguiente consumen tiempo importante en estudio del caso. * Las personas beneficiadas por omisión o culpa incumplen horarios y zonas restringidas por lo cual el Ministerio de Justicia constantemente hace reporte de eventos que deben ser valorados por el despacho para establecer si justifican suspender el beneficio o establecer si en su defecto se trata de problemas del dispositivo.   c). – Resultado de las modificaciones antes citadas, se propicia un mayor número de personas cumpliendo sentencia fuera de los centros penales y que requieren un estricto seguimiento, acumulando un alto porcentaje del trabajo que se prolonga por el número de años de la sentencia.  d). - Resultado de los rediseños implementados para los Tribunales penales se ha incrementado la cantidad de personas sentenciadas por año, situación que igualmente aceleró el crecimiento de la entrada de asuntos en los juzgados de ejecución a partir de 2017.  A continuación, se detalla la situación actual para cada uno de los despachos del país:  CUADRO 1  CASOS ENTRADOS EN LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y PROMEDIO MENSUAL POR JUEZA O JUEZ Y POR TÉCNICA O TÉCNICO JUDICIAL, DURANTE EL PERÍODO 2012-2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Periodo |  | Juzgados de Ejecución de la Pena | | | | | | | | Total | San José | Alajuela | Cartago/ Pérez Zeledón(c) | Pococí | Puntarenas | Liberia | Limón | | 2012 | 9017 | 1680 | 4150 | 1199 | 571 | 467 | 454 | 496 | | 2013 | 10328 | 1897 | 4970 | 1388 | 632 | 505 | 492 | 444 | | 2014 | 10889 | 1830 | 5296 | 1432 | 673 | 590 | 557 | 511 | | 2015 | 11715 | 2057 | 5319 | 1569 | 983 | 675 | 639 | 473 | | 2016 | 11662 | 2404 | 5188 | 1263 | 965 | 683 | 685 | 473 | | 2017 | 11578 | 2095 | 4816 | 1870 | 1069 | 561 | 635 | 532 | | 2018 | 12758 | 2048 | 5542 | 2022 | 1082 | 829 | 749 | 486 | | 2019(a) | 13883 | 2116 | 6063 | 2168 | 1393 | 737 | 849 | 557 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Promedio mensual para el primer semestre 2019 | 1234,04 | 188,09 | 538,93 | 192,71 | 123,82 | 65,51 | 75,47 | 49,51 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Total puestos Juezas o Jueces | 13 | 2 | 5 | 2(c) | 1 | 1 | 1 | 1 | | Entrada Promedio Mensual por Jueza o Juez | 94,93 | 94,04 | 107,79 | 96,36 | 123,82 | 65,51 | 75,47 | 49,51 | | Cantidad de técnicas o técnicos judiciales | 19,5 | 4,5(d) | 7,5(d) | 2,5(c)(d) | 1,5(d) | 1 | 1 | 1,5(d) | | Entrada Promedio Mensual por Técnica o Técnico Judicial | 63,28 | 41,97 | 71,85 | 77,08 | 82,54 | 65,51 | 75,47 | 33 |   NOTAS: (a) Datos pendientes de validación por parte del Subproceso de Estadística.  (b) El cálculo del promedio mensual tomó como base 11.25 meses por año al descontar vacaciones colectivas.  (c) El personal ordinario de Cartago es una Jueza, un Coordinador Judicial y un Técnico Judicial, además se incluye una plaza de Juez y otra de Técnico Judicial que están físicamente en la sede de Pérez Zeledón.  (d) La plaza de Coordinador Judicial, se establece que debe distribuir su tiempo 50% para atender labores administrativas y el 50% restante para atender temas relacionados con el trámite de asuntos.  FUENTE: Elaboración propia con datos del Subproceso de Estadística y Relación de puestos.  Según el cuadro 1, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Pococí en promedio mensual recibió la mayor cantidad de asuntos nuevos por Jueza o Juez (123,82) durante el 2019, situación que se presenta como resultado de la apertura de la Unidad de Atención Institucional (UAI) de Pococí por lo cual, la población carcelaria se duplicó. Del análisis realizado se establece que es una carga de trabajo alta para una sola persona juzgadora pero no suficiente para la asignación de dos plazas a tiempo completo, razón por la cual, se sugiere que la plaza de Jueza o Juez Supernumerario periódicamente le colabore, al menos seis meses al año.  La segunda mayor entrada por Jueza o Juez se da en Alajuela (107) donde está el complejo La Reforma del Ministerio de Justicia y Paz, que concentra el mayor porcentaje de personas sentenciadas y privadas de libertad, además, cuenta con el único módulo de máxima seguridad del país, por lo cual registra la mayor cantidad de asuntos entrados, así como las gestiones más complejas, especialmente lo relativo a quejas contra Adaptación Social que requieren especial estudio, incidentes por enfermedad por cuanto los hospitales difícilmente reúnen las condiciones de seguridad requeridas, incidente por quebrantamiento de pena o seguimiento a las medidas correctivas de esta área.  Cabe agregar que, con una inversión de $24 millones, se adjudicó la construcción de un módulo adicional con capacidad para 1248 personas en este lugar, que se espera entre en operación en el primer trimestre de 2021, según había indicado la señora exministra Marcia González Aguiluz.  En lo que respecta al crecimiento de la carga de trabajo en Ejecución de la Pena, la Defensa Pública, lo confirma e indica que debieron redireccionar recursos de otras áreas para cubrir la demanda del servicio. En el caso de Alajuela se aumentó en tres las plazas de Defensora o Defensor Público, en Cartago se reforzó con una plaza más, al igual que en Pococí donde se asignó otra más. Para solventar la situación en San José, la Licda. Laura Marcela Arias Guillen, asume la Coordinación de la Unidad de Ejecución de la Pena como recargo, en tanto tramita igual proporción de asuntos que las restantes plazas. Por lo que estima importante, no solo aumentar el número de plazas de judicatura, sino también de defensoras y defensores Públicos que cubren esta materia.  La tercera mayor entrada se registra en Cartago (96), con la particularidad de estar integrado por dos sedes, la principal en Cartago y la segunda en Pérez Zeledón que fueron analizadas y se identificó que, la Corte Plena en sesión 13-13 celebrada el 1° de abril de 2013, artículo XXI, dispuso la creación formal del segundo independiente del primero, lo que no se ha concretado en la Asamblea Legislativa. Relativo a su carga de trabajo resulta oportuno que periódicamente reciban apoyo de la plaza itinerante de Jueza o Juez Supernumerario.  En cuarta posición de carga de trabajo más alta, está San José (94) donde atienden el mayor porcentaje de incidentes relativos a brazaletes electrónicos, el análisis detallado de la situación identificó la necesidad de un reglamento que defina claramente las responsabilidades de Adaptación Social y del Poder Judicial relativo a las solicitudes y reportes derivados de estos dispositivos electrónicos, por lo cual, hasta que este reglamento se dicte, eventualmente se debe apoyar el Juzgado con la Plaza de Jueza o Juez Supernumerario itinerante en materia de Ejecución de la Pena.  En el caso del Juzgado de Ejecución de la Pena de Liberia (75) donde la carga de trabajo registra aumento, pero aún se mantiene con valores relativamente aceptables. Puntarenas (65) y Limón (49) registran aumentos en sus cargas de trabajo, pero con promedio mensual también aceptables ante lo cual se sugiere el apoyo de la plaza itinerante, solo sea en casos especiales y debidamente justificadas.  Con base en la entrada de trabajo actual de los despachos evaluados, se sugiere que la plaza de Jueza o Juez itinerante se distribuya anualmente de la siguiente forma:   * 6 meses en Pococí (segundo y tercer trimestre del año) * 3 meses en San José (primer trimestre del año) * 3 meses en Cartago y Pérez Zeledón (cuarto trimestre del año)   Distribución de tiempo que debería mantenerse hasta que la carga de trabajo en estos despachos presente variaciones significativas.  De ser acogida la distribución de recurso humano adicional para los juzgados de ejecución de la pena, donde crecerían de 13 a 16 jueces, se estaría equilibrando la carga de trabajo según se describe a continuación:    Cabe indicar que las tres plazas nuevas (al igual que las plazas regulares de cada juzgado) deberán atender una cuota de entre 75 y 85 casos terminados por mes.  Según se aprecia, el panorama identificado en el estudio 677-PLA-RH-OI-2019 aprobado por el Consejo Superior en sesión 44-19 celebrada el 16 de mayo de 2019, artículo XII, persiste y de ahí la necesidad de dar continuidad al recurso analizado. De seguido se resumen las condiciones observadas:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | SITUACIÓN OBSERVADA | PERSISTE | CAMBIO | | Cuota de sentencias para Tribunales de Juicio | Imagen relacionada |  | | Planes remediales para Tribunales con alta cantidad de asuntos pendientes | Imagen relacionada |  | | Aumento en la cantidad de sentencias condenatorias | Imagen relacionada |  | | Hacinamiento carcelario | Imagen relacionada |  | | Aumento de personas sentenciadas usando brazaletes | Imagen relacionada |  | | Crecimiento en la cantidad de solicitudes presentadas por quienes usan brazaletes | Imagen relacionada |  |   Cabe agregar que una condición establecida para la asignación del recurso en el informe 677-PLA-RH-OI-2019, fue que el despacho mantenga un rendimiento acorde con los indicadores establecidos en el estudio 34-PLA-OI-2019, aspecto que ha cumplido el Juzgado de Ejecución de Alajuela; no obstante, cabe aclarar que se mejora el trámite migrando de expediente físico a expediente electrónico, por lo cual, se trabaja en una modificación de los indicadores para evaluar el despacho bajo el nuevo sistema de trabajo electrónico. Al respecto se adjuntan los resultados de octubre y noviembre 2019:    Del análisis realizado a la batería de indicadores, se establece que el despacho alcanzó satisfactoriamente las cuotas de asuntos terminados y la cantidad de resoluciones firmadas, sin embargo, la cantidad de asuntos terminados no fue suficiente para igualar la cantidad de asuntos entrados, por lo cual el circulante continuó en crecimiento.  Igualmente se observa que los plazos de respuesta están por arriba del parámetro propuesto y que la cantidad de expedientes en espera del estudio del Instituto Nacional de Criminología van en aumento (pericia requerida para dictar auto sentencia); situación que ya fue conocida por Corte Plena en sesión 13-14 del 31 de marzo de 2014, artículo XXII,  al analizar el estudio de auditoría 299-AUO-2014 del 14 de marzo de 2014, por lo que acordó trasladar éste, entre otros temas, a la Comisión Interinstitucional de Personas Privadas de Libertad, la cual por cambios en su estructura no ha gestionado lo solicitado. Se estima oportuno, remitirle nuevamente la gestión, para que la citada Comisión analice y proponga eventuales soluciones ante la lenta respuesta del Instituto Nacional de Criminología.  Como se indicó, el pendiente o circulante en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela va en crecimiento al pasar de 1705 casos al último día laboral de 2018, aumentando a 2011 al finalizar diciembre 2019, para un crecimiento absoluto de 306 casos, equivalente a un 18%. Es por lo que, se espera en el año 2020 se mejoren los resultados del Juzgado.  Además, cabe observar el comportamiento de los casos terminados desde 2012 por todos los juzgados de Ejecución de la Pena del país:  CUADRO 2  CASOS TERMINADOS EN LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y PROMEDIO MENSUAL POR JUEZA O JUEZ Y POR TÉCNICA O TÉCNICO JUDICIAL, DURANTE EL PERÍODO 2012- JUNIO 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Periodo | Juzgados de Ejecución de la Pena | | | | | | | | | TOTAL | Alajuela | San José | Cartago/ Pérez Zeledón | Pococí | Puntarenas | Liberia | Limón | | 2012 | 8839 | 4156 | 1599 | 1165 | 656 | 450 | 426 | 387 | | 2013 | 9625 | 4811 | 1707 | 1091 | 611 | 504 | 505 | 396 | | 2014 | 10711 | 5105 | 1969 | 1374 | 650 | 575 | 540 | 498 | | 2015 | 11642 | 5362 | 2056 | 1684 | 798 | 651 | 588 | 503 | | 2016 | 11907 | 5171 | 2325 | 1411 | 1139 | 697 | 662 | 502 | | 2017 | 10878 | 4623 | 2114 | 1567 | 820 | 588 | 606 | 560 | | 2018 | 12051 | 5526 | 1956 | 1815 | 1036 | 652 | 645 | 421 | | 2019 (a) | 12540 | 5815 | 1701 | 1785 | 1147 | 788 | 758 | 546 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Promedio Mensual para el 2019 (c) | 1114,7 | 516,9 | 151,2 | 158,7 | 102,0 | 70,0 | 67,4 | 48,5 | | Cantidad de juezas o jueces | 13 | 5 | 2 | 2(b) | 1 | 1 | 1 | 1 | | Promedio mensual terminados | 85,7 | 103,4 | 75,6 | 79,3 | 102,0 | 70,0 | 67,4 | 48,5 | | Por jueza o juez (c) | | Cantidad de técnicas o Técnicos judiciales | 19,5 | 7,5(d) | 4,5(d) | 2,5(c)(d) | 1,5(d) | 1 | 1 | 1,5(d) | | Promedio mensual terminados por técnica o técnico judicial | 57,2 | 68,9 | 33,6 | 63,5 | 68,0 | 70,0 | 67,4 | 32,4 |   NOTAS: (a) Datos pendientes de validación por parte del Subproceso de Estadística.  (b) El cálculo del promedio mensual tomó como base 11.25 meses por año.  (c) El personal ordinario de Cartago es una Jueza, un Coordinador Judicial y un Técnico Judicial, además se incluye una plaza de Juez y otra de Técnico Judicial que están físicamente en la sede de Pérez Zeledón.  (d) La plaza de Coordinador Judicial, se establece que debe distribuir su tiempo 50%para atender labores administrativas y el 50% restante para atender temas relacionados con el trámite de asuntos.  FUENTE: Elaboración propia con datos del Subproceso de Estadística.  El cuadro anterior muestra una tendencia al crecimiento, salvo en 2017 que hubo una huelga de empleados del Poder Judicial ante reformas en el régimen de pensiones y jubilaciones que tuvo paralizada gran parte de la Institución. Por su parte, en lo que respecta al 2019, se observa que San José y Cartago registran una reducción de asuntos terminados pese al crecimiento en la entrada, situación que obedece al seguimiento de asuntos bajo la nueva modalidad de monitoreo electrónico, ya que estos casos ingresan y se mantienen en circulante por los años que se haya dictado la sentencia sin que dependa del despacho su término.  A nivel de casos terminados se propone un parámetro mínimo de 75 asuntos por cada plaza de judicatura, de esa forma se podría absorber la actual entrada de casos e idealmente 85 para también poder disminuir circulante.  Cabe indicar que el análisis realizado al Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, identificó que aproximadamente el 16% de los asuntos entrados en 2019 son monitoreo electrónico, y el 85% del circulante activo son monitoreo electrónico; además, se estableció que por cada monitoreo electrónico se generan casi dos gestiones mensuales (solicitudes del beneficiario o reportes de la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Justicia), lo que resulta una carga de trabajo relevante en el accionar del Juzgado, por lo tanto, se estima oportuno que el Subproceso de Estadística y la Dirección de Tecnología de la Información continúen con el desarrollo de los ajustes necesarios para que esta situación se pueda visualizar en SIGMA, facilitando futuros análisis del tema.   * **Diseño de un formulario para control mensual. -**   Se diseñó un nuevo apartado en la fórmula que utiliza el Subproceso de Estadística, para el control y seguimiento mensual de la carga de trabajo, donde se registre por separado este mecanismo, sin embargo, aún está pendiente de que la Comisión de la Jurisdicción Penal lo conozca y apruebe.   * **Implementación de la Ley de Justicia Restaurativa. -**   El Consejo Superior en sesión 47-19, celebrada el 23 de mayo de 2019, artículo I, al conocer el informe 726-PLA-RH-2019 elaborado por la Dirección de Planificación, donde se analizó la entrada en vigencia de la Ley 9582 “Ley de Justicia Restaurativa”, identificó que con base en el artículo 14, es posible someter a proceso restaurativo en la etapa de Ejecución de la Pena el seguimiento de las penas alternativas impuestas dentro de un proceso restaurativo, los abordajes técnicos dirigidos a la ubicación en un programa no institucional, entre otros, por lo que acordó dar cobertura al modelo de justicia restaurativa en Ejecución de la Pena, a partir de un equipo con cobertura a nivel nacional.  De manera específica se propuso la creación de un equipo interdisciplinario integrado por un profesional en Trabajo Social, Psicología, Fiscala o Fiscal Auxiliar, Defensora o Defensor Público y Técnica o Técnico Judicial para ubicar eventualmente en las zonas del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica y Alajuela. No obstante, no fue posible disponer de ese recurso dadas las restricciones presupuestarias establecidas por el Ministerio de Hacienda.  A pesar de ello, el programa de Justicia Restaurativa continúa realizando los esfuerzos para implementar el abordaje de las diversas materias en Contravenciones, Sanciones Penales Juveniles y Ejecución de la Pena para efecto de un mejor aprovechamiento de su capacidad instalada.  De la consulta realizada a la Licda. Jovanna Calderón Altamirano, quien funge como ejecutora del Programa de Fortalecimiento de Justicia Restaurativa y Profesional de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, sobre lo que se está trabajando en Ejecución de la Pena, mencionó que el abordaje que se pretende es de la siguiente forma:  a. Que la Fiscalía y la Defensa de Ejecución sean los encargados de ir revisando casos que potencialmente pueden pasarse a justicia restaurativa y lo trasladan al Juzgado de Ejecución.  b. El Juzgado de Ejecución de la Pena revisará los requisitos legales y si lo considera necesario, pedirá un reporte al Ministerio de Justicia y Paz.  c. El Ministerio de Justicia y Paz realizará un reporte indicando si la persona cumple con las condiciones para entrar al Programa de Justicia Restaurativa.  d. El Juzgado de Ejecución recibirá el expediente y se lo pasará al Equipo Psicosocial.  e. El Equipo Psicosocial hará la investigación y valoración pertinente. En el caso de que sea positiva pedirá la reunión restaurativa.  f. La reunión restaurativa será desarrollada por una Jueza o Juez diferente al que inició el caso, con la intención de que si ésta fracasa pueda volver al trámite ordinario.  La expectativa del programa es que se disminuya la cantidad de incumplimientos del monitoreo electrónico (eventos), lo cual equivale al 5,63% de la entrada a nivel país en el 2018. Según el rediseño de ejecución de San José que es la oficina que concentra los monitoreos, por cada expediente se dan 8 eventos, la idea sería lograr disminuir esa cantidad.  Se estableció un Plan Piloto para implementar el programa en el Juzgado de Ejecución de la Pena del ICJSJ, sin embargo, no ha sido posible implementarlo porque se depende de la respuesta del Ministerio de Justicia y Paz. Se mantienen a la espera del pronunciamiento, por cuanto se ocupa su anuencia para disponer del reporte y ejecutar el plan, y lograr extenderlo en el resto de los Circuitos Judiciales.  Corresponderá a las plazas de Juez o Jueza de Ejecución de la Pena, deberán también contribuir con los casos que procedan de Justicia Restaurativa en sus procesos, cuando así corresponda.  **3.3. CRITERIO DE PLANIFICACION:**  Con base en los datos antes analizados se estima oportuno la formalización de las plazas asignadas con carácter ordinaria, de forma que las dos plazas de Jueza o Juez 2 para el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela y la plaza de Jueza o Juez Supernumerario especializado en Ejecución de la Pena para atender en forma itinerante en todos los Juzgados de Ejecución de la Pena del país sean ordinarias a partir del 2021.  De llegarse a suspender los planes de descongestionamiento en los Tribunales de Juicio (secciones emergentes), cabe observar que aun así los despachos quedarían trabajando bajo parámetros de producción que antes no tenían, por lo cual, la cantidad de personas sentenciadas, usuarias del servicio de Ejecución de la Pena, se mantendría por arriba de los valores observados antes del Proyecto de Rediseño en Materia Penal, manteniendo alta la carga de trabajo para los juzgados que conocen Ejecución de la Pena. Ahora bien, bajo los supuestos:   * Que la entrada en 2020 se mantenga similar al 2019. * Que la plaza de Juez Itinerante se asigne durante el año, seis meses en Pococí, tres meses en San José y tres meses en Cartago permitiendo equiparar el promedio de casos entrados según se detalla en la siguiente tabla.     x  **Nota x**: Entrada promedio por Jueza o Juez, luego de distribuir la actual carga de trabajo entre el total de personal disponible en 2019 (incluyendo las tres plazas adicionales creadas de forma extraordinaria este año. Donde la plaza itinerante cubre 25% de su tiempo en San José, 25% en Cartago-Pérez Zeledón y el 50% restante en Pococí.)   * Que todas las personas juzgadoras alcancen la cuota establecida entre 75 y 85 asuntos terminados por mes (incluso las 3 plazas adicionales).   Al finalizar el año, sería de esperar que los circulantes dejaran de crecer por acumulación de casos nuevos, ya que en todos los casos (salvo en el despacho de Cartago-Pérez Zeledón (86)) la entrada se igualaría a la salida. Incluso de considerarse en el modelo los Juzgados de Puntarenas (66) y Limón (50) para los que no se recomienda apoyo adicional, su entrada por abajo del parámetro de producción (entre 75 y 85 asuntos terminados por mes), implicaría una reducción del circulante en Ejecución de la Pena a nivel país.  De acuerdo con el modelo propuesto, las dos plazas adicionales para Alajuela son requeridas porque la entrada es mayor a la capacidad instalada y si bien las plazas ordinarias cumplen las cuotas establecidas, el circulante y tiempo de respuesta están creciendo; de ahí que las plazas nuevas son para asumir el porcentaje de carga de trabajo descubierta, siendo prioritario el dictado de auto sentencias.  Al igual que ocurre en Alajuela, en Pococí, San José y Cartago, también se experimenta un crecimiento en la población sentenciada que demanda servicios de los juzgados de Ejecución de la Pena, donde la entrada de asuntos ha aumentado, pero no lo suficiente para recomendar una plaza adicional a tiempo completo, ante este panorama es que se recomienda la plaza itinerante en estos despachos para que apoye en la atención del fallo de expedientes, debiendo alcanzar una cuota de entre 75 a 85 asuntos terminados por mes.  Cabe observar que San José (94), Cartago (96) y Pococí (123), registran entradas de asuntos nuevos por Jueza o Juez superiores a la capacidad máxima de producción identificada (entre 75 y 85 asuntos al mes). Sin embargo, esa entrada es insuficiente para recomendar la creación de una plaza adicional en forma permanente, ante este panorama es que se recomienda la asignación de una plaza de Jueza o Juez Supernumerario que en forma itinerante asuma el exceso de las entradas en estos Juzgados permitiendo evitar que sus circulantes continúen en aumento.  El trabajo atendido por la plaza de Jueza o Juez itinerante deberá ser incluida en la respectiva tabla de indicadores de gestión por el número de días que apoya cada Juzgado. Además, el CACMFJ, deberá establecer sus propios controles y mediciones para la plaza que estará a cargo de este Centro y coadyuvar con las audiencias en donde existan inhibitorias en Justicia Restaurativa en las zonas donde se cuente con un solo juez, realizando las debidas coordinaciones. |
| IV. Elementos Resolutivos  **4.1.** Bajo el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal que persigue:   1. Mejorar los tiempos de respuesta para la persona usuaria de toda la jurisdicción penal. 2. Incrementar la efectividad de los debates. 3. Aumenta la cantidad de personas sentenciadas   El rediseño de procesos en los tribunales penales permite que el Poder Judicial aumente el número de personas sentenciadas, resultado positivo que impactan con un aumento de la carga de trabajo de los juzgados de ejecución de la pena de todo el país, por lo cual, la necesidad de recursos adicionales identificada en el estudio 677-PLA-RH-OI-2019 aprobado por el Consejo Superior en sesión 44-19 celebrada el 16 de mayo de 2019, artículo XII, persiste.  **4.2.** Estadísticamente se tiene que entre 2016 y 2018 hubo un crecimiento anual de 1607 sentencias de las cuales el 66% fue condenatoria.  **4.3.** Por su parte, la cantidad de personas juzgadoras en ejecución de la pena es constante desde 2013, en tanto el volumen de asuntos entrados por año, creció un 34,4% desde ese año y el 2019.  **4.4.** El aumento de personas sentenciadas, impacta el hacinamiento carcelario por lo cual el Ministerio de Justicia construye un módulo adicional en el centro penal La Reforma con capacidad para 1248 privados de libertad, que deberá atender el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.  **4.5.**  El Consejo Superior en sesión 107-16 celebrada el 29 de noviembre 2016, artículo XLIX, aprobó el informe 1317-PLA-2015 relacionado con el Modelo de Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño, en el que se indica que cada vez que se rediseñe un Circuito Judicial se dotará a la Administración Regional de una plaza de Profesional 2, con la finalidad de que se dé Sostenibilidad a los despachos y oficinas; a partir de la cual se garantiza que los resultados favorables del rediseño Penal sea permanentes, por lo cual el número de sentencias continúen en aumento y por ende la cantidad de personas sentenciadas.  **4.6.** Se estima importante que se prorroguen las dos plazas adicionales de Jueza o Juez del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela por registrar la mayor carga de trabajo por plaza de Jueza o Juez a nivel nacional y la pronta apertura de nuevos espacios en la cárcel de La Reforma, que sin duda van a generar un aumento aún mayor en su carga de trabajo.  **4.7.** Se estima necesaria prorrogar la plaza de Jueza o Juez Supernumerario especializado en Ejecución de la Pena, que de forma itinerante apoye todos los Juzgados de Ejecución de la Pena del país, prioritariamente al despacho de Pococí, San José y Cartago, por lo que debe ser ubicada en el CACMFJ, quien se encargará de realizar planes remediales por atender con ese recurso.   * Con base en la carga de trabajo actual de los despachos evaluados, se sugiere que la plaza de Jueza o Juez itinerante se distribuya anualmente de la siguiente forma: Seis meses en el Juzgado de Pococí * Tres meses en el Juzgado de San José * Tres meses en el Juzgado de Cartago   Permitiendo alcanzar la distribución de asuntos entrados según se describe en la siguiente tabla.    x  **Nota x**: Entrada promedio por Jueza o Juez, luego de distribuir la actual carga de trabajo entre el total de personal disponible en 2019 (incluyendo las tres plazas adicionales creadas de forma extraordinaria este año. Donde la plaza itinerante cubre 25% de su tiempo en San José, 25% en Cartago-Pérez Zeledón y el 50% restante en Pococí.)  La anterior distribución de asuntos entrados y bajo el supuesto que todos los despachos alcancen la cuota de producción establecida como parte del estudio de rediseño en Ejecución de la Pena (entre 75 y 85 asuntos terminados por mes), permitiría concluir que la plaza itinerante viene a equiparar la entrada y salida de asuntos en Ejecución de la Pena.  **4.8.** El Consejo Superior en sesión 47-19, celebrada el 23 de mayo de 2019, artículo I, al conocer el informe 726-PLA-RH-2019 elaborado por la Dirección de Planificación, donde se analizó la entrada en vigencia de la Ley 9582 “Ley de Justicia Restaurativa” donde identificó que con base en el artículo 14, es posible someter a proceso restaurativo en la etapa de Ejecución de la Pena el seguimiento de las penas alternativas impuestas dentro de un proceso restaurativo, los abordajes técnicos dirigidos a la ubicación en un programa no institucional, entre otros, por lo que acordó dar cobertura al modelo de justicia restaurativa en Ejecución de la Pena, a partir de un equipo con cobertura a nivel nacional. |
| V. Recomendaciones  **5.1.** Conforme con lo consignado se recomienda el cambio de condición de las plazas y modificarlas de extraordinarias a ordinarias, en las siguientes plazas en Ejecución de la Pena:   | Despacho | Cant. | Tipo de plaza | Condi-ción actual | Recomen  dación | Período | Costo  Estimado (a) | Observaciones | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Juzgado Ejecución de la Pena Alajuela | 2 | Juez 2 | Extraor-dinaria | Ordinaria | 2021 | 108.938.000 (¢54.469.000 c/u) | Para laborar en Jornada Vespertina por falta de espacio. | | CACMFJ | 1 | Juez Supernu-merario Especia-lizado en Ejecu-ción de la Pena | Extraor-dinaria | Ordinaria | 2021 | ¢53.387.000 | Plaza itinerante para colaborar con todos los Juzgados de Ejecución de la Pena | | TOTAL | 3 |  | | | | ¢163.325.000 |  |   NOTA: (a) Según información suministrada por el Subproceso de Formulación del Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, para el 2020.  Resulta oportuno observar que a falta de espacio físico y en tanto la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela lo resuelve, estas plazas deberán continuar laborando en jornada vespertina, con el apoyo de la plaza de Técnico Judicial ordinario del Juzgado que fue trasladada a este horario.  Igualmente, en la medida de lo posible en horario vespertino se deberán atender casos de “escritorio”, en los cuales no se requiere la custodia del OIJ.  La cuota de producción para cada una de las dos plazas adicionales (al igual que para el personal de planta) es entre 75 y 85 casos terminados por mes.  **5.2. Condicionamiento por el cual se otorga el recurso (Impacto esperado)**  Se conceden las plazas descritas con el propósito de absorber el aumento que se presenta en la carga de trabajo de los Juzgados de Ejecución de la Pena como resultado de un mayor número de personas sentenciadas debido al rediseños alcanzados en los Tribunales de Juicio del país.  Con base en el artículo 14 de la ley 9582 “Ley de Justicia Restaurativa” a partir del cual es posible someter a proceso restaurativo en la etapa de Ejecución de la Pena el seguimiento de las penas alternativas impuestas dentro de un proceso restaurativo, los abordajes técnicos dirigidos a la ubicación en un programa no institucional, entre otros, es que se establece que las plazas que se recomienda crear como las ya existentes, deberán apoyar en el desarrollo de las audiencias para resolver bajo el proceso restaurativo en todo los despachos del país, acorde con la cobertura que aprobó el Consejo Superior en sesión 47-19 del 23 de mayo de 2019, artículo I.  **5.3.** El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela deberá continuar atendiendo la matriz de indicadores de gestión aprobada por el Consejo Superior para conocer el estado de la carga laboral. Incluyendo el trabajo desarrollado por las dos plazas adicionales.  En relación con el recurso ubicado en el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, la oficina que sea beneficiada con ese apoyo deberá llevar el detalle de las labores realizadas por ese puesto y el estado de la carga laboral en general. La persona designada deberá rendir entre 75 y 85 asuntos terminados por mes. Además, el CACMFJ, deberá establecer sus propios controles y mediciones para la plaza que estará a cargo de este Centro. Hasta tanto sea proyecto la Dirección de Planificación debe seguir con el control según lo aprobó el Consejo Superior, por lo que esta Dirección deberá informar cuando termine el proyecto para lo que al Centro de Apoyo le corresponda.  Igualmente, se recomienda solicitar a la Comisión Interinstitucional de Personas Privadas de Libertad) que en atención del acuerdo tomado por Corte Pena en sesión 13-14 del 31 de marzo de 2014, artículo XXII, analice y proponga eventuales soluciones ante la lenta respuesta del Instituto Nacional de Criminología en la remisión de los estudios técnicos requeridos al evaluar beneficios como la libertad condicional o casa por cárcel bajo monitoreo electrónico.  **5.4. Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)**  La administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela, deberá procurar espacio para las dos plazas adicionales de forma que puedan ser trasladadas al horario regular para alcanzar un mayor desempeño al disponer del resto de servicios de la institución operando en igual horario.  **5.5. Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial**  El recurso que se analiza se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional 2019-2024, en el objetivo “Resolver conflictos de forma imparcial, célere y eficaz, para contribuir con la democracia y la paz social” incluido en el tema estratégico” Resolución oportuna de Conflictos”.  **5.6. Limitaciones Presupuestarias**  La Corte Plena ha brindado directrices en cuanto a la limitación de crecimiento de plazas nuevas, sin embargo, estas plazas ya venían laborando de forma extraordinaria, por lo que se analiza su funcionamiento y se recomienda la continuidad y cambio de categoría. |
| Realizado por Lic. Juan Carlos Brenes Azofeifa, Profesional 2. |
| Revisado por Ing. Jorge Rodriguez Salazar, Coordinador Unidad de Estudios Operativos |
| Aprobado por Licda. Ginethe Retana Ureña, Jefa Subproceso Organización Institucional |
| Visto bueno Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i. de Planificación |

**-0-**

**Se acordó**: **1.)** Aprobar técnicamente el informe 434-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación, no obstante la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior de las plazas que se recomiendan en este estudio técnico, quedará sujeta a un análisis final e integral que hará el Consejo Superior de todas las plazas que finalmente queden aprobadas, con antelación al envío del proyecto de presupuesto a Corte Plena. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XVII**

**DOCUMENTO N°** **4572-2020**

# La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presentó el **Informe 435-PLA-RH-OI-2020**, estudio de Requerimiento Humano del **Juzgado Contravencional de La Unión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección de Planificación** | | **Fecha:** | *12/03/2020* |
| **Estudio de Requerimiento Humano** | | **# Informe:** | *435-PLA-RH-OI-2020* |
| **Proyecto u oficinas analizadas:** | Juzgado Contravencional de La Unión (Técnica o Técnico Judicial 2 asignado al Juzgado Contravencional de La Unión). | | |
| **I. Plazas por Analizar** | |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | | ***Juzgado Contravencional de La Unión*** | | | 1 | Técnica o Técnico Judicial 2 | | | |
| **II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada** | Mediante informe 620-PLA-EV-2019 del 06 de mayo del 2019, la Dirección de Planificación realizó el estudio integral de la Materia de Tránsito en el Circuito Judicial de Cartago, en el que se propone, para el Juzgado Contravencional de La Unión, una ampliación de su competencia, mediante la inclusión de la Materia de Tránsito, por consiguiente, se determinó la necesidad de contar con una plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, en este despacho, para su atención. | | |
| **III. Información Relevante** | ***3.1 Antecedentes***    Se revisaron los siguientes acuerdos del Consejo Superior y Corte Plena, relacionados con la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, y la Materia de Tránsito en el Circuito Judicial de Cartago, según se indica:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N° Informe** | **Plazas Analizadas** | **Acuerdo del Consejo Superior y Corte Plena** | **Justificación de la asignación del recurso** | | ***30-PLA-PI-2016*** | *Técnico Judicial 2,**para el Juzgado de Trabajo de Cartago.* | ***Acta 38-16 del 20-4-2016, art. IV y Corte Plena del 19-6-2016*** | *Ante la implementación de la Reforma al Código de Trabajo* | | ***550-PLA-EV-2019*** | *Diversas plazas para atender el impacto a partir de la implementación de la Reforma al Código de Trabajo para el 2020.* | ***Acta 38-19 del 2-5-2019, art. II*** | *En este informe se recomendó la continuidad de las plazas de Técnico Judicial 2 en forma ordinaria a partir del 2020, y dentro de las cuales se consideró una plaza del Juzgado de Trabajo de Cartago.* | | ***605-PLA-RH-EV-2019*** | *La plaza extraordinaria de Técnico Judicial 2 del Juzgado de Trabajo de Cartago, sea reasignada de forma extraordinaria al Juzgado de Tránsito de La Unión.”.* | ***Acta 42-19 del 9-5-2019, art. IV*** | *Considerándose el beneficio al Servicio Público, aprobar el informe de manera que la plaza extraordinaria de Técnico Judicial 2 del Juzgado de Trabajo de Cartago, sea reasignada de forma extraordinaria al Juzgado de Tránsito de La Unión.* | | ***620-PLA-EV-2019*** | *Equiparación de cargas de trabajo del Juzgado de Tránsito de Cartago y Juzgado Cont. de La Unión.* | ***Acta 46-19 del 21-5-2019, art. XXXII*** | *Propuestas para la equiparación de cargas de trabajo del personal del Juzgado de Tránsito de Cartago y Juzgado Contravencional de la Unión, entre otros diversos aspectos, para mejorar el servicio brindado a las personas usuarias.* |   Como complemento a los acuerdos referidos, se entrevistaron las siguientes personas:   * Licda. María de los Ángeles Solano Gamboa, Jueza del Juzgado Contravencional de La Unión. * Licda. Abigail Gómez Abarca, Encargada del Modelo de Sostenibilidad, del Circuito Judicial de Cartago de la Dirección de Planificación.   ***3.2.- Información relevante***  A partir de la implementación de la Reforma al Código de Trabajo, se asignó para el 2017, 2018 y 2019 una plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, en forma extraordinaria, en el Juzgado de Trabajo de Cartago.  Para el 2020, la plaza referida fue reasignada de forma extraordinaria al Juzgado Contravencional de La Unión, ello en beneficio del servicio público; para ello, fue necesario modificar lo acordado por el Consejo Superior en sesión 38-19, artículo II, cuando conoció el informe 550-PLA-EV-2019, relacionado con el análisis de la continuidad de plazas extraordinarias para el 2020, asignadas ante la implementación de la Reforma al Código de Trabajo.  Sobre los elementos que originaron la reasignación de la plaza Técnica o Técnico Judicial 2, es pertinente indicar que con motivo del proyecto de seguimiento del Circuito Judicial de Cartago, se determinó la conveniencia de dar continuidad a la plaza indicada, trasladándola al Juzgado Contravencional de La Unión, debido a la propuesta de hacer una ampliación de competencia para ese despacho, mediante la inclusión de la materia de Tránsito, que actualmente se tramita en el Juzgado de Tránsito de Cartago.  La propuesta de ampliar la competencia del Juzgado Contravencional de La Unión, fue analizada a través del estudio integral de la Materia de Tránsito para el Circuito Judicial de Cartago, número 620-PLA-EV-2019 del 06 de mayo del 2019, con motivo del proyecto de seguimiento del Circuito Judicial de Cartago, el cual forma parte del Modelo de Sostenibilidad que está llevando a cabo la Dirección de Planificación en diversos Circuitos Judiciales del país.  En el estudio integral de cita, se exponen diversos escenarios orientados a equiparar las cargas de trabajo del personal del Juzgado de Tránsito de Cartago y Contravencional de La Unión, así como algunas acciones para mejorar el servicio brindado.  El informe, 620-PLA-EV-2019 referido, fue puesto en conocimiento de Corte Plena, para su valoración, y actualmente se encuentra agendado[[2]](#footnote-2).  Por consiguiente, de seguido se muestra un extracto de elementos, sobre la carga de trabajo expuestos en este estudio, que justifican el traslado de la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, al Juzgado Contravencional de La Unión y la ampliación de su competencia en Materia de Tránsito.  ***3.3.-Traslado de la Plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, al Juzgado Contravencional de La Unión y la Ampliación de su Competencia en Materia de Tránsito.***  El traslado de la plaza extraordinaria de Técnica o Técnico Judicial 2 al Juzgado Contravencional de La Unión, se realizó con la finalidad de apoyar el área de manifestación y el trámite inicial de los asuntos de la materia de Tránsito, conforme se indica:   * -Revisión y actualización de datos en el sistema de todos los asuntos nuevos. * -Confección de resolución inicial. * -Anotación de bienes por medio del Sistema de Registro Electrónico de Mandamientos SREM. (entre otros).   Las labores antes descritas deberán ser atendidas, ante la posible ampliación de su competencia territorial en Materia de Tránsito para el Juzgado Contravencional de La Unión[[3]](#footnote-3).  Aunado a la propuesta de ampliar la competencia del Juzgado Contravencional de La Unión, mediante la inclusión de la Materia de Tránsito, se consideró oportuno (conforme se indica en el estudio integral de la Materia de Tránsito referido) reordenar la competencia territorial en Tránsito y Contravenciones, de forma que el Juzgado Contravencional y el Juzgado de Tránsito de Desamparados asuman la competencia territorial según sus materias del Distrito Río Azul, lo anterior en procura de generar un mejoramiento de la accesibilidad a la justicia de las personas usuarias.  Por consiguiente, al referirse a la carga de trabajo del Juzgado Contravencional de La Unión, y Transito de Cartago, ante el posible traslado de competencias territorial de la materia de Tránsito, se hace necesario integrar al Juzgado de Tránsito de Desamparados en su análisis.  En virtud de ello, de seguido se muestra el impacto en la entrada de asuntos nuevos y en las cargas de trabajo que tendría el Juzgado Contravencional de La Unión, el Juzgado de Tránsito de Cartago y el Juzgado de Tránsito de Desamparados, ante la equiparación de las cargas de trabajo para la Materia de Tránsito y el trasladar las competencias en esta Materia:  **Cuadro 1**  **Propuesta 1: Proyección del impacto en la entrada de asuntos y cargas de trabajo de la materia de Tránsito en el Juzgado Contravencional de La Unión, Juzgado de Tránsito de Desamparados y el de Cartago, al trasladar la competencia del Cantón de La Unión y Distrito de Río Azul. Datos del 2017 a octubre 2018**    ***Fuente:***Informe *620-PLA-EV-2019 del 06 de mayo del 2019.*  Con el traslado de la competencia de la materia de Tránsito al Juzgado Contravencional de La Unión y al Juzgado de Tránsito de Desamparados, el Juzgado de Tránsito de Cartago dejaría de recibir alrededor de 112 asuntos mensuales.  A su vez, cada persona juzgadora pasaría de atender 178 asuntos nuevos a 141 en promedio cada mes y las personas técnicas judiciales pasarán de atender 67 asuntos a atender 53 asuntos nuevos mensuales.  Lo anterior facilitaría que el personal del Juzgado de Tránsito de Cartago pueda cubrir la cantidad de asuntos entrados cada mes (el cual supera los 500).  El Juzgado Contravencional de La Unión recibiría 105 asuntos cada mes en promedio correspondiente a la materia de Tránsito para lo cual cuenta con la plaza adicional de Técnica o Técnico Judicial 2 trasladada del Juzgado de Trabajo de Cartago, referida en este informe.  El Juzgado de Tránsito de Desamparados al asumir la competencia de los asuntos del distrito Río Azul, tendría un incremento en la entrada de asuntos de siete expedientes en promedio mensualmente, monto que se estima no desestabilizaría las cargas de trabajo del personal del despacho.  A continuación, se muestra el análisis de datos estadísticos y cargas de trabajo que tendría el Juzgado Contravencional y Tránsito de La Unión con relación a sus homólogos, con base en el análisis proyectado del informe integral de la Materia de Tránsito de Cartago 620-PLA-EV-2019 de cita, en el cual se muestra el comportamiento en las cargas de trabajo:  **Cuadro 2**  **Análisis de despachos homólogos que atiende la materia de Faltas y Contravenciones y Tránsito a nivel nacional**  **Resultados del 2017 al primer semestre del 2018**   | **Juzgados Contravencionales y de Tránsito** | | **II CJ de la Zona Atlántica** | **I CJ de la Zona Sur** | **La Unión (proyectado)** | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Estructura de personal** | **Cant. de personas técnicas judiciales** | **5** | **6** | **4** | | **Cant. de personas técnicas judiciales que tramitan** | **4** | **5** | **3,5** | | **Cant. de personas juzgadoras** | **2** | **2** | **1** | | **Datos estadísticos y cargas de trabajo del personal** | **Entrada Total** | **4897** | **4315** | **3653** | | **Entrada Mensual** | **261** | **230** | **195** | | **Reentrados** | **81** | **33** | **48** | | **Cant. de asuntos entrados por técnico/a judicial por mes** | **65** | **46** | **56** | | **Cant. de asuntos entrados por Juez/a por mes** | **131** | **115** | **195** | | **Terminados Total** | **4494** | **4345** | **3380** | | **Terminados Prom. Mensual** | **240** | **232** | **180** | | **Cant. de asuntos terminados por técnico/a judicial por mes** | **60** | **46** | **52** | | **Cant. de asuntos terminados por Juez/a por mes** | **120** | **116** | **180** | | **Circulante final** | **2001** | **972** | **666** | | **Cant. de asuntos del Circulante por técnico/a judicial** | **500** | **194** | **190** | | **Cant. de asuntos del Circulante por Juez/a** | **1001** | **486** | **666** | | **Relación salida/entrada** | **92%** | **101%** | **93%** |   ***Fuente:***Informe *620-PLA-EV-2019 del 06 de mayo del 2019.*  Actualmente a nivel nacional los Juzgados Contravencionales y Tránsito de Pérez Zeledón y Guápiles son los únicos despachos que atienden en conjunto esas dos materias. De los tres despachos analizados, el de La Unión sería el que presentaría la mayor carga laboral para la persona juzgadora.  En relación con la entrada de asuntos por persona técnica judicial, el Juzgado de Guápiles es el que presenta la carga más alta, siendo que en promedio cada técnica o técnico judicial debe atender tres asuntos diarios. Las personas técnicas judiciales de Pérez Zeledón atienden en promedio dos asuntos diarios nuevos. Siendo que las del Juzgado de La Unión en promedio atenderían dos asuntos y medio cada día, por persona técnica judicial.  La cantidad de asuntos de circulante activo que deberá asumir cada persona técnica judicial del Juzgado de La Unión es de 190 asuntos en promedio por cada una de ellas, siendo esta una carga laboral manejable, de acogerse las recomendaciones contenidas en el informe 620-PLA-EV-2019.  **3.4.- Carga de trabajo actual.**  En línea con lo antes expuesto de seguido se muestra la carga de trabajo actual del Juzgado de Tránsito de Cartago, respecto a la de otros despachos homólogos del país*:*  **Cuadro 3**  **Promedio Mensual de Casos Entrados por Técnica o Técnico Judicial, Casos Terminados y Circulante en los siguientes Juzgados Especializados en**  **Materia de Tránsito al 2019.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Juzgado de Tránsito** | **Casos Entrados**  **(1)** | **Asuntos Terminados** | **Circulante Final** | **Técnica o Técnico Judicial (T.J.) (2)** | **Promedio Mensual de Casos Entrados por T.J. (4)** | | **I C.J. San José** | 11.576 | 11.982 | 3.048 | 23.5 **(3)** | 44 | | **II C.J. San José (Goicoechea)** | 11.601 | 11.261 | 4.092 | 22.5 | 46 | | **III C.J. San José (Desamparados)** | 3.259 | 3.994 | 1.306 | 4.5 | 64 | | **I C.J. Alajuela** | 7.066 | 7.029 | 1.190 | 8.5 | 74 | | **II C.J. Alajuela (San Carlos)** | 1.294 | 1.385 | 285 | 2.5 | 46 | | **III C.J. Alajuela (San Ramón)** | 2.205 | 2.331 | 714 | 5.5 | 36 | | **Cartago** | 5.391 | 5.737 | 1.678 | 8.5 | 56 | | **Heredia** | 7.415 | 7.290 | 1.883 | 10.5 | 63 | | **II C.J. Guanacaste (Nicoya)** | 494 | 656 | 100 | 4.5 | 10 | | **Puntarenas** | 1.892 | 1.977 | 582 | 3.5 | 48 | | **I C.J. Zona Atlántica (Limón)** | 1.501 | 1.650 | 595 | 4.5 | 30 |   ***Notas:*** (1) Los casos entrados incluyen los reentrados. (2) Incluye 0.50 de la plaza de Coordinadora o Coordinador Judicial. (3) Incluye una plaza de Técnica o Técnico Supernumeraria o Supernumerario, asignada al Despacho. (4) Para el cálculo del promedio mensual se utilizaron meses hábiles por consiguiente 11.25 meses.  ***Fuente:*** Información suministrada por el Subproceso de Estadística, así como la Relación de Puestos del 2020.  Según se aprecia, durante el 2019 los mayores promedios mensuales de casos entrados por Técnicas o Técnicos Judiciales se concentraron en los despachos del I Circuito Judicial de Alajuela (74), seguido por Desamparados (64) y Heredia (63). En una cuarta posición aparece el Juzgado de Tránsito de Cartago (56), cuyo monto casi duplica las cargas de trabajo de su homólogo de Limón (30).  Aunado a lo anterior, al considerar el promedio mensual “general” de asuntos entrados por Técnica o Técnico Judicial, para el bloque de juzgados homólogos referidos, se estableció un promedio mensual general de 47 casos. En ese sentido, al compararlo con el reportado para las Técnicas o Técnicos Judiciales del Juzgado de Tránsito de Cartago (56) estos últimos presentan una carga de trabajo superior en términos relativos.  **Ahora bien, al relacionar los asuntos terminados con el ingreso de asuntos, se tiene que, en el Juzgado de Tránsito de Cartago, se obtuvo una tasa de pendencia de 106 %, lo que denota que, durante el 2019, ese despacho logró terminar no solo lo ingresado en ese periodo sino también 346 asuntos más del circulante.**    Paralelo a lo antes expuesto, de seguido se presenta el impacto en la entrada de asuntos nuevos actuales que tendrían el Juzgado Contravencional de La Unión, el Juzgado de Tránsito de Cartago y el Juzgado de Tránsito de Desamparados.  **Cuadro 4**  **Impacto en la entrada de asuntos y cargas de trabajo de la materia de Tránsito en el Juzgado Contravencional de La Unión, Juzgado de Tránsito de Desamparados y el de Cartago, al trasladar la competencia del Cantón de La Unión y Distrito de Río Azul.**  **Datos al 2019.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Variable*** | ***Juzgado de Tránsito***  ***de Cartago*** | | ***Juzgado Contravencional***  ***de La Unión*** | | ***Juzgado de Tránsito***  ***de Desamparados*** | | | **Entrada**  **Actual** | **Impacto en**  **la Entrada** | **Entrada**  **Actual** | **Impacto en**  **la Entrada** | **Entrada**  **Actual** | **Impacto en**  **la Entrada** | | **Cantidad promedio de entrada asuntos mensual** | **475** | **475** | **0** | **(-)** | **287** | **287** | | **Incremento o descenso de asuntos entrados por mes correspondientes a La Unión /Rio Azul** | **(-)** | **-128** | **(-)** | **100** | **(-)** | **28** | | **Circulante Activo** | **2009** | **2009** | **0** | **\*\*\*** | **2040** | **2040** | | **Cantidad de Personas Juzgadoras** | **3** | **3** | **1** | **1** | **2** | **2** | | **Cantidad de personas técnicas judiciales** | **8** | **8** | **4** | **5**  **(+1)** | **4** | **4** | | **Promedio de entrada mensual por Jueza o Juez** | **158** | **116** | **0** | **100** | **144** | **158** | | **Promedio de entrada mensual por Técnico o Técnica Judicial** | **59** | **43** | **0** | **20** | **72** | **79** |   **Fuente:** *Subproceso de Estadística.*  Conforme se visualiza en el cuadro anterior, al revisar la carga de trabajo de 2019, ante el traslado de la competencia de la materia de Tránsito al Juzgado Contravencional de La Unión y al Juzgado de Tránsito de Desamparados; el Juzgado de Tránsito de Cartago dejaría de recibir alrededor de 128 asuntos mensuales, similar a la cantidad indicada en el informe 620-PLA-EV-2019 de referencia, la cual fue de 112 asuntos.  A su vez, para el 2019, cada persona juzgadora dejaría de atender 42 asuntos nuevos al mes (al pasar de 158 asuntos nuevos a 116 en promedio), en tanto las personas técnicas judiciales tendrían una baja de 16 asuntos nuevos al mes (al pasar de atender 59 asuntos a 43 asuntos nuevos). Lo anterior representa una disminución en las cargas de trabajo de 60 casos mensuales, con respecto a las proyecciones efectuadas en el informe 620-PLA-EV-2019.  Por su parte, con los datos del 2019 el Juzgado Contravencional de La Unión recibiría 100 asuntos cada mes en promedio proveniente de la materia de Tránsito, monto similar al mencionado en el informe integral de cita (105).  El Juzgado de Tránsito de Desamparados, a partir de los datos reportados al 2019, en caso de asumir la competencia de los asuntos del distrito Río Azul tendría un incremento en la entrada de asuntos de 28 expedientes en promedio mensualmente, carga de trabajo superior a la descrita en el estudio integral referido, sin embargo, ese incremento se estima que no desestabilizaría las cargas de trabajo del personal del despacho.  A continuación, se muestra el comportamiento en las cargas de trabajo que tendría el Juzgado Contravencional y Tránsito de La Unión con relación a sus homólogos, los cuales corresponden a los Juzgados Contravencionales y Tránsito de Pérez Zeledón y Guápiles ya que son los únicos despachos que atienden en conjunto esas dos materias a nivel nacional.    **Cuadro 5**  **Análisis de los despachos homólogos que atienden las materias de Faltas y Contravenciones y Tránsito a nivel nacional (incluyendo al Juzgado**  **Contravencional de La Unión). Resultados del 2019.**   | **Juzgados Contravencionales y de Tránsito** | | **II CJ de la Zona Atlántica** | **I CJ de la Zona Sur** | **La Unión**  **(a)** | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Estructura de personal** | **Cant. de personas técnicas judiciales** | **5** | **6** | **4** | | **Cant. de personas técnicas judiciales que tramitan** | **4** | **5** | **3,5** | | **Cant. de personas juzgadoras** | **2** | **2** | **1** | | **Datos estadísticos y cargas de trabajo del personal** | **Entrada Total** | **2492** | **1899** | **2035**  **(a)** | | **Entrada Mensual** | **222** | **169** | **181**  **(a)** | | **Reentrados** | **57** | **15** | **26** | | **Cant. de asuntos entrados por técnico/a judicial que tramita por mes** | **56** | **34** | **52** | | **Cant. de asuntos entrados por Juez/a por mes** | **111** | **85** | **181** | | **Terminados Total** | **2717** | **1922** | **1240**  **(b)** | | **Terminados Prom. Mensual** | **242** | **171** | **110** | | **Cant. de asuntos terminados por técnico/a judicial que tramita por mes** | **61** | **34** | **31** | | **Cant. de asuntos terminados por Juez/a por mes** | **121** | **86** | **110** | | **Circulante final** | **536** | **286** | **258**  **(c)** | | **Cant. de asuntos del Circulante por técnico/a judicial que tramita** | **134** | **57** | **74** | | **Cant. de asuntos del Circulante por Juez/a** | **268** | **143** | **258** | | **Relación salida/entrada** | **109%** | **101%** | **61%** |   **Notas:** *(a) La proyección corresponde únicamente a la Materia de Tránsito, y los resultados de esa proyección (100\*11.25=1.125) se suman al ingreso de la Materia Contravencional (910). (b) La proyección se realizó tomando en consideración que los 992 asuntos terminados en Materia Contravencional representan el 80% de sentencias dictadas por la persona juzgadora (periodo enero-agosto 2018), según lo indicado en el informe 620-PLA-EV-2019 de referencia. (c) Corresponde únicamente a la Materia Contravencional.*  **Fuente:** *Subproceso de Estadística.*  Ahora bien, según se observa en el cuadro anterior de los tres despachos homólogos para el 2019, el de La Unión sería el que presentaría la mayor carga laboral para la persona juzgadora (181), respecto de las proyecciones realizadas en el estudio integral referido en el apartado anterior.  Con relación a la entrada de asuntos por persona técnica judicial para el 2019, el Juzgado de Guápiles es el que presentaría la carga más alta, siendo que en promedio cada técnica o técnico judicial atendería cerca de tres asuntos diarios.  Por su parte, las personas técnicas judiciales de Pérez Zeledón atenderían en promedio cerca de dos asuntos diarios nuevos. Mientras que las del Juzgado de La Unión en promedio atenderían 1.23 asuntos, siendo este último dato inferior al referido en el informe 620-PLA-EV-2019 (de 2.5 asuntos), debido a una baja en el ingreso de asuntos nuevos en este último despacho.  La cantidad de asuntos de circulante activo que deberá asumir cada persona técnica judicial del Juzgado de La Unión es de 74 asuntos en promedio, por cada una de ellas, cantidad inferior a la referida en informe 620-PLA-EV-2019, ello debido a que se generó una disminución en el circulante respecto a la en él proyectada.  **3.5.- Criterio de las personas entrevistadas.**   * **Juzgado Contravencional de La Unión.**   La Licda. María de los Ángeles Solano Gamboa, Jueza del despacho, indicó que actualmente la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2 proveniente del Juzgado de Trabajo de Cartago y asignada al Juzgado Contravencional de La Unión, fue asignada a la atención de la manifestación, y de incorporarse la Materia de Tránsito en este despacho, se asignaría a las labores propias de esta materia, según lo consignado en el informe 620-PLA-EV-2019, en que se propone el traslado de la competencia territorial de la Materia de Tránsito.     * **Modelo de Sostenibilidad, del Circuito Judicial de Cartago.**   La Licda. Abigail Gómez Abarca, expuso que a través de la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, ubicada actualmente en el Juzgado Contravencional de La Unión, se está atendiendo una de las labores asignadas, conforme el estudio 620-PLA-EV-2019 referido, la cual corresponde a la manifestación, no obstante, de momento el Juzgado no es competente en la materia de Tránsito, ya que ello dependerá de lo que acuerde Corte Plena cuando conozca el informe de referencia.  A su vez enfatizó, que debido a la carga de trabajo que muestra el Juzgado de Tránsito de Cartago, de no acogerse las recomendaciones contenidas en el informe referido, la plaza sería indispensable en el Circuito de Cartago para la atención de la materia de Tránsito, por lo que tendría que ser asignada al Juzgado de Tránsito de Cartago.  **3.6.- Criterio de la Dirección de Planificación**  El informe **620-PLA-EV-2019** de la Dirección de Planificación, sobre las propuestas de equiparación de cargas de trabajo del personal del Juzgado de Tránsito de Cartago y Juzgado Contravencional de La Unión, así como las acciones para mejorar el servicio, fue puesto en conocimiento de Corte Plena, el cual actualmente se encuentra agendado por ese órgano superior.  **En consecuencia, si la valoración del informe referido, por parte de Corte Plena, indica la aprobación de las recomendaciones en él contenidas, (orientadas a la equiparación de la carga de trabajo y el mejoramiento del servicio público en el Circuito de Cartago), el Juzgado Contravencional de La Unión requerirá mantener en forma ordinaria la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2 a partir del 2021, pero reasignada a la categoría de Técnica o Técnico Judicial 1, para la atención de la materia de Tránsito en este Juzgado.** Particularmente, ese recurso se abocaría a la atención de las labores ordinarias propias de esta materia, como lo son: la manifestación y el trámite inicial de los asuntos, revisión y actualización de datos en el sistema de todos los asuntos nuevos; confección de resolución inicial, anotación de bienes por medio del Sistema de Registro Electrónico de Mandamientos SREM, (entre otros).  Ahora bien, si la valoración del informe referido, por parte de Corte Plena, indica la no aprobación de las recomendaciones en él contenidas, se requiere trasladar la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2 que actualmente se encuentra ubicada en el Juzgado Contravencional de la Unión, al Juzgado de Tránsito de Cartago, por lo que resta del presente año, y a partir del 2021 asignarla de forma ordinaria a este último despacho pero con la categoría salarial de Técnica o Técnico Judicial 1; debido a que este último Juzgado, es uno de los cuatro despachos especializados en materia de Tránsito, que mostraron la mayor carga de trabajo por Técnica o Técnico Judicial, durante el 2019. | | |
| **IV. Elementos Resolutivos** | **4.1.-** A partir de la implementación de la Reforma al Código de Trabajo, al Juzgado de Trabajo de Cartago se le ha venido asignando una plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, en forma extraordinaria, desde el 2017 y hasta el 2019.  **4.2.-** A través del informe **620-PLA-EV-2019** del 6 de mayo del 2019, referente a la propuesta de equiparación de cargas de trabajo del personal del Juzgado de Tránsito de Cartago y el Juzgado Contravencional de La Unión, se propone una ampliación de la competencia para el Juzgado Contravencional de La Unión, mediante la incorporación de la materia de Tránsito que actualmente tramita el Juzgado de Tránsito de Cartago.  **4.3**.- Se determinó la conveniencia de dar continuidad a la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, trasladándola del Juzgado de Trabajo de Cartago al Juzgado Contravencional de La Unión, en virtud de la propuesta de ampliación de la competencia en materia de Tránsito, de este último despacho, y de esta manera disponer del recurso humano suficiente para su atención.  **4.4**.- El Consejo Superior en sesión 46-19, celebrada el 21 de mayo del 2019, artículo XXXII, acordó, entre otros, tener por rendido el informe **620-PLA-EV-2019** de la Dirección de Planificación, sobre las propuestas de equiparación de cargas de trabajo del personal del Juzgado de Tránsito de Cartago y el Juzgado Contravencional de La Unión, así como las acciones para mejorar el servicio brindado; a su vez, poner en conocimiento de Corte Plena las recomendaciones dirigidas a esa instancia para su valoración, el cual actualmente se encuentra agendado para su conocimiento.  **4.5**.- CConforme con las proyecciones expuestas en el informe 620-PLA-EV-2019 y mencionadas en el presente informe, se determinó en esa oportunidad un ingreso mensual de 112 asuntos nuevos al mes en materia de Tránsito, la cual se incrementó llegando a 128 asuntos nuevos mensuales con los datos actualizados del 2019, que deberán ser atendidos en el Circuito Judicial de Cartago, para lo cual se requiere el traslado de la actual plaza extraordinaria de Técnica o Técnico Judicial 2, ya sea al Juzgado Contravencional de Cartago o al Juzgado de Tránsito de Cartago, por lo que resta del 2020, así como su asignación de forma definitiva a uno de los despachos indicados a partir del 2021, pero con la categoría salarial de Técnica o Técnico Judicial 1, sujeto a lo que disponga la Corte Plena sobre las recomendaciones consignadas en el informe 620-PLA-EV-2019.  **4.6.–** La plaza de Técnica o Técnico Judicial 2 destacada en el Juzgado Contravencional de La Unión, está dedicada de momento a apoyar el área de manifestación, en espera del pronunciamiento de Corte Plena sobre el referido informe 620-PLA-EV-2019.  **4.7.-** Luego de actualizar las cargas de trabajo con los datos estadísticos correspondientes al 2019, en caso de acogerse el traslado de la competencia de la materia de Tránsito al Juzgado Contravencional de La Unión y al Juzgado de Tránsito de Desamparados (asuntos procedentes del distrito Río Azul), el efecto directo para el Juzgado de Tránsito de Cartago se reflejaría en menores cargas de trabajo para las personas juzgadoras (pasaría de 158 a 116 asuntos entrados al mes por puesto) y para las personas técnicas judiciales (pasaría de 59 a 43 asuntos entrados al mes por puesto), lo que crearía condiciones laborales más favorables para el personal asignado.  **4.8.-** Dentro del bloque de despachos judiciales homólogos del país, competentes en materia de Tránsito, el Juzgado de Tránsito de Cartago ocupó en el 2019 la cuarta posición entre los juzgados con mayor volumen promedio mensual de asuntos entrados por Técnica o Técnico Judicial, lo que sugirió la pertinencia de modificarle su competencia territorial para promover mejoras en el servicio público brindado. En ese sentido, fueron enfocadas las recomendaciones del informe 620-PLA-EV-2019, las cuales están a la espera de ser conocidas y avaladas por Corte Plena.  **4.9.-** La Dirección de Planificación es del criterio que en caso de ser avaladas las recomendaciones del informe 620-PLA-EV-2019,el Juzgado Contravencional de La Unión requerirá mantener en forma ordinaria la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2 a partir del 2021, pero reasignada a la categoría de Técnica o Técnico Judicial 1, para la atención de la materia de Tránsito en este Juzgado.  Por el contrario, de no aprobarse las mencionadas recomendaciones, se requiere trasladar la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2 que actualmente se encuentra ubicada en el Juzgado Contravencional de la Unión, al Juzgado de Tránsito de Cartago, por lo que resta del presente 2020, y a partir del 2021 asignarla de forma ordinaria a este último despacho, pero con la categoría salarial de Técnica o Técnico Judicial 1.  Lo anterior, obedece a que este último Juzgado, es uno de los cuatro despachos especializados en materia de Tránsito, que mostraron la mayor carga de trabajo por Técnica o Técnico Judicial, durante el 2019. | | |
| **V. Recomendaciones** | Se emiten las siguientes recomendaciones:  **5.1**.- Con el fin de fortalecer la atención de la materia de Tránsito en el Circuito Judicial de Cartago, así como el mejoramiento en la atención de la persona usuaria, y la óptima utilización del recurso, se recomiendan las siguientes plazas para el 2021:   | **Despacho** | **Cant** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomendación** | **Perío-do** | **Costo**  **Estimado** | **Obs.** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Seguimiento Juzgado Contravencional de la Unión** | | | | | | | | | **Juzgado Contravencional de La Unión** | 1 | Técnico (a) Judicial 1 | Extraordinaria (1) | Ordinaria | 2021 | **¢ 14.389.000.00** |  | | **TOTAL** | **1** |  | | | | **¢ 14.389.000.00** |  |   ***Nota: (1)*** *Actualmente existe una plaza extraordinaria de Técnica o Técnico Judicial 2 asignada al referido despacho.*  **5.2.- Condicionamiento por el que se otorga el recurso (impacto esperado)**  **5.2.1.-** De no ser acogidas por Corte Plena las recomendaciones contenidas en el informe 620-PLA-EV-2019, se recomienda asignar la plaza de Técnica o Técnico Judicial 2, al Juzgado de Tránsito de Cartago, por lo que resta del presente año, y a partir del 2021 autorizar la creación de una plaza de Técnica o Técnico Judicial 1 en condición ordinaria al referido despacho, al ser ese Juzgado uno de los cuatro despachos especializados en ésta materia, que mostraron durante el 2019 la mayor carga de trabajo por Técnica o Técnico Judicial.  Por consiguiente, ante la incidencia de los asuntos de la materia de Tránsito en esta provincia, indistintamente del despacho al que se le asigne su competencia territorial, requiere fortalecerse la atención de esos asuntos, para lo cual se hace necesario personal de apoyo adicional que se encargue de labores relacionadas con la manifestación, el trámite inicial de los asuntos, la revisión y actualización de datos en el sistema de todos los asuntos nuevos, la confección de resolución inicial, anotación de bienes por medio del Sistema de Registro Electrónico de Mandamientos SREM, al ser tareas propias de la materia de Tránsito.  **5.3.- Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)**  Si bien la Licda. Solano Gamboa, externó en su oportunidad que la plaza se asignó al Juzgado Contravencional de La Unión sin el equipo y mobiliario correspondientes, debe recordarse que al momento de darse la creación de puestos nuevos (ya sea en forma ordinaria o extraordinaria), se toman las previsiones a nivel presupuestario para dotarlos con esos recursos adicionales.  Al respecto, se corroboró en la Administración Regional de Cartago con la Licda. Maricruz Solano Siles y el servidor José Leandro Ramírez Cordero, por su orden Coordinadora de Unidad 3 (Área Jurisdiccional) y Técnico Administrativo 1, quienes confirmaron que el equipo y mobiliarios comentados fueron entregados al Juzgado Contravencional de La Unión el  Por consiguiente, no se recomienda la asignación de recursos adicionales (tales como equipo de cómputo y mobiliario de oficina), al confirmarse su existencia con la Administración Regional de Cartago.  **5.4.- Vinculación con el Plan Estratégico Instituciona (PEI) del 2019-2024**  El presente estudio está en concordancia con lo establecido en el Tema Estratégico 5 que indica:  “Dirigir la gestión judicial en función de las prioridades instituciones con el fin de maximizar el uso de los recursos” la cual tiene vinculación las siguientes acciones estratégicas:   * Gestión Estratégica Institucional. * Gestión de Políticas Institucionales. * Gestión Administrativa por medio del Portafolio de ProyectosEstratégicos”. | | |
| **Realizado por:** | *Licda. María Teresa Benavidez Argüello, y Anthony Sibaja Hernández, Profesionales 2* | | |
| **Revisado por:** | *Lic. Minor Anchía Vargas, Coordinador de Unidad 3.* | | |
| **Aprobado por:** | *Licda. Ginethe Retana Ureña, Jefa Subproceso Organización Institucional.* | | |
| **Visto bueno:** | *Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación.* | | |

**-0-**

**Se acordó: 1.)** Aprobar técnicamente el informe 435-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación, no obstante la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior de las plazas que se recomiendan en este estudio técnico, quedará sujeta a un análisis final e integral que hará el Consejo Superior de todas las plazas que finalmente queden aprobadas, con antelación al envío del proyecto de presupuesto a Corte Plena. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XVIII**

**DOCUMENTO N°** **4574-2020**

# La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presentó el **Informe 495-PLA-RH-OI-2020**, estudio de Requerimiento Humano del **Sistema Contable del Poder Judicial (Dirección de Tecnología de Información y Departamento Financiero Contable)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dirección de Planificación** | **Fecha:** | *27/03/2020* |
| **Estudio de Requerimiento Humano** | **# Informe:** | *495-PLA-RH-OI-2020* |

|  |
| --- |
| **Proyecto u oficinas analizadas:**  *Sistema Contable del Poder Judicial (Dirección de Tecnología de Información y Departamento Financiero Contable).* |
| **I. Plazas por Analizar**   |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | | ***Dirección de Tecnología de Información*** | | | 1 | Profesional Informática 2 | | ***Departamento Financiero Contable*** | | | 1 | Coordinadora o Coordinador de Unidad 3 | | 3 | Profesionales 2 | |
| 1. **Justificación de la Situación o Necesidad Planteada**   El Sistema Contable del Poder Judicial inició en el 2013 como un proyecto, y tiene como objetivo fundamental facilitar el control y la rendición de cuentas de la institución respecto al costo de la justicia.  Las plazas se requieren para atender la sostenibilidad continua y permanente, que implica el mantenimiento y ajuste de las funcionalidades, interfaces y reportes entre otros, que conforman las cuatro áreas del Sistema Contable:   1. Poder Judicial (formulación y ejecución presupuestaria). 2. Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 3. Fondo de Socorro Mutuo. 4. Contaduría Judicial.     Lo anterior implica un cambio en las tecnologías de la información como en la lógica del proceso, consecuencia de reformas en los procedimientos o en la normativa que rige el accionar de la institución; áreas de las cuales, se hará referencia en apartados posteriores de este informe.  Asimismo, la atención permanente del proceso de integración, del Sistema Contable a los sistemas siguientes:   * Sistema de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial (SIGA-PJ) * Sistema de Gestión Humana (SIGA-GH) * Sistema de Inventario y Materiales (SIM) * Sistema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (SIGA-FJP) * Sistema de Inversiones (SCI).   Integración a nivel nacional de Caja Chica del sistema SIGA-PJ (módulo de libro de bancos del Sistema Contable).  Además, la integración de nuevas interfaces con el Sistema Contable, a saber:   * El Sistema Institucional de Control de Activos del Poder Judicial (SICA-PJ). * Incorporación del Poder Judicial con el Sistema de Compras Públicas (SICOP), y su enlace Sistema de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial (SIGA-PJ).   Aunado a los anterior, el Sistema Contable requiere mejoras continuas que se originan de los requerimientos de usuarios internos del Departamento Financiero Contable, así como, externos a esta dependencia, o bien, del Poder Judicial, las cuales deben ser atendidos con prioridad.  A su vez, en forma permanente es necesario brindar mantenimiento a los incidentes que se presentan en el Sistema Contable, propios de su puesta en producción, y su uso permanente. |
| **III. Información Relevante**  ***3.1.- Antecedentes***  Los puestos en estudio se prorrogaron para el 2019 (informe 16-PLA-OI-2018[[4]](#footnote-4) de la Dirección de Planificación), y fueron otorgados con la finalidad de darle continuidad al desarrollo del Sistema Contable del Poder Judicial de forma exclusiva, y de esta forma cumplir con las actividades establecidas en el cronograma del 2019, donde abarcará el soporte y contención a la entrada en producción de las áreas del Fondo de Socorro Mutuo y Contaduría y sus implicaciones como migración de datos, equiparación de resultados del paralelo con el Subproceso Contable, capacitaciones del personal usuario, creación del módulo de seguridad, atención de incidentes y mejoras, carga de datos, entre otras.  Estos mismos puestos se prorrogaron para el 2020, (informe 255-PLA-RH-EV-2019[[5]](#footnote-5) de esta Dirección), con el propósito de seguir brindando continuidad al desarrollo del “Sistema Contable del Poder Judicial” de forma exclusiva y atender las necesidades relacionadas con el tema del mantenimiento, actualización y sostenibilidad de las cuatro áreas en producción que integran el Sistema Contable, así como a las implementaciones de las nuevas funcionalidades proyectadas y de estaforma cumplir con las actividades establecidas en el cronograma del 2020 adjunto. (Ver anexo 1)  ***3.2.-Análisis de Estadísticas e Indicador de Gestión***  Para el análisis de la gestión que desarrolla las cuatro plazas de profesional que integran el equipo de trabajo que atiende el Sistema Contable Institucional, se estableció un **indicador de gestión o rendimiento**, el cual se aplicará para el período bajo análisis (2019):  ***“Número de actividades realizadas anualmente, entre el número de actividades programadas por año”.***  En este sentido, el equipo de trabajo a cargo del Sistema Contable tuvo el siguiente desempeño al 2019:   |  |  | | --- | --- | | **SISTEMA CONTABLE DEL PODER JUDICIAL** | | | Actividades realizadas al finalizar el período | 1.277 | | Actividades programadas para el 2018 | 1.370 | | **Porcentaje de cumplimiento** | **93,21%** |   Durante el 2019, se planeó ejecutar un total de 1.277 actividades, de las cuales se llevaron a cabo 1.370, lo que da un cumplimiento relativo de un 93,21%. Es pertinente destacar, que en ese año se debieron atender modificaciones efectuado por la Superintendencia de Pensiones SUPEN en el Catálogo Contable (tema que será expuesto en el apartado 3.4 de este informe), el cual generó una cantidad considerable de actividades para modificar los sistemas de manera que se ajustara a la disposición establecidas, lo que impidió el cumplimiento al 100% del cronograma propuesto.  En virtud de lo antes referido se realizaron ajustes a las tareas programadas en el 2019; en el Anexo 2 de este informe, se detallan las actividades programadas y ajustadas, así como las que fueron realizadas.    ***3.3.- Labores realizadas durante el 2019.***  A fin de **ilustrar las tareas** que realiza el equipo de trabajo asignado para el Sistema Contable, se muestra la siguiente información:  *Tabla 1*  *Conformación de los Sistemas Administrados por el Macroproceso Financiero Contable*   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Conformación del Sistema Contable Poder Judicial** | **Conformación del SIGAPJ** | | Funcionalidades del Sistema | 259 | 588 | | Reportes | 139 | 593 | | Tablas de la Base de datos | 401 | 950 | | Interfaces del Sistema Contable | 176 | --- | | Interfaces desarrolladas por Otros Sistemas | 213 | 2 |   ***Fuente****:* *Información suministrada por el Departamento Financiero Contable, y la Dirección de Tecnología de Información.*  La tabla anterior muestra la cantidad de funcionalidades, reportes, interfaces, entre otros, que se han desarrollado para el Sistema Contable, las cuales requieren de mantenimiento y control continuo.  En este sentido de seguido se presentan las principales actividades de sostenibilidad de los sistemas, cantidad de usuarios y cantidad de transacciones por tipo de documento.  *Tabla 2*  *Cantidad de actividades de sostenibilidad, de usuarios y de transacciones por tipo de documento, realizadas durante el 2019.*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Variable/Sistema | **Sistema Contable** | **SIGAPJ** | | **Principales actividades sostenibilidad** | **662** | **873** | | Mejoras | 88 | 144 | | Nuevos requerimientos | 9 | 9 | | Incidentes | 136 | 165 | | Scripts | 429 | 555 | | **Cantidad de usuarios** | **177** | **12 357** | | **Cantidad de registros por tipo de documento** | **579 925** | **945.609** | | Inclusiones e incrementos de cuentas por cobrar | 62 143 |  | | Abonos | 94 099 |  | | Inclusiones e incrementos de cuentas por pagar | 83 545 |  | | Devoluciones | 95 906 |  | | Inclusiones e incrementos de otras cuentas contables | 129 089 |  | | Cancelaciones | 50 262 |  | | Asientos ejecutados | 5 949 |  | | Movimientos de Libros | 42 734 |  | | Movimientos Contables Relacionados | 14 511 |  | | Procesos automáticos ejecutados | 1 687 |  | | Actas de contratos |  | 17 283 | | Contratos |  | 918 | | Pedido |  | 18 781 | | Solicitud de pedido |  | 10 905 | | Certificaciones |  | 1 359 | | SME |  | 1 613 | | SMI |  | 1 464 | | Cambios de línea |  | 25 128 | | Afectaciones a Momentos Presupuestarios |  | 275 445 | | Caducos |  | 27 405 | | Reservas |  | 20 196 | | SIR |  | 17 306 | | Documento Soporte |  | 57 720 | | Facturas Electrónicas |  | 100 282 | | Solicitud de pago |  | 5 291 | | Acuerdos de pago |  | 30 260 | | Transferencias |  | 5 423 | | Formularios de Viáticos |  | 176 379 | | Reintegros de Caja Chica |  | 125 032 | | Procesos automáticos |  | 36 318 |   ***Fuente****:* *Información suministrada por el Departamento Financiero Contable, y la Dirección de Tecnología de Información.*  El cuadro anterior detalla las actividades realizadas durante el 2019, las cuales deben realizarse para lograr la sostenibilidad (mantenimiento) de los sistemas administrados por el Macroproceso Financiero Contable:  Asimismo, se indica la cantidad de personas usuarias a los cuales el equipo de trabajo debe brindar atención, evidenciándose que la cantidad de transacciones por tipo de documento son numerosas, y deben ser analizadas al momento de la verificación de las inconsistencias. Los datos del volumen de la carga de trabajo relacionada con este tema se pueden apreciar en el resumen siguiente:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Variable/Sistema | **Sistema Contable** | **SIGAPJ** | | **Principales actividades sostenibilidad** | **662** | **873** | | Mejoras | 88 | 144 | | Nuevos requerimientos | 9 | 9 | | Incidentes | 136 | 165 | | Scripts | 429 | 555 | | **Cantidad de usuarios** | **177** | **12 357** | | **Cantidad de registros por tipo de documento** | **579 925** | **945.609** |   *Las actividades realizadas en el 2019 demuestran parte de las labores ordinarias, que realiza el grupo de profesionales que atiende el Sistema Contable Institucional, las cuales requieren realizarse en forma continua para lograr la sostenibilidad (mantenimiento) a las diferentes funcionalidades del Sistema Contable.*  ***3.4.- Funciones encomendadas a las plazas***  Actualmente el Sistema Contable de Poder Judicial, se encuentra a cargo de las cinco plazas extraordinarias, referidas en este informe, siendo que, en algunas ocasiones, en momentos de alta demanda en el Sistema, el Departamento Financiero Contable ha debido incorporar una plaza adicional de profesional 2, al igual que lo ha debido realizar la Dirección de Tecnología de Información (desatiendo otras labores ordinarias).  De la entrevista realizada a la Máster Floribel Campos Solano, Jefa a.í, y a la Licda. Maria Antonieta Herrera Charraun, en su orden Jefa del Departamento Financiero Contable y Jefa del Proceso Presupuestario Contable, señalaron que el Sistema Contable requiere de una atención permanente, labor que ha venido desarrollándose a través del grupo de trabajo referido, atendiéndose con ello, el surgimiento de incidentes, mejoras, cambios en las bases de datos, entre otros, que surgen de la administración propia del Sistema.  En este sentido, al tratarse de un sistema integrado, requiere de la sostenibilidad continua y permanente, que implica el mantenimiento y ajuste de las funcionalidades, interfaces y reportes entre otros, que conforman las cuatro áreas del Sistema Contable (Poder Judicial (formulación y ejecución presupuestaria), Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Fondo de Socorro Mutuo y Contaduría Judicial, ya que una mejora o requerimiento en una de estas áreas, incide en el funcionamiento de otras de ellas directamente.  Los ajustes en los sistemas que integran actualmente el Sistema Contable, (Sistema de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial (SIGA-PJ), Sistema de Gestión Humana (SIGA-GH), Sistema de Inventario y Materiales (SIM), Sistema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (SIGA-FJP), Sistema de Inversiones (SCI) e Integración a nivel nacional de Caja Chica del sistema SIGA-PJ, módulo de libro de bancos del Sistema Contable. ), así como otros, que se incorporen a futuro, tiene incidencia no solo en el Sistema que requiere el ajuste sino en los otros que lo conforman.  Importante agregar que los sistemas integrados son de distinta naturaleza, en los que se gestionan procedimientos sensibles como lo son contrataciones, pago a proveedores, información presupuestaria, financiera y contable, trámites sensibles dentro de las gestiones de la institución.  Adicionalmente se indica que el Sistema Integrado de Contabilidad, permite la presentación de informes, o “rendiciones de Cuentas” a dependencias externas e internas del Poder Judicial, como, por ejemplo:   * *Contabilidad Nacional y Ministerio de Hacienda, que se rinden informes trimestrales sobre la contabilidad del Poder Judicial.* * *Contraloría General de la República, para la cual se deben generar informes de diversa naturaleza.*   *Superintendencia de Pensiones, que se le debe enviar saldos e informes de forma mensual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.*   * *A la Dirección Ejecutiva se deben brindar informes trimestrales a sobre todas las áreas contables.*   Lo anterior, requiere generar informes a través del *Sistema Integrado de Contabilidad*, que conllevan un grado de complejidad, por cuanto los sistemas integrados son de distinta naturaleza, y se gestionan procedimientos sensibles, los que deben ser atendidos por el grupo de plazas que ocupa a este estudio para garantizar la veracidad de la información que se brinde.  También este sistema debe dar respuesta a diversos requerimientos de instituciones estatales, así como, la normativa que incide en el funcionamiento del Sistema, ejemplo de ello lo constituye, la Ley 9544 denominada “Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y todas las labores relacionadas a este fondo.  Fue con base en esa normativa, que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) informó al Poder Judicial sobre los cambios que se han generado, lo que obliga a realizar ajustes al Catálogo Contable ([[6]](#footnote-6)).  Para el cumplimiento de tales cambios existe la necesidad de realizar modificaciones al Sistema Contable en el cual se lleva la contabilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y en el Sistema Integrado de Inversiones (SCI), así como la integración contable entre ambos sistemas.  Lo citado anteriormente provocó una diversidad de implicaciones, como, por ejemplo: mejoras a las bases de datos, así como al Sistema, ejecución de pruebas integrales, capacitación en el uso del Sistema Contable, ya que los cambios varían la operación de la Contabilidad.  El ejemplo anterior comprueba, como una modificación al Sistema Contable, que se genere, ya sea como consecuencia de una solicitud de una institución del Estado, cambios en la normativa vigente, o cualquier otro requerimiento en la Contabilidad, tiene como efecto, diversas implicaciones que debe ser atendidas en forma inmediata por los profesionales que ocupan las plazas referidas.  En este sentido, a cada una de las plazas asignadas al Sistema Contable Institucional, se le han encomendado diferentes funciones y actividades, con el propósito de lograr la sostenibilidad y control de la calidad del Sistema las cuales se puede apreciar en el Anexo 3 de este informe.  Los puestos analizados en este informe realizan labores profesionales complejas y variadas y donde la función principal continúa siendo “Ejecutar labores profesionales en el campo de su especialidad”, tal como se establece el perfil competencial del puesto de la Dirección de Gestión Humana.  ***3.5.- Actividades por realizar en el 2021***  Es pertinente indicar, que el trabajo que se genera como consecuencia del mantenimiento del Sistema Contable del Poder Judicial (atendido a través del grupo de plazas referidas en este informe), se ha venido realizando contra cronogramas de trabajo; sin embargo, la programación para 2019 no fue posible desarrollarla según lo programado, afectándose así los cronogramas para el presente así como la programación para el 2021; en el Anexo 4, se detalla la proyección del cronograma de trabajo para el 2021.    Si bien, el equipo de trabajo que brinda sostenibilidad al Sistema Integrado de Contabilidad, conformado por las plazas referidas, orienta su labor a través de programaciones anuales, el cronograma de trabajo del 2019 se vio afectado por dos aspectos fundamentales, a saber:  *Lo anterior, justificado en que durante el 2019 atendieron ajustes (modificaciones) solicitados por la SUPEN (actividades que no estaban programadas y solicitadas extemporáneamente por esa instancia).*   * *El cambio efectuado por la SUPEN en el catálogo contable, antes citado, por lo que se requirió modificar los sistemas, de manera que se ajustaran a la disposición de esta entidad.* * *Se debió contribuir a la atención tema institucional referente a implantar en los sistemas informáticos la sustitución de la Cuenta Cliente por la Cuenta IBAN, ello en virtud de que el Banco Central de Costa Rica estableció, como fecha de entrada en vigencia de cuenta IBAN, el 3 de julio del 2019.*   Lo antes referido fundamentó la necesidad de realizar cambios en el cronograma del Sistema Contable, por lo que se presentó al Consejo Superior el Oficio 2295-DTI-2019 15 de octubre de 2019 en virtud de ello, el Consejo Superior en sesión 90-19, Artículo LXXXIII, acordó entre otros:  *“Acoger la gestión presentada por las másteres Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva y Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información, mediante oficio N° 2295-DTI-2019 recibido el 15 de octubre de 2019; en consecuencia aprobar los siguientes cambios en el cronograma del Sistema Contable: (…) b.) Cambiar el cronograma de trabajo del 2020 del Sistema Contable, lo cual tendría un impacto en las labores aprobadas por este Consejo en la sesión extraordinaria 18-19 (Presupuesto 2020), artículo VIII, celebrada el 28 de febrero del año 2019, para las plazas extraordinarias del Departamento Financiero Contable y la Dirección de Tecnología de Información, encargadas del proyecto del Sistema Contable del Poder Judicial.”*  Por consiguiente, las plazas referidas en el acuerdo del Consejo Superior, citado en el párrafo anterior, corresponde a las encargadas de brindar sostenibilidad al Sistema Integrado de Contabilidad, referidas en este informe, por consiguiente, es necesario disponer del recurso humano para su desarrollo y mantenimiento.  A su vez, es pertinente resaltar que las labores que realiza este equipo de trabajo son tareas ordinarias, y continuas (mantenimiento y ajuste de las funcionalidades, interfaces y reportes entre otros, que conforman las cuatro áreas del Sistema Contable, y los Sistemas que lo integran) para garantizar el buen funcionamiento del Sistema Contable, en el anexo 5, se detallan las actividades ordinarias, las cuales permiten la sostenibilidad y continuidad del Sistema.  Las labores ordinarias, atendidas a través del grupo de trabajo que atiende el *Sistema Integrado de Contabilidad*, son desarrolladas de manera conjunta por todo el personal profesional que lo integra, ya que todo el personal conoce la lógica del negocio, por consiguiente, posee las características necesarias para atender los requerimientos contables de cada uno de los sistemas que lo integran.  Las labores ordinarias que se atienden mediante la plaza de Profesional Informática 2, asignada a la Dirección de Tecnología de Información, se concentran en la atención de las consultas de las personas y los incidentes, reportes y mejoras, así como brindar el mantenimiento de los sistemas. El detalle se puede apreciar en el anexo 6 de este informe. Adicionalmente se detallan en el mismo anexo, las labores ordinarias que se deben atender a través de las plazas de la Coordinadora o Coordinador de Unidad 3 y los tres profesionales 2 del Macroproceso Financiero Contable.  Se podría determinar que de manera generaliza las principales labores que se llevan a cabo por este equipo de trabajo, son las siguientes:   * *Mantenimiento de la información del Sistema y ejecución del control de calidad y monitoreo de la información ingresada y procesada en el Sistema.* * *Mantenimiento de la parametrización y clasificadores de indicadores del Sistema, lo que permite que el Sistema se comunique con los demás Sistemas con los que se integra.* * *Atención de consultas de los usuarios del Macroproceso Financiero Contable y en el tema de Libro de Bancos de Cajas Chicas a nivel nacional.* * *Administrar la seguridad del sistema. Preparar e impartir capacitaciones correspondientes al sistema.* * *Verificación y solicitud de ajustes a la ayuda en línea en el sistema.* * *Coordinar y participar en reuniones con los usuarios del sistema para organizar actividades o definición de necesidades de forma integral brindando criterio con respecto a las implicaciones a nivel de sistema.* * *Analizar y resolver consultas o problemas planteados por Jefaturas, compañeros de trabajo y usuarios en general con respecto al sistema.* * *Análisis y corrección de inconsistencias en los datos almacenados en el sistema que producen errores en la ejecución de los procesos.* * *Análisis y generación de informes de resultados del sistema.* * *Análisis y elaboración de datos necesarios para la elaboración de informes que no se obtengan mediante reportes existentes en los sistemas.* * *Corrección de información registrada de forma incorrecta en el sistema por error de usuario que por la lógica del negocio y que por control interno no pueden ser modificadas mediante las funcionalidades.* * *Análisis y atención de consultas sobre el uso de sistemas institucionales (SIGA-PJ, SIGA-GH, SIM, SICA-PJ, SIGA-FJP, Sistema de Inversiones) y su integración con el Sistema Contable.* * *Análisis, reporte, priorización de incidentes en el Sistema.* * *Análisis y planteamiento de mejoras en el Sistema Contable y en otros Sistemas o en sus interfaces para lograr la integración con los mismos.*   *Análisis y planteamiento de nuevos requerimientos en el Sistema Contable y en otros Sistemas o en sus interfaces para lograr la integración con los mismos.*   * *Certificación e implantación de mejoras, incidentes o nuevos requerimientos del sistema.* * *Revisión y depuración periódica de los datos del Sistema para corrección de inconsistencias en los datos mediante conciliaciones de datos en sistema o entre sistemas.* * *Atención, coordinación y seguimiento de la solución de reportes de usuarios respecto a mensajes informativos y de error que genera el sistema.* * *Administración, control, seguimiento, priorización y coordinación de instalaciones de mejoras o incidentes.* * *Validación de los procesos automatizados del Sistema y su afectación en la información.* * *Definición, administración, coordinación e implantación de procedimientos y medidas administrativas derivadas del funcionamiento y trámite en el Sistema.* * *Análisis y revisión de inconsistencias entre los saldos y movimientos entre auxiliares y saldos contables reportados por el usuario.* * *Análisis de las implicaciones en el Sistema Contable producto de la incorporación del Poder Judicial con el Sistema de Compras Públicas (SICOP).* * *Apoyo en el análisis de ajustes y requerimientos en el histórico contable producto del rediseño y migración del Sistema de Ejecución* Presupuestaria del Poder Judicial (SIGAPJ).   Además de la atención de las labores ordinarias para el 2021, se deberá continuar con el proceso de integración de los sistemas siguientes:   * *El Sistema Institucional de Control de Activos del Poder Judicial (SICA-PJ).* * *Incorporación del Poder Judicial con el Sistema de Compras Públicas (SICOP), y su enlace Sistema de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial (SIGA-PJ).*   Siendo que estas actividades se han debido reprogramar, para continuar con su desarrollo en el 2021.  Aunado a lo anterior, se tiene que el Departamento Financiero Contable inició con el desarrollo del Proyecto de Migración y Rediseño del Sistema Integrado de Ejecución Presupuestario (SIGA-PJ), en el cual participan los Departamentos de Proveeduría, Financiero Contable, Dirección Ejecutiva y Dirección de Tecnología de la Información.  Este Proyecto, conforme se indica en su Acta Constitutiva, tendrá una duración aproximada de cuatro años y tres meses, siendo este un tema que afecta al Sistema Integrado de Contabilidad, por lo cual se requerirá efectuar actividades de coordinación, además de aplicación de pruebas y/o ajustes en el Sistema Integrado de Contable de manera que se mantenga la continuidad en la integración del Sistema Contable.  ***3.6.-Incidencia de la Ley 9544, Reforma Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.***  Ante la reforma al título IX de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, se indica sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, y particularmente su administración los siguiente:  *Artículo 239- Se crea la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial como un órgano del Poder Judicial, que contará con completa independencia funcional, técnica y administrativa, para ejercer las facultades y atribuciones que le otorga la ley.*  En este sentido, respecto a los servicios administrativos y recursos para el funcionamiento de la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el Consejo Superior en la sesión N°94-19 del 29 de octubre del 2019, artículo XXX, acordó entre otros:  *“ 2.) Acoger el criterio de la Dirección Jurídica y con base en sus razonamientos autorizar que por el plazo inicial de dos años se mantendrá todo el apoyo para la operación del Fondo, entendiéndose los servicios administrativos y demás recursos necesarios para su funcionamiento y continuidad del Fondo.3.) La Secretaría General de la Corte y Consejo Superior mantendrá el apoyo a la elaboración de agendas, actas y comunicación de acuerdos, la Dirección Ejecutiva, el Departamento Financiero Contable, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección Jurídica, la Secretaría General de la Corte, el Departamento de Trabajo Social y demás dependencias institucionales, continuaran con el soporte en todos los servicios existentes como se realiza a esta fecha.(…) ”*  Por consiguiente, las áreas del Sistema Contable correspondiente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, continuará siendo atendido por el Departamento Financiero Contable y Dirección de Tecnología de Información, por un plazo inicial de dos años[[7]](#footnote-7).  ***3.7.-Criterio de las personas involucradas***  En reunión de trabajo[[8]](#footnote-8) con las jefaturas y coordinadores del Departamento Financiero Contable y Dirección de Tecnología de Información, así como correo electrónico de fecha 17 de enero del 2020 se indica, entre otros, lo que de seguido se consigna:  *“Sobre el particular, es importante resaltar que con la implantación y puesta en producción del Sistema antes indicado, se han establecido una serie de labores nuevas, ordinarias y permanentes, con alto grado de complejidad, ya que integran sistemas administrativos institucionales de distinta naturaleza, en los que se gestionan procedimientos sensibles (contrataciones, pago a proveedores, información presupuestaria, financiera y contable a entes externos e internos, etc.), que de no realizarse de forma adecuada podría afectar a este Poder de la República en su accionar y en su imagen; por lo cual se solicita valorar la conformación de un equipo de trabajo ordinario, para atender las nuevas labores del Sistema Contable, tanto en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones como en el Macroproceso Financiero Contable, este último el equipo de trabajo estaría a cargo de la sostenibilidad de los diferentes sistemas utilizados por el Macroproceso que involucra las oficinas a nivel nacional.*  *Aunado a lo anterior, el Macroproceso Financiero Contable solicita reconsiderar lo indicado en el oficio 120-FC-2019 de marzo 2019, con el fin que se reclasifique la plaza de Coordinador de Unidad 3 al menos a Jefatura Administrativa IV, considerando la naturaleza de las actividades, la magnitud de la responsabilidad y su grado de especialización, teniendo en cuenta la imposibilidad que esas actividades sean asumidas por personal del Macroproceso, ya que la carga de trabajo ordinaria real para el mantenimiento, actualización y sostenibilidad de los sistemas, es constante producto de los cambios en las tecnologías, nuevos requerimientos, cambios en los procedimientos y normas en los diferentes sistemas por su integralidad, siendo que se requiere contar con un equipo de trabajo ordinario dedicado a las labores descritas con independencia de las actividades propias de los otros procesos que conforman el Macroproceso Financiero Contable, en cumplimiento de las directrices de control interno en cuanto a la Documento firmado digitalmente 17/01/2020 09:13:06 17/01/2020 09:16:30 2 segregación de funciones y la adecuada asignación de responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en los diferentes procesos."*  En este sentido, mantienen el criterio externado en otros ejercicios presupuestarios anteriores, en cuanto a que se valore que las plazas que conforman actualmente el equipo de trabajo del Sistema Contable Institucional se otorguen de forma ordinarias para garantizar la atención de las nuevas labores del Sistema y las actuales.  Adicionan que el sistema lo integran cuatro grandes áreas (Poder Judicial, Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Fondo de Socorro Mutuo y Contaduría Judicial), con otros sistemas informáticos sensibles y altamente cambiantes( A saber: SIGA-Gestión del Factor Humano, SIGA-Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Sistema de Servicios Públicos, Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria, Sistema de Caja Chica, Sistema de Control de Activos Fijos, Sistema de Inventario y Materiales (SIM), Sistema de Inversiones del Sistema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.), que continuamente generan inconsistencias y modificaciones en las bases de datos que ahora deben hacerse a través de sistema, lo cual es parte de su sostenibilidad.  Los consultados, indican que adicionalmente se requiere realizar la integración al sistema contable de otros sistemas como lo son, el Sistema Institucional de Control de Activos del Poder Judicial (SICA-PJ) y el Sistema de Compras Públicas (SICOP), y su enlace al Sistema de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial (SIGA-PJ).  La Máster Floribel Campos Solano, Jefa del Departamento Financiero Contable, enfatiza en la necesidad de que las plazas se otorguen en forma ordinaria, por cuanto, no es posible realizar las labores que genera el Sistema con recursos ordinarios, ya que eso provocaría afectación y desatención a diferentes áreas de trabajo; y además, atender las nuevas labores del Sistema de Integración Contable, tanto en la Dirección de Tecnología de la Información como en el Macroproceso Financiero Contable.  Enfatiza la Máster Campos Solano, que las actividades son de carácter prioritario y en algunas ocasiones impostergables, ya que atienden requerimientos diversos, entre ellas de instituciones externas, así como de normativa vigente, propia del proceso contable de las instituciones del Estado.  Agrega la Máster Campos Solano, que ante la conformación de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilación, el máster Carlos Montero Zúñiga, en su condición de Coordinador del Fondo de Pensiones, firmó un convenio con el Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el que se indica, que el Departamento Financiero Contable continúe brindado los servicios de contabilidad que hasta este momento se le ha brindado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, por consiguiente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones se sigue atendiendo.  A su vez, expone la Máster Campos, que no solo el Departamento Financiero Contable debe continuar brindando servicios al Fondo de Pensiones, sino que también, lo deberá realizar el Departamento de Proveeduría, Gestión Humana, y la Dirección de Tecnología de Información, conforme el convenio referido.  Agrega la Máster Campos que el Departamento Financiero Contable, deberá atender la Contabilidad de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilación, como tal, para lo cual se requieren definir diversos elementos, como, por ejemplo, si se trata de una contabilidad mercantil o de otro tipo, entre otros.  ***3.8.- Criterio de la Dirección de Planificación***  El Sistema Contable Institucional entró en producción en el 2018, lográndose la integración de las cuatro áreas del Sistema Contable (Poder Judicial (formulación y ejecución presupuestaria), Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Fondo de Socorro Mutuo y Contaduría Judicial).  La entrada en producción de las cuatro áreas del Sistema, así como, la implementación de las nuevas interfases y los nuevos requerimientos que se generen, originan una carga de trabajo considerable para el equipo que atiende el Sistema Contable. Se ha generado nuevas labores que deben ser atendidas de forma oportuna, las cuales, por su naturaleza, deben realizarse de forma ordinaria para garantizar un buen funcionamiento del sistema y responden a diversos requerimientos de instituciones estatales y dependencias del Poder Judicial, así como, a la normativa que incide en el funcionamiento del Sistema.  Es claro que el sistema en sí genera una carga laboral, que ha requerido de una reprogramación de los planes de trabajo anuales, y de las labores por atender, lo cual justifica la permanencia del personal para su atención y desarrollo.  En el 2020, se requiere continuar con el proceso de integración de nuevas interfaces, tales como integración con el Sistema Institucional de Control de Activos del Poder Judicial (SICA-PJ), y el Sistema de Compras Públicas (SICOP), y la migración del sistema SIGA-PJ. Por tanto, se deberá contar con el recurso humano a futuro que permita su desarrollo, implementación, sostenibilidad y control, de estas nuevas interfases.  Para el 2021 las labores son de mantenimiento y sostenibilidad, del Sistema Contable y de las interfases desarrolladas, según se indica en las labores proyectadas para el 2021[[9]](#footnote-9); la mayoría de las actividades más complejas se han desarrollado a la fecha y se concluirán en el 2020.  Si bien, se requiere de recurso humano para el mantenimiento del sistema contable institucional, la atención de necesidades y de las labores ordinarias que se generan producto de su funcionamiento, lo cierto es que la etapa de la formulación del sistema contable y la integración ya concluyó en el 2020.  A su vez, según se aprecia en el apartado 3.3. de este informe, referente a las labores realizadas durante el 2019, el grupo de profesionales que brindan mantenimiento y sostenibilidad al Sistema Contable Institucional logró alcanzar un 93,21% del cumplimiento en el total de actividades programadas, porcentaje que se acerca a un 95% de ejecución, aún y cuando, este grupo debió contribuir a la atención de labores extraordinarias que se originaron consecuencia de las modificaciones efectuadas al Catálogo Contable solicitado por SUPEN, así como, en la implementación de la sustitución de la Cuenta Cliente, por la Cuenta IBAN en los sistemas informáticos, según lo establecido por el Banco Central; por consiguiente, al suprimirse las labores extraordinarias referidas, (las cuales ya fueron realizadas) es posible orientarse al desarrollo de las labores por lo que resta del presente año.  Por consiguiente, en procura de la mejor utilización de los recursos institucionales, y siendo que se ha alcanzado cerca del 95% de ejecución, se considera que para la ejecución de las funciones ordinarias y de las nuevas necesidades propias que surjan de un proceso contable, podrán ser atendidas por un grupo constituido de dos plazas de Profesional 2, una de Profesional en Informática 2, y una de Coordinador de Unidad 3, la cual, actualmente desarrolla actividades de coordinación de los profesionales que atiende el Sistema Integrado de Contabilidad . |
| **IV. Elementos Resolutivos**  **4.1.-** Las plazas en condición de extraordinarias de 1 Profesional en Informática 2, 1 Coordinadora o Coordinador de Unidad 3 y 3 Profesionales 2, fueron prorrogadas en forma extraordinaria para el 2020, con el fin de cumplir con el cronograma de trabajo programado para este ejercicio presupuestario.  **4.2.-** La Ley 9544 “Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) solicitó al Poder Judicial realizar cambios, que generaron ajustes al Sistema Contable, lo que significó una carga de trabajo considerable para el equipo de trabajo que atiende este Sistema, así como su programación, como lo fue el cambio en el catálogo contable que implicó modificaciones en el Sistema Integrado de Contabilidad.  **4.3.-** Se dio la implementación en los sistemas informáticos de la sustitución de la Cuenta Cliente por la Cuenta IBAN, debido a que el Banco Central de Costa Rica estableció, como fecha de entrada en vigencia de la cuenta IBAN, el 3 de julio del 2019.  **4.4.-** Ante los requerimientos de la SUPEN, y la incorporación de la cuenta IBAN, el cronograma de trabajo formulado para 2019, no fue posible desarrollarlo según lo programado, afectándose así los cronogramas para el presente año, así como la programación para el 2021.  ***4.5.-***Ante gestión presentada por las másteres Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva y Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información al Consejo Superior, en su sesión N° 90-19, Artículo LXXXIII, acordó entre otros, aprobar los cambios en el cronograma del Sistema Contable en consecuencia cambiar el cronograma de trabajo del 2020 del Sistema Contable, lo cual tendría un impacto en las labores aprobadas por este Consejo en la sesión extraordinaria 18-19 (Presupuesto 2020), artículo VIII, celebrada el 28 de febrero del año 2019, para las plazas extraordinarias del Departamento Financiero Contable y la Dirección de Tecnología de Información, las cuales ocupa este informe, y son las encargadas del proyecto del Sistema Contable del Poder Judicial.  **4.6.-** El indicador de gestión definido para evaluar el desempeño de los recursos durante el 2019 (actividades ejecutadas entre actividades programadas), reporta un valor de un **93,21%** en su cumplimiento. En este sentido es pertinente destacar que en este año se debieron atender con prioridad las solicitudes de la SUPEN, así como la entrada en vigencia de la cuenta IBAN referidas.  **4.7.-**El equipo de trabajo que atiende el Sistema Contable del Poder Judicial brindó sostenibilidad, mantenimiento y control de los sistemas administrados por Financiero Contable:   * *Sistema de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial (SIGA-PJ)* * *Sistema de Gestión Humana (SIGA-GH)* * *Sistema de Inventario y Materiales (SIM)* * *Sistema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (SIGA-FJP)* * *Sistema de Inversiones (SCI).* * *Integración a nivel nacional de Caja Chica del sistema SIGA-PJ (módulo de libro de bancos del Sistema Contable).*   Así como a las cuatro áreas del Sistema Contable a saber:   1. *Poder Judicial (formulación y ejecución presupuestaria).* 2. *Fondo de Jubilaciones y Pensiones.* 3. *Fondo de Socorro Mutuo.* 4. *Contaduría Judicial.*   **4.8-** Se deberá integrar al Sistema Contable del Poder Judicial, nuevas interfaces que implicarán continuar con:   * *La integración con el Sistema Institucional de Control de Activos del Poder Judicial (SICA-PJ)*   A su vez, la incorporación al Sistema Integrado de Contabilidad los siguientes sistemas:   * *Sistema de Compras Públicas (SICOP).* * *Migración del sistema SICA-PJ.*   Labores que debieron ser reprogramas a las cuales se les debe brindar continuidad y sostenibilidad.  **4.9.-** Las tareas ordinarias realizadas por el equipo de trabajo que atiende el Sistema Contable, son diversas y complejas, ya que deben asegurar la sostenibilidad y permanencia de los sistemas, de manera que se permitan un adecuado proceso contable en la Institución. Para ellos, debe brindar atención oportuna a los cambios que se vayan originando, consecuencia de la puesta en producción del Sistema, sean incidentes, mejoras, cambios en las bases de datos, entre otros. A su vez, la atención de requerimientos que surgen consecuencia de la normativa vigente, o requerimiento de instituciones o dependencia internas y externas (Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Superintendencia de Pensiones Dirección Ejecutiva) y, los informes que ellos conlleve, antes referidos.  **4.10.-** El Departamento Financiero Contable inició con el desarrollo del Proyecto de Migración y Rediseño del Sistema Integrado de Ejecución Presupuestario (SIGA-PJ), en el cual participan los Departamentos de Proveeduría, Financiero Contable, Dirección Ejecutiva y Dirección de Tecnología de la Información. Siendo éste un Sistema que incide directamente en el Sistema Integrado de Contabilidad, por lo cual se requerirá efectuar actividades de coordinación, aplicar pruebas y/o ajustes en el Sistema Contable de manera que se mantenga la continuidad en la integración de la contabilidad, labores que deberán ser atendidas a través de las plazas que ocupan este informe.  **4.11.-**  Ante la reforma al título IX de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se conformó la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial tiene efectos en el área del Sistema Contable, particularmente en lo referente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el cual, deberá seguir siendo atendido tanto por el Departamento Financiero Contable, como por la Dirección de Tecnología de Información, por un plazo inicial de dos años.    **4.12.-**Las personas de ambas dependencias, coinciden en que, a partir de la entrada en producción del sistema se han establecido una serie de labores nuevas, ordinarias y permanentes, ya que integran sistemas administrativos institucionales de distinta naturaleza, en los que se gestionan procedimientos sensibles (contrataciones, pago a proveedores, información presupuestaria, financiera y contable a entes externos e internos, etc.); generándose inconsistencias y modificaciones que igualmente se les debe bridar sostenibilidad.  Se enfatiza en la necesidad de disponer de un equipo de trabajo para asegurar la atención oportuna de las labores del Sistema Contable, tanto en la Dirección de Tecnología de Información como en el Macroproceso Financiero Contable.  **4.13.-** La Dirección de Planificación considera que la entrada en producción de las cuatro áreas que conforman el Sistema Contable (Poder Judicial, Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Fondo de Socorro Mutuo y Contaduría Judicial), y de los sistemas que integran el proceso contable requieren ajustes, mantenimiento y sostenibilidad, para el adecuado funcionamiento, así como, la atención de nuevas interfaces:   * *Sistema de Compras Públicas (SICOP).* * *Migración del sistema SICA-PJ.*   **4.14.-** Las labores necesarias para realizar los ajustes, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Contable, son de carácter ordinario, y a través de su desarrollo se ha permitido dar respuesta oportuna a los requerimientos contables. A su vez mediante este Sistema se debe dar respuesta a diversos requerimientos de instituciones estatales, y dependencias del Poder Judicial, así como, a normativa que incide en el funcionamiento del Sistema. Además, se ha requerido una reprogramación de sus labores, las cuales deben ser atendidas, justificándose la permanencia del personal asignado en forma ordinaria.  **4.15.-** La mayoría de las actividades complejas se han desarrollado a la fecha y se concluirán en el 2020, por lo que se considera que las cargas de trabajo son distintas en relación con los objetivos iniciales del proyecto, y, por ende, se debería atender con un equipo de trabajo para dar sostenibilidad, mantenimiento, y ajustes al Sistema Contable.  **4.16.-** En procura de la mejor utilización de los recursos institucionales, y siendo que se ha alcanzado cerca del 95% de ejecución, se considera que para la ejecución de las funciones ordinarias y de las nuevas necesidades propias que surjan de un proceso contable, podrán ser atendidas por un grupo constituido de dos plazas de Profesional 2, una de Profesional en Informática 2, y una de Coordinador de Unidad 3, la cual, actualmente desarrolla actividades de coordinación de los profesionales que atiende el Sistema Integrado de Contabilidad . |
| **V. Recomendaciones**  **5.1.-** Por lo anterior y con el fin de garantizar la óptima utilización del recurso se recomienda las siguientes plazas:   | **Despacho** | **Cant** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomen-dación** | **Perío-do** | **Costo**  **Estimado** | **Obs.** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sistema Contable del Poder Judicial** | | | | | | | | | **Dirección de Tecnolo-gía de Informa-ción** | 1 | Profesional en Informática 2 | Extraordi-naria | Ordinaria | 2021 | **¢ 36.909.000.00** |  | | **Departa-mento Financiero Contable** | 1 | Coordinador de Unidad 3\* | Extraordi-naria | Ordinaria | **¢ 38.037.000.00** |  | | 2 | Profesio-nales 2 | **¢ 73.818.000.00** |  | | **TOTAL** | **4** |  | | | | **¢ 148.764.000.00** |  |   ***5.2.- Condicionamiento por el que se otorga el recurso (impacto esperado)***  Se recomienda otorgar las plazas, con el propósito que se conforme un equipo de trabajo permanente que brinde, sostenibilidad, continuidad control y desarrollo del Sistema Contable del Poder Judicial. Por consiguiente, las plazas deberán asignarse en forma exclusiva para atender las necesidades de que se presenten como resultado de su puesta en producción. Así mismo, se identifiquen los requerimientos de cado uno de los sistemas contables, y con ello la contabilidad se mantenga actualizada brindando sostenibilidad de las cuatro áreas en producción que integran el Sistema Contable. Además, se atienda las implementaciones de nuevas interfases, o requerimientos de cada uno de los usuarios del Sistema Contable Institucional.  ***5.3.- Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)***  No se necesitan, ya que el equipo de trabajo que atiende el Sistema Contable Institucional viene operando desde períodos anteriores. |
| **Realizado por:** *Licda. María Teresa Benavides Arguello con la colaboración de Marlen Alpizar López* |
| **Aprobado por:** *Licda. Ginethe Retana Ureña, Jefa Subproceso Organización Institucional* |
| **Visto bueno:** *Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexos** | |
| 1 *“Plan de Trabajo 2020.”* |  |
| 2 *“Estado de las tareas realizadas en el 2019, con ajustes Requeridos”* |  |
| 3 *“Listado con las funciones encomendadas a cada una de las plazas del Sistema Contable Institucional.”* |  |
| 4 *“Proyección del Cronograma de Trabajo para el 2021.”* |  |
| 5“*Labores ordinarias para el mantenimiento del Sistema Contable Institucional”.* |  |
| 6 “*Labores del Profesional en Informática, Coordinador de Unidad y Profesionales 2”* |  |

**-0-**

**Se acordó**: **1.)** Aprobar técnicamente el informe 495-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación, no obstante la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior de las plazas que se recomiendan en este estudio técnico, quedará sujeta a un análisis final e integral que hará el Consejo Superior de todas las plazas que finalmente queden aprobadas, con antelación al envío del proyecto de presupuesto a Corte Plena. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XIX**

**DOCUMENTO N°** **4599-2020**

# La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presentó el **Informe 496-PLA-RH-OI-2020**, estudio de Requerimiento Humano del **Abordaje de los Despachos Judiciales que atienden las materias de Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica por parte del equipo de Trabajo de la Dirección de Planificación, destacados en el Subproceso de Modernización Institucional**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección de Planificación** | | **Fecha:** | 27-03-2020 |
| **Estudio de Requerimiento Humano** | | **# Informe:** | 496-PLA-RH-OI-2020 |
| **Proyecto u oficinas analizadas:** | Abordaje y Preparación de Despachos en la materia de Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia Domestica. | | |
| **Referencias Asociadas** | Referencias asociadas: **768-19** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Plazas por Analizar**  | **Despacho** | **Can-**  **tidad** | **Tipo de**  **plaza** | **Condición**  **Actual** | | --- | --- | --- | --- | | Dirección de Planificación | 4 | Profesional 2 | Extraordinaria | |
| **II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada**  Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Auditoría Judicial en el Informe 60-08-SAO-2018 y optimizar la utilización de los recursos institucionales por medio de la mejora en los procesos y servicios, que logren dar una respuesta efectiva para las personas usuarias, se requiere mantener durante el 2021 y hasta el 2023 el seguimiento y continuidad al abordaje que se realiza en los despachos que atienden la materia de Familia. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Información Relevante**  **3.1 Antecedentes**  3.1.1 Ley 9747 denominada “Código Procesal de Familia” (CPF), conocido bajo el expediente Legislativo 19455, publicada en la Gaceta 28 del 12 de febrero del 2020, alcance 19, emitida por la Asamblea Legislativa el 17 de setiembre de 2019, que rige a partir del 01 de octubre de 2020.  3.1.2 Oficio 34-PLA-EV-2017 elaborado por la Dirección de Planificación, conocido y aprobado por el Consejo Superior en la sesión 43-17 del 5 de mayo de 2017, artículo XXIV, en el que se acordó:  “1) Aprobar el informe 34-PLA-EV-2017 presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones. 2) Se toma nota de los escenarios adicionales brindados con la finalidad de dotar recurso humano en la Defensa Pública en caso de que se requiera la atención en la materia de violencia doméstica  3) Remitir a la Corte Plena el informe con la finalidad de que se valore la posibilidad de solicitar a la Asamblea Legislativa una modificación al Código Procesal  de Familia de tal forma que los servicios de Defensa Pública gratuita solamente se brinden a la parte actora en los procesos judiciales, ello por constituirse la población más vulnerable.”  Dentro de las recomendaciones aportadas en el informe citado, se hizo ver la necesidad de contar en el ejercicio Presupuestario del 2018, con recurso humano de la clase Profesional 2 a la Dirección de Planificación para ejecutar labores de diagnósticos y seguimiento de los despachos y oficinas judiciales involucrados con la materia de Familia.  3.1.3. Para la formulación presupuestaria 2019, la Dirección de Planificación realizó el análisis sobre el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Civil previsto para el 2019. Mediante el informe 32-PLA-MI-2018, aprobado por el Consejo Superior en sesión 34-18 (Presupuesto 2019), del 25 de abril de 2018, artículo III, con modificaciones en los acuerdos del Consejo Superior en sesión 42-18 del 15 de mayo 2018, artículo VI, VIII, IX y X, aprobado por Corte Plena en sesión de Presupuesto del 30 de mayo de 2018, se acordó aprobar el proyecto de presupuesto para la implementación de la “Ley de la Reforma Procesal Civil” en la forma propuesta.  Dicho informe indica dentro de sus recomendaciones la asignación a la Dirección de Planificación, de seis plazas de Profesional 2 en condición extraordinaria por el período de 3 meses durante el 2019 para atender la curva de aprendizaje y actividades posteriores a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Civil; los meses posteriores se dedicarían a la atención de los despachos agrarios por el impacto en la Reforma Agraria y la atención de los despachos que atienden la materia de Familia.  3.1.4 Asimismo, para la formulación presupuestaria del 2019, la Dirección de Planificación analizó el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley del Código de Familia, mediante el informe 33-PLA-EV-2018. El citado informe fue conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 34-18, del 25 de abril del 2018, artículo V; y modificado por el Consejo Superior en sesión 42-2018, del 15 de mayo del 2018, artículos VII, XII, XIII, XIV; y se acordó lo siguiente:  “…3) En relación con las plazas extraordinarias solicitadas por la Dirección de Planificación para atender el rediseño de procesos en la materia de familia, según la recomendación de la Auditoria Judicial, se aprueba su incorporación en el anteproyecto de presupuesto 2019 por nueve meses en el entendido de que no hay un aumento de plazas a nivel institucional.”  Se aclara que no existe aumento de plazas a nivel institucional, ya que, las plazas se solicitaron inicialmente por 3 meses mediante el proyecto de Presupuesto para la implementación de la “Ley de la Reforma Procesal Civil”.  3.1.5 Informe 1981-PLA-2016 de la Dirección de Planificación, relacionado con el modelo de sostenibilidad de los proyectos de Rediseños de procesos en oficinas o despachos judiciales, así como el resultado del seguimiento que se realizó al Circuito Judicial de San Carlos, partiendo de la revisión de la implementación de los Indicadores de Gestión y las respectivas reuniones de los Equipos de Mejora, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en sesión 107-16 del 29 de noviembre de 2016, artículo XLIX, donde se dispone entre otras cosas, lo que se transcribe a continuación:  *“… que cada vez que concluya un proyecto de rediseño en un circuito judicial, se dotará con una plaza ordinaria y permanente a la zona, de tal forma que con un profesional en ingeniería industrial permita la atención inmediata en temas del circuito”.*   * 1. **Funciones y finalidad del recurso humano en análisis.**   Actualmente el Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación cuenta con cuatro puestos de Profesional 2 de manera extraordinaria los cuales vienen siendo destacados en el abordaje y seguimiento de las actuales reformas que entraron en vigencia como lo son el Código de Familia, Agrario; además de estar en capacidad de atender futuras reformas que estarán destacadas en la Dirección de Planificación.  Estas plazas se han destacado y estarán prioritariamente en la atención de la materia de Familia, de acuerdo a la solicitud de abordaje que hizo la Auditoría Judicial (indicado en el primer antecedente del presente documento), lo cual incluye Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica. Posteriormente participarán en proyectos de reforma de leyes y todos aquellos relacionados con la modernización y restructuración, como lo es el Modelo de Sostenibilidad, el cual se aplica actualmente en siete circuitos judiciales del país.  De las actividades y gestiones que lleva a cabo los puestos en análisis, se tienen las siguientes labores de seguimiento y preparación de despachos:    **a-Realizar un diagnóstico y generación de un plan de trabajo de cada despacho.** Esta labor consume seis semanas (que incluye inventarios) por persona profesional asignada. Se revisan las funciones que desempeña el equipo de trabajo del juzgado, tiempos de actividades, conformación del equipo de mejora, análisis de las cargas de trabajo, diseño de propuestas de solución, planes de descongestionamiento, implementación del Modelo de Sostenibilidad, diseño del informe final, entre otras. Revisar la carga de escritos, revisar demandas nuevas, revisar arqueos con otros entes en caso que sea necesario, coordinaciones con otras oficinas como son administraciones regionales, trabajo social y Piscología. Cabe aclarar que, dentro de las seis semanas, no se incluye el tiempo de revisión del producto final por parte de la Coordinación y por parte de la Jefatura del Subproceso  **b-Establecer Indicadores de Gestión y seguimiento.** Se realiza durante mínimo 6 meses luego de ser puestos en marcha; lo que implica entre otras cosas:   * Revisar los Indicadores de Gestión del Despacho, así como los planes remediales que diseñan y la minuta de la sesión de trabajo. En los casos en que los despachos no suministren la información en las fechas establecidas se debe solicitar directamente los documentos y darle seguimiento al cumplimiento. * Se analiza y retroalimenta al despacho sobre aspectos donde se detecten oportunidades de mejora, en caso de que no se incluyeran en el plan remedial, así como observaciones respecto a la forma de ingreso de información o errores que se detecten. La retroalimentación incluye los indicadores, minuta de la sesión y plan remedial. * Dar respuesta a las consultas que emanan los despachos y realizar los ajustes que correspondan a las herramientas de indicadores, ya sea; por desajuste en las fórmulas, cambios que se dan en el Despacho respecto a la cantidad de personal y por oportunidades de mejora que se detecten.   **c- Diseño y seguimiento de planes de trabajo, para la reducción del circulante o descongestionamiento del fallo**. Implica análisis de las variables estadísticas, revisión de capacidad operativa, definición de tareas, plazos y cuotas.  **d-Acompañamiento en el diseño de mejoras informáticas.** Implementación en el Escritorio Virtual para mejorar el desempeño del trabajo de las oficinas. Normalmente se implementa la matriz en una hoja electrónica de Excel y luego se hace el diseño de los indicadores mediante el sistema informático en sigma.  **e- Participación en el diseño de Indicadores de Gestión.** Se realiza en el sistema SIGMA con la finalidad de automatizar la generación de datos.  **f**- **Diseños de estructuras y organización de los despachos.** Se analizan las composiciones de recurso humano destinadas para cada Juzgado de forma individual, variables como la entrada esperada de asuntos, cantidad de circulante con el que van a iniciar, proyección de cantidad de audiencias a realizar, cantidad de sentencias y resoluciones que deben dictar las personas Juzgadoras, cuota diaria de proveído de las técnicas y técnicos Judiciales, tareas que debe realizar el personal de cada área, competencias territoriales o materiales, entre otros aspectos, con la finalidad de brindar un producto ajustado a la necesidad y realidad de cada futuro Despacho.  Adicional a las actividades antes indicadas, cada puesto de Profesional 2 asignado a un Despacho Judicial, durante el tiempo determinado de las seis semanas, realizan actividades como las siguientes:   * Inventario de Expedientes * Reunión Inicial: presentación metodología de trabajo * "Entrevistas: Internas: Juez Coordinador, Coordinador Judicial, Técnico Judicial. * Externas: Tribunal o Juzgado que atiende los casos en Alzada." * Análisis de estructura del Despacho (incluye estructura de tramitación) * Sentencias: Revisión de sentencias elaboradas por Juez y por año; definir cantidad de expedientes pendientes de fallar a la fecha por Juez y tiempo aproximado para fallo. * Agenda: estructura de la agenda, cantidad de audiencias realizadas por juez o jueza a través de los años, fecha para agenda, cantidad de expedientes pendientes de agendar y expedientes pendientes de audiencia a la fecha (expedientes agendados y los pendientes por agendar). * Elaboración de cuadros con información estadística del Despacho (comparación de entrada de asuntos, como ha evolucionado la entrada; análisis por tipo de principal, en el caso de mixtos ver por materia y luego por principal en Laboral). * Muestreo de expedientes y análisis de tiempos generales de proceso. * Distribución de expedientes (cantidad y tipo), por cada persona Juzgadora y por cada persona Técnica Judicial. (información SGDJ o Libro de entradas) Lo anterior revisando el histórico. * "Análisis de expedientes activo (circulante), distribución por tipo y por fase. * Revisión de indicadores de gestión (en los casos que los tengan implementados) * Tiempo de respuesta del Proveído / entrada de escritos/ ordenes de apremio * Revisión de Tareas de Escritorio Virtual (sesión para establecer visión compartida en el tema); definición de Ubicaciones. * Análisis de Despachos Homólogos * Revisión de utilización de consultas en línea (Registro Nacional y CCSS) * Presentación de Indicadores, calcular en conjunto al Coordinador Judicial las variables. * Elaboración de propuestas de mejora (Plan de Trabajo, lo ejecuta el Despacho) * Elaboración de informe * Presentación Final * Presentación de Informes a Jefatura, reunión de coordinación y preparación para la próxima gira * Es importante destacar que durante los abordajes se realizan gestiones de trabajo con las oficinas como Tecnología de la información, defensa Pública, gestores, administraciones Regionales, Dirección Ejecutiva, Archivo Judicial.   Como se puede apreciar, el abordaje en cada despacho demanda una serie de pasos que concentran las actividades que se llevan a cabo en cada intervención, para ello el personal asignado debe desplazarse al despacho de interés, e iniciar el respectivo abordaje durante 6 semanas, período en el cual deben levantar el diagnósticos y recomendaciones respectivas.  **3.3 Relevancia del abordaje de los Despachos**  El objetivo que tienen los abordajes en cada una de las oficinas es determinar la realidad que enfrentan, detectando las mejoras que se implementan por medio de planes de trabajo que permiten que los Despachos maximicen la utilización de los recursos asignados, optimizando los procesos y evitando los reprocesos.  Permite aumentar el desempeño mediante la implementación de métodos de trabajo estandarizados a nivel nacional, entre otros, con lo cual se brinde una respuesta adecuada a todas las personas usuarias en el país.  El análisis y mejora de los despachos, permite a la vez, que estos se encuentren preparados para enfrentar los cambios procesales, administrativos y en los mecanismos de operación; según las necesidades institucionales.  Una vez que finaliza el seguimiento de las reformas, el personal en análisis deberá asumir las labores que demanda el Modelo de Sostenibilidad en los diferentes circuitos judiciales del país, para lo cual el detalle de estas labores se presentará en el siguiente apartado del presente documento.  **3.4. Modelos de Sostenibilidad**  Desde el 2015, la Dirección de Planificación ha velado porque las oficinas y despachos judiciales que han sido sometidos a un rediseño o reestructuración cuenten con un mecanismo de sostenibilidad, que haga perdurar los logros obtenidos, tal y como se solicitó inicialmente mediante oficio 1317-PLA-2015, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en sesión 82-15 del 16 de septiembre de 2015, artículo XXI.  En el informe 1981-PLA-2016 elaborado por la Dirección de Planificación, conocido por el Consejo Superior en sesión 107-16 del 29 de noviembre de 2016, artículo XLIX, se indicó que a partir de ese momento todo proceso de rediseño cuenta con su etapa de sostenibilidad, que toma como insumo los indicadores de gestión instaurados en cada una de las oficinas o despachos judiciales rediseñados y en donde es necesaria la participación de todos los involucrados.  Importante indicar que los recursos destacados al abordaje y seguimiento de los despachos en materia de Familia, una vez finalizada la labor establecida en el cronograma de trabajo, deben pasar a formar parte del Modelo de Sostenibilidad para darle continuidad en el tiempo a lo que se ha venido implementando en los distintos circuitos judiciales del país.  Estos recursos desempeñan labores que están directamente relacionadas con la Dirección de Planificación, y tienen como objetivo que los requerimientos de los despachos y oficinas judiciales se atiendan con mayor prontitud, al contar con este recurso como parte del Circuito Judicial. Al estar los puestos vinculados directamente en el sitio de trabajo fortalece la relación con los despachos y oficinas mejorando así su gestión cotidiana, además de ser funcionales a las Administraciones Regionales en la toma de decisiones.  El desempeño de estas plazas desde su creación ha permitido importantes resultados dentro de la cultura de la sostenibilidad y autogestión de los despachos judiciales en los Circuitos Judiciales, que han generado no solo el hábito de reportar el estado de los indicadores, sino de generar propuestas de mejora orientadas a corregir los aspectos críticos que inciden en el buen desempeño.  De esta forma en caso de mantener estas plazas a la Dirección de Planificación, se lograría replicar en el corto plazo el modelo de sostenibilidad a otros circuitos judiciales adicionales, que es una de las acciones estratégicas planteadas de forma preliminar en el marco del Plan Estratégico Institucional 2019-2024.  Las labores que tendrá asignado los cuatro puestos en análisis una vez que finalice todo el proceso relacionado con la implementación de las reformas a los códigos de Familia y otros, se consideran necesarias y esenciales para la consecución de los objetivos planteados.  **3.5 Carga de trabajo que viene desempeñando el equipo de trabajo conformado por los cuatro puestos extraordinarios de Profesional 2 en análisis a dar abordaje y seguimiento a los temas de reformas de ley.**  Antes de detallar las labores que ha venido realizando este grupo de trabajo, es importante indicar que durante el 2019, de las seis semanas que se tenían planificadas para el abordaje de despachos judiciales, únicamente fueron ejecutadas dos de ellas, lo anterior debido a que mediante acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 71-19 celebrada el 13 de agosto de 2019, artículo II, la Magistra Julia Varela Araya en su condición de Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, convocó a una reunión al equipo de personas juzgadoras en materia de familia, al CACMFJ y a la Dirección de Planificación, con la finalidad de plantear las inquietudes y preocupaciones acerca de los indicadores de gestión y cuotas de trabajo.  Lo anterior hizo que se debiera replantear la forma de abordaje de los despachos y esto obligo a realizar nuevas reuniones de trabajo y gestiones varias para cambiar la forma en cómo se venían abordando los despachos judiciales.  Una vez restructurada la forma de abordaje, se tiene programado iniciar nuevamente con las giras de visita por seis semanas a partir de la segunda quincena de abril del presente año, con un cronograma de trabajo actualizado el cual se expondrá posteriormente.  Durante el impás que se dio para replantear el abordaje, el personal estuvo destacado realizando labores relacionadas con el tema Impacto organizacional y presupuestario a partir de la promulgación del Código Procesal de Familia para el 2020 y generando los modelos de despacho y las propuestas de indicadores para la materia, así como otros productos.  Dichos productos se encontrarán visibles en el modelo de despacho de Familia que se incluye en el informe de presupuesto de Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Código Procesal de Familia para el 2020  A continuación, se detallan algunas de las labores en las que estuvo destacado el recurso humano, replanteando la manera de abordaje:   * Determinar las principales implicaciones del Código Procesal de Familia a nivel de todos los despachos y oficinas judiciales involucradas, en los ámbitos jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo.      * Extraer información relevante en materia de Familia como los son análisis estadísticos de casos entrados, salidos y circulante, así como la distribución de los asuntos entrados por tipo de proceso, el desglose de los asuntos terminados, circulante por fase, efectividad de las audiencias señaladas, así como sobre las apelaciones resultas por el Tribunal de Apelación de Familia. * Análisis del modelo de los Juzgados de Familia, específicamente del Juzgado de Familia del Circuito Judicial de Cartago y el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, los cuales trabajan bajo esta modalidad de rediseño. * Se analiza el proceso de tramitación general, así como las estructuras organizacionales y funciones de los diferentes puestos de trabajo, coordinaciones con otras instancias. * Se gestiona y coordina con otras oficinas a nivel interno del Poder Judicial, como lo es sistemas informáticos, despachos que laboran bajo la modalidad de electrónicos, listas de tareas en el sistema de Escritorio Virtual, Sistema CEREDOC. * Se revisan libros de control, indicadores de gestión de despachos rediseñados, así como establecer propuestas de indicadores en despachos especializados con el objetivo de establecer escenarios con parámetros de cuotas en sentencias dictadas, variables de categorización, entre otras cosas. * En cuanto al modelo de sostenibilidad, se realiza la descripción del procedimiento de seguimiento, a nivel de impacto del código Procesal de Familia. * Se analizan las estructuras funcionales y cargas de trabajo de los juzgados de Familia especializados y mixtos, situación que también se realiza para los Juzgados de Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias, tanto especializados como mixtos. * Todas las gestiones antes indicadas, implican reuniones y coordinaciones con oficinas como la Dirección Ejecutiva, Defensa Pública, la Comisión de la Jurisdicción de Familia Niñez y Adolescencia, Escuela Judicial, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección de Gestión Humana, entre otras, en el cual participa de manera activa el personal Profesional 2 en análisis, a cargo de poner en ejecución todo este proyecto. * Por otra parte, el recurso humano extraordinario se ha enfocado la elaboración del documento de estimación de costos y presupuesto asociados al Código Procesal de Familia, donde se incorpora necesidades en costo de recurso humano, gastos variables. * Se han elaborado planes de descongestionamiento en juzgados de Familia. * Se han diseñado los manuales de funciones necesarios, así como el establecimiento de cuotas de trabajo, cuotas de audiencias, entre otras cosas, todo esto mediante equipos de mejora continua. * Importante hacer ver que este equipo de trabajo no solamente se ha enfocado en atender todos los temas relacionados a la materia de Familia, sino también en el abordaje de gestiones en materia Civil, agrario y Laboral a nivel nacional. Además, para el abordaje de todo este tema el personal en análisis ha tenido que realizar reuniones de trabajo en los diferentes despachos judiciales, coordinaciones con el personal gestor de la materia, atención de diversas solicitudes por parte del Consejo Superior, así como participar en la elaboración de los informes de cierre de proyectos.   **3.6 Programación de actividades de trabajo en el abordaje y seguimiento de la reforma del Código de Familia**.    Con el objetivo de abordar la totalidad de los despachos judiciales relacionados con la materia de Familia, la Dirección de Planificación realizó un cronograma de trabajo el cual comprende un periodo que va desde el 2019 hasta el 2023 en el abordaje y seguimiento, de acuerdo a los tiempos establecidos para abarcar cada una de las variables definidas en los despachos judiciales.  Se determinaron 90 oficinas que serán abordadas, según la siguiente información:  **Cuadro 1**  Cantidad de juzgados especializados y mixtos que atienden las materias de  Familia, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias y  en todo el país.   |  |  | | --- | --- | | Despacho | Cantidad | | Juzgados Especializados de Familia | 14 | | Juzgados de Familia y Violencia Doméstica | 4 | | Juzgados de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica | 5 | | Juzgado de Trabajo y Familia | 1 | | Juzgados Mixtos que atienden materia de Familia abordados con Reforma al Código de Trabajo y el Nuevo Código Procesal Civil | 5 | | Tribunal de Familia | 1 | | Juzgados de Pensiones Alimentarias | 11 | | Juzgados de Violencia Doméstica | 11 | | Juzgados de Pensiones Alimenticias y Violencia Doméstica | 3 | | Juzgados Contravenciones (podrían atender Pensiones Alimentarias y/o Violencia Doméstica) | 35 | | Total | 90 |   Fuente: Subproceso de Modernización Institucional.  El cronograma de trabajo contempló 135 semanas que incluye los cierres colectivos. Este proceso de seguimiento a los juzgados inició en el 2019 y se proyectó concluir de acuerdo con las semanas establecidas en el 2023. Esto sin considerar los ajustes que se vayan a requerir producto de las fechas en que se restablezcan los servicios en el Poder Judicial producto de la afectación del COVIT-19  A partir de la segunda quincena de abril del presente año, se retoma el abordaje y seguimiento de acuerdo al plan de trabajo establecido, cada seis semana y por aparte el tiempo de confección de informe y periodo de revisión. El cronograma de trabajo del 2019 al 2021 se presenta a continuación:    Importante mencionar, que, dentro del plan de trabajo antes expuesto, se incorpora el personal que está destacado en cinco Circuitos Judicial atendiendo el modelo de sostenibilidad, el cual de la misma forma que el personal en el análisis tiene establecido un plan de trabajo a cumplir en el seguimiento de los juzgados de Familia, y deberán entregar el producto con las indicaciones respectivas sobre la gestión que realiza cada despacho judicial a su cargo.  El cronograma propuesto no contempla realizar abordaje de seguimiento a los Juzgados Contravencionales que atienden materia de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, debido a que se analizaron dentro del Proyecto de la Reforma al Código de Trabajo, donde se diagnosticaron 20 juzgados. Tampoco contempla el seguimiento a los PISAV de La Unión y Siquirres debido a que estas plataformas cuenta con un profesional en Administración, que como parte del modelo de sostenibilidad dará seguimiento a esas estructuras.  **3.7 Abordaje de despachos a partir del 2020 y desarrollo del plan de trabajo para los siguientes años.**  Antes de analizar el seguimiento y abordaje que se les dará a los despachos judiciales, es importante hacer ver que esta labor es desempeñada por el equipo de trabajo del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación.  Al respecto se consultó a ese Subprocesos, específicamente a la Unidad de Modernización Jurisdiccional, donde se indicó que con la entrada en vigencia del Código de Familia y de acuerdo con el avance de seguimiento de los despachos judiciales previstos en el cronograma de trabajo antes expuesto, se estima que esta labor se estaría extendiendo a l 2023, siempre y cuando no se determine incluir otros despachos que requieran de este tipo de gestión y se mantenga el recurso de los cuatro puestos de Profesional 2.  En cronograma de trabajo se visualiza que el equipo de los 4 Profesionales 2 que se analizan en el presente informe, mantienen un trabajo continuo, excepto las semanas correspondientes a cierres colectivos, pero el tiempo calendarizado está estrictamente ajustado sin semanas de holgura.  Se indica por parte de la Unidad de Modernización Jurisdiccional, que según las experiencias obtenidas con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil y la Reforma al Código de Trabajo, se refleja la necesidad de brindar acompañamiento a los despachos durante al menos tres meses y de realizar un seguimiento de estos por tres meses adicionales, con la finalidad de facilitar la estabilidad de los despachos apegados a las directrices emanadas por Corte Plena, Consejo Superior, dados los cambios que se generan en los diversos procesos y estructuras de trabajo.    **Por lo anterior y previendo la próxima entrada en vigencia del Código Procesal Agrario en febrero de 2021, se debe tomar en cuenta que, de asignarse la tarea de la implementación de la Reforma Agraria, el plan de trabajo para el Proyecto de Familia podría sufrir modificación, retrasándose hasta por unos 6 meses más**  Importante indicar que el inicio de los abordajes a los Juzgados de Familia, implica coordinaciones con la Dirección de Tecnología de la Información, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional; equipo Gestor de la materia de Familia y la Comisión de la Jurisdicción de Familia, según sea el caso, gestiones que no están a cargo únicamente de la coordinación del equipo de trabajo, sino de cualquiera de los cuatro puestos de Profesional 2 destacados para este proyecto.  Durante el 2019 se tenía previsto dentro del primer bloque iniciar con los siguientes despachos judiciales:   * Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Grecia * Juzgado de Familia de Cartago * Juzgado de Familia del I Cir. Jud. Zona Atlántica * Juzgado de Familia de Heredia.   Sin embargo, su abordaje fue parcial, para ubicar información que sirviera de respaldo a las propuestas que se estarán presentando en el informe del Modelo de Despacho de Familia que se incluye en el informe de presupuesto de Impacto Organizacional y Presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Código Procesal de Familia para el 2020. En este tiempo de análisis se logró replantear el abordaje y se hizo que el personal abarcara varias reuniones con diferentes equipos de trabajo para la revisión de herramientas de diagnóstico de rediseño de procesos, así como los talleres de validación de indicadores y validación de la fórmula estadísticas con su respectivo instructivo, con las personas juzgadoras definidas por la Comisión de Familia.  Se adjunta la información relacionada con la fórmula estadística.    Importante indicar que la Dirección de Planificación solicitó audiencia a la Comisión de Familia con el fin de analizar los temas antes indicados y proseguir con el cronograma de trabajo ajustado a las necesidades planteadas.  Las reuniones de trabajo que se realizaron para replantear todo el abordaje y seguimiento fueron las siguientes   | Nombre | Temática | Fecha | | --- | --- | --- | | Reunión 1: Rediseño de Procesos y Modelo de Sostenibilidad. | * Exposición de Metodología de Rediseño de Procesos. * Revisión y análisis de las herramientas que se utilizan en los abordajes. | * Realizada el 12 de setiembre 2019 | | Reunión 2: Diseño y Construcción de Indicadores de Gestión. (Parte 1) | * Revisión de la propuesta de matriz de indicadores de gestión de materia de Familia. | * Realizada el 18 de setiembre 2019 | | Reunión 3: Diseño y Construcción de Indicadores de Gestión (Parte 2) | * Revisión de la propuesta de matriz de indicadores de gestión de materia de Familia. * Estudio de la distribución de la cuota de trabajo para personas juzgadoras. | * Realizada el 25 de setiembre 2019 | | Reunión 4: Diseño y Construcción de Indicadores de Gestión (Parte 3) | * Revisión de la propuesta de matriz de indicadores de gestión de materia de Familia. | * Realizada el 03 de octubre de 2019 | | Reunión 5: Taller para la definición de la Fórmula Estadística actual (Subproceso de Estadística) | * Revisión de la Fórmula Estadística, por parte del Subproceso de Estadística y las personas juzgadoras de la materia Agraria. | * Informe realizado por el Subproceso de Estadística y presentado al Consejos Superior. Se adjuntaron los archivos correspondientes. |   Se trabaja en la construcción del Informe de Impacto Organizacional y Presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Código Procesal de Familia para el 2020, el cual incorpora todas las gestiones, actividades y coordinaciones a realizar en los próximos años y llevar a buen término la ejecución de este proyecto desde el punto de vista de realizar una mejor gestión judicial, tanto a lo interno de los despachos judiciales como en el servicio que se preste a las personas usuarias  De acuerdo con los datos suministrados por la Unidad de Modernización Jurisdiccional, el avance de seguimiento y abordaje de juzgados en materia de Familia para el 2020 en el cronograma establecido, es el siguiente:  Tabla 1  Cantidad de oficinas que tendrá a cargo cada puesto de Profesional 2 para el seguimiento y abordaje de  los Juzgados Competentes en Familia, de previo a la entrada en  vigencia del Código Procesal de Familia, durante el 2020 y 2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 por un periodo de seis semanas cada despacho | |  | | --- | | Juzgado Familia II Circ. Jud. Zona Atlántica (Pococí) | | Juzgado Familia, Penal Juv. y Viol. Dom. Doméstica de Golfito | | Juzgado Trab. y Fam. Hatillo, San Seb. y Alajuelita | | Juzgado Civil, Trabajo, y Familia de Osa (seguimiento) | | Juzgado Pensiones Alimentarias I Circ. Jud. San José | | Juzgado de Pensiones Alimentarias de Cartago (Seguimiento) | | Juzgado Violencia Doméstica III Circ. Jud. San José (Desamparados) | | Juzgado Violencia Doméstica II Circ. Jud.  Alajuela (San Carlos) | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Valverde Vega | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Jiménez | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía San Sebastián | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Upala | | Juzgado Contravencional y Pens. Alimen.II Circ. Jud. Guanacaste (Nicoya) | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía II Circ. Jud. Zona Sur (Corredores) | | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 por un periodo de seis semanas cada despacho | |  | | --- | | Juzgado Familia II Circ. Jud. Alajuela | | Juzgado Familia, VD y PJ de Quepos | | Juzgado Familia, Penal Juvenil y Viol. Dom. Santa Cruz | | Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal (seguimiento) | | Juzgado Pensiones Alimentarias I Circ. Jud. Zona Sur (Pérez Zeledón) | | Juzgado Pensiones Alimentarias II Circ. Jud. San José (Goicoechea) | | Juzgado Violencia Doméstica I Circ. Jud. Zona Sur (Pérez Zeledón) | | Juzgado Violencia Doméstica Hatillo, San Sebas. y Alajuelita | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Buenos Aires | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Palmares | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Alvarado | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Aserrí | | Juzgado Contr. y Pens. Alimen. III Circ. Jud. Alajuela (San Ramón) (0693) | | Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional Golfito | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Turrubares | | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 por un periodo de seis semanas cada despacho | |  | | --- | | Juzgado Familia, Niñez y Adolescencia | | Juzgado Primero de Familia San José | | Tribunal del Familia | | Juzgado Familia y Viol. Dom. III Circ. Jud. Alajuela (San Ramón) | | Juzgado Familia y Viol. Dom. II Circ. Jud. Guanacaste (Nicoya) | | Juzgado Familia, Civil, Trabajo, Violencia Doméstica; Agrario y Penal Juvenil de Upala (seguimiento) | | Juzgado Pensiones Alimentarias II Circ. Jud. Zona Atlántica (Pococí) | | Juzgado Pensiones Alimentarias III Circ. Jud. San José (Desamparados) | | Juzgado Violencia Doméstica I Circ. Jud. San José | | Juzgado Violencia Doméstica II Circ. Jud.  San José | | Juzgado Pensiones y Violencia Doméstica Pavas (PISAV) | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Naranjo | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Hojancha | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Alajuelita | | Juzgado de Cobro, Contravencional y Menor Cuantía Grecia | | Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias Santa Cruz | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía  Mora | | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 por un periodo de seis semanas cada despacho | |  | | --- | | Juzgado Familia II Circ. Jud. San José | | Juzgado Familia I Circ. Jud. Zona Sur (Pérez Zeledón) | | Juzgado Familia y Viol. Dom. II Circ. Jud. Zona Sur (Corredores) | | Juzgado Familia, Penal Juvenil y Viol. Dom. Turrialba | | Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (seguimiento) | | Juzgado Pensiones y Violencia Doméstica Escazú | | Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias II Circuito Alajuela (San Carlos)- Seguimiento | | Juzgado Violencia Doméstica II Circ. Jud. de la Zona Atlántica (Pococí) | | Juzgado Violencia Doméstica Cartago (Seguimiento) | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Santa Ana | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Puriscal | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Hatillo | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía  Acosta | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Turrialba | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Osa | |   Fuente: Unidad de Modernización Jurisdiccional, Subproceso de Modernización Institucional  El cumplimiento del cronograma de trabajo dependerá que no se presenten cambios como los que se dieron en el 2019 y que todo pueda seguir el curso normal de lo programado y del inicio de las labores institucionales a partir de la Pandemia producto del Coronavirus COVI-19.  Importante anotar que además de las labores descritas dentro del apartado 3.5 del presente documento, el recurso humano en análisis también se destacó al abordaje correspondientes de la Reforma Agraria, lo cual ya se encuentra en proceso de presentar el informe final de cierre en esa primera etapa. Se adjunta acuerdo de Consejo Superior referente al seguimiento que ha hecho la Dirección de Planificación sobre el tema.    Para el caso del personal que se destaca en el Modelo de Sostenibilidad, se presenta a continuación la distribución de trabajo el cual está contemplado en el cronograma expuesto en líneas anteriores. Importante recordar que este personal ya se encuentra destacado de manera ordinaria y que su labor actualmente se basa más en dar seguimiento a los despachos y no en el abordaje inicial que es en el que trabajará el recurso humano que se detalló anteriormente.  La distribución de trabajo es la siguiente:  Tabla 2  Gestión de seguimiento para la reforma del Código de Familia en los circuitos judiciales en el que se destaca personal para la atención del Modelo de Sostenibilidad.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 del Modelo de Sostenibilidad | |  | | --- | | Juzgado Familia Puntarenas | | Juzgado Pensiones Alimentarias Puntarenas ***- Seguimiento Modelo Oral Electrónico - Modelo Sostenibilidad*** | | Juzgado Violencia Doméstica Puntarenas | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Quepos | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Parrita | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Esparza | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Montes de Oro | | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 del modelo de Sostenibilidad | |  | | --- | | Juzgado Familia I Circ. Jud. Zona Atlántica (Limón) | | Juzgado Pensiones Alimentarias I Circ. Jud. Zona Atlántica (Limón) - Seguimiento Modelo Oral Electrónico - Modelo Sostenibilidad | | Juzgado de Violencia Doméstica del I Circ. Jud. de la Zona Atlántica (Limón) | | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 del modelo de Sostenibilidad | |  | | --- | | Juzgado Familia I Circ. Jud. Alajuela | | Juzgado Pensiones Alimentarias I Circ. Jud. Alajuela ***- Seguimiento Modelo Oral Electrónico - Modelo Sostenibilidad*** | | Juzgado Violencia Doméstica I Circ. Jud. Alajuela | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Poás | | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía Atenas | | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 del modelo de Sostenibilidad | |  | | --- | | Juzgado Familia y Viol. Dom. I Circ. Jud. Guanacaste | | Juzgado Familia, Penal Juvenil y Viol. Dom. Cañas | | Juzgado Contravencional y Pensiones Alimentarias I Circ. Jud. Guanacaste (Liberia)- ***Seguimiento-Modelo de Sostenibilidad*** | | | Juzgados que atenderá el puesto de Profesional 2 del modelo de Sostenibilidad | |  | | --- | | Juzgado Familia Heredia | | Juzgado Civil, Trabajo, y Familia de Sarapiquí (seguimiento) | | Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia Seguimiento***- Modelo Sostenibilidad*** | | Juzgado Violencia Doméstica de Heredia | | Juzgado Pensiones y Violencia Doméstica de Flores (PISAV) | | Juzgado Contravencional de San Rafel | | Juzgado Contravencional de Santo Domingo | |   Fuente: Unidad de Modernización Jurisdiccional del Subproceso de Modernización Institucional  Tal como se evidencia en la tabla anterior, cada uno de los puestos tendrá a cargo el seguimiento de cierta cantidad de despachos judiciales según el Circuito Judicial donde se ubique.  Importante aclarar que este recurso humano, además de atender los despachos indicados anteriormente, tienen además a su cargo la atención de seguimiento de todas las demás materias que se abordan en el circuito judicial, con lo cual hacen informe de resultados basados en los indicadores previamente establecidos, con el objetivo que se puedan tomar las decisiones correspondientes sobre el accionar de cada despacho judicial, de una manera más oportuna y con datos que reflejen la realidad de las oficinas, tanto en las cargas de trabajo con en las estructuras organizacionales con las que están compuestas.  Esta misma labor estaría realizando las cuatro plazas en estudio, una vez que culmine todo el proceso de abordaje y seguimiento según el cronograma de trabajo. Se destacarían en los diferentes circuitos judiciales con el objetivo de dar seguimiento y “medir el pulso” de la gestión de los despachos judicial, para que se mantengan sobre una línea de trabajo que no permita atrasado o bien disminuir problemáticas que se pueden solventar de una manera más ágil.     * 1. **Resultados obtenidos con el abordaje y seguimiento realizado por la Dirección de Planificación a las reformas Civil y Laboral posterior a la entrada en vigencia**.   Mediante informe 2182-PLA-MI-2019 del 18 de diciembre del 2019, la Dirección de Planificación pone en conocimiento de la Comisión de la Jurisdicción Civil, los resultados de la implementación del nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342.  Dicho informe agrupa toda la información relacionada con la creación de nuevas estructuras, actualización de formatos y labores del equipo de normalización y cumplimiento del proyecto.  También presenta un apartado donde se agrupan todos los resultados de acuerdo con el seguimiento del Equipo Interdisciplinario con minutas de las reuniones realizadas y archivos que documentan la ejecución de tareas por parte del equipo en coordinaciones específicas de la materia Civil y Cobratoria. Además del documento que se adjunta, por aparte están los anexos A, B y C que incorporan todos los resultados de la labor realizada en materia Civil.    De igual manera se realizó este ejercicio para lo correspondiente a la materia Laboral, la Dirección de Planificación mediante el oficio 1735-PLA2017 pone en conocimiento de la Secretaría de la Corte para lo que corresponda, el informe final de la Implementación de la Reforma al Código de Trabajo, documento que integra el aporte de las diferentes áreas administrativas.  Como parte de los resultados obtenidos están los siguientes:   * *Mejora en la estructura y organización de los despachos judiciales* * *Conexión entre despachos electrónicos para la agilización de recepción y envío de información* * *Implementación del expediente electrónico y otros Sistemas de Información* * *Acceso de la persona usuaria a los expedientes electrónicos mediante el Sistema de Gestión en Línea (vía internet)* * *Conformación de Equipo de mejora de procesos* * *Reducción del consumo de papel* * *Alianzas estratégicas con actores internos y externos* * *Implementación de buenas prácticas* * *Implementación de indicadores de gestión para la mejora continua y sostenibilidad del proyecto*   Todas las gestiones que implicó el llevar a buen término este proceso, están contenidas en el informe que se adjunta a continuación:    **3.9 Relación con Plan Estratégico Institucional**  Se estima que los alcances y contenido del presente informe son acordes con lo consignado en el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2019-2024 (PEI), ya que se señala dentro sus objetivos lo siguiente:  “*Optimizar los recursos institucionales e impulsar la innovación de los procesos judiciales para agilizar los procesos de justicia*”  Asimismo, y como parte de las acciones estratégicas, el PEI señala que se debe mantener un “*Desarrollo y optimización de servicios y procesos judiciales*”.  Por otra parte, dentro del Plan Anual Operativo (PAO) 2020 del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, se tiene lo siguiente:  “*Implementar el Modelo de Mejora en la Gestión de los Despachos que tramitan la materia de Pensiones Alimentarias en los circuitos Judiciales a nivel nacional, que promueva la gestión eficiente de los procesos basado en la experiencia de los Juzgados Especializados y uso de las tecnologías de la información*”.  **3.10 Otras Consideraciones relevantes.**  El Consejo Superior en la Sesión 19-2020 celebrada el 10 de marzo de 2020 artículo LI, conoció el oficio N° DP-126-2020 de 5 de marzo de 2020, suscrito por el máster Róger Mata Brenes, Director del Despacho de la Presidencia, en el que remite el oficio DFOE-PG-0098 (2683)-2020 de la Contraloría General de la República relacionado con el informe DFOE-PG-IF-00002-2020, de la auditoría operativa sobre la gestión del Poder Judicial en cuanto a la oportunidad de la prestación del servicio público de administración de la justicia de los Juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias**.**  Dentro de lo solicitado por parte de la Contraloría General de la República se encuentra lo siguiente:  ***“4.4*** *Definir e implementar rangos de duración de los procesos judiciales de familia y de pensiones alimentarias basados en datos que consideren como mínimo las particularidades de los juzgados, que le permitan contar con un insumo base para determinar la razonabilidad de la duración de dichos procesos a fin de monitorear la gestión de los juzgados desde una perspectiva que incluya su realidad. Al respecto, se le solicita remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de agosto de 2020, una certificación que acredite la definición de los rangos de duración de los procesos judiciales de familia de pensiones alimentarias conforme lo dispuesto, así como una certificación en la cual conste su implementación a más tardar el 30 de noviembre de 2020.”*  ***“4.5*** *Diseñar y establecer formalmente la herramienta de “libro de pase a fallo”, con el objetivo de que se cuente con un mecanismo estandarizado para todos los juzgados que facilite el control del cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Pensiones Alimentarias N.°7654 para el caso de esta materia y lo establecido en el Código de Familia y Código Procesal Civil según el tipo de proceso de familia que corresponda. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 15 de octubre de 2020, una certificación que acredite el establecimiento formal de la herramienta, así como una certificación a más tardar el 15 de marzo de 2021 en la cual conste su implementación”*  ***“4.6.*** *Establecer e implementar instrumentos que faciliten la distribución de las cargas de trabajo a partir de parámetros técnicos y estadísticos en los que se considere el personal respecto del circulante que maneja el juzgado con el fin de propiciar una distribución uniforme de las cargas de trabajo en los despachos judiciales de familia y de pensiones. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 31 de agosto de 2020, una certificación en la cual conste que se establecieron los instrumentos que faciliten la distribución de las cargas de trabajo a partir de parámetros técnicos y estadísticos; así como una certificación que acredite la implementación de los instrumentos solicitados a más tardar el 15 de enero de 2021”*  ***“4.7.*** *Diseñar e implementar procedimientos relacionados con los procesos de retroalimentación y seguimiento de la gestión de los juzgados de familia y de pensiones alimentarias, considerando el artículo 15 inciso a) de la Ley General de Control Interno N.° 8292, así como la norma 4.1 de las Normas de Control Interno para Sector Público N-2-2009-CO-DFOE. Al respecto, se le solicita remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de agosto de 2020, una certificación que acredite el diseño de los procedimientos de retroalimentación, y otra certificación, a más tardar el 15 de enero de 2021, donde se haga constar que están siendo implementados.”*  ***“4.8.*** *Girar las instrucciones a quien corresponda para que se revise la información que se encuentra almacenada en la base de datos del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales y depurar las inconsistencias que sean encontradas, con el propósito de que la información que se encuentra en este sistema esté razonablemente libre de errores y mantiene los criterios de confiabilidad, oportunidad y utilidad. Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 16 de marzo de 2020, una certificación que acredite que se giraron las instrucciones solicitadas, a más tardar el 15 de julio de 2020 una certificación que acredite la identificación de las inconsistencias, así como una certificación a más tardar el 15 de diciembre de 2020 en la cual se haga constar su depuración”*  Como se puede observar, la Contraloría General de la República, hace una serie de recomendaciones y a la vez solicita información detallada y precisa con cumplimiento de plazos de entrega que deben ser atendidos y abordados de manera inmediata por parte de este equipo de trabajo en el año 2020.  De acuerdo a lo anterior, se deberá realizar el esfuerzo institucional por realizar esta labor y replicar en todos los despachos judiciales las mejoras señaladas por la Contraloría General de la Republica. Según los trabajos que el recurso humano en análisis ha venido realizando en la atención de los procesos judiciales de Familia y Pensiones Alimentarias, además de dar cumplimiento al cronograma de trabajo consignado en líneas anteriores, el cual ya cuenta con labores y gestiones establecidas y tiempos de atención, deberá además este recurso atender la solicitud que hace la Contraloría General de la República en todos los requerimientos que hace y durante el plazo que lo solicita.  De esta manera, se evidencia la necesidad de continuar con las plazas de Profesional 2 en la atención de todo lo que corresponde a la materia de Familia y Pensiones Alimentarias.  **3.11 Criterio de la Dirección de Planificación**  Del análisis realizado se pudo corroborar las labores que cada plaza llevo a cabo y el aprovechamiento que se le da a estos recursos, los cuales se centraron en la atención de los objetivos trazados para abordar la Reforma Procesal Civil; la atención de los despachos agrarios por el impacto en la Reforma Agraria y la atención de los despachos que atienden la materia de Familia, producto de la Reforma.  Solo tomando en cuenta los cronogramas de trabajo, se considera necesario que las plazas se mantengan para el 2023, pero al considerar los factores de la mejora continua, así como la creciente necesidad de mantener respuestas oportunas en los estudios solicitados por la Jerarquía Institucional es que existen argumentos para solicitar la condición de las plazas en estudio a una condición de ordinarias, ya que estas labores serán de carácter permanente, aunado a que también tienen una participación directa en el cumplimiento de las metas estratégicas incorporadas al Plan Estratégico Institucional 2019-2024 y en una labor continua en el Poder Judicial. |
| **IV. Conclusiones**   1. Con el recurso recomendado a la Dirección de Planificación mediante informe 32-PLA-MI-2018 y que fuera aprobado por el Consejo Superior en Sesión 34-18 (Presupuesto 2019), del 25 de abril de 2018, artículo III, aprobado por Corte Plena en sesión de Presupuesto del 30 de mayo de 2018, se ha atendido la curva de aprendizaje y actividades previas a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Civil y Familia. También con este recurso en el momento que se requiera se estaría abordando la atención de los despachos agrarios por el impacto de Reforma Agraria. 2. Con los puestos de Profesional 2 asignados desde el 2018 de manera extraordinaria, se ha atendido la recomendación emitida por la Auditoría Judicial mediante informe N°60-08-SAO-2018, el cual indicaba lo siguiente:   “4.25 *Realizar un estudio de las cargas de trabajo, plazas asignadas y rendimiento en los juzgados especializados de Familia del país, en aras de determinar si en la actualidad existe o no una distribución equitativa de las labores encomendadas en función del recurso existente, maximizar y orientar los recursos instituciones, se ajusten los modelos de trabajo, según sea necesario, para mejorar la efectividad de los procesos bajo su responsabilidad. Lo anterior, de conformidad con los cambios que se implementen en la jurisdicción de familia con la reforma procesal que se implementará…”.*  Todo este trabajo se ha venido realizando en cada uno de los despachos abordados, para lo cual se han establecido indicadores y cuotas de trabajo, con resultados según los informes que se exponen en el cuerpo del documento   1. El abordaje de los despachos relacionados con la materia de Familia implica la atención de los Juzgados y Tribunales que atienden materia de Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica; por lo tanto; es relevante preparar a la totalidad de juzgados del país en miras de ofrecer un mejor servicio a la persona usuaria y maximizar los recursos institucionales. 2. La proyección de trabajo estimada por la Dirección de Planificación para realizar el abordaje de los despachos y otras tareas relacionadas con la organización de estas sería de 135 semanas donde se incluiría 9084 despachos. Esta proyección se tiene establecida para el año actual y hasta el 2023, bajo el entendido que no se presenten cambios que requieran reprogramar el cronograma de trabajo. 3. Las actividades que realizan los Profesionales 2 de la Dirección de Planificación contemplan múltiples acciones, donde se incluyen abordaje de Despachos (en promedio 6 semanas por oficina), seguimiento de Indicadores de Gestión, diseño de planes de trabajo, acompañamiento en la construcción de los indicadores en SIGMA, participación en el diseño de mejoras informáticas, entre otras. 4. Todo el trabajo de abordaje y seguimiento que se realiza en los diferentes despachos judiciales del país que atienden la materia de Familia, está contemplado dentro de los objetivos operativos relacionados con el PEI, y estos a su vez fueron contemplados en el PAO del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación. 5. El Modelo de Sostenibilidad está implementado actualmente en Cartago Alajuela, San Carlos, Heredia, Liberia y Limón, lo cual ha fortalecido y coadyuva a las Administraciones Regionales en el seguimiento y control de las oficinas que conforman el Circuito, no solo a nivel funcional en temas de ingeniería y administración, sino además en los temas de maximización de recurso humano, tecnológico y hasta de infraestructura física, optimización de procesos mediante propuestas de mejora, celeridad judicial mediante planes de trabajo, equilibrio en cargas de trabajo con readecuación de cuotas y revisión de estructuras organizaciones y funcionales, disminución de tiempos de atención al usuario, acceso a la justicia y rendición de cuentas, labores directas de la Dirección de Planificación que se atienden con mayor prontitud al contar con este recurso parte del Circuito Judicial.   **4.8** En seguimiento a lo acordado por el Consejo Superior en la sesión 107-16 del 29 de noviembre de 2016, artículo XLIX, los puestos analizado en el presente informe deben permanecer como parte de los Modelos de Sostenibilidad destacados en los diferentes Circuitos Judiciales del país que son sometidos a Rediseño de Procesos, lo anterior una vez que finalice el abordaje y seguimiento programa para la atención de la Reforma del Código de Familia proyectado al 2023. En ese momento se delimitará los circuitos judiciales donde se ubicará físicamente las plazas analizadas  **4.9** Al tomar en cuenta los cronogramas de trabajo, se considera necesario que las plazas se mantengan para el 2023, pero al considerar otros permiten contar con mayores argumentos para solicitar variar la condición de las plazas a ordinarias, ya que estas labores serán de carácter permanente, aunado a que también tienen una participación directa en el cumplimiento de las metas estratégicas incorporadas al Plan Estratégico Institucional 2019-2024.  **4.10.** Apegado a lo anterior, las plazas de Profesional 2 analizadas tendrán a su cargo atender las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-PG-0098 (2683)-2020, relacionado con el informe DFOE-PG-IF-00002-2020, de la auditoría operativa sobre la gestión del Poder Judicial en cuanto a la oportunidad de la prestación del servicio público de administración de la justicia de los Juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias y sobre el cual hace una serie de requerimientos que deben ser atendidos con plazos de entrega, tal como se expuso en el apartado 3.5 del presente documento. |
| **V. Recomendaciones**  ***5.1 Cantidad de Recurso Humano recomendado para el 2021***  Del análisis efectuado en el presente informe, se determina que para el 2021, se debe otorgar continuidad a las siguientes plazas, bajo las siguientes características   | **Despacho** | **Can-**  **tidad** | **Tipo de**  **Plaza** | **Condición**  **actual** | **Recomen-**  **dación** | **Costo de la plazas** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dirección de Planificación | 4 | Profesional 2 | Extraordinaria | Ordinaria a partir del 2021 | ¢147.636.000,00 | | **TOTAL** | **4** |  | | | ¢147.636.000,00 |   Los recursos antes recomendados de manera ordinaria para el 2021 deberán dedicarse prioritariamente al abordaje y seguimiento de los Despachos Judiciales indicados en el cronograma de trabajo expuesto en el cuerpo del presente documento el cual comprende un periodo del 2020 al 2023, así como también atender los requerimientos de análisis en materia de Familia y Pensiones Alimentarias que hace la Contraloría General de la República. Una vez finalizado ese proceso, los puestos de trabajo deberán ubicarse en los Circuitos Judiciales que se definan como parte de los Modelos de Sostenibilidad con los cuales se encuentra trabajando la Dirección de Planificación actualmente con el objetivo de mantener un monitoreo constante sobre la gestión de despachos, utilizando como instrumento de medición los indicadores establecidos en las diferentes materias.  **5.2 Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)**  Estas plazas se vienen desempeñando desde periodos anteriores, por lo que cuentan con los requerimientos necesarios para su funcionamiento en cuanto a equipo de trabajo se refiere. |
| **Realizado por:** *Master Dennis Madrigal Quesada, Profesional 2.* |
| **Aprobado por:** *Licda. Ginethe Retana Ureña, Jefa del Subproceso de Organización Institucional .* |
| **Visto bueno:** *Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i. de Planificación* |

**-0-**

En sesión de trabajo del 03 de abril y como parte de la discusión y el análisis del informe doña Nacira Valverde hace un llamado a los señores y señoras del Consejo Superior a revisar el tema con detalle, ya que se refiere a necesidades propias de la Dirección de Planificación, para trabajar en la materia de familia, así como revisar la propuesta de la condición en la que se propone el recurso.

Doña Sara Castillo señala que se deben mantener como extraordinarias, dado su carácter de proyecto y tomar una decisión más adelante, cuando el panorama está más claro de cara al año 2022 y 2023.

Doña Nacira Valverde hace un llamado a revisar la capacidad operativa de la Dirección de Planificación, así como las funciones que se les asigna como Dirección y las labores de seguimiento del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, dado que el ciclo actual de trabajo es insostenible para la Dirección.

Don Carlos Montero, señala la importancia del criterio técnico de Planificación, sin embargo, se debe valorar la carga de trabajo que implica el seguimiento para esta Dirección. Su criterio es que las plazas deberían otorgarse como ordinarias, para lograr el mayor aprovechamiento posible del recurso humano destinado a este proyecto.

Don Fernando Cruz destaca el reforzamiento que requiere la Dirección de Planificación, y propone también para el análisis de la labor del Centro de Apoyo, la cual debe resolverse en un escenario futuro inmediato. Propone que las plazas sean ordinarias.

Doña Sandra Pizarro estima que la decisión de asignar las plazas ordinarias o extraordinarias debe pasar por la decisión de las labores que finalmente se le asignen al Centro de Apoyo.

Doña Ana Romero considera que deben ser ordinarias y someter a un ejercicio futuro para afinar el acomodo definitivo del recurso en caso de requerirse.

**Se acordó**: **1.)** Aprobar las plazas del informe 496-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación con carácter ordinario, no obstante la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior de las plazas que se recomiendan en este estudio técnico, quedará sujeta a un análisis final e integral que hará el Consejo Superior de todas las plazas que finalmente queden aprobadas, con antelación al envío del proyecto de presupuesto a Corte Plena. **2)** La Dirección de Planificación en conjunto con la Jefatura del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de Función Jurisdiccional, revisarán las tareas de este último, en función de las realizadas por la Dirección de Planificación y el Modelo de Sostenibilidad, para la ubicación definitiva del recurso y el mejor aprovechamiento posible. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XX**

**DOCUMENTO N°** **4586-2020**

# La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presentó el **Informe 497-PLA-RH-OI-2020**, estudio de Requerimiento Humano relacionado con la **Continuidad a los avances del Sistema de Seguimiento de casos, Implantación y Seguimiento al Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección de Planificación** | | **Fecha:** | *27/03/2020* |
| **Estudio de Requerimiento Humano** | | **# Informe:** | *497-PLA-RH-OI-2020* |
| **Proyecto u oficinas analizadas:** | *Continuidad a los avances del Sistema de Seguimiento de Casos y apoyo al programa del Nuevo Modelo Penal.* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Plazas por Analizar**   | Despacho | Can-  tidad | Tipo de  plaza | Condición  actual | Recomen-  dación | Período | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ministerio Público | 1 | Fiscala o Fiscal | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 | | 2 | Profesional 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 | | Defensa Pública | 1 | Defensora Pública Supervisora o Defensor Público Supervisor | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 | | 2 | Profesional 2 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2020 | | Dirección de Planificación | 3 | Profesionales 2  (Ingeniería  Industrial) | Extraordinarias | Extraordinarias | 2020 | | TOTAL | **9** |  | | | | |
| **II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada**  Se procede a analizar los recursos otorgados de manera extraordinaria para el 2020, que han sido concedidos desde el 2016, con la finalidad de implementar el Sistema de Seguimiento de Casos (SSC) tanto en la Defensa Pública como en el Ministerio Público, así como apoyar las labores del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal y de las Estructuras del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de analizar la labor realizada por esos recursos y si es necesario prorrogar la continuación de sus servicios por el 2021 o incluso de manera permanente.  Cabe indicar que el SSC tiene como objetivo aumentar la eficiencia de las oficinas, uniformando la forma en que las personas usuarias internas registran la información de los casos penales, con la intención de facilitar la obtención de indicadores de gestión útiles, optimizar los procesos, mejorar tecnológicamente los despachos y satisfacer las diversas necesidades de las personas usuarias de sus servicios.  Por otro lado, las labores de rediseño penal tienen como objetivos principales los siguientes:   * Mejorar los tiempos de respuesta para brindar un servicio público de calidad * Incrementar la efectividad de los debates con la participación integral de todos los ámbitos auxiliares de justicia.   Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta el seguimiento y control posterior a los procesos de rediseño, los cuales estarían a cargo del equipo interdisciplinario que se analizará en el presente estudio, de ahí la importancia de realizar un análisis de estas plazas que se vienen otorgando desde el 2016. |
| **III. Información Relevante**  **3.1 Antecedentes**   * *En informe de requerimiento de Recurso Humano N°19-PLA-OI-2018 se indicó lo siguiente:*   ***“3.1.1.- Oficio 1576-PLA-2016-B (Rediseño de Procesos de la Dirección de Planificación).***  *Dentro de las recomendaciones aportadas, se propuso que las plazas de Ingeniera o Ingeniero Industrial asignadas al proyecto de implementación del SSC se podrían convertir en ordinarias para el 2018 y que, una vez finalizada esa implementación, se dedicaran a la modernización del Ministerio Público y la Defensa Pública, con la rectoría de la Dirección de Planificación[[10]](#footnote-10), específicamente de la Unidad de Modernización del Ámbito Auxiliar de Justicia y Administrativo.*  *Además, en el caso del Ministerio Público, se visualizó la necesidad de unir los esfuerzos que realiza el Programa Nacional de Fiscalías Electrónicas (PRONAFE) con los puestos asignados al SSC, para conjuntar un solo equipo de trabajo enfocado en brindar el soporte administrativo en la modernización indicada.*  *Para ello se crea una Unidad dentro de la Dirección de Planificación denominada Unidad del Ámbito Auxiliar de Justicia y Sector Administrativo.*  *El oficio 1576-PLA-2016-B y sus recomendaciones fueron acogidas por el Consejo Superior en la sesión 95-16 del 13 de octubre del 2016, artículo LXII.*   * *Mediante informe N°676-PLA-RH-EV-2019 se recomendó darle continuidad a los recursos que se analizan en el presente estudio por el período 2020, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en sesión de presupuesto 44-19 del 16 de mayo de 2019, artículo XIII, con la finalidad de implementar y darle seguimiento al Sistema de Seguimiento de Casos, el nuevo sistema SIAG-PJ y los rediseños del Modelo Penal en el Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial.*   La Corte Plena, así como el Consejo Superior, han remitidos acuerdos a esta Dirección, orientados al análisis de la estructura organizacional del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J); específicamente los siguientes:   * Mediante acuerdos de la Corte Plena, sesiones 1-17 del 16 de enero de 2017, artículo V y 5-17 del 6 de marzo de 2017, artículo VI; se conoce el oficio remitido por la Contraloría General de la República (DFOE-PG-IF-06-2016, del 29 de julio de 2016), donde se emiten recomendaciones para la Corte Plena, relacionadas con el avance, fortalecimiento y consolidación de la ***Plataforma de Información Policial*** (PIP), unidad adscrita a la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) y se acuerda que al Dirección de Planificación y otras oficinas deberán dar cumplimiento y rendir informes periódicos a la Corte sobre este tema. * En línea con lo anterior, mediante acuerdos del Consejo Superior de las sesiones 78-16 del 18 de agosto del 2016, artículo LX y 86-16 del 14 de setiembre de 2016, artículo LXV; 26-17 del 21 de marzo de 2017, artículo LXVIII; se acuerda que se realice un estudio para determinar la viabilidad de la “***Fusión de Sección de Investigación de Turno Extraordinario y Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios”****.* * Asimismo, el acuerdo del Consejo Superior 58-17 del 15 de junio del 2017, artículo LXXXIX; donde se acordó: ***“Solicitar a la Dirección de Planificación, que, en coordinación con la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, lleve a cabo el estudio correspondiente respecto a la fijación de los roles y jornadas de trabajo del personal de cárceles de este Organismo en todo el país, para que se haga con base en criterios técnicos.”***   ***3.2. Análisis de plazas***  Las plazas que se procederá a analizar fueron otorgadas en su momento para coadyuvar con la labor de implantación de las herramientas tecnológicas como el Sistema de Seguimiento de Casos y cumplir los objetivos del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal (de ahora en adelante Proyecto Modelo Penal) que tiene como finalidad el rediseño de procesos en materia penal para oficinas del Ministerio Público, Defensa Pública y las oficinas que conocen de materia penal del Ámbito Jurisdiccional. Se procederá a analizar cada una de las plazas y contrastar su permanencia con el avance de los proyectos que atiendan y la maximización del recurso, premisa institucional.  ***3.2.1 Plaza de Fiscal o Fiscala adscrita al Ministerio Público.***  Al Ministerio Público se le dotó de una plaza de Fiscala o Fiscal para atender la implementación de los sistemas informáticos, Seguimiento de Casos y el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, así como apoyar el rediseño de procesos en materia penal, esta última labor en coordinación con los recursos otorgados de Profesional 2 (dos ingenieras o ingenieros), que desempeñan sus labores mediante la rectoría de la Dirección de Planificación en temas de rediseño y modernización institucional. Respecto al Proyecto Modelo Penal, el abordaje de estas oficinas encuentra su respaldo en el oficio 493-PLA-MI-2019 de la Dirección de Planificación, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Superior 43-19 del 14 de mayo de 2019.  ***3.2.1.1.- Labores realizadas por el recurso extraordinario en el 2019***  La plaza de Fiscala es ocupada desde febrero 2019 por la licenciada Fabiola Luna Durán, la cual actualmente tiene a cargo el control y seguimiento del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en conjunto con la Dirección de Planificación y trabaja bajo las órdenes de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público*.*  El año pasado y tal como se acordó en reunión sostenida con la Fiscala Adjunta Mayra Campos Zúñiga, de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, la plaza extraordinaria debía atender lo referente a la mejora integral del modelo penal y además diseñar planes de descongestionamiento y rezago en todo el país, dando prioridad la Fiscalía de Pavas, la cual contaba con un atraso considerable.  Por lo anterior, en el 2019 se realizó un plan de descongestionamiento en la Fiscalía de Pavas la cual permitió disminuir el circulante de 5707 expedientes a 3544, lo que significa una reducción del 38%, cifra alcanzada en 5 meses de duración del plan. Adicionalmente y en el mismo lapso se realizó la revisión de 13414 expedientes con resolución de archivo fiscal, de los 14 mil existentes en esa Fiscalía, lo que dio como resultado un total de 3609 expedientes remesados.  Parte de la reducción de circulante se debió a la resolución de 1940 expedientes por parte de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y 271 expedientes que fueron itinerados a otros despachos.  Otras labores que se realizaron en la Fiscalía de Pavas fueron la revisión de expedientes en rezago (más de 1100 expedientes), la realización de un plan de atención de indagatorias, obteniendo como resultado 96 indagatorias realizadas.  Ahora bien, en el último trimestre 2019 también se dedicó a un plan de apoyo para la Fiscalía de Puntarenas, en donde se le dio trámite a un total de 95 expedientes, 39 devueltos con diligencias realizadas y ordenadas; y 56 con requerimiento fiscal en diferentes tipos de causas (fraudes, delitos ambientales y materia convencional), en donde solo la Unidad de Capacitación y Supervisión abordó en esa atención un 65% del total de causas.  Respecto al Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, la plaza ha trabajado en conjunto con la Dirección de Planificación para atender el rediseño de las oficinas del Ministerio Público de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido (ver anexo 1) y velando por el descongestionamiento de las Fiscalías. Adicional, este recurso es el encargado de llevar y analizar los informes de labores de las fiscalas y fiscales y enviar los informes de rendimiento de forma mensual a la Fiscalía General, Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías y la Dirección de Planificación.  ***3.2.1.2.- Labores a realizar en el 2020***  En el 2020 el recurso extraordinario tiene a cargo el Proyecto de Descongestionamiento, Atención y Resolución de Rezago y Archivos Fiscales del Ministerio Público que tiene como objetivo aumentar la celeridad en la resolución de causas en condición de rezago, que al cierre de 2019 promediaban unas 9000 causas y la revisión de los expedientes con resolución de archivo fiscal, que según la estadística ronda los 50.000 mil expedientes en todas las oficinas que conforman el Ministerio Público.  Se tiene como meta que al finalizar el presente año se haya disminuido la mayor cantidad de rezago en las fiscalías del país, que en un primer momento se había establecido en el acta constitutiva del proyecto en un 20%, pero contando con recurso humano adicional, situación que no se materializó y ahora debe atenderse en conjunto con otros proyectos, lo que afectará el porcentaje de reducción. Asimismo, y en cumplimiento de las directrices institucionales de eliminación de expedientes y otros documentos (Circular 22-2011 de la Dirección Ejecutiva) se espera efectuar la labor de revisión de los expedientes con resolución de archivo en todos los despachos que se aborden este año con el proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.  Cabe indicar que además de las labores de coordinación, la plaza ocupada por la Fiscala Luna Durán tramita expedientes de los despachos en los cuales se realizan los abordajes por el equipo de trabajo de la Unidad de Capacitación y Supervisión, lo anterior para obtener un impacto real y maximizar el recurso asignado.  En reunión sostenida el pasado 7 de febrero del presente año, con las licenciadas Dixiela Madrigal Mora, Hulda Chinchilla Rizo y Fabiola Luna Durán, Fiscalas de la Unidad de Capacitación y Supervisión y la licenciada Raquel Ramírez Bonilla de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías, del Ministerio Público se mencionó la importancia que ha tenido esta plaza en la consecución de objetivos del Ministerio Público y el aprovechamiento que se le ha dado, ya que el recurso se ha utilizado para varios proyectos necesarios en la Fiscalía, además de las labores de control y seguimiento que ha realizado en las fiscalías que han sido abordadas con alguno de los proyectos que están en desarrollo, actividades que no podrían ser llevadas a cabo si no es con el apoyo de esta plaza adicional, la cual funge como contraparte en los procesos de rediseño, brindando su criterio profesional para abordar las diferentes oficinas, ajustar los planes de trabajo y servir de mediador entre el equipo de profesionales y los encargados de las fiscalías.  Indicaron que la labor de la plaza la consideran permanente, ya que la elaboración de planes de descongestionamiento, así como el control y seguimiento de las diferentes oficinas que conforman el Ministerio Público es continua, y dejar estas actividades puede ser contraproducente para el avance que se ha materializado como resultado del proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.  La Licda. Ramírez Bonilla, Coordinadora de la UMGEF indicó la importancia de la permanencia de la plaza, debido al avance que han obtenido las diferentes Fiscalías del país que han sido abordadas por el equipo de trabajo que lidera la Licda. Luna Durán.  Parte de la información de los proyectos a cargo de la plaza bajo análisis, así como el criterio respecto a la necesidad de la plaza fue obtenido mediante oficio UCS-025-MO-2020 del 12 de febrero de 2020 enviado a esta Dirección, el cual cuenta con el aval de la Máster Emilia Navas Aparicio.  De conformidad con el cronograma de trabajo ajustado que fue elaborado por la Dirección de Planificación bajo el informe 152-PLA-MI-2020 y aprobado por el Consejo Superior en sesión 11-20 del 31 de enero de 2020, el abordaje de oficinas como parte del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal se está extendiendo hasta finales del primer trimestre de 2021.  Según criterio extendido por la Ing. Elena Gabriela Picado González y el Ing. Nelson Arce Hidalgo, en su orden Jefa Administrativa 4 y Coordinador de Unidad 3, ambos de la Dirección de Planificación, los cronogramas están en constante ajuste según las necesidades observadas en el comportamiento de los Tribunales Penales y es común que con el paso del tiempo se prolonguen, debido a que, en el desarrollo del proyecto, surgen nuevas necesidades y cambios en la prioridad de atención de las oficinas. También destacaron la importancia de los recursos y que perduren en el tiempo, ya que la labor realizada requiere de un constante control y seguimiento por ese equipo de trabajo, ya que de otra forma los logros obtenidos con el proyecto se disiparán con el tiempo y que forma parte del proceso de modernización del Ministerio Público.  Lo anterior cobra mayor importancia por la reciente aprobación del Modelo de Sostenibilidad para el Ministerio Público bajo el informe 25-PLA-MI-2020, aprobado por el Consejo Superior en sesión 9-2020 del 4 de febrero de 2020, artículo XXX, en donde se le establece a la Fiscalía la labor de brindar apoyo y seguimiento a las fiscalías, así como recomendar la actualización de los rangos definidos en los Indicadores de Gestión al órgano técnico, en este caso la Dirección de Planificación.  Tanto la Fiscalía como el equipo de trabajo de la Dirección de Planificación coincidieron que el proyecto actual abarca solamente la atención de las Fiscalías Territoriales, quedando al descubierto todas las fiscalías especializadas que existen en el país y que igual requieren de un abordaje de rediseño, solicitud que ha sido reiterada en varias ocasiones por este tipo de fiscalías.  **Es por lo anterior, que se evidencia que la labor del recurso extraordinario otorgado a la Fiscalía ha sido medular para avanzar con el logro de objetivos del Proyecto Penal, el cual se considera debe perdurar en el tiempo para que se avoque de manera exclusiva a estas labores, así como la atención de los proyectos de descongestionamiento y rezago aplicados en las oficinas del Ministerio Público y posteriormente asuma su rol establecido en el Modelo de Sostenibilidad aprobado para el Ministerio Público.**  ***3.2.2 Plaza de Defensor o Defensora Pública adscrita a la Defensa Pública***  La plaza de Defensor o Defensora Pública se ha destacado de manera exclusiva en labores de implantación de los sistemas informáticos como el de Seguimiento de Casos, así como su correcto uso en las diferentes oficinas que conforman la Defensa. Es importante destacar que la plaza la ocupa actualmente el licenciado Arturo Cruz Volio, el cual se encuentra en una incapacidad desde hace más de dos meses, por lo que no se obtuvieron insumos respecto a la labor efectuada por la plaza durante el 2019.  De igual forma se recibió respuesta del doctor Roberto Montero García, que tenía a cargo esa labor antes del licenciado Cruz Volio, el cual indicó la importancia de darle continuidad a la plaza por el 2021, ya que es fundamental instalar el sistema en todas las oficinas de la Defensa Pública y darle seguimiento al adecuado uso de la herramienta informática Sistema Seguimiento de Casos (SSC) en las oficinas que ya lo tienen en funcionamiento, más que existe una oposición en su utilización por parte de algunas personas defensoras. Asimismo, mencionó que es necesario que la Defensa Pública cuente con datos estadísticos automatizados de manera fidedigna, que solo se podrán obtener con la implementación del SSC.  La permanencia de estas plazas, se sustenta en la necesidad de modernización de la Defensa Pública.  ***3.2.2.1.- Labores realizadas en el 2019***  De acuerdo con lo indicado por el Dr. Montero García, para el 2019 se logró culminar la implantación del SSC en todas las oficinas de la Defensa Pública que conocen la materia penal de adultos, laboral y penalización de la violencia contra la mujer en todo el país.  Entre las labores que realiza el recurso, se encuentran:   * Implementación del sistema * Desarrollo de nuevas funcionalidades de acuerdo con la materia * Colaboración en el proceso de certificación de la oficina. * Realización de giras de supervisión en las oficinas que fueron sometidas al proceso de arqueo[[11]](#footnote-11) * Seguimiento de la correcta utilización del Sistema SSC. * Labores de concientización * Llevar a cabo capacitaciones en el correcto uso del Sistema SSC   De igual forma, durante el 2019 se realizaron reuniones con los especialistas de materia agraria para iniciar con la implementación del SSC, lo cual ameritó asistencia a reuniones, construcción de modificaciones al sistema requeridas para la materia agraria, así como la corroboración y verificación de esos cambios con la Dirección de Tecnología de Información (DTI).  Asimismo, se inició con la implantación de la materia de Ejecución de la Pena, lo que ameritó igual que en la materia Agraria el desarrollo de las modificaciones al sistema y la realización de las pruebas con los encargados del desarrollo tecnológico en DTI, en coordinación con las personas defensoras de esa materia, materializando la implementación en el 2019 de la Defensa Pública de Alajuela.  Con la colaboración del recurso extraordinario se realizó la verificación y posterior certificación del proceso estadístico en las siguientes oficinas:   * Quepos * Alajuela * Atenas * Bataán * Bribrí * Cóbano/Jicaral * Desamparados * Garabito * Guadalupe * Guatuso * La Fortuna * La Unión * Los Chiles * Puntarenas * San Ramón * Tarrazú * Turrialba * Upala * Limón * Heredia * Liberia * Grecia * Cañas * Sarapiquí * Hatillo * San Joaquín * Puriscal * Pococí * Siquirres y * Nicoya.   ***3.2.2.2.- Labores a realizar en el 2020***  En lo que respecta al 2020 se tiene previsto terminar la implantación del sistema en las oficinas que conocen Ejecución de la Pena en la Defensa Pública y el inicio de la implantación en materia agraria, lo que amerita labores necesarias de capacitación al personal profesional y administrativo de cada oficina en el uso de la herramienta tecnológica. Se muestra la proyección de atención que se tiene para el presente año por el equipo que se compone por el recurso extraordinario otorgado y un asistente administrativo:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | MATERIA | OFICINAS | CANTIDAD DE PERSONAL A CAPACITAR | | Ejecución de la Pena | 16 | 23 | | Agrario | 7 | 14 | | Pensiones Alimentarias | 34 | 82 |   *Fuente: Unidad de Modernización de la Defensa Pública*  En vista de la anterior proyección se considera adecuado establecer un indicador de gestión en los siguientes términos para futuras evaluaciones del recurso concedido:  ***“Oficinas de la Defensa Pública a las que se implantó el Sistema de Seguimiento de Casos (SSC) entre las oficinas que se tenía proyectado implantar”***  En entrevista realizada a la ingeniera Picado González y Arce Hidalgo, en su orden Jefa Administrativa 4 y Coordinador de Unidad 3, ambos de la Dirección de Planificación, indicaron que si bien la plaza se encuentra dedicada de forma exclusiva a las labores de implementación del SSC y su respectivo seguimiento, consideran de relevante importancia que esa plaza al igual que su homólogo del Ministerio Público se involucre en el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, ya que es necesario para el éxito del mismo en la Defensa Pública, que se cuente con el criterio experto, así como de coordinación y asesoramiento en la labor que realizan los Profesionales 2 que se dedican de forma exclusiva a esas actividades de rediseño.  En criterio vertido por la M.Sc Diana Montero Montero, Jefa a.i. de la Defensa Pública fue clara en indicar el valioso aporte de ese recurso para los fines de la Defensa Pública, debido que es el que tiene a cargo el proceso de modernización de los sistemas informáticos de registro de datos, en específico del Sistema de Seguimiento de Casos (SSG), el cual permite tener estadísticas de manera automatizada, confiable y eficiente para la toma de decisiones.  Indicó que el recurso bajo análisis debe desempeñar las siguientes funciones:   * Revisar las mejoras que el Sistema requiere, pues como toda herramienta tecnológica, necesita mejora continua. * Recopilar buenas prácticas en el uso de esta herramienta y replicarlas en otras oficinas y en las futuras materias que deban implementar el SSC. * Mantener las reuniones y coordinaciones con el personal de la Dirección de Tecnología de la Información para cumplir el apartado anterior. * Realizar las giras de supervisión para vigilar el cumplimiento en el uso por parte de las personas funcionarias que laboran en las materias implementadas, pues al ser un sistema nuevo, se enfrenta la resistencia al mismo y en ocasiones, la falta de capacitación del personal nuevo.   También manifestó que para el 2020, se realizarán visitas de supervisión a cada oficina de la Defensa Pública que atiende la materia laboral, con la finalidad de dar atención personalizada a las necesidades que surjan.  Terminó indicando que el recurso se abocará a las labores de implantación de la materia de Ejecución de la Pena, y se tiene previsto implementar el SSC en las materias Agraria, Pensiones Alimentarias, Familia y Contencioso Administrativo, de ahí la necesidad de mantener el recurso para darle continuidad, seguimiento y mejora a este Proyecto de la Defensa Pública  ***De la información recopilada se determina que la plaza extraordinaria se ha dedicado a la labor de implementación del SSC, labor que fue asignada desde la génesis del otorgamiento del recurso y que durante el 2019 avanzó en las labores previas de implantación en la materia de ejecución de la pena y agraria, así como en el control y seguimiento en las oficinas que ya utilizan el sistema y todas sus funcionalidades, por lo que se considera necesario la continuación del recurso por el 2021 para atender las oficinas restantes de implantación del SSC y su correcto uso, pero en los mismos términos que se otorgó en el 2020 (extraordinario), ya que las labores de implantación se consideran que tendrán una fecha de finalización, una vez que se cuente con el SSC en todas las oficinas que conforman la Defensa Pública y el personal de cada oficina conozca como utilizarlo.***  ***No obstante, es importante indicar que el recurso además de las labores que ya tiene a cargo, deberá tener participación en las actividades asociadas al Proyecto Modelo Penal, de acuerdo con lo establecido en el oficio 1507-PLA-MI-2018 Modelo de tramitación de la Defensa Pública elaborado por la Dirección de Planificación y aprobado por el Consejo Superior en sesión 5-19 del 23 de enero de 2019, artículo XXIII, para proporcionar ese contrapeso técnico y de asesoramiento a las plazas de profesional 2 que realizan el abordaje en las diferentes oficinas de la Defensa Pública, tal y como se trabaja con los recursos extraordinarios destinados para la atención del Ministerio Público.***  **3.2.3. Plazas de Profesional 2 otorgadas al Ministerio Público, Defensa Pública y Dirección de Planificación**  *En total se cuenta con 7 plazas de profesional 2, ocupadas por profesionales en Ingeniería Industrial y Administradores, distribuidos de la siguiente manera:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Cantidad de profesionales*** | ***Oficina a la cual están adscritos los recursos*** | ***Oficina que tiene la dirección funcional del recurso*** | | *2* | *Ministerio Público* | *Dirección de Planificación* | | *2* | *Defensa Pública* | | *3* | *Dirección de Planificación* |   Como se puede apreciar de la tabla anterior, tanto el Ministerio Público como la Defensa Pública cuenta con 2 recursos extraordinarios cada uno para trabajar de forma exclusiva el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal que tiene como objetivo en esos ámbitos su modernización, mediante la creación de fiscalías modelo y estandarización de la forma de trabajo, lo que mismo ocurre para al Defensa Pública, con la dirección funcional en el quehacer de sus labores por la Dirección de Planificación, tal y como lo planteó en su momento el Rediseño de esta Dirección en estudio 1576-PLA-2016-B aprobado por el Consejo Superior en sesión 95-16 del 13 de octubre de 2016, artículo LXII. El objetivo de estas plazas siempre ha sido que sean exclusivos para atender las necesidades de estas dos dependencias del Ámbito Auxiliar de Justicia.  Los tres recursos restantes si bien están adscritos a la Dirección de Planificación, se dedican a atender el Proyecto Modelo Penal como las otras cuatro plazas del Ámbito Auxiliar de Justicia antes citadas, pero centrándose en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), además de otros proyectos de interés como el de Estructuras Organizacionales del Organismo de Investigación Judicial, el cual inclusive ha ameritado la asignación de recursos ordinarios de la Dirección de Planificación para cumplir con los cronogramas de trabajos establecidos.  Las plazas de Ingeniera o Ingeniero Industrial asignadas al proyecto de implementación del SSC, una vez finalizada esa implementación, se dedicarán a la modernización del Ministerio Público y la Defensa Pública, con la rectoría de la Dirección de Planificación[[12]](#footnote-12), específicamente de la Unidad de Modernización del Ámbito Auxiliar de Justicia y Administrativo, creada mediante informe de rediseño de la Dirección de Planificación para la atención de esos tres ámbitos (oficio *1576-PLA-2016-B y sus recomendaciones fueron acogidas por el Consejo Superior en la sesión 95-16 del 13 de octubre del 2016, artículo LXII)*.  Además, en el caso del Ministerio Público, se visualizó la necesidad de unir los esfuerzos que realiza el Programa Nacional de Fiscalías Electrónicas (PRONAFE) con los puestos asignados al SSC, para conjuntar un solo equipo de trabajo enfocado en brindar el soporte administrativo en la modernización indicada.  ***3.2.3.1.- Labores realizadas en el 2019***  Como se indicó, los recursos actualmente atienden las labores del Proyecto Modelo Penal orientado a la modernización de esos ámbitos y que incluye entre otras labores para las cuales se creó originalmente el SSC, el cual cuenta con una metodología de trabajo que demora aproximadamente 5 semanas por cada Circuito Judicial, que se divide de la siguiente manera:  CONTROLAR  MEJORAR  ANALIZAR  MEDIR  DEFINIR  Posterior a la realización del trabajo de campo, para el cumplimiento integral del cronograma de trabajo, los profesionales asignados al proyecto deben darle seguimiento a cada oficina rediseñada, lo que aproximadamente tiene una duración de 3 meses y efectuar una fase final de cierre con una duración de dos meses, tiempos que pueden variar de acuerdo con la complejidad y tamaño de la estructura de cada una de las oficinas que conforman el circuito.  La línea de abordaje del Proyecto de Modelo Penal va orientada a que se realice en forma conjunta con el recurso profesional en derecho destacado en el Ministerio Público y la Defensa Pública, para asegurar el cumplimiento de objetivos y generar mayores réditos con el rediseño, labor que actualmente solo se realiza con el Ministerio Público y que se pretende homologar en la Defensa Pública. Respecto al OIJ el abordaje se realiza directamente con la oficina y las coordinaciones correspondientes con la Dirección del OIJ.  En lo que respecta a las labores realizadas por las plazas bajo análisis es importante destacar que en el 2019 en la Defensa Pública y el Ministerio Público se atendieron siete Circuitos Judiciales y en OIJ cinco Circuitos Judiciales, lo que se traduce en la siguiente cantidad de oficinas abordadas por dependencia que conforma el Ámbito Auxiliar de Justicia:   * Circuito Judicial de Heredia * I Circuito Judicial de Guanacaste * I Circuito Judicial de Alajuela * I Circuito Judicial de la Zona Atlántica * Circuito Judicial de Puntarenas * Circuito judicial de Heredia * I Circuito Judicial de Guanacaste * I Circuito Judicial de la Zona Atlántica * Circuito Judicial de Puntarenas * I Circuito Judicial de San José * II Circuito Judicial de San José * III Circuito Judicial de San José (Solo Fiscalía)   Adicionalmente, estas plazas le dieron seguimiento de manera mensual a 19 planes remediales implementados en 10 Circuitos Judiciales, labor que se mantiene en la actualidad, lo que evidencia que los recursos ordinarios no solo están dedicados a las labores de rediseño (ejecución), sino que realizan labores de control y seguimiento, que permiten un mayor beneficio para las oficinas. En el caso del O.I.J, el documento propuesto de modelo de trabajo ha involucrado el tener que avanzar en el conocimiento de los despachos de previo para lograr consolidar un criterio técnico en las propuestas que se realicen.  En lo que respecta al cumplimiento del cronograma de trabajo para el 2019 facilitado por el Coordinador de Unidad 3 del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, se tenía establecido atender 12 oficinas de cada una de las dependencias que conforman el Ámbito Auxiliar de Justicia, no obstante el equipo de trabajo tuvo que atender de manera adicional la Fiscalía y Defensa Pública de Flagrancia y Turno Extraordinario del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José (4 oficinas más), lo que elevó la cantidad de oficinas atendidas, dando rendimientos que superan el 100 por ciento en lo que respecta a cantidad de oficinas, no obstante la inclusión de esas oficinas, afecta el cumplimiento del cronograma, extendiendo la duración del proyecto, el cual actualmente ya se tuvo que ampliar al primer trimestre del 2021, tres meses más de la fecha establecida como cierre del Proyecto Modelo Penal, variación que de acuerdo con lo indicado por el Ing. Arce Hidalgo es probable que se repita y extienda la conclusión del Proyecto, lo anterior sin tomar en cuenta la atención de las demás oficinas especializadas del Ministerio Público, las cuales aunque no están dentro del Proyecto Modelo Penal, ya se ha solicitado por la Fiscalía General y las propias oficinas el abordaje de rediseño correspondiente.  Ahora bien, en relación con el cumplimiento del cronograma de trabajo y tomando como base la cantidad de oficinas que se estableció atender, se cuenta con los siguientes porcentajes de avance por circuito:  Gráfico 1  Oficinas abordadas por el Modelo Penal por Circuito Judicial  Ámbito Auxiliar de Justicia  Imagen que contiene captura de pantalla  Descripción generada automáticamente  **Fuente:** Elaboración propia con datos suministrados por el Subproceso de Modernización Institucional  Como se observa, de las 175 oficinas que se tiene establecido atender, ya se han rediseñado el 35% de ellas (46), abordando cuatro Circuitos Judiciales en su totalidad (Limón, Liberia, Puntarenas y Heredia), lo que evidencia el uso de los recursos en los últimos años en que fueron concedidos.  Además, en el caso del Ministerio Público, se visualiza la necesidad de unir los esfuerzos que realiza el Programa Nacional de Fiscalías Electrónicas (PRONAFE) con los puestos asignados al SSC, para conjuntar un solo equipo de trabajo enfocado en brindar el soporte administrativo en la modernización del Ministerio Público.  ***Recurso extraordinario para atender el Proyecto de Estructuras Organizacionales del Organismo de Investigación Judicial***  Adicionalmente, es importante destacar que de los 3 recursos destinados a la atención del OIJ, 2 llevan a cabo las labores asociadas al Proyecto Modelo Penal, que incluye la atención de 36 oficinas entre Delegaciones, Subdelegaciones y Unidades del OIJ en todo el país, mientras que el recurso adicional en conjunto con recursos ordinarios del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación se encargan de la atención del Proyecto de Estructuras Organizacionales del Organismo de Investigación Judicial.  Mediante un esfuerzo conjunto realizado por la Dirección de Planificación y el Organismo de Investigación Judicial se efectuaron previamente una serie de reuniones desde el 2018 para establecer las prioridades. Como parte de esas acciones se efectuaron sesiones de trabajo, para la revisión de las referencias pendientes de esta Dirección y en coordinación con el OIJ, establecer el orden de atención.  Como parte de esas sesiones de trabajo en su momento el Director del Organismo de Investigación Judicial, el MSc. Walter Espinoza Espinoza solicitó prioritariamente a la Dirección de Planificación, el estudio del Departamento de Investigaciones Criminales (Sección de Fraudes), Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses, Departamento de Medicina Legal y Sección de Transportes OIJ, a las cuales se les aplicará la Metodología de Rediseño de Proceso; asimismo, el Servicio Médico (valoraciones médicas de preempleo para puestos policiales, Sección de Delitos Informáticos y Sección de Estupefacientes.  En el archivo adjunto, se establecen cada una de las necesidades del Organismo de Investigación Judicial y el tipo de abordaje por realizar la Dirección de Planificación:    Por lo anterior, la Dirección de Planificación, asumió el proceso de estudio de las Estructuras del Organismo de Investigación Judicial, a partir de enero del 2018 bajo la metodología de Administración de Proyectos.  Seguidamente, se presentan documentación relevante como antecedentes del trabajo previo para iniciar con el abordaje del OIJ:   | **Nombre del Archivo** | **Archivo** | | --- | --- | | Minuta de reunión |  | | Lista de Asistencia |  | | Plan de Trabajo del Organismo de Investigación Judicial |  |   Tal como se aprecia previamente se determinaron las necesidades de atención prioritario de estudios requeridos para ese Organismo, con el fin de destacar recursos dedicados de manera exclusiva a la atención de esas labores mediante un proyecto dividido en dos fases de atención. Al finalizar el 2019, el equipo de trabajo, que incluye uno de los recursos extraordinarios bajo análisis elaboraron los siguientes estudios:   |  |  | | --- | --- | | **Informe** | **Estado** | | Avance, fortalecimiento y consolidación de la Plataforma de Información Policial (PIP) | En proceso de revisión | | Fusión de la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario y Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios | Atendido mediante informe 324-PLA-MI-2019, conocido por el Consejo Superior en sesión 52-19 del 07 de junio de 2019, artículo LXXXIII. | | Fijación de roles y jornadas de trabajo del personal de las Secciones de Cárceles del OIJ de todo el país (incluye la GRIC[[13]](#footnote-13)) | En proceso de revisión | | Impacto Organizacional y Presupuestario a partir de la Ley 9458 que reforma la Ley 4573, Código Penal y la Ley 7451, Ley de Bienestar de los Animales. | Atendido mediante informe de plazas 595-PLA-RH-MI-2019, conocido por el Consejo Superior en sesión 42-19 (Presupuesto 2020) del 9 de mayo de 2019, artículo I | | Departamento de Investigaciones Criminales (Sección de Robos y Hurtos) | En proceso de revisión | | Creación y Reforzamiento de las Oficinas de Anticorrupción y la Sección de Fraudes | Atendido mediante informe de plazas 609-PLA-RH-MI-2019, conocido por el Consejo Superior en sesión 42-19 del 9 de mayo de 2019, artículo II | | Sección de Transportes del OIJ | Atendido mediante informe 253-PLA-OI-2019, pendiente de ser conocido por el Consejo Superior. | | Reestructuración del Archivo Criminal | En proceso de revisión |   Fuente: datos suministrados por el Subproceso de Modernización Institucional  Como se observa, la plaza extraordinaria tuvo a cargo o colaboró con la elaboración de estudios de especial relevancia para el Organismo de Investigación Judicial según sus prioridades, lo que evidencia el buen uso de los recursos.  La atención de estos estudios se ha realizado a través de la metodología de proyectos lo que ha ameritado en cada abordaje desarrollar las siguientes labores:   * Análisis de antecedentes * Coordinación de actividades de sensibilización al cambio y laboral * Presentación con las jefaturas de la oficina * Presentación con el personal de la oficina. * Recopilación de información preliminar. * Conformación de equipo de mejora de procesos * Identificación y análisis de antecedentes ligados a la estructura y funcionamiento de las oficinas. * Mapeo de procesos general * Mapeo de subprocesos * Realización de inventario * Estudio de funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo. * Estudio de tiempos de las actividades actuales * Análisis de las cargas de trabajo. * Identificación de las oportunidades de mejora y sus causas de retraso * Priorización de oportunidades de mejora * Elaboración y envío del informe de diagnóstico * Atención de observaciones * Envío de informe definitivo * Llevar a cabo taller de resultados * Elaboración de propuestas de mejora * Clasificación ABC de procesos críticos * Diseño de propuestas de solución * Plan de acción para implementación * Elaboración de informe de diseño * Presentación de resultados del proyecto.   Cada una de estas actividades se replica o se tiene que desarrollar en las diferentes Secciones que conforman los Departamento que actualmente están en proceso de rediseño y donde el recurso extraordinario concedido tiene plena participación.  Como se evidencia, con la actual distribución de los recursos extraordinarios que actualmente están a cargo de la atención de OIJ, se realiza un abordaje integral de las oficinas del Organismo de Investigación Judicial, maximizando el recurso adicional otorgado al direccionarlo por completo a labores de rediseño de una sola dependencia del Ámbito Auxiliar de Justicia.  Posteriormente, estos recursos continuarán atendiendo los temas de estructuras del OIJ y las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, de acuerdo con las prioridades del OIJ dentro del marco de modernización de ese Órgano Auxiliar.  ***3.2.3.2.- Beneficios de los abordajes realizados***  *Ministerio Público*  Respecto al Ministerio Público, el abordaje de las oficinas tiene como beneficios esperados los siguientes, los cuales podrán irse evaluando en una etapa posterior de control y seguimiento, así como con el Modelo de Sostenibilidad ya aprobado para esta dependencia mediante sesión del Consejo Superior 9-2020 del 4 de febrero de 2020, artículo XXX:   * Disminución de los plazos para la resolución de casos * Redistribución de funciones y tareas del personal * Reforzamiento del uso adecuado de los sistemas de información * Conformación de equipos de mejora * Implementación de planes de trabajo para disminuir el Circulante,Rezago y Archivos Fiscales * Atención más célere a las personas usuarias * Establecimiento de mediciones para dar seguimiento a la cantidad y calidad de las acusaciones * Mejora de procesos entre oficinas (Fiscalía – Defensa – Juzgado – Tribunal). * Mejoras en los procesos de manejo de evidencias * Implementación del Modelo de Sostenibilidad (Seguimiento Mensual de Indicadores de Gestión)   *Defensa Pública*  En cuanto a la Defensa Pública los logros se centran en tres tópicos:  Las plazas de Ingeniera o Ingeniero Industrial asignadas al proyecto de implementación del SSC, una vez finalizada esa implementación, se dedicarán a la modernización del Ministerio Público y la Defensa Pública, con la rectoría de la Dirección de Planificación[[14]](#footnote-14), específicamente de la Unidad de Modernización del Ámbito Auxiliar de Justicia y Administrativo.  *Organismo de Investigación Judicial*  Lo abordajes del OIJ tendrá como resultado del Modelo de atención del OIJ (pendiente de aprobación) tienen como beneficios:   * Equiparar las cargas de trabajo * Especializar unidades de investigación * Establecer la capacidad operativa de las oficinas regionales del OIJ * Establecer planes para la disminución de los casos en rezago * Establecer equipos de mejora continua * Búsqueda de oportunidad de mejora para la solución de problemas detectados   Estas plazas también destacarán en dar continuidad al proceso de modernización del OII, incluyendo delegaciones y subdelegaciones, así como el análisis de las estructuras organizacionales del OIJ.  ***3.2.3.3.- Labores a realizar en el 2020***  Como se mencionó anteriormente, tanto la Defensa Pública, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, cuentan con dos recursos exclusivos cada uno, para la atención de las labores del Modelo Penal, los cuales han generado los siguientes porcentajes de avance:  Gráfico 2  Porcentajes de avance en el Proyecto Modelo Penal  Dependencias que conforman el Ámbito Auxiliar de Justicia  (cantidad de oficinas abordadas)    **Fuente:** Elaboración propia con datos suministrados por el Subproceso de Modernización Institucional  Como se observa, la cantidad de oficinas abordadas da resultados símiles entre las dependencias, por lo que teniendo de base el porcentaje promedio de oficinas no abordadas cercano al 64%, se tiene establecido para el 2020, por cronograma de trabajo aprobado dar atención a las siguientes oficinas:  Fiscalías  25  Oficinas OIJ  Defensas Públicas  19  25  Como se aprecia, en el 2020 se estableció atender un 50% más de oficinas en relación con el 2019, en lo que respecta al abordaje de oficinas en relación con el año pasado, pretendiendo rediseñar oficinas de al menos 10 Circuitos Judiciales, dejando pendiente para el 2021, el abordaje de 5 Fiscalías, 5 Defensas Públicas y 4 Oficinas del OIJ, distribuidos en 2 Circuitos Judiciales. Lo anterior, en el entendido que no haya modificaciones o retrasos en el cronograma de trabajo establecido.  En el siguiente gráfico se puede apreciar la utilización de los recursos del 2018 hasta el 2021 en lo que respecta al Modelo de Mejora Integral del Proceso Penal:  Gráfico 3  Cantidad de oficinas contempladas dentro del abordaje del Modelo de Mejora Integral del Proceso Penal (por año)    **Fuente:** Elaboración propia con datos suministrados por el Subproceso de Modernización Institucional  Indistintamente como se recomiende el recurso bajo análisis se hace necesario contar con un indicador de gestión de estos recursos, el cual se establecerá en torno a la labor de abordaje del Proyecto Modelo Penal y cualquier otro complementario que se elabore para atender otras necesidades similares. Por consiguiente, se establece el siguiente indicador de gestión:  ***“Cantidad de oficinas a las cuales se les brindó el debido abordaje entre la cantidad de oficinas a las cuales se tiene establecido por cronograma de trabajo brindar el abordaje en el transcurso del año”***  El indicador a pesar de ser simple, se vuelve necesario para contar con un parámetro inicial para llevar el pulso en el avance del proyecto Modelo Penal, además que se hace la salvedad que un porcentaje cercano o por arriba del 80% se considerará positivo, ya que de acuerdo con la experiencia de años anteriores en este mismo tipo de labores, los proyectos sufren variaciones en sus cronogramas de trabajo, así como retrasos por factores independientes al equipo de trabajo encargado de las labores de abordaje. El porcentaje indicado, es coincidente con el establecido en el PAO del Subproceso de Modernización Institucional en relación con la meta del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal del Ámbito Auxiliar de Justicia.  Ahora bien, respecto al Proyecto de Estructuras Organizacionales del OIJ, para el 2020 los recursos asignados a este proyecto, entre estos la plaza extraordinaria asignada, se avocaran a la atención de las labores de rediseño en el Departamento de Ciencias Forenses, que se conforma de 8 oficinas y el Departamento de Medicina Legal, que consta de 4 oficinas en total, los cuales tienen porcentajes de avances del 67% en Ciencias Forenses y 37% en Medicina Legal y que de acuerdo con el cronograma de trabajo se espera finalicen al cierre del presente año.  A partir del 2021, el equipo de profesionales dedicados a la atención de necesidades del Organismo de Investigación Judicial se dedicará a darle atención a los siguientes estudios:   * Servicio Médico (valoraciones médicas de preempleo para puestos policiales) * Sección de Delitos Informáticos * Sección de Estupefacientes   Una vez que se atiendan los estudios indicados y se concluya con el abordaje de las oficinas Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, se considera que dos de los 3 recursos concedidos para el presente año, destinados a la atención de asuntos del OIJ, que son de la Dirección de Planificación, junto con los dos recursos profesionales del Ministerio Público y los 2 de la Defensa Pública (los últimos 4 adscritos a cada dependencia, pero bajo la dirección funcional de la Dirección de Planificación) se dedicarán a la atención de cualquier otro requerimiento de estudio que deba ser abordado mediante la Metodología de Rediseño de Oficinas de cada dependencia, además de darle sostenibilidad a las oficinas rediseñadas, mediante el Modelo de Sostenibilidad con el fin de continuar con el proceso de modernización de esos ámbitos. De igual forma, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, ese equipo de trabajo se dedicará a la atención de las referencias que hayan ingresado e ingresen a la Dirección de Planificación de esa dependencia, según se detalló en líneas anteriores, lo anterior, para minimizar los plazos de respuesta a las necesidades planteadas a la Dirección de Planificación.  ***3.2.3.4. Modelo de Sostenibilidad***  Desde el 2015, la Dirección de Planificación ha velado porque las oficinas y despachos judiciales que han sido sometidos a un rediseño o reestructuración cuenten con un mecanismo de sostenibilidad, que haga perdurar los logros obtenidos, tal y como se solicitó inicialmente mediante oficio 1317-PLA-2015, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en sesión 82-15 del 16 de septiembre de 2015, artículo XXI.  En el informe 1981-PLA-2016 elaborado por la Dirección de Planificación, conocido por el Consejo Superior en sesión 107-16 del 29 de noviembre de 2016, artículo XLIX, se aprobó lo siguiente:  “***a.)*** *Cada vez que concluya un proyecto de rediseño en un circuito judicial, se dotará con una plaza ordinaria y permanente a la Administración Regional correspondiente a una plaza de Profesional 2, con clase angosta de Ingeniería Industrial. Esa plaza se reportará administrativamente a la Administración Regional respectiva y funcionalmente a la Dirección de Planificación. Atendiendo esta disposición, se aprueba la dotación de una plaza ordinaria y permanente de Profesional 2 (Ingeniería Industrial) al Segundo Circuito Judicial de Alajuela y una plaza ordinaria y permanente de Profesional 2 (Ingeniería Industrial) al Circuito Judicial de Cartago. Esas plazas se reportarán administrativamente a la Administración Regional del Circuito Judicial respectivo y funcionalmente a la Dirección de Planificación.* ***g.)*** *Dentro del marco de los proyectos de reforma laboral y civil, en coordinación con la Dirección Ejecutiva y la Contraloría de Servicios, la Dirección de Planificación brindará una capacitación sobre el Modelo de Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño a las Jefaturas de las Administraciones Regionales y Contraloras y Contralores Regionales*.”  A partir de ese momento todo proceso de rediseño cuenta con su etapa de sostenibilidad, que toma como insumo los indicadores de gestión instaurados en cada una de las oficinas o despachos judiciales rediseñados y en donde es necesaria la participación de todos los involucrados.  Bajo el Modelo de Sostenibilidad, los profesionales encargados deben realizar las siguientes tareas:   * Capacitación en el uso de los indicadores de gestión, * Labores de revisión del funcionamiento de la oficina o despacho judicial, * Análisis del rendimiento de las oficinas, * Control y seguimiento de los planes implementados, * Análisis y seguimiento de información estadística, * Ejecución de programas y proyectos, * Labores de organización y reorganización administrativa, * Compilación de indicadores y revisión de la correcta utilización de los parámetros consignados, * Ente de enlace entre todos los involucrados con la oficina y despacho judicial rediseñado.   ***Se evidencia que las labores realizadas por los 7 recursos extraordinarios, se consideran necesarias y esenciales para la consecución de los objetivos planteados por el Proyecto Modelo Penal, la consecución del Proyecto de Estructuras del OIJ y para ejecutar un modelo de sostenibilidad de las oficinas rediseñadas, así como para darle atención a los requerimientos de esas oficinas de una forma más expedita y exclusiva (en el caso del Ministerio Público y la Defensa Pública), por lo que se estima conveniente la permanencia de estas plazas posterior al cierre del 2020.***  ***3.3 Plan Estratégico Institucional 2019-2024***  Mediante oficio 1463-PLA-2018, conocido por el Consejo Superior en sesión 56-18 del 10 de diciembre de 2018, artículo XXIII, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2019-2024 y sus recomendaciones.  En el Plan indicado se estableció la acción estratégica “*Desarrollo y optimización de servicios y procesos judiciales”* de las cuales se plantearon las siguientes metas estratégicas, en las cuales los recursos extraordinarios concedidos tienen incidencia directa y son necesarios para su consecución, así como están estrechamente relacionados con el Modelo de Mejora Integral del Proceso Penal y la implementación del Modelo de Sostenibilidad:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tema Estratégico | Acción Estratégica | Meta Estratégica | Responsable | | Optimización e innovación de los servicios judiciales | Desarrollo y optimización de servicios y procesos judiciales | Que al finalizar el 2024, se hayan implementado procesos estandarizados en las oficinas del Ministerio Público, considerando las particularidades de sus oficinas. | Fiscalía General | | Que al finalizar el 2024, se hayan implementado procesos estandarizados en las oficinas de la Defensa Pública, considerando las particularidades de sus oficinas. | Defensa Pública | | Que al finalizar el 2024, se haya implementado el proyecto sobre el modelo de mejora integral del proceso penal. | Dirección de Planificación | | Que al finalizar el 2024, se haya implementado el proyecto de rediseño en al menos 7 circuitos judiciales, que involucre el ámbito jurisdiccional, auxiliar de justica y administrativo. | | Que al finalizar el 2024, se haya ampliado el modelo de sostenibilidad a 7 Circuitos Judiciales; a partir del Modelo establecido por la Dirección de Planificación en los Circuitos Judiciales de Cartago y San Carlos. | | Resolución oportuna de conflictos | Celeridad Judicial | Que al finalizar el 2024, se haya incrementado la cantidad de casos terminados por año, mediante la implementación de un plan de descongestionamiento y atención de rezago, no superior a dos años, que permitan resolver y llevar a un nivel aceptable-controlable-mínimo del rezago en el Ministerio Público. | Fiscalía General | | Que al finalizar el 2024, se haya incrementado la cantidad de casos salidos por el Organismo de Investigación Judicial por año. | Organismo de Investigación Judicial |   De lo anterior, se evidencia que la responsabilidad del cumplimiento de las metas estratégicas depende del trabajo que han venido realizando los recursos concedidos y analizados en el presente informe.  ***3.4 Criterio de la Dirección de Planificación***  Del análisis realizado se pudo corroborar las labores que cada plaza lleva a cabo y el aprovechamiento que se le da a estos recursos, los cuales están centrados en la atención de los objetivos trazados para el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, exceptuando el otorgado a la Defensa Pública, el cual con la información que se pudo recopilar, solamente les da atención a las labores de implantación y correcto uso de las herramientas tecnológicas relacionadas con el SSC.  Solo tomando en cuenta los cronogramas de trabajo, se considera necesario que las plazas se mantengan para el 2021, pero si se consideran otros factores como la puesta en marcha del Modelo de Sostenibilidad en el Ministerio Público y que dicho modelo se replique en otras dependencias que conforman el Ámbito Auxiliar de Justicia (Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial), se cuentan con mayores argumentos para variar la condición de las plazas a ordinarias, ya que estas labores serán de carácter permanente, aunado a que también tienen una participación directa en el cumplimiento de las metas estratégicas incorporadas al Plan Estratégico Institucional 2019-2024.  Otro aspecto de capital importancia, respecto a las plazas de Profesional 2 es que ninguna de las dependencias del Ámbito Auxiliar de Justicia en el pasado había contado con recursos exclusivos para la atención de sus necesidades, abordaje de oficinas (rediseño) o control y seguimiento de indicadores, razón por lo que estás plazas son necesarias para el fortalecimiento en la atención de estos temas, más allá del presente año.  Adicionalmente, es importante evidenciar que en el rediseño realizado a la Dirección de Planificación mediante informe 1576-PLA-2016-B aprobado por el Consejo Superior en sesión 95-16- del 13 de octubre de 2016, artículo LXII recomendó la creación de la Unidad de Modernización del Ámbito Administrativo y Ámbito Jurisdiccional, a cargo de un Coordinador junto con un profesional y la rectoría de las plazas destacadas en temas de modernización en la Defensa Pública, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, por lo que los recursos de profesional 2 en condición extraordinaria, dos adscritos al Ministerio Público, dos a la Defensa Pública y al menos dos de los adscritos a la Dirección de Planificación, estos últimos atendiendo de manera exclusiva estudios del Organismo de Investigación Judicial, se consideran necesarios para el funcionamiento de esta Unidad y la sostenibilidad de todos los rediseños que se han realizado como resultado del Proyecto Mejora Integral del Proceso Penal, Proyecto de Estructuras Organizacionales del OIJ y Proyectos de atención de rezago, ejecutados en las oficinas de las dependencias que conforman el Ámbito Auxiliar de Justicia, así como cualquier otra necesidad que se tenga que atender en el futuro, producto de nuevas reformas o la actualización natural de los procesos y procedimientos que desarrollen las oficinas.  En el caso particular de la plaza otorgada a la Defensa Pública y al no haber obtenido suficientes datos de la labor efectuada durante el 2019, así como que se pudo corroborar que la plaza se centra solo en las labores de implantación del SSC y correcto usos de sus aplicativos, esta Dirección considera que si bien debe otorgarse para el 2021 para continuar con la labor de implantación, deberá atender las labores asociadas al abordaje de oficinas del Proyecto Modelo Penal, como su homólogo del Ministerio Público, brindando apoyo, asesoramiento y coordinación en dichas labores de forma conjunta con el equipo de profesionales 2 asignados al abordaje de oficinas, a partir del presente año.  Asimismo, se estima conveniente que las oficinas a las que se les otorgaron estos recursos lleven un control detallado de las actividades ejecutadas por cada plaza, que permita una fácil rendición de cuentas y un análisis de la permanencia del recurso en el tiempo, en el caso de ser recursos otorgados de manera temporal.  ***3.4.1. Creación de plazas***  Se debe tener presente que en todo análisis de recurso humano o creación de una nueva oficina esta Dirección toma en consideración las disposiciones establecidas por Corte Plena en sesiones N°27-2017 de 21 de agosto de 2017, artículo XVI, N°28-2017 de 28 de agosto de 2017, artículo XV y N°29-2017 de 4 setiembre de 2017, artículo XVI, donde aprobó una serie de medidas de contención del gasto en el Poder Judicial, producto de la grave situación fiscal que enfrenta el país, entre las cuales aprobó que no se crearán plazas nuevas, salvo las correspondientes a la implementación de nuevas leyes, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa, o bien cuenten con un estudio técnico de la Dirección de Planificación, sujeto a la disponibilidad de contenido presupuestario, por consiguiente los informes estarán orientados a no generar un aumento adicional en el presupuesto institucional por concepto de recurso humano y en buscar y reforzar la utilización de metodologías o prácticas que permitan la maximización de los recursos. |
| **IV. Elementos Resolutivos**   1. Mediante los informes 19-PLA-OI-2018 y el 676-PLA-RH-EV-2019 se aprobaron la continuación de las plazas bajo análisis en condición extraordinaria 2. Las plazas analizadas fueron otorgadas para la implantación del Sistema de Seguimiento de Casos y la atención del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.   ***Plaza de Fiscal o Fiscala adscrita al Ministerio Público***   1. La plaza fue otorgada para la implementación del Sistema de Seguimiento de Casos y el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, así como llevar a cabo las labores del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal. 2. El recurso quedó bajo las órdenes de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y durante el 2019 se dedicó a apoyar el Proyecto del Modelo Penal y ejecutar planes de descongestionamiento y rezago de las oficinas que conforman el Ministerio Público. 3. Durante el 2019 el recurso se dedicó a ejecutar planes de descongestionamiento en la Fiscalía de Pavas y en la de Puntarenas, obteniendo réditos positivos en la disminución del circulante que maneja cada una de las oficinas. 4. La plaza ha trabajado de forma conjunta con los recursos profesionales encargados del abordaje de las oficinas del Ministerio Público, dando cumplimiento al cronograma establecido y gestionando los informes de rendimiento mensual que son enviados a la Fiscalía General, Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías y la Dirección de Planificación. 5. Para el 2020 la plaza además de coadyuvar con el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal tendrá a cargo el de Descongestionamiento, Atención y Resolución de Rezago y Archivos Fiscales. 6. El Proyecto de Descongestionamiento, Atención y Resolución de Rezago y Archivos Fiscales tiene como finalidad aumentar la celeridad en la resolución de causas en condición de rezago (9000 aproximadamente) y la revisión de los expedientes con resolución de archivo fiscal de las fiscalías que se atiendan con el proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal. 7. El recurso otorgado además de las labores de coordinación y supervisión de los proyectos también tiene a cargo su cuota de tramitación de las causas en las que se brinda colaboración a alguna Fiscalía como resultado de la implementación de algún plan de descongestionamiento. 8. En entrevista a parte del personal encargado de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, donde desempeña sus labores el recurso concedido, fueron claras en indicar el beneficio que brinda esta plaza adicional, ya que es la encargada de realizar una serie de proyectos de gran importancia en el cumplimiento de objetivos de esa dependencia. 9. Las personas entrevistadas manifestaron la necesidad de que el recurso se mantenga de manera permanente, ya que las labores que desempeña la plaza se consideran continuas. 10. La información del recurso extraordinario concedido fue aportado mediante oficio UCS-025-MO-2020 del 12 de febrero, documento que cuenta con el aval de la Máster Emilia Navas Aparicio. 11. Actualmente el recurso debe cumplir con el cronograma de trabajo el cual actualmente se extendió hasta finales del primer trimestre de 2021 y cabe la posibilidad que se extienda más allá de esa fecha, de acuerdo con lo indicado por personeros de la Dirección de Planificación. 12. Se evidenció la importancia de la labor que realiza el recurso ordinario, por lo que se estima que el recurso debe mantenerse en el tiempo para la atención de varios proyectos en beneficio del Ministerio Público.   ***Plaza de Defensor o Defensora otorgado a la Defensa Pública***   1. El recurso se ha destacado de manera exclusiva en las labores de implantación del Sistema Seguimiento de Casos (SSC) así como su uso correcto en las diferentes oficinas que conforman la Defensa Pública. 2. No fue posible obtener insumos suficientes del recurso otorgado, ya que la persona que ocupa la plaza se encuentra incapacitada desde hace más de dos meses. 3. En contestación del doctor Roberto Montero García, persona que estuvo a cargo en parte del 2019 de estas labores, considera la importancia de prórroga el recurso para el 2021, ya que la Defensa Pública requiere de la debida instalación del SSC, para contar con datos estadísticos automatizados de manera fidedigna. 4. De acuerdo con el Dr. Montero García en el 2019 se logró culminar con la implantación del SSC en las oficinas que conocen materia penal, laboral y de penalización de la violencia contra la mujer, en todo el país. 5. Entre las funciones que realizó este recurso se encuentran: Implementación del sistema, desarrollo de nuevas funcionalidades de acuerdo con la materia, colaboración en el proceso de certificación de la oficina, realización de giras de supervisión en las oficinas que fueron sometidas al proceso de arqueo, seguimiento de la correcta utilización del Sistema SSC, labores de concientización y llevar a cabo capacitaciones en el correcto uso del Sistema SSC. 6. En el 2019 también se inició con las labores previas para el inicio de la implantación del SSC en materia de Agraria y inicio de la implantación en Ejecución de la Pena. 7. El recurso extraordinario también brindó colaboración en la verificación y posterior certificación del proceso estadístico de 30 Defensas Públicas. 8. Para el 2020 se tiene previsto terminar la implantación del SSC en las oficinas de la Defensa que conocen Ejecución de la Pena y el inicio de la implantación en la materia Agraria. 9. Se considera pertinente establecer un indicador de gestión para evaluar la labor del recurso concedido en futuros períodos presupuestarios. 10. De acuerdo con el criterio de los encargados del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal de la Dirección de Planificación es necesario que la plaza bajo análisis tenga una mayor participación en la atención de este Proyecto, para contar con un criterio experto, así como de coordinación y asesoramiento en la labor de abordaje que se realiza en las oficinas de la Defensa Pública como parte del Proyecto que esta Dirección lidera. 11. De acuerdo con el criterio de la M.Sc Diana Montero Montero, Jefa a.i. de la Defensa Pública indicó sobre la necesidad de contar con la plaza de Defensor o Defensora Pública concedida en el presente año como extraordinaria, para llevar a cabo el proceso de modernización de los sistemas informáticos de registro de datos, en específico del Sistema de Seguimiento de Casos (SSC). 12. El recurso otorgado se ha dedicado de manera exclusiva a la implantación del SSC en las oficinas de la Defensa Pública, el cual se considera necesario para la finalización del cronograma de implantación del mencionado sistema, no obstante se considera necesario que el recurso brinde colaboración en las labores asociadas al Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, brindado apoyo y asesoría al equipo de profesionales 2 que realiza el abordaje de ese Proyecto en las oficinas de la Defensa Pública.   ***Plazas de Profesional 2 otorgadas al Ministerio Público, Defensa Pública y Dirección de Planificación***   1. El recurso profesional destinado al Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal consta de 7 personas, divididas de la siguiente manera:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Cantidad de profesionales** | **Oficina a la cual están adscritos** | **Oficina que tiene la dirección funcional del recurso** | | 2 | Ministerio Público | Dirección de Planificación | | 2 | Defensa Pública | | 3 | Dirección de Planificación |      1. De los recursos concedidos, 2 están adscritos al Ministerio Público y 2 a la Defensa Pública, bajo la dirección funcional de la Dirección de Planificación y los 3 recursos restantes asignados directamente a la Dirección de Planificación, pero actualmente dedicados a labores de atención de proyectos, pero del Organismo de Investigación Judicial. 2. Seis de los recursos concedidos se han dedicado a la atención del Proyecto de Mejora Integral del Proceso, el cual en promedio dura en su abordaje aproximadamente 5 semanas. 3. En el 2019 el equipo de trabajo concedido atendió un total de 7 Circuitos en lo que respecta a abordajes a oficinas en el Ministerio Público y Defensa Pública y 5 en el caso del Organismo de Investigación Judicial, como resultado la siguiente cantidad de oficinas atendidas:  |  |  | | --- | --- | | **Dependencia** | **Cantidad de oficinas abordadas** | | Ministerio Público | 17 | | Defensa Pública | 16 | | Organismo de Investigación Judicial | 13 | | Total de oficinas abordadas | 46 |  1. Asimismo, los recursos otorgados les dieron seguimiento a 19 planes remediales implementados en 10 Circuitos Judiciales, labores que se mantienen en la actualidad. 2. Revisando el cronograma de trabajo de 2019, se cumplió con creces, en lo que respecta a cantidad de oficinas atendidas, no obstante, se dieron variaciones los cuales han extendido el tiempo de atención al primer trimestre de 2021. 3. De los tres recursos avocados a labores en el Organismo de Investigación Judicial, uno se dedica de forma exclusiva a la atención del Proyecto de Estructuras Organizacionales del OIJ, mientras los dos tienen a cargo el rediseño de 36 oficinas de esta dependencia en el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal. 4. Ya se finalizó con el rediseño de en la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario (SITE) y la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI). Actualmente se desarrollan dos proyectos de rediseño, uno en el Departamento de Ciencias Forenses y el otro en el Departamento de Medicina Legal. 5. De los abordajes del Proyecto Modelo Penal se han obtenido y se espera obtener varios beneficios en cada una de las dependencias abordadas, en detalle:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ministerio Público** | **Defensa Pública** | **Organismo de Investigación Judicial** | | Disminución de los plazos para la resolución de casos | Distribución equitativa de asuntos | Equiparar las cargas de trabajo | | *Redistribución de funciones y tareas del personal* | *Redistribución del circulante en trámite entre el personal Defensor.* | *Especializar unidades de investigación* | | *Reforzamiento del uso adecuado de los sistemas de información* | *Apoyo a Penal Ordinario (****materia de mayor demanda****), donde la carga de trabajo lo permita.* | *Establecer la capacidad operativa de las oficinas regionales del OIJ* | | *Conformación de equipos de mejora* | *Distribución de tareas del personal de soporte técnico jurídico, aumentando disponibilidad del personal Defensor.* | *Establecer planes para la disminución de los casos en rezago* | | *Implementación de planes de trabajo para disminuir el Circulante, Rezago y Archivos Fiscales*  *Atención más célere a las personas usuarias* | *Colaboración a la Unidad de Impugnaciones* | *Establecer equipos de mejora continua* | | *Establecimiento de mediciones para dar seguimiento a la cantidad y calidad de las acusaciones* | *Recomendaciones para la maximización del tiempo en bloqueos en Agenda Cronos* | *Búsqueda de oportunidad de mejora para la solución de problemas detectados* | | *Mejora de procesos entre oficinas (Fiscalía – Defensa – Juzgado – Tribunal)* | *Reubicación de recurso Defensor entre materias de la oficina, con el objetivo de incrementar la atención de asuntos penales.* |  | | *Mejoras en los procesos de manejo de evidencias* | *Estructuras organizacionales acordes al Área Jurisdiccional, Fiscalía y OIJ.* |  | | *Implementación del Modelo de Sostenibilidad (Seguimiento Mensual de Indicadores de Gestión)* | *Optimización de controles estadísticos y enfocados en la maximización del uso de los sistemas informáticos.* |  |  1. Para el 2020 se espera realizar el abordaje de 25 Fiscalías, 25 Defensas Públicas y 19 Oficinas del Organismo de Investigación Judicial, para finaliza en el 2021 con el abordaje de 5 Fiscalías, 5 Defensas Públicas y 4 Oficinas del OIJ, para completar el rediseño de las 129 oficinas faltantes, según cronograma de trabajo. 2. Se recomienda establecer un indicador de gestión de la labor que desempeñan los recursos bajo análisis es necesario. 3. El Modelo de Sostenibilidad es inherente a los procesos de rediseño que se realizan por la Dirección de Planificación, por consiguiente, el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal tendrá su mecanismo de sostenibilidad, el cual fue recomendado en informe 25-PLA-MI-2020 de esta Dirección y aprobado por el Consejo Superior en sesión 9-2020 del 4 de febrero de 2020, artículo XXX. 4. Dentro del Plan Estratégico Institucional 2019-2024 se incluyeron metas estratégicas, en donde se cumplimiento está asociado de manera directa con las labores que realizan los recursos bajo análisis, de ahí la necesidad de contar con esas plazas en el tiempo.   ***Criterio de la Dirección de Planificación***   1. De la información recopilada se pudo analizar la labor de cada uno de los recursos otorgados y los beneficios que se han generado de los abordajes quese han realizado a las diferentes oficinas, por lo que se estima que las plazas deben concederse para el siguiente período presupuestario e inclusive convertirse a ordinarias, ya que la labor que realizan deberá mantenerse en el tiempo, aunado a que se llevaran a cabo los Modelos de Sostenibilidad en ese ámbito. 2. Se evidencia la necesidad de contar con al menos 6 de los 7 recursos de profesional 2 para que formen parte de la Unidad de Modernización del Ámbito Administrativo y Auxiliar de Justicia de la Dirección de Planificación, y sigan desarrollando los estudios del Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, de manera expedita y exclusiva, así como atiendan las labores asociadas al Modelo de Sostenibilidad de las oficinas rediseñadas como resultado del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal y el Proyecto de Estructuras del Organismo de Investigación Judicial. 3. En el caso particular de la plaza de la Defensa Pública, al no contar con los datos suficientes y evidenciar que el recurso se dedica de manera exclusiva a la implantación del Sistema SSC, se estima que debe otorgarse para el 2021, para culminar con esa labor, pero brindando un apoyo a la consecución de los objetivos establecidos por el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal desde el presente año y en coordinación con el personal profesional que se encarga de los abordajes de las oficinas de la Defensa Pública.   ***Creación de plazas***   1. Los estudios que realiza la Dirección de Planificación toman en consideración los lineamientos establecidos por Corte Plena respecto a la no creación de plazas nuevas, en vista de la grave situación fiscal que afronta actualmente el país. |
| **V. Recomendaciones**  **5.1 Cantidad de Recurso Humano recomendado para el 2021**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Despacho** | **Canti-**  **dad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomendación** | **Período** | **Costo estimado** | | | Ministerio Público | 1 | Fiscala o Fiscal | Extraordinaria | Ordinaria | 2021 | ¢ 56.558.000,00 | | 2 | Profesionales 2 | Extraordinaria | Ordinaria | 2021 | ¢ 73.818.000,00 | | Defensa Pública | 1 | Defensora Pública Supervisora o Defensor Público Supervisor | Extraordinaria | Extraordinaria | 2021 | ¢ 56.587.000,00 | | 2 | Profesionales 2 | Extraordinaria | Ordinaria | 2021 | ¢ 73.818.000,00 | | Dirección de Planificación | 2 | Profesionales 2 (Ingeniería Industrial) | Extraordinarias | Ordinaria | 2021 | ¢110.727.000,00 |   FUENTE: Elaboración propia con datos suministrados por el Subproceso de Formulación del Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, para el 2021.  ***5.2***Estos recursos se otorgan con el fin de que continúen con la implementación y seguimiento del Sistema de Seguimientos de Casos y cualquier otra herramienta tecnológica, así como llevar a cabo todas las labores asociadas al Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial, Proyecto de Estructuras Organizacionales del Organismo de Investigación Judicial y ejecutar las labores de sostenibilidad necesarias para hacer prevalecer en el tiempo los beneficios de los abordajes realizados a las oficinas judiciales y cualquier otro requerimiento que surja, tal y como se encuentran establecido en los informes que aprueban el Modelo de Sostenibilidad y continuar con el proceso de modernización de esos ámbitos.  **5.3** La plaza que se recomienda ordinaria de Fiscal deberá continuar con el apoyo para el proceso de implementación de Sistema de Seguimiento de Casos en las oficinas restantes del Ministerio Público, dar asesoría y apoyo en el cumplimiento del cronograma del Proyecto Mejora Integral del Proceso Penal en coordinación con el Subproceso de Modernización Institucional, así como dándole continuidad al Proyecto de Descongestionamiento, Atención y Resolución de Rezago y Archivos Fiscales del Ministerio Público.  Asimismo, deberá realizar las labores asignadas para la correcta ejecución del Modelo de Sostenibilidad propuesto mediante oficio 25-PLA-MI-2020 y aprobado por el Consejo Superior en sesión 9-2020 del 4 de febrero de 2020, artículo XXX, con el fin de mantener en el tiempo los beneficios obtenidos por las oficinas, mediante el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.  **5.4** El recurso de Defensora o Defensor Público que se recomienda extraordinaria para el período 2021, le dará continuidad a las labores de implantación del Sistema Seguimiento de Casos y sus aplicativos, así como deberá tener participación en las actividades asociadas al Proyecto Modelo Penal, de acuerdo con lo establecido en oficio 1507-PLA-MI-2018 Modelo de tramitación de la Defensa Pública elaborado por la Dirección de Planificación y aprobado por el Consejo Superior en sesión 5-19 del 23 de enero de 2019, artículo XXIII, para proporcionar ese contrapeso técnico y de asesoramiento a las plazas de profesional 2 que realizan el abordaje en las diferentes oficinas de la Defensa Pública, tal y como se trabaja con los recursos extraordinarios destinados para la atención del Ministerio Público.  Asimismo, se deja consignado para futuras evaluaciones del recurso concedido el siguiente indicador de gestión:  **“Oficinas de la Defensa Pública a las que se implantó el Sistema de Seguimiento de Casos (SSC) entre las oficinas que se tenía proyectado implantar”**  **5.5** De igual forma, el recurso extraordinario asignado a la Defensa deberá llevar un control detallado de todas las actividades que ejecuta durante el año, con el fin de contar con un panorama completo de la labor realizada para el próximo período presupuestario.  **5.6** En cuanto a las siete plazas de Profesional 2, se recomienda que queden adscritas en condición ordinaria, dos a la Defensa Pública, dos al Ministerio Público y 2 a la Dirección de Planificación, en la Unidad de Modernización, Ámbito Administrativo y Auxiliar de Justicia del Subproceso de Modernización Institucional, con el fin de que concluyan los cronogramas de trabajo propuestos. Las plazas que se recomienda adscribir al Ministerio Público y Defensa Pública seguirán funcionando en las mismas condiciones en que fueron otorgados en períodos presupuestarios anteriores, en donde la Dirección de Planificación tendrá la dirección funcional de las labores que desarrollen esas plazas.  **5.7** Se establece como indicador de gestión de las plazas de profesional 2, y en específico para la atención del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, el siguiente:  **“Cantidad de oficinas a las cuales se les brindó el debido abordaje entre la cantidad de oficinas a las cuales se tiene establecido por cronograma de trabajo brindar el abordaje en el transcurso del año”**  El indicador a pesar de ser simple, se vuelve necesario para contar con un parámetro inicial para llevar el pulso en el avance del proyecto Modelo Penal, además que se hace la salvedad que un porcentaje cercano o por arriba del 80% se considerará positivo, ya que de acuerdo con la experiencia de años anteriores en este mismo tipo de labores, los proyectos sufren variaciones en sus cronogramas de trabajo, así como retrasos por factores independientes al equipo de trabajo encargado de las labores de abordaje.  **5.8Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)**  Estas plazas vienen funcionando desde periodos anteriores, por lo que cuentan con los requerimientos necesarios para su funcionamiento. |
| **VI Anexos**  **6.1 *Cronograma de trabajo para el Proyecto* *Mejora Integral del Proceso Penal***    ***6.2. Oficio UCS-025-MO-2020 de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público*** |
| **Realizado por:** *Lic. Christian Quirós Vargas, Coordinador de Unidad 3 a.i.* | |
| **Aprobado por:** *Licda. Ginethe Reta Ureña, Jefa del Subproceso de Organización Institucional.* | |
| **Visto bueno:***Licda . Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i. de Planificación* | |

-0-

**Se acordó**: **1.)** Aprobar técnicamente el informe 497-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación, no obstante, la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior de las plazas que se recomiendan en este estudio técnico quedará sujeta a un análisis final e integral que hará el Consejo Superior de todas las plazas que finalmente queden aprobadas, con antelación al envío del proyecto de presupuesto a Corte Plena. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XXI**

**DOCUMENTO N°** **4592-2020, 4644-2020**

# La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presentó el **Informe 507-PLA-RH-MI-2020**, estudio de Requerimiento Humano relacionado con el **Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas**

# **Oficios y referencias**

En el siguiente cuadro se detalla los números de oficios de la Secretaría General de la Corte que corresponden a las referencias internas de la Dirección de Planificación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. Referencia Interna** | **No. Oficio de la Secretaría** | **Oficios Relacionados** |
| 1610-18 | 10473-18 | - |
| 1692-18 | 10880-18 | - |
| 1859-18 | - | Correo del 13-nov-18 de la Dirección de la Defensa Pública, sobre cantidad de usuarios indígenas |
| 150-19 | 951-19 | - |
| 384-19 | 2339-19 | - |

# Proyecto u oficinas analizadas

Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.

Antecedentes

Mediante oficio 37-CSP-18 del 9 de abril, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, sesión extraordinaria 25-18 del 4 de abril, donde se aprobó el informe 20-PLA-OI-2018, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, entre las que se destaca asignar siete plazas extraordinarias de Defensor Público para la atención de materia Agraria, por todo el período 2018 en apoyo del plan de descongestionamiento del Tribunal Agrario, y se estima la continuidad de las plazas de defensores para el período 2019.

Por otra parte, en relación con el Proyecto de Ley denominado*: “Carta de derechos sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas”*, expediente 17805; mediante oficio 10880-18 del 22 de agosto de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 86-18, del 2 de octubre, artículo LXVI donde se acoge la solicitud presentada por la Jefatura de la Defensa Pública mediante oficio JEFDP-1123-2018 del 17 de setiembre de 2018 y se hace de conocimiento del acuerdo a la Dirección de Planificación con la finalidad que realice el análisis de todos los aspectos que implique el cambio por la entrada en vigencia de lo que ese entonces era el proyecto de Ley. En este particular, se resalta que la Ley 9593 de Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, entró en vigencia a partir de su publicación, la cual fue realizada en la Gaceta 179 (Alcance 174) del 28 de setiembre de 2018.

Además, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, de la Dirección de la Defensa Pública señala que:

*“Dentro del estudio que realiza la Dirección de Planificación sobre las cargas de trabajo de plazas asignadas a la jurisdicción de Flagrancia, se valore la posibilidad de que algunas de estas plazas sean reasignadas a la atención de la población indígena para garantizar su acceso a la justicia (…)”*

En razón de lo anterior, mediante oficio 10473-18, del 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 87-18 del 4 de octubre de 2018, artículo LXXXIV, donde se considera trasladar la gestión presentada por la máster Diana Montero Montero, Jefa a.i. de la Defensa Pública, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, a estudio de la Dirección de Planificación, e informe a este Consejo lo que corresponde.

Por otro lado, en lo referente al patrocinio letrado de los servidores judiciales legalmente encomendado a la Jefatura de la Defensa Pública (artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en la sesión 43-2019 del Consejo Superior artículo XL del 14 de mayo 2019, se acordó trasladar una plaza de persona defensora de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia *“para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial, ya que se detectó la necesidad de reforzar estas funciones, pero no ha sido posible su asignación por la escases de recursos institucionales”.*

Por otro lado, mediante oficio 2339-19 del 6 de marzo de 2019, de la Secretaría de la Corte, se transcribe el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 13-19 del 15 de febrero de 2019, que literalmente dice:

*“Acoger la gestión anterior, en consecuencia: Autorizar al doctor Roberto Montero García, Defensor Público Supervisor, para que como recargo asuma en codefensa con las y los defensores públicos agrarios la representación de las personas usuarias que requieran de servicios contenciosos administrativos; además, la defensa de los dos funcionarios de Gestión Humana que deben ser representados y que a su vez funja como capacitador de la Defensa Pública en litigio Contencioso Administrativo en aras de poder  asumir con responsabilidad  la competencia creada en la  Ley N°9530.”*

En otro orden de ideas, es relevante hacer mención que mediante el informe 34-PLA-EV-2017 de la Dirección de Planificación, sobre el Impacto organizacional y presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley denominado “Código Procesal de Familia”; se analizó lo referente a la Defensa Pública en la atención de asuntos en materia de Familia, Violencia Doméstica y Pensión Alimentaria; donde, se consideró entre otros asuntos crear un total de 33 plazas de Defensor Público para la defensa de la parte actora en asuntos de Pensión Alimentaria. El citado informe fue conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, durante las sesiones de trabajo para analizar el proyecto del Presupuesto de Poder Judicial para el 2018, y se acordó lo siguiente:

*“Sometido el asunto a votación, por unanimidad, se dispuso: Acoger la propuesta planteada por la magistrada Arias y el magistrado Salazar Alvarado, en consecuencia, los presupuestos actualizados de impacto de Justicia Restaurativa y de las Reformas Procesal de Familia y Agrario se conocerán en el momento en que sean Leyes de la República.”*

Seguido, la Dirección de Planificación da a conocer, por medio del oficio 1285-PLA-2019 del 16 de agosto de 2019 que, mediante correo electrónico del 13 de agosto del 2019, la Magistrada de la Sala Segunda Sra. Julia Varela Araya solicitó a la Dirección de Planificación modificar las estimaciones del impacto presupuestario que tendría la implementación del proyecto de Lay del Código Procesal de Familia que se tramita en el expediente 19455 de la Asamblea Legislativa. Donde, textualmente se expone lo siguiente:

*“…con la finalidad de disminuir el impacto económico de la implementación del referido código, se eliminaron tres temas importantes que contenían el mayor peso desde el punto de vista económico, para esta importantísima y necesaria reforma. Lo eliminado se refiere a: Los equipos interdisciplinarios, para los despachos de Familia que lo requerían*

1. *Los juzgados sumarios que se creaban*
2. *La Defensa Pública para atender en todos los casos de familia, donde se dieran intereses contrapuestos*

*Como consecuencia de lo anterior, en el tema de la Defensa Pública, el contenido del artículo 56, del proyecto de Ley consultado a Corte, cuyo informe se rindió el pasado lunes 12 de agosto,* *solo refleja lo que actualmente está dentro la Ley de Pensiones Alimentarias vigente; por lo que no debe de interpretarse que se están creando obligaciones nuevas de plazas para Defensa Pública, para atender casos de pensiones alimentarias.*

*En consecuencia, dentro de los costos del proyecto del Código Procesal de Familia, no debe existir ninguna suma para la creación de plazas de asistencia letrada de la Defensa Pública, tal y como lo expliqué ayer en Corte Plena, en el informe rendido.” (…)*

Por lo mencionado anteriormente, es importante indicar que, este nuevo planteamiento solicitado por la Magistrada Varela Araya, difiere del presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos en el 2017, propiamente en cuanto a la exclusión de 33 plazas de Defensora o Defensor Público, que se requerirían para dar cobertura nacional a la atención en pensión alimentaria a la parte beneficiaria que no cuente recursos económicos para contratar patrocinio letrado conforme al artículo 56 del proyecto de este proyecto de Ley, donde no se debe interpretar que se están creando nuevas obligaciones de plazas para la Defensa Pública para atender casos de pensiones alimentarias.

El proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia” fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 6 de febrero 2018.

En sesión 34-18 del 25 de abril de 2018 del Consejo Superior, se dispuso:

*“1) Aprobar el informe 33-PLA-MI-2018 presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, de acuerdo al escenario planteado en la recomendación 5.1.2.*

*2)* ***Siguiendo los lineamientos de la Corte Plena no se deberán incluir los recursos en el anteproyecto 2019 hasta que se apruebe la Reforma Legal como Ley de la República****” (la negrita no es original del texto).*

El Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 acordó aprobar el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación, sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria); donde se mantiene una plaza de persona Defensora por Oficina que cubre el tema de interés contrapuestos en materia agraria; y además, deben asumir la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas.

Posterior, el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión extraordinaria 47-19 (Presupuesto 2020) artículo XV, del 23 de mayo de 2019, dispuso de manera textual lo siguiente:

*“Aprobar las recomendaciones de la Dirección de Planificación, por tanto, mantener lo dispuesto por el Consejo Superior, se aclara a la Defensa Pública que precisamente por las razones expuestas en esta reconsideración, en el informe inicial se asignó un recurso humano para la zona de Buenos Aires por el impacto que representa en la prestación del servicio público”*

Este informe fue conocido y aprobado en la Sesión 22-19 de Corte Plena (Presupuesto 2020) celebrada el 6 de junio de 2019, Artículo IV; en el cual, se dispuso de manera textual:

*“Aprobar por separado del Presupuesto Ordinario del Poder Judicial, los requerimientos correspondientes a la “Ley 9593. Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica” en la forma indicada. Así votaron las magistradas y los magistrados Cruz, Solís, Molinari, Aguirre, Sánchez, Olaso, Chacón, Ramírez, Solano, Hernández, Salazar Alvarado, Araya, las Suplentes y los Suplentes León Díaz, Aragón Cambronero, Blanco González, Zúñiga Morales, Segura Bonilla, Alfaro Vargas y Chacón Jiménez.”*

Adicionalmente, en el informe definitivo 490-PLA-EV-2019, fue conocido en sesión 43-19, artículo XL del Consejo Superior 43-19, del 14 de mayo de 2019. En este caso el Consejo Superior, dispuso tener por rendido el informe definitivo; además, recomendó de manera textual:

*“(...) se reasignará esta plaza para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial”.*

*“(…) Del análisis y seguimiento efectuado a las cargas de trabajo de los puestos de Defensora o Defensor Público, se recomienda mantener solo una de las dos plazas ordinarias, reconociendo la labor tan importante que desarrollan estas personas, sin embargo, se evidenció que estas labores pueden ser asumidas por uno de esos recursos.*

De esta forma y a partir de labores conexas que viene desarrollando la Dirección de Planificación en la Defensa Pública, se considera oportuno reasignar esta plaza de Defensora o Defensor Público para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, para tender personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a personas funcionarias judiciales que son denunciadas atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial (…)”

En oficio 101-P-2019, de fecha 17 de mayo de 2019 y dirigido a la Ministra de Hacienda, el Presidente de la Corte y en alusión al oficio DM-0466-2019, mediante el cual se informó de la aplicación de la Regla Fiscal en el presupuesto 2020, entre otras ideas al referirse al monto máximo autorizado al Poder Judicial, se indicó:

*“(…) Es importante señalar que estos datos no incorporan los requerimientos asociados a las nuevas obligaciones impuestas por la Asamblea Legislativa por aprobación de leyes, los cuales será necesario solicitar ante el Ministerio de Hacienda de forma complementaria al presupuesto ordinario.”*

Posteriormente mediante oficio DM-0945-2019, de fecha 11 de junio del 2019, la señora Ministra de Hacienda y en alusión a lo indicado en el oficio 101-P-2019, comunica al presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

*“(…) Finalmente, en relación con las solicitudes complementarias al Anteproyecto de presupuesto de la institución a que se hace alusión en su oficio, le informo que el cumplimiento de la regla fiscal no da espacio para el financiamiento de nuevos gastos”.*

En el oficio 118-P-2019 del 14 de junio de 2019, el presidente de la Corte solicitó a la Ministra de Hacienda se valorara la posibilidad de contar con financiamiento adicional al gasto ordinario para atender esta y cinco nuevas obligaciones más encomendadas por la Asamblea Legislativa.

Mediante oficio 1538-PLA-PP-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, la Dirección de Planificación al revisar el Proyecto de Presupuesto 2020 trasladado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa y en relación directa con los recursos adicionales solicitados por el Poder Judicial para la atención de nuevas obligaciones, en el apartado A.1. se indicó lo siguiente:

*“(…) No fueron incorporados por el Ministerio de Hacienda al presupuesto ordinario, ni tampoco se remitieron como requerimiento adicional a la Asamblea Legislativa”.*

Este oficio mencionado anteriormente fue conocido por Corte Plena en sesión 41-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, artículo XV.

Finalmente, de acuerdo con la Ley No. 9791 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020, aprobada por la Asamblea Legislativa, se comprobó que los recursos para la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas no fueron incorporados durante la etapa de análisis y discusión por parte de la Asamblea Legislativa, esto según informe 1932-PLA-PP-2019 relacionado con el seguimiento realizado al Expediente 21.568 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económica del 2020” en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

# Justificación

El siguiente informe responde a la actualización del análisis presentado para el presupuesto 2020 que contempla los cambios de entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, ya que en el presupuesto 2020 no se brindaron recursos para cubrir esta nueva legislación, por lo que nuevamente se revisa y actualiza el informe para conocimiento del Consejo Superior y Corte Plena.

# Metodología de trabajo

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:

De conformidad al informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas en todas las materias, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 y aprobado por Corte Plena mediante acuerdo del acta 022-2019 del 06 de junio de 2019; se da seguimiento a las recomendaciones expresas en dicho informe, con el propósito de determinar su cumplimiento.

Seguidamente, mediante correo electrónico, el 27 de enero de 2020, se le solicita a la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Personas Indígenas, la información estadística relacionada con asuntos atendidos por la Defensa Pública que contengan intervinientes de población indígena durante el año 2019, con la finalidad de analizar el comportamiento de la atención de los asuntos a nivel nacional.

Así mismo, mediante el correo electrónico enviado el 03 de febrero de 2020, se le solicita al Tribunal Contencioso Administrativo, los datos estadísticos referentes a asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo o como persona física. De ahí que, el día 04 de febrero de 2020, se recibe correo electrónico de respuesta con el listado de asuntos que lleva el Tribunal e indicando que, únicamente se pueden filtrar los asuntos activos, en los cuales se encuentran como parte una asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, no así, como persona física o persona servidora judicial.

Adicionalmente, el 03 de febrero de 2020 se coordina una sesión de trabajo con la Administración de la Defensa Pública, respaldada en la minuta 29-PLA-MI-MNTA-2020; con el propósito de identificar el impacto dado en la Defensa Pública a partir de la implementación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y, recibir retroalimentación de la manera de trabajo optada por la administración para solventar las necesidades de la población en mención.

Con base en la información recolectada en reunión mencionada en el párrafo anterior y, con la información estadística enviada por la Administración de la Defensa Pública; se procede a analizar las cargas de trabajo de las plazas de Defensora o Defensor Público responsables de la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena.

Seguido, se consultó a Unidad de Capacitación de la Defensa Pública sobre los lineamientos establecidos por parte de la Jefatura de la Defensa Pública para cubrir el tema de capacitación del personal de la Defensa Pública en la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena.

Finalmente, se realizan consultas al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para obtener estadísticas de la población indígena, a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) para segmentar la población por territorio según etnia y Defensas Públicas regionales de las zonas donde se concentra la mayor densidad de personas indígenas, para obtener particularidades de las poblaciones.

# Información relevante

## Aspectos demográficos a considerar

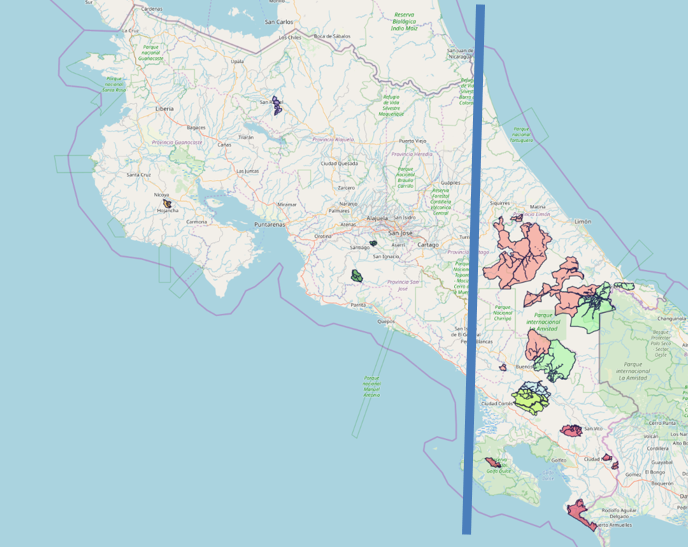
Con base en la consulta realizada al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la población indígena, según el censo 2011, es de 104 143 personas, las cuales están distribuidas a lo largo del territorio nacional, segmentada en ocho etnias:

* Bribrí
* Brunca
* Teribe
* Gnobe o Guaymí
* Huetar
* Maleku (Región Norte)
* Chorotega
* Cabécar

Las etnias que agrupan la mayor cantidad de población son los Bribris con un 35% y los Cabécar con 29%. Estas dos etnias representan un 64% sobre el total de la población indígena en Costa Rica.

En la siguiente figura se muestra la concentración de territorios indígenas de Costa Rica, según el Sistema Georeferencial del Poder Judicial.

Figura 1 Mapa de territorios indígenas de Costa Rica



**Fuente**: Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación, con datos tomados del Sistema Georeferencial del Poder Judicial.

Con datos estadísticos del INEC y según la distribución de territorios, se puede determinar que un 78% de los pueblos indígenas se encuentran en las zonas ubicadas al sur del país, viviendo en las provincias de Limón 26%, Puntarenas 24%, San José (zona sur) 19% y Cartago 8%. El restante 22% se encuentra distribuido en Guanacaste 10%, Alajuela 8% y Heredia 4%. Por tal motivo, se considera atender de forma prioritaria las zonas con mayor densidad de población indígena ubicadas en el sur.

En virtud de los datos anteriores y, con los obtenidos de la distribución de poblaciones indígenas del CONAI, se realiza una estimación de la posible afluencia de personas indígenas según las defensas públicas más cercanas.

Figura 2 Distribución porcentual de posible atención de persona indígena, según territorios y ubicaciones de la Defensas Públicas del país

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Como resultado se obtuvo que Bribri (29%), Buenos Aires (26%), Limón (12%) y Turrialba (8%), son las zonas que pueden tener mayor demanda en la atención de asuntos indígenas según su ubicación geográfica, densidad de población indígena y la presunta movilización de personas; pues, en conjunto agrupan el 75% de la posible afluencia.

En síntesis, según los datos demográficos obtenidos del INEC y según la competencia de las defensas públicas del país ante la presunta movilización de personas indígenas, se puede ver que las zonas de Bribri y Buenos Aires en conjunto poseen el 55% de la posible demanda, ubicadas muy por encima de las otras defensas públicas del país.

Por otro lado, el 30 de abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la resolución 16/15 con la medida cautelar 321-12 donde solicita al Gobierno de Costa Rica, adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, quienes se encuentran en el sureste del Puntarenas; importante mencionar que esta zona es competencia de la Defensa Pública de Buenos Aires.

## Análisis de datos estadísticos de la Defensa Pública

### Representación de la Defensa Pública en asuntos con personas usuarias indígenas

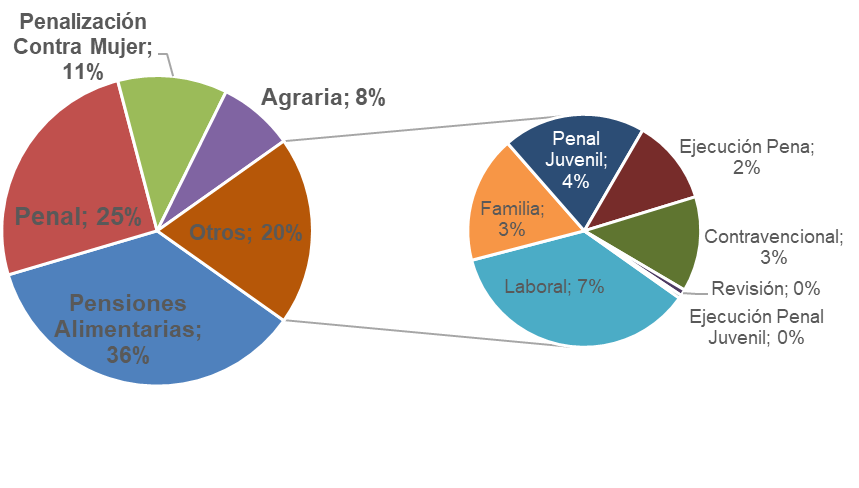
Como parte del proceso de recopilación de datos estadísticos, se solicita al Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública, y a la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Asuntos de Pueblos Indígenas; la información estadística de la cantidad de personas usuarias indígenas representadas por la Defensa Pública en asuntos nuevos, de octubre de 2018 a setiembre de 2019; así como también, la cantidad de procesos activos (circulante) y asuntos terminados al cierre de setiembre de 2019 por cada una de las oficinas a nivel nacional.

En cuanto a los datos suministrados por la Defensa Pública, se encuentra la cantidad de procesos (expedientes) activos al cierre de setiembre de 2019, así como la cantidad de expedientes que ingresaron de octubre 2018 a setiembre 2019 y la cantidad de personas usuarias indígenas representadas en dichos asuntos.

Es importante aclarar que, según indica el Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; por orden se contabilizan por separado las representaciones y expedientes con interviniente persona usuaria indígena de la competencia antigua y la actual, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas, donde se le amplía la competencia a la Defensa Pública.

En la siguiente figura se muestra la representación por materia de los expedientes, donde se cuenta como interviniente una persona usuaria indígena y, que ingresaron de octubre 2018 a setiembre 2019:

Figura 3 Representación por materia de los asuntos ingresados, donde intervienen personas usuarias indígenas, de octubre 2018 a setiembre 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Con base en la información mostrada en la figura anterior, se puede inferir que, el 80% de la cantidad de expedientes, de octubre 2018 a setiembre 2019, responden a personas indígenas en calidad de intervinientes en asuntos de Pensiones Alimentarias (36%), Penal ordinario (25%), Penalización de violencia contra mujer (11%) y Agrario (8%). El restante 20% de los asuntos entrados es en Laboral, Penal Juvenil, Familia, Ejecución de la Pena, Contravencional, Revisión y Ejecución Penal Juvenil.

Dicho lo anterior, en la siguiente tabla se evidencia la proporción de procesos entrados (expedientes), respecto a la cantidad de personas usuarias indígenas representadas en dichos procesos.

Tabla 1 Cantidad de asuntos entrados, de octubre 2018 a setiembre 2019, y la cantidad de personas usuarias indígenas intervinientes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materia** | **Cantidad de expedientes** | **Personas indígenas** | **Promedio de personas indígenas por expediente** | **Diferencia** |
| Pensiones Alimentarias | 412 | 438 | 1,06 | 26 |
| Penal | 295 | 369 | 1,25 | 74 |
| Penalización Contra Mujer | 132 | 150 | 1,14 | 18 |
| Agraria | 91 | 102 | 1,12 | 11 |
| Demás materias | 227 | 241 | 1,06 | 14 |
| **Total** | **1157** | **1300** | **1,12** | **143** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Con base en la tabla anterior, se puede observar que, un proceso (expediente) mantiene en promedio 1,12 personas usuarias indígenas como intervinientes, en los cuales hay 143 personas usuarias indígenas en calidad de interviniente en asuntos donde hay dos o más personas indígenas intervinientes.

Haciendo la segregación por materia, se evidencia que, de los asuntos que ingresaron de octubre de 2018 a setiembre 2019, la materia penal mantiene la mayor proporción de cantidad de personas usuarias indígenas por expediente (1,25); es decir, hay 74 personas usuarias indígenas que se mantienen en procesos con dos o más intervinientes. Aunado a lo anterior, materia agraria mantiene un promedio de 1,12 personas usuarias indígenas por proceso, pero 11 personas se mantienen en asuntos con dos o más intervinientes. Las demás materias mantienen en promedio 1,06 personas indígenas intervinientes por cada expediente, lo anterior equivale a que solo 6 de cada 100 personas indígenas, en los asuntos ingresados, sean partícipes en asuntos con dos o más intervinientes.

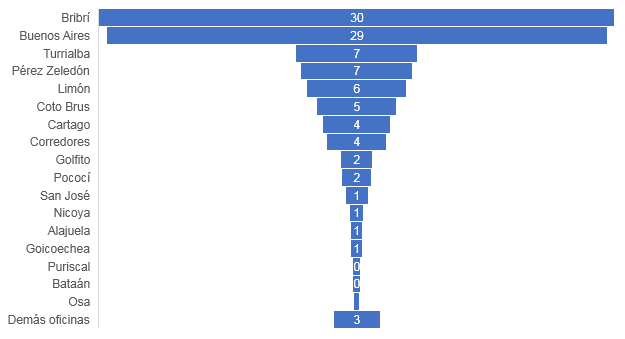
Ahora bien, se tiene como excepción algunos asuntos conocidos dentro de la Defensa Pública, donde la Supervisora de Asuntos Indígenas indica que intervienen gran cantidad de personas usuarias indígenas y por ello, se toma en consideración dentro del análisis actual.

Sin embargo, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”* y el presente análisis estadístico, se infiere técnicamente que dichos expedientes responden a casos aislados y se encuentran fuera de los límites de control, debido a que en el amplio periodo de tiempo de estudio no se refleja el comportamiento descrito.

Además, de la **Tabla 1 Cantidad de asuntos entrados, de octubre 2018 a setiembre 2019, y la cantidad de personas usuarias indígenas intervinientes**; se puede inferir que la entrada promedio mensual de asuntos, a nivel nacional, es de 103, con 116 personas usuarias indígenas intervinientes. De esos 103 asuntos nuevos a nivel nacional, en promedio 37 son de Pensiones Alimentarias, 26 de Penal Ordinario, 12 de Penalización de Violencia contra Mujer, 8 de materia agraria y, las restantes 20 causas son Laboral, Familia, Penal Juvenil, Ejecución de la Pena, Contravencional, Revisiones y Ejecución de la Pena en Penal Juvenil.

Ahora, en la siguiente figura se evidencia la concentración mensual por oficina de la Defensa Pública, de la cantidad de asuntos entrados con personas usuarias indígenas durante octubre 2018 hasta setiembre 2019.

Figura 4 Cantidad de asuntos entrados de octubre 2018 a setiembre 2019, con personas indígenas representadas por la Defensa Pública



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Con base en la información mostrada en la figura anterior, en un primer bloque se puede inferir que la mayor concentración de asuntos con personas usuarias indígenas se encuentra en la Defensa Pública de Buenos Aires, con un promedio de ingreso mensual de 30 expedientes; seguido de la Defensa Pública de Bribri, con un promedio de ingreso mensual de 29 asuntos. Las dos oficinas de la Defensa Pública mencionadas anteriormente responden al 58% del total de asuntos entrados a nivel nacional.

Lo anterior, es congruente con la cantidad de población indígena en las zonas, según los datos demográficos detallados en el apartado anterior.

Ahora bien, en la figura anterior, como un segundo bloque, podemos observar que las oficinas de la Defensa Pública de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón, Coto Brus, Cartago y Corredores mantienen un promedio de ingreso mensual entre cuatro y siete representaciones.

Estas oficinas representan un 31% del total de representaciones mensuales, el equivalente a 32 personas usuarias indígenas. Haciendo la aclaración que, según explica la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Pueblos Indígenas, debido a la necesidad particular de cada oficina, se ha optado por que personas defensoras se trasladen una o dos veces por semana a brindar soporte a otras oficinas; tal es el caso de Pérez Zeledón que brinda soporte a Buenos Aires, Cartago a Turrialba, Limón a Bribri y Corredores a Coto Brus.

De lo anterior y, considerando que el control de asuntos se realiza por el Libro de Registro de la Defensa Pública por persona defensora, se podría reportar expedientes de personas usuarias indígenas en las oficinas que brindan el soporte, cuando la persona indígena es atendida en la oficina a la que se le brinda dicha colaboración.

Finalmente, en un tercer bloque, el restante 11% del ingreso mensual de representaciones a personas indígenas, equivale a un promedio de 11 personas y, estas se distribuyen en el resto del país en las diferentes materias.

Dicho lo anterior, la siguiente tabla muestra la cantidad de personas representadas en asuntos nuevos en promedio por mes, en las oficinas que representan el 89% de las representaciones de la Defensa Pública a nivel nacional.

Tabla 2 Promedio de asuntos mensuales entrados en las oficinas que representan el 89% del ingreso mensual a nivel nacional

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Pensiones Alimentarias** | **Penal** | **Penalización Contra Mujer** | **Agraria** | **Demás materias** | **Total** |
| Bribrí | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | 30 |
| Buenos Aires | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 29 |
| Turrialba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Pérez Zeledón | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Limón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Coto Brus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Cartago | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Corredores | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Demás oficinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| **Total** | **37** | **26** | **12** | **8** | **20** | **103** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

*Nota: La Defensa Pública reporta, de octubre 2018 a setiembre 2019, asuntos entrados con persona usuaria indígena en 34 oficinas; por lo que la fila “Demás oficinas” contempla un total de 26 oficinas.*

De la tabla anterior se puede extraer que, el promedio de ingreso mensual de asuntos mensuales es similar para la Defensa Pública de Bribri (30) y Buenos Aires (29). No obstante, la segmentación de asuntos entrados por materia varía en su comportamiento, debido a que en Bribri el 46% de los asuntos entrados son de Pensiones Alimentarias (14), mientras que, en Buenos Aires el 34% de los asuntos entrados son Penales Ordinarios (10).

Las oficinas de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón, Coto Brus, Cartago y Corredores mantienen una representación mensual entre uno y tres asuntos en Pensiones Alimentarias y, entre uno y dos asuntos en Penal Ordinario.

Respecto a Penalización de Violencia contra la Mujer, se observa que las oficinas de Bribri y Buenos Aires presentan una entrada mensual promedio de seis y cuatro, respectivamente. Las demás oficinas de la Defensa Pública a nivel nacional mantienen un ingreso promedio mensual igual o inferior a uno, por lo que se puede decir que hay meses que ingresa un asunto nuevo y meses donde no hay un ingreso.

Respecto a las causas entradas en materia agraria, en la tabla anterior se evidencia que, la Defensa Pública de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Cartago mantienen un promedio mensual de dos asuntos; en las demás oficinas hay meses que ingresa un asunto y meses en los que la entrada es nula.

Es importante recordar que la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda soporte a la Defensa Pública de Buenos Aires y, en ese sentido, se puede inferir que la mayor cantidad de asuntos agrarios entrados se encuentran en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

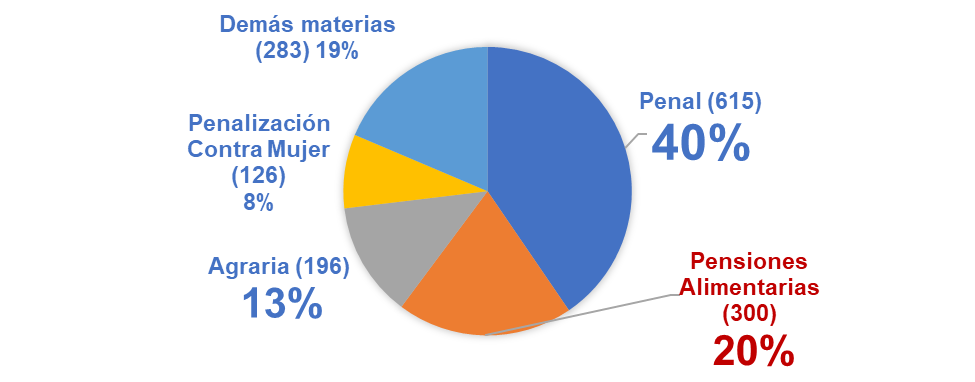
En los expedientes contabilizadas en “Otras materias”, la Defensa Pública de Buenos Aires presenta el ingreso del 37% de las representaciones nuevas por mes; por lo que es importante mencionar que dichos asuntos se concentran en Laboral (un asunto mensual), Penal Juvenil (3 asuntos mensuales), Familia (2 asuntos mensuales) y Contravencional (2 asuntos mensuales). Además, la Defensa Pública de Bribri el promedio de “Otras materias” se mantiene en tres causas nuevas por mes, concentradas principalmente en materia Laboral.

Finalmente, cabe manifestar que la representación en materias como Penal, Laboral, Agrario, Pensiones, Penalización contra la mujer y Penal juvenil, se atiende por la Defensa Pública, desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.

### Circulante de asuntos con interviniente persona usuaria indígena, antes y después de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas

Con base en los datos estadísticos facilitados por el Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; se tiene que, con base en la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, al cierre del mes de setiembre de 2019, el circulante a nivel nacional de asuntos con persona usuaria indígena en calidad de interviniente es el siguiente:

Figura 5 Circulante activo con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, con interviniente persona indígena, al cierre de setiembre de 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

El gráfico anterior segmenta las materias que representan el 80% del circulante, con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, de la población indígena a nivel nacional, donde se puede observar que el 40% de los asuntos activos se concentran en materia penal (615 expedientes), el 20% en Pensiones Alimentarias (300 expedientes), el 13% en materia agraria (196 expedientes), el 8% en Penalización de Violencia contra Mujer (126 expedientes) y, el restante 20% se concentra en las demás materias (283 expedientes).

Haciendo la comparación entre la **Figura 3 Representación por materia de los asuntos ingresados, donde intervienen personas usuarias indígenas, de octubre 2018 a setiembre 2019** y la **Figura 5 Circulante activo con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, con interviniente persona indígena, al cierre de setiembre de 2019**, se tiene que, a pesar que el mayor ingreso mensual se encuentra en Pensiones Alimentarias, el circulante demuestra se concentra principalmente en materia penal. De conformidad con lo anterior, se puede concluir el tiempo de tramitación de asuntos de Pensiones Alimentarias es menor al tiempo de tramitación de asuntos Penales.

Ahora, en la siguiente tabla se muestra la concentración de asuntos activos, con persona usuaria indígena en calidad de interviniente y, con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, por oficina de la Defensa Pública y materia, al cierre de setiembre de 2019.

Tabla 3 Asuntos activos con persona indígena conforme a la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593, al cierre de setiembre de 2019, segregado por materia y oficina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Penal** | **Pensiones Alimentarias** | **Agraria** | **Penalización Contra Mujer** | **Demás materias** | **Total** |
| Bribrí | 302 | 102 | 0 | 57 | 32 | **493** |
| Buenos Aires | 163 | 102 | 44 | 30 | 111 | **450** |
| Limón | 23 | 18 | 25 | 8 | 32 | **106** |
| Coto Brus | 54 | 9 | 0 | 22 | 5 | **90** |
| Pérez Zeledón | 3 | 21 | 32 | 0 | 19 | **75** |
| San José | 10 | 2 | 22 | 1 | 31 | **66** |
| Corredores | 20 | 12 | 12 | 3 | 14 | **61** |
| Demás oficinas | 40 | 34 | 61 | 5 | 39 | **179** |
| **Total** | 615 | 300 | 196 | 126 | 283 | **1520** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Considerando la información mostrada en la tabla anterior, con la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas; la Defensa Pública de Bribri es la que mantiene, al cierre de setiembre de 2019, la mayor cantidad de procesos activos (493 expedientes), seguido de la Defensa Pública de Buenos Aires (450 expedientes). Estas dos oficinas mantienen el 62% del total de causas activas a nivel nacional.

Es importante resaltar que, la Defensa Pública de San José mantiene, al cierre de setiembre de 2019, un total de 66 asuntos activos, donde 22 son de materia agraria, 10 de materia penal, 2 de Pensiones Alimentarias, 1 de Penalización de Violencia contra Mujer y hay 31 expedientes que se encuentran contabilizados en “Demás materias”. Importante mencionar que esas 31 causas son de Ejecución de la Pena (13), Laboral (9), Ejecución de la Pena en Penal Juvenil (7) y Revisión (2).

Finalmente, es importante hacer mención que, como se explicó anteriormente, la Administración de la Defensa Pública contabiliza dentro de sus datos estadísticos los asuntos en los que se representan personas usuarias indígenas producto de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas y por tal, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas indígenas representadas en razón de la ampliación de la competencia de la Defensa Pública, al cierre del mes de diciembre de 2019.

Tabla 4 Personas Indígenas que mantienen procesos en trámite en la Defensa Pública en razón del cumplimiento de la Ley 9593, al 31 de diciembre 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Pensiones Alimen-tarias** | **Familia** | **Contencioso Administrativo** | **Violencia Doméstica** | **Contravencional** | **Civil** | **Otro** | **Total** |
| Buenos Aires (2) | 23 | 32 | 1 | 5 | 2 |  | 3 | **66** |
| Bribrí (3) | 29 | 11 |  | 6 | 3 | 1 |  | **50** |
| San José |  |  | 38(1) |  |  | 1 |  | **39** |
| Turrialba | 1 | 3 |  | 7 |  |  |  | **11** |
| Corre-dores | 2 | 9 |  |  |  |  |  | **11** |
| Golfito | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  | **10** |
| Alajuela |  |  |  |  |  | 2 |  | **2** |
| Brus | 2 |  |  |  |  |  |  | **2** |
| Puriscal |  | 1 |  |  |  |  |  | **1** |
| **Total** | **65** | **57** | **39** | **19** | **5** | **4** | **3** | **192** |

\*1 Estos procesos llevan codefensa, por lo que es requerida la asignación de dos profesionales

\*2 Estos procesos son atendidos por profesionales de la oficina de Pérez Zeledón

\*3 Estos procesos son atendidos por profesionales de la oficina de Limón

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Las representaciones mostradas en la tabla anterior responden a asuntos que iniciaron en razón del cumplimiento de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a las personas indígenas, esto debido a que, por ejemplo, en Pensiones Alimentarias, esas 65 personas representadas están en calidad de demandadas. Y, es importante aclarar que los asuntos presentados en la tabla anterior no se encuentran contabilizados dentro del análisis expuesto anteriormente, debido al orden de tabulación de la información por parte de la Administración de la Defensa Pública. Por lo que, lo que se encuentra establecido en la tabla anterior es lo que realmente corresponde al incremento en las cargas de trabajo a partir de la promulgación de la Ley 9593.

Respecto a los asuntos Contenciosos Administrativos, es importante hace énfasis de que se reportan 39 representaciones al cierre de diciembre de 2019.Estos asuntos mantienen la particularidad de que requieren codefensa, por lo que al menos deben participar dos Defensoras o Defensores en su tramitación.

En consulta con la Coordinación de la Defensa Pública de Buenos Aires, el Licenciado Andrey Fuentes Gamboa, se expone que, por indicación de la Jefatura de la Defensa Pública, los asuntos contenciosos administrativos con interviniente persona indígena se asignan como recargo a las personas defensoras agrarias y por tal, desde que recibió la indicación, el único asunto que ha ingresado a la oficina es el que tiene asignado dentro de su circulante la persona defensora de materia agraria.

Adicionalmente, como se ha hecho mención, la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda soporte a la oficina de Buenos Aires y la Defensa Pública de Limón le brinda soporte a la oficina de Bribri, tanto para la tramitación de asuntos ordinarios, como para la tramitación de asuntos donde se requiera representar a ambas partes del proceso.

Por último, en consulta al Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; las tres representaciones contabilizadas en otras materias responden a una Querella y representaciones en materia de Tránsito.

Por otra parte, según lo expuesto por la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Personas Indígenas de la Dirección de la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas; y de una manera muy proactiva por parte de la Defensa Pública, los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de las personas defensoras que atienden Pensiones Alimentarias, los asuntos de Contencioso Administrativo en el circulante de las personas defensoras de Agrario, y los asuntos en materia de Violencia Doméstica pasan a formar parte del circulante de las Defensoras y Defensores que atienden materia penal.

Además, señala que dentro del análisis de los procesos que consideren población indígena, a parte de la cantidad de personas usuarias y cantidad de causas, debe contemplarse factores cualitativos tales como, la calidad de atención a partir de un acceso de justicia efectivo, y reconocer las necesidades de atención diferenciada; respetando las distancias, las condiciones de pobreza, medios de transporte, los horarios de visitas en situ, idiomas; así como, las pericias culturales.

Relevante resaltar que, para la atención de aquellos asuntos ordinarios de la materia de Penal y Pensión Alimentaria, en los cuales; además, forma parte del circulante activo asuntos con intervinientes de asuntos indígenas, las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí, Buenos Aires, Turrialba, Limón y Coto Brus mantiene la siguiente estructura:

Tabla 5 Estructura para la atención de asuntos en materia Penal y Pensión Alimentaria, de las Oficinas que atienden asuntos indígenas, a marzo de 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad de recurso Defensor por materia** | **Penal** | **Pensiones alimentarias** |
| Bribri | 4 | 1 |
| Buenos Aires | 3 | - |
| Turrialba | 5 | 1 |
| Limón | 12 | 3 |
| Coto Brus | 2 | - |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por las oficinas de la Defensa Pública.

Haciendo la comparación de la estructura organizacional con la que contaba cada una de las oficinas mencionadas en la tabla anterior, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 y la minuta 48-PLA-MI-MNTA-2019, se infiere que la Jefatura de la Defensa Pública reforzó el personal defensor para la tramitación de asuntos penales, haciendo traslado de recursos de Defensora o Defensor Público, como fue el caso de la Defensa Pública de Bribri y Buenos Aires.

Por último, es importante aclarar que, a pesar de que en la tabla anterior se evidencie que algunas oficinas no cuentan con recursos de Defensora o Defensor Público en materia de Pensiones Alimentarias, para poder tramitar adecuadamente estos asuntos, reciben colaboración de oficinas cercanas. Tal es el caso de la Defensa Pública de Bribri, que recibe colaboración de la oficina de Limón; así como, la Defensa Pública de Buenos Aires mantiene colaboración de Pérez Zeledón

Para la tramitación de asuntos de Pensiones Alimentarias, la Defensa Pública de Limón le brinda colaboración a la oficina de Bribri para la representación de las personas usuarias indígenas demandadas. Así como, la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda colaboración a Buenos Aires, siendo dos profesionales los que se trasladan a la oficina para poder representar a las personas usuarias indígenas ofendidas y demandas.

Además, la Defensa Pública de Turrialba recibe colaboración de Cartago (un día por semana) y, la Defensa Pública de Coto Brus mantiene colaboración de Corredores (un día por semana). En este último despacho, aunque no se cuente en la estructura organizacional ordinaria con una persona defensora especializada en Pensiones Alimentarias, una Defensora o Defensor Público de materia penal mantiene un recargo de Pensiones Alimentarias.

### Atención de asuntos con persona usuaria indígena en el Tribunal Contenciosos Administrativo

En consulta a los servidores judiciales del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante el correo enviado a la cuenta oficial del despacho el 03 de febrero de 2020, se indica literalmente que:

*“(...) En este despacho se continúa trabajando con los filtros que se indican en el Sistema de Gestión, aún no contamos con mejoras para determinar la cantidad de procesos de personas servidoras judiciales y en el caso de las personas indígenas, al igual que hace un año se pueden filtrar únicamente los procesos en los cuales se encuentran como parte alguna asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, como se muestra en cuadro adjunto.”*

En razón de lo anterior, se puede decir que, al 03 de febrero de 2020, los filtros con los que cuentan los sistemas informáticos del Tribunal Contencioso Administrativo no permiten determinar la cantidad de procesos donde intervenga al menos una persona usuaria indígena o una persona servidora judicial, según las recomendaciones emitidas en el informe **634-PLA-RH-MI-2019 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”***.

Seguido, se procede al análisis del archivo suministrado, entendiendo las observaciones señaladas por el personal judicial del despacho, donde se registran 257 números de expedientes atendidos por el Tribunal Contencioso Administrativo. Mientras que, al cierre de enero 2019, en el informe **634-PLA-RH-MI-2019 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”***, se reportan 240 expedientes. Por lo que, se puede inferir que, en el año 2019 ingresaron 17 asuntos, el equivalente a 1,41 asuntos por mes.

Es importante aclarar que, los expedientes reportados por el Tribunal Contencioso en los cuales se incluye como parte una asociación de personas indígenas o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, contabiliza la totalidad de expedientes ingresados al Sistema de Gestión del despacho, inclusive los archivados, pasivos o los que se encuentran asignados a alguna persona servidora del despacho. Por lo anterior, para determinar el análisis de expedientes activos al 04 de febrero de 2020, se excluyen los asuntos en ubicación pasiva y, por ende, se tiene un total de 97 expedientes activos. En la siguiente tabla se muestra la segregación de expedientes activos, del Tribunal Contencioso Administrativo, figura como intervinientes una asociación de personas indígenas.

Tabla 6 Circulante del Tribunal Contencioso Administrativo como parte se encuentra una asociación de personas indígenas, al febrero de 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Parte (interviniente)** | **Cantidad** |
| Comisión Nacional de Asuntos Indígenas | 62 |
| Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi | 12 |
| Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Salitre | 9 |
| Asociación Indígena Huetar de Zapatón de Puriscal | 4 |
| Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bri-Bri De Talamanca | 3 |
| Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré Boruca | 2 |
| Asociación de Desarrollo Indígena Altos de San Antonio | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena San Rafael De Cabagra | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Quit | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral De La Reserva Indígena Chirripó | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba | 1 |
| **Total, de expedientes** | **97** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por el Tribunal Contencioso Administrativo.

En este partícular, tal como se hizo mención en líneas anteriores, únicamente se identifica la intervención de personas indígenas cuando participan en asociaciones u organizaciones; es decir, la cantidad de asuntos donde se participa como parte demandada o actora sin la representación de una asoción y/u organización presenta una limitante estadísitica en los sistemas actuales, para determinar la cantidad de asuntos Contenciosos Administrativos donde intervinen personas indígenas y así estimar la proyección de la demanda del proceso.

De igual manera, se puede observar en la tabla anterior que, de los 97 expedientes activos, 62 mantienen como intervinientes a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, mientras que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kelkoldi mantiene 12 expedientes activos. Las dos asociaciones mencionadas anteriormente representan el 76% de la totalidad de causas activas. Es importante mencionar que el terrorio Kelkoldi pertenece a la Cordillera de Talamanca, donde prevalece la etnia Bribri.

Por lo tanto, es importante destacar lo acordado sesión del Consejo Superior 43-19 del 14 de mayo del 2019, artículo XL, donde aprobó trasladar de la Secretería Técnica de Género la plaza de Defensor Público (369766) ocupada por el Lic. Jorge Sánchez Solano hacia la Defensa Pública de San José, para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial.

### Atención de asuntos agrarios

En sesión del Consejo Superior 44-19 artículo II, se aprobó el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación referente al impacto de la entrada en vigencia de la ley 9593 de acceso a la justicia a pueblos indígenas, posteriormente la Corte Plena en sesión 47-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 23 de mayo de 2019 aprueba la comunicación del informe 102-CSP-19, en el mismo se aprueba cambiar la condición de siete plazas de recurso defensor que se encontraban extraordinarias para la atención de materia agraria, a condición ordinarias; asumiendo además de materia agraria la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. En el caso de aquellas plazas, donde la carga de trabajo no alcance la cuota establecida, se le asignará asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.

De tal manera, se considera que con la aprobación e implementación de la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, fue solventada la necesidad en materia agraria y la defensa técnica en materia contenciosa administrativa.

Seguidamente, se realizó un balance general de la materia agrario de los primeros tres trimestres del 2019:

Figura 6 Balance general de los procesos de materia agraria a nivel nacional en la Defensa Pública del primer semestre de 2019

Durante los primeros tres trimestres de 2019 se finalizaron 975 asuntos, de 1317 que ingresaron, logrando una efectividad de 74%, acumulando un 26% (342) en el circulante, lo que muestra un incremento en el circulante al finalizar de un 25%.

Seguidamente se realizó una comparación de los asuntos terminados en los Juzgados Agrarios y los asuntos terminados por las Defensas Públicas en Materia Agraria a nivel nacional al tercer trimestre del 2019.

Figura 7 Comparativa entre asuntos terminados en los Juzgados Agrarios y las Defensas Públicas en materia Agraria, al tercer trimestre de 2019

Nota: En lo referente a la información de la Defensa Pública los datos del primer y segundo trimestre fueron facilitados por el Subproceso de Estadística, en lo que respecta al tercer trimestre son datos preliminares facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por el Subproceso de Estadística y la Administración de la Defensa Pública.

El total de 975 asuntos terminados por la Unidad Agraria de la Defensa Pública representa un 35% del total de 2 822 asuntos terminados en los Juzgados Agrarios a nivel nacional. El restante de 1847 (65%) asuntos terminados pueden estar asociados a la representación de abogado particular; así como, causas que se presentaron ante los Juzgados Agrarios sin patrocinio letrado.

Por otra parte, en consulta realizada el 5 de marzo de 2019 al Lic. Mario Alberto Rosales Vargas, Coordinador a.i de la Unidad de Agrario sobre la cuota de circulante por plaza de Defensor Público Agrario a nivel nacional, señala que una cuota máxima que puede llevar un Defensor es de 150 a 180 procesos o expedientes, dado a la complejidad de la materia, por factores cualitativos como el tiempo de traslado, visitas previas a campo, atención de poblaciones vulnerables y la atención de contrapartes.

El Consejo Superior del Poder Judicial, mediante el acta N° 023-2018 del 21 de marzo de 2018 en el artículo LVI, se acordó tener por rendido el informe presentado por la máster Damaris Vargas Vásquez, en calidad de Gestora del Proyecto de Implementación de la Reforma Procesal Agraria e Integrante de la Comisión de la Jurisdicción Agraria; el cual contiene el oficio N° 1284-213-AUO-2014 de Auditoría Judicial denominado *“Estudio Operativo del proceso Agrario (Primera Instancia)”*, donde se dispuso establecer como cuotas mínima de señalamientos a realizarse por semana, por cada persona juzgadora agraria, al menos tres audiencias en el despacho y dos fuera de la sede de éste. Esta cuota de trabajo por persona juzgadora se mantiene según el informe **630-PLA-RH-MI-2019** ***“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2020”***, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2019) el 16 de mayo de 2019 y, aprobado por Corte Plena el 06 de junio de 2019 en la sesión 47-19, artículo VI. Para el informe de informe de impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, la Dirección de Planificación mantiene la cuota de trabajo descrita anteriormente.

En este particular, con la finalidad de determinar la carga de trabajo por Oficina, en el siguiente cuadro se detalla el circulante y cantidad de asuntos entrados por recurso Defensor Público.

Tabla 7 Relación de asuntos entrados y circulante por recurso Defensor Público,

al tercer trimestre del 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficinas de la Defensa Pública** | **Cantidad de Recurso Defensor** | **Entrada al III Trimestre 2019** | **Entrada mensual, por Defensor** | **Circulante activo** | **Circulante** | **Promedio de entrada + Circulante** |
| **por Defensor** |
| Defensa Pública San José | 2 | 23 | 3 | 74 | 37 | 45 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Zona Sur | 1 | 45 | 5 | 121 | 121 | 129 |
| Defensa Pública II Circuito Judicial Zona Sur (Corredores) | 1 | 65 | 7 | 119 | 119 | 127 |
| Defensa Pública Buenos Aires | 1 | 45 | 5 | 98 | 98 | 106 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Alajuela | 1 | 77 | 9 | 114 | 114 | 122 |
| Defensa Pública III Circuito Judicial Alajuela (San Ramón) | 1 | 148 | 16 | 139 | 139 | 147 |
| Defensa Pública II Circuito Judicial Alajuela | 1 | 85 | 9 | 178 | 178 | 186 |
| Defensa Pública Upala | 1 | 123 | 14 | 185 | 185 | 193 |
| Defensa Pública Cartago | 1 | 77 | 9 | 152 | 152 | 160 |
| Defensa Pública Turrialba | 1 | 113 | 13 | 119 | 119 | 127 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Guanacaste (Liberia) | 1 | 62 | 7 | 125 | 125 | 133 |
| Defensa Pública Santa Cruz | 1 | 88 | 10 | 199 | 199 | 207 |
| Defensa Pública Puntarenas | 1 | 87 | 10 | 175 | 175 | 183 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Zona Atlántica (Limón) | 2 | 166 | 18 | 438 | 219 | 227 |
| Defensa Pública II Circuito Judicial Zona Atlántica (Pococí) | 1 | 113 | 13 | 218 | 218 | 226 |
| Total | 17 | 1317 |  | 2454 |  |  |
| **Promedio Nacional** | **-** | **-** | **8** | **-** | **129** | **-** |

Nota: Los datos del primer y segundo trimestre fueron facilitados por el Subproceso de Estadística, en lo que respecta al tercer trimestre son datos preliminares facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por el Subproceso de Estadística.

En análisis de los datos proyectados de la Defensa Pública en materia Agraria, se estima una entrada promedio de 8 asuntos por recurso Defensor Público a nivel nacional; así como, un circulante promedio de 129 asuntos por cada plaza de Defensor.

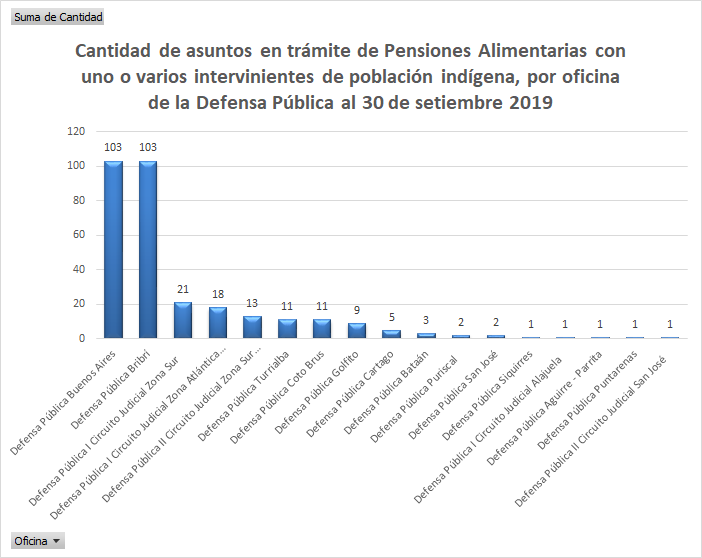
De considerar la entrada promedio de 8 asuntos a nivel nacional más el circulante por cada plaza a diciembre de 2018, se estima un circulante proyectado de aproximadamente 137 asuntos por cada recurso Defensor Público; estando por debajo en 43 procesos (24%) de la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por cada plaza de Defensora o Defensor Público.

**En consideración de la carga de trabajo de los recursos defensores a nivel nacional, se estima conveniente mantener la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 donde se establece que las plazas de Agrario asuman como carga ordinaria aquellos asuntos en materia Contenciosa Administrativa donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Tal y como lo recomendó la Dirección de la Defensa Pública.**

### Atención de asuntos de Pensión Alimentaria

Con el fin de establecer las Defensa Públicas del país con mayor afluencia de personas indígenas en materia de pensiones alimentarias, se adjunta el siguiente gráfico:

Figura 7 Cantidad de asuntos en trámite de Pensiones Alimentarias con uno o varios intervinientes de población indígena, por ofídica de la Defensa Pública al 30 de setiembre de 2019



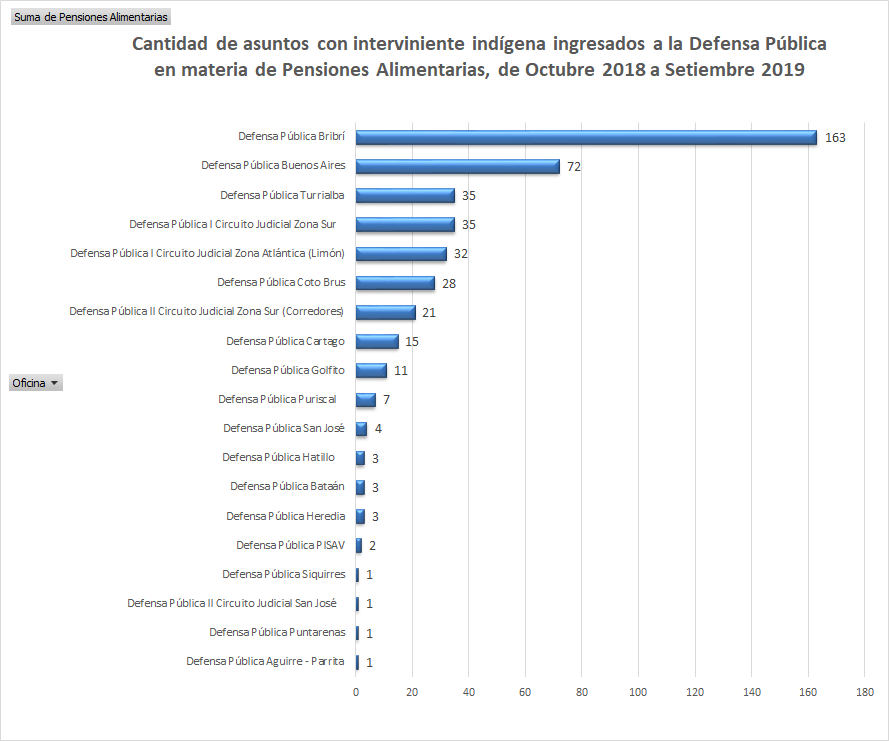
**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Al tercer trimestre del 2019 existían 306 asuntos en trámite en la Defensa Pública, en los que figuraba una o varias personas pertenecientes a poblaciones indígenas, del total de asuntos un 68% esta centralizado en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, con un 34% cada una; seguidos de Pérez Zeledón con un 7% y Limón con un 6%.

De tal modo, es posible determinar que los asuntos en trámite en Bribri y Buenos Aires de forma separada, superan en un 80% a los casos en trámite en la Defensa Pública con el tercer lugar, en materia de Pensiones Alimentarias.

Por otro lado, tomando como insumo lo establecido en la tabla 1 del presente informe, donde se determinó que la relación de asuntos entrados e intervinientes en Pensiones Alimentarias es de uno a uno; seguidamente, se procede a analizar los asuntos en trámite por cantidad de personas indígenas.

Figura 8 Cantidad de asuntos con interviniente persona usuaria indígena ingresados en materia de Pensiones Alimentarias, de octubre 2018 a setiembre 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Del gráfico anterior, se señalan las siguientes conclusiones como principales:

* De las 19 defensas públicas en las que ingresaron asuntos con intervinientes indígenas, se vislumbra que el 83% de los asuntos ingresan en 6 oficinas, encabezadas por Bribri con 163 (37%) asuntos y Buenos Aires con 72 (16%), luego Turrialba y Pérez Zeledón con 35 (8%) cada una; y finalmente, Limón con 32 (7%) y Coto Brus con 28 (6%) asuntos. El restante 17% de los asuntos ingresados está distribuido en las otras 13 oficinas.
* En Bribri ingresaron más del doble de asuntos que en Buenos Aires y más del cuádruple de asuntos que en Turrialba y Pérez Zeledón.
* En Buenos Aires se atendieron el doble de asuntos que en las oficinas de Turrialba y Pérez Zeledón.
* Los datos estadísticos de la Defensa Pública poseen una concordancia lógica con la información tomada del INEC, en relación a la densidad de población indígena según territorio.

Por otro lado, anteriormente se le consultó a la Licda. Sandra Mora Venegas, Supervisora en Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública, sobre la estructura funcional para la atención de pensiones alimentarias de las oficinas de Bribri y Buenos Aires, manifestando:

### Defensa Pública de Buenos Aires:

Una plaza de Defensor Público de la Oficina de Pérez Zeledón, se desplaza los martes y miércoles a la zona de Buenos Aires, para atender los asuntos en materia de Pensión Alimentaria. El tiempo de traslado de ida y regreso entre una Oficina a otra es de aproximadamente de dos horas.

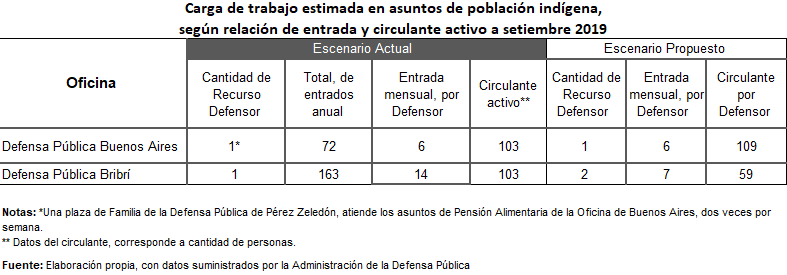
### Defensa Pública de Bribrí

Cuenta con una plaza de Defensor Público para la atención de Pensiones Alimentarias. En los casos donde figure una persona indígena como parte demandada, son atendidos por una plaza de Defensor Público de Limón los miércoles de cada semana.

Aunado a lo anterior, es relevante resaltar que la Defensa Pública de Limón, a parte de la colaboración facilitada a Bribrí; además, colabora con un recurso de Defensor Público cada 15 días para asistir el Valle de la Estrella, y con otro recurso se apoya en la toma de demanda de la Defensa Pública de Matina los lunes de cada semana.

Seguidamente se adjunta un cuadro donde se analiza la carga ordinaria de trabajo según los asuntos en trámite y entrados en relación con la cantidad de recurso defensor que hay actualmente en las oficinas de Buenos Aires y Bribri (ver apéndice 2), así como, el escenario aprobado por el Consejo Superior propuesto en el informe 634-PLA-RH-MI-2019.

Tabla 8 Carga de trabajo estimada en asuntos de población indígena, según relación de entrada de octubre 2018 a setiembre 2019 (12 meses) y el circulante activo al cierre de setiembre 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

En virtud del cuadro anterior, se proyecta que en el escenario propuesto el circulante mensual por persona defensora en Buenos Aires rondará los 109 asunto, donde 103 asuntos corresponderán el circulante y alrededor de 6 asuntos ingresarían mensualmente. En el caso de Bribri, se estima que el circulante mensual por persona defensora será de 59 asuntos, de los cuales 52 corresponderán a circulante y 7 a la entrada mensual.

Ahora bien, según los datos estadísticos del primer semestre del 2019, es importante destacar que la plaza de persona defensora en Bribri para atención de materia de Pensiones Alimentarias posee un promedio mensual de casos entrados totales de 30 asuntos y la plaza de que da apoyo en Buenos Aires tiene una entrada mensual promedio total de 19 asuntos.

En consecuencia, resulta importante resaltar y mantener los aspectos planteados en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en lo que respecta a la estructura funcional que deberán seguir para un máximo aprovechamiento del recurso:

* Que la Jefatura de la Defensa Pública mantenga la colaboración que presta actualmente por medio una plaza de Defensor Público proveniente de la Oficina de Pérez Zeledón para la atención de intereses contrapuestos en Buenos Aires. La Defensa Pública de Bribri, en caso de aprobarse el contenido presupuestario contará con dos plazas de Pensión Alimentaria, tendrá la capacidad de atender los asuntos de intereses contrapuestos; de manera que la plaza de la Defensa Pública de Limón, que brinda la colaboración los miércoles de cada semana, se podrá avocar a asuntos propios de la Oficina de Limón.

En razón a lo expuesto, y en consideración de factores cualitativos tales como, la calidad de atención a partir de un acceso de justicia efectivo, y reconocer las necesidades de atención diferenciada, se propone establecer una plaza de Defensor Público con la modalidad a tiempo completo, el cual se estima que tendrá una entrada mensual de 7 asuntos de Pensión Alimentaria; además, deberá asumir la competencia de asuntos en materia de Familia.

* En el caso de que la carga de trabajo este por debajo de su capacidad instalada , para las personas defensoras públicas asignadas a la atención de pensión Alimentaria de las Oficinas de Bribrí y Buenos Aires, se le asignen asuntos de materia Penal; siempre, en el entendido de que será predomina este la atención de asuntos de Pensión Alimentaria.
* Mantener la dinámica planteada por la Dirección de la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, donde los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Pensiones Alimentarias, y en materia de Violencia Doméstica pasan hacer parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Penal.
* Por otro lado, en lo referente a materia contravencional, según los datos estadísticos suministrados por la Defensa Pública, en la oficina de Bribri al 30 de setiembre de 2019 existían 3 asuntos que contaban con intervinientes indígenas, lo que representa un 1% del circulante (276) que poseía el Juzgado Contravencional de Bribri al finalizar el tercer trimestre de 2019. En lo referente a la oficina de la Defensa Pública de Buenos Aires el circulante correspondía a 43 asuntos, lo que representa un 7% en relación con el circulante (650) que posee el Juzgado Contravencional de Buenos Aires al 30 de setiembre de 2019.

Lo anterior sustentado en que para el 2018 el 85% del circulante activo en Pensiones Alimentarias con interviniente indígena se encontraba en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, y para el tercer trimestre del 2019 este dato corresponde a un 70% distribuido en 36% para Bribri y 34% para Buenos Aires, mostrando que si bien es cierto el porcentaje disminuyó contra el año anterior, la tendencia es la misma; ya que, el restante 30% del circulante se diluye entre 15 oficinas.

## Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación

En sesión del Consejo Superior 44-19 artículo II, se aprobó el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación referente al impacto de la entrada en vigencia de la ley 9593 de acceso a la justicia a pueblos indígenas, posteriormente la Corte Plena en sesión 47-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 23 de mayo de 2019 aprueba la comunicación del informe 102-CSP-19 y remite a la Dirección de Gestión Humana el acuerdo tomado donde se aprueba cambiar a condición ordinaria siete plazas extraordinarias de Defensora o Defensor Público que mantiene asignada la Unidad Agraria de la Defensa Pública.

Además, mediante la minuta 29-PLA-MNTA-2020 del 03 de febrero del 2020, la Sub Jefatura de la Defensa Pública expone dichas plazas de Defensora o Defensor Público se encuentran condición ordinaria a partir del presente año.

Por otro lado, de acuerdo con la consulta realizada al Tribunal Contencioso Administrativo, en el correo electrónico enviado el 03 de febrero de 2020; se menciona que el despacho continúa trabajando con los filtros que se indican en el Sistema de Gestión, por lo que se tiene la limitación para diferenciar los asuntos con interviniente persona usuaria indígena o persona servidora judicial. Los asuntos que se pueden diferenciar y, por ende, filtrar, son los que mantienen como interviniente una asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.

Aunado al párrafo anterior, se consulta al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, mediante el correo enviado el 03 de febrero de 2020, sí se ha incorporado una fórmula para contabilizar los procesos judiciales que mantengan como interviniente una persona usuaria indígena o persona servidora judicial. Es así que, el 04 de febrero de 2020, el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación indica que ha sido incorporado dentro de las bases de datos la variable “etnia” y que, para los Anuarios Judiciales del 2019, se visualizará dicha variable en los cuadros estadísticos. Adicionalmente, se consulta vía telefónica, y la identificación de los asuntos que donde una persona judicial esté en condición de interviniente, a la fecha no ha sido implementada.

Con respecto a la implementación del Sistema de Seguimiento de Casos (SSC) en materia agraria en la Defensa Pública, se consultó al Lic. Roberto Montero García, quién se encontraba al día 10 de febrero de 2020 como responsable de la implementación del SSC en la Defensa Pública, quien indica que la Dirección de Tecnología de la Información se encuentra realizando los ajustes indicados por el Lic. Mario Rosales Vargas, Coordinador de Agrario, de manera que el sistema se adecúe a la materia en gestión. Una vez que los ajustes se encuentren realizados y aprobados por el Lic. Rosales Vargas, se procederá con la implementación a nivel nacional.

* **Recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información**

En lo referente a las recomendaciones emitidas por en el informe 634-PLA-RH-MI-2020 hacia la Dirección de Tecnología de Información se plantearon las siguientes:

* Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.
* Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios.

En consecuencia, se efectuó una consulta el 3 de febrero de 2020 al Juzgado y al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con el fin de conocer si dicha recomendación había sido implementada en los sistemas, a lo que se recibió una respuesta negativa.

Posteriormente, el 27 de marzo de 2020, se consultó al Lic. Uriel García Regalado, Profesional Informático de la Dirección de Tecnología de Información sobre el estado de las dos recomendaciones, a lo que manifestó que el Consejo Superior en mediante oficio 13919-17 acordó lo siguiente:

“*(…) autorizar la suspensión del desarrollo de nuevas solicitudes de mejoras para los sistemas actuales utilizados para la gestión y tramitación de expedientes y oficinas judiciales.*”

Lo anterior debido a que todos los esfuerzos se están centrando en el desarrollo de la nueva plataforma informática que está desarrollando la Dirección de Tecnología de Información.

Por último, se remitió un correo electrónico a la Dirección de Tecnología de Información para conocer el estado actual de las mismas, sin embargo, no se recibió respuesta al momento de remitir el informe.

* **Recomendaciones a la Jefatura de la Defensa Pública:**

Mediante el oficio JEFDEP-90-2020 (ver anexo 6) del 13 de febrero de 2020 la Jefatura de la Defensa Pública remitió el seguimiento que ha realizado, en lo referente a las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:

*“(…)*

* 1. ***Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.***

*La ley 9609 “Código Procesal Agrario” no ha entrado en vigencia aún. Sin embargo, actualmente las 16 plazas de personas defensoras públicas agrarias tienen un promedio de 158 procesos, con una cantidad mayor de intervinientes.*

La Defensa Pública reporta aproximadamente 2528 expedientes, mientras que los Juzgados Agrarios reportan, al cierre de enero 2020, un total de 6987 expedientes, lo que da a entender que se mantiene un alto índice de defensa privada.

El promedio de 158 expedientes por Defensor(a) está por debajo de la cuota establecida por el coordinador de la DP, que es de 180.

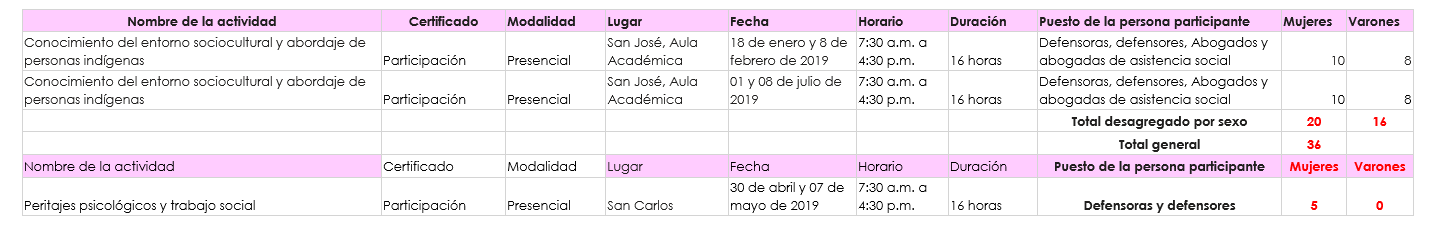
* 1. ***Asignar asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensiones Alimentarias que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos, esto en caso de que la carga de trabajo no alcance. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria.***

*No se ha asignado ninguna plaza de pensiones alimentarias en Buenos Aires y Bribri según los términos referidos en este informe.*

* 1. ***Comunicar bajo una circular interna de la Dirección de la Defensa Pública a las distintas Oficinas, la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población.***

*Desde agosto de 2019 se socializó con todas las Defensas Públicas a nivel nacional la “Fórmula Ley 9593 de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas”, a fin de visibilizar los procesos que ingresen con personas indígenas en materias no tradicionales. En el mes de febrero de 2020, se le realizó un adendum que incluye una plantilla para anotar datos como número de expediente, fecha de entrada, estado del proceso, etc. (Se adjunta la fórmula.)*

* 1. ***Coordinar la respectiva capacitación a las personas defensoras públicas de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo.***

*Según la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública en el año 2019 se impartieron las siguientes capacitaciones: “*

*Asimismo, se impartieron una* ***serie de videoconferencias****, como parte del ciclo 1 y se registró los siguientes datos:*

*Total de personas participantes: 28*

*Mujeres: 21*

*Hombres:7*

*Fecha: 27 de marzo*

*Además, en materia contenciosa tuvimos una capacitación el 21 de marzo de 2019 con don Roberto Montero.  Y una serie de charlas los días 15, 22 y 29 de noviembre por parte de los jueces contenciosos administrativos.*

*Actividad formativa: Contencioso administrativo*

*Fecha: 21 de marzo 2019*

*Total de personas participantes: 22*

*Mujeres: 10*

*Hombres: 12*

*Actividad formativa: Contencioso administrativo*

*Fecha: 15, 22 y 29 de noviembre de 2019*

*Total de personas participantes: 6*

*Mujeres: 1*

*Hombres: 5”*

* **Recomendaciones a la Dirección de Gestión Humana:**

Mediante correo electrónico del 3 de febrero de 2020, se le solicitó a la Dirección de Gestión Humana, información referente al que trabajo que se ha realizado para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Planificación; sin embargo, al 27 de marzo de 2020 no se recibió respuesta al respecto, por lo tanto, se considera necesario mantener las mismas recomendaciones del informe 634-PLA-RH-MI-2019:

*(…)*

* 1. *Realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública.*
  2. *Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita…., . Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas.*
  3. *Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como:*
* *Disposición para realizar las diligencias in situ*
* *Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.)*
* *Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género.*

*6.11 Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública.”*

## Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública

La Corte Plena en la sesión 37-12 del 29 de octubre de 2012, artículo VIII, solicitó definir el modelo de gestión de despachos, posteriormente, en la sesión 15-16 del 16 de mayo de 2016, artículo XVII, aprobó el informe 259-66-SAO-2016 de la Auditoría Judicial relacionada al “Estudio Operativo de los Tribunales Penales.”

En consecuencia, en sesión del Consejo Superior 5-2019, artículo XXII del 23 de enero de 2019, se tuvo por rendido el informe 1507-PLA-MI-2018, relacionado con el *“Modelo de Tramitación de la Defensa Pública”*.

Este modelo de tramitación establece una serie de parámetros generales de las características de las oficinas de la Defensa Pública, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta para brindar un servicio público de calidad e incrementar la cantidad de debates con la participación de los ámbitos auxiliares de justicia. La metodología aprobada establece dentro de la fase de diseño de propuestas de mejora, la posibilidad de elaborar rediseños de oficinas con el fin de maximizar la utilización de los recursos disponibles.

En consecuencia, se estima conveniente que dentro de los alcances del modelo y en los casos que técnicamente corresponda, se tome en consideración la posibilidad de movilizar plazas de personas defensoras, para solventar las necesidades institucionales de atención a personas indígenas, en virtud del impacto organizacional y presupuestario en la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en el entendido que una posible movilización de recursos dependerá meramente de los estudios técnicos realizados y de una priorización según las necesidades institucionales previamente detectadas.

### Oficinas de la Defensa Pública abordadas en el Proyecto Modelo Integral del Proceso Penal

Desde el año 2019, la Dirección de Planificación se ha mantenido haciendo abordajes en materia penal en las diferentes oficinas de la Defensa Pública y, según el apartado del presente informe denominado “Aspectos demográficos a considerar”, las oficinas abordadas en el proyecto que son cercanas a las zonas de mayor cantidad de personas usuarias indígenas son la Defensa Pública de Limón y Bribrí.

Producto del abordaje de la Defensa Pública se Bribri se infiere que, con base en el análisis estadístico, la demanda en la cantidad de asuntos nuevos o ingresados de la oficina tiende al crecimiento y, que la carga de trabajo reportada por persona defensora se encuentra por encima de la carga definida en el Modelo de Tramitación de la Defensa Pública; además, de que hay que considerar que el 24% de los asuntos activos en estado en trámite presentan al menos una persona usuaria indígena en calidad de interviniente y por tal, se deben considerar aspectos cualitativos en la atención de esta población para obtener un servicio público de calidad. En consecuencia, se estableció la necesidad de contar con un recurso adicional de Persona Defensora que colabore en materia penal, lo anterior supeditado a las limitaciones presupuestarias.

Aunado a lo anterior, también se realizó el abordaje en la Defensa Pública de Limón, donde se determina, por medio del análisis estadístico, que la demanda en la cantidad de asuntos nuevos en materia penal ordinaria se la mantenido aproximadamente constante en el tiempo y, que la carga de trabajo reportada por cada persona defensora en materia penal ordinario se encuentra dentro de los parámetros definidos en el Modelo de Tramitación de la Defensa Pública. Adicionalmente, por cargas de trabajo reportadas por las Técnicas o Técnicos Jurídicos se considera que, de encontrarse las condiciones idóneas, se podría recalificar una de esas plazas a Defensora o Defensor Público y así, atender las necesidades de la zona. No obstante, esta propuesta está sujeta a las aprobaciones correspondientes.

Además, es importante hacer recalcar que, la Dirección de Planificación durante el 2019 realizó el abordaje en las oficinas de la Defensa Pública de Flagrancia del Primer y Segundo circuito Judicial, donde, con base en el análisis de cargas de trabajo y la capacidad del proceso expedito de Flagrancia, se podría eventualmente trasladar recursos de Defensora o Defensor Pública donde se considere exista mayor necesidad del mismo. Sin embargo, esta recomendación se encuentra sujeta a la aprobación de los Modelos de Flagrancia, tanto en el Ambiento Auxiliar de Justicia, como en el Ámbito Jurisdiccional.

Por lo anterior, se evidencia que producto de los abordajes de la Dirección de Planificación se han brindado alternativas para solventar las necesidades instituciones, en las zonas del país que más lo requieren. Sin embargo, estas alternativas de solución se encuentran sujetas a la aprobación de los informes respectivos y actualmente son objeto de seguimiento.

# Contenido presupuestario

En el siguiente cuadro, se detalla el costo estimado de las dos plazas extraordinarias de Defensor Público, las cuales asumirán como parte de la carga de trabajo ordinaria la atención de los asuntos de Pensión Alimentaria donde figure como parte actora o demanda una o más personas indígenas. Además, se estima el costo estimado del mobiliario y equipo a asignar a las plazas en mención.

Tabla 9 Estimación del costo estimado para el 2021, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomen-dación** | **Período** | **Costo Estimado** |
| Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública | 2 | Defensor Público | - | Extraordinaria | 12 meses | ₡105.734.000 |
|  | | | | | | ₡3.356.545,00 |
|  | | | | | | **₡109.090.545,00** |

**Nota (1):** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000*

**Nota (2):** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273*

**Fuente:** Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación

En relación a los recursos que se requieren para completar la cobertura a nivel nacional de la materia de pensiones se ratifica la necesidad, sin embargo, esta deberá constar como parte de la extensión del servicio en pensiones y no en el impacto de este estudio que nos ocupa.

# Elementos resolutivos

* Según los datos demográficos, la competencia territorial, los asuntos en trámite y asuntos ingresados y terminados por materia, se determinó que, en razón del análisis de las cargas de trabajo de las diferentes oficinas de la Defensa Pública que tramitan asuntos con personas usuarias indígenas, se deben reforzar de manera prioritaria las oficinas de Bribri y Buenos Aires, específicamente en la materia pensión alimentaria. Es importante ratificar que, con base en el criterio de la Dirección de Planificación en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 del análisis presupuestario del 2020 a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, se identifica la necesidad de recurso defensor en estas dos oficinas y, continúa siendo la necesidad para el periodo presupuestario 2021.

Lo anterior sustentado en que para el 2018 el 85% del circulante activo en Pensiones Alimentarias con interviniente indígena se encontraba en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, y para el tercer trimestre del 2019 este dato corresponde a un 70% distribuido en 36% para Bribri y 34% para Buenos Aires, mostrando que si bien es cierto el porcentaje disminuyó contra el año anterior, la tendencia es la misma; ya que, el restante 30% del circulante se diluye entre 15 oficinas.

* En lo referente a la atención de materia Agraria y Contenciosa Administrativa, el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 acordó que a partir del año 2020 las siete plazas de recurso defensor que se encontraban extraordinarias para la atención de materia agraria, pasaron a condición ordinarias; asumiendo la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Aunado a lo anterior, en el análisis de cargas de trabajo del presente informe se determina que, el circulante de las plazas de Defensora o Defensor Público en materia Agraria a nivel nacional se encuentra en 115 procesos o expedientes, estando este promedio nacional 65 asuntos por debajo de la cuota establecida por la Coordinación en Materia Agraria de la Defensa Pública, lo equivalente a un 36% menos; debido a que la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por persona defensora. Por lo anterior y por la competencia de estas plazas, se considera que continúan manteniendo la capacidad para dentro de su carga de trabajo ordinaria asuman aquellos asuntos en Materia Contenciosa Administrativa, donde figure como parte actora o demandada una o más personas usuarias indígenas. Importante aclarar que, en el caso de aquellas plazas, donde la carga de trabajo no alcance la cuota establecida, se le asignarán asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.
* A pesar de que, en consulta al personal del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, aún no se cuente con el identificador de personas servidoras judiciales en calidad de intervinientes dentro de las bases de datos, lo cual resulta que materialmente sea imposible la proyección de la demanda del servicio profesional para ejercer la defensa técnica en los casos que lo ameriten; se considera que estos procesos o asuntos pueden ser asumidos por las Defensoras y Defensores Públicos que asumen los asuntos Contenciosos Administrativos donde intervienen personas usuarias indígenas, de manera que los asuntos con servidores judiciales en calidad de intervinientes contribuyan para completar la carga de trabajo establecida para este personal defensor.
* Resultado del análisis estadístico de los asuntos en materia de Pensiones Alimentarias donde se tiene en calidad de interviniente una persona indígena se concluye que, el 81% de la carga de trabajo a nivel nacional se concentra en las Defensas Públicas de Bribri, Buenos Aires, Pérez Zeledón y Limón, recordando que las últimas dos oficinas brindan apoyo a las dos primeras, donde se encuentra la mayor concentración de asuntos en esta materia. En razón de lo anterior y, tomando en consideración factores cualitativos que permitan brindar un acceso a la justicia efectivo y de atención diferenciada a la población indígena de nuestro país se reitera la necesidad de la incorporación de dos plazas de Defensora o Defensor Público (una en cada oficina), para la atención de asuntos de Pensión Alimentaria dónde figure como parte actora o demandada una persona indígena.
* El proyecto de mejora de mejora integral del proceso penal en las defensas públicas tiene la posibilidad de realizar movilizaciones de personal cuando es técnicamente viable; por lo tanto, según las prioridades institucionales, se deberá considerar el cumplimiento de la ley 9593 de Acceso a la Justicia a la población indígena.

# Recomendaciones

## Escenarios para suplir las necesidades de personal defensor

En razón de las limitaciones presupuestarias, mencionadas en el apartado de antecedentes del presente informe, se plantean dos escenarios para el cumplimiento de la necesidad de personal para el efectivo acceso a la justicia a las personas usuarias indígenas.

### Escenario 1: Inclusión de plazas dentro del presupuesto 2021

Incluir dentro del presupuesto 2021, dos plazas de Defensora o Defensor Público para la atención de asuntos de Pensión Alimentaria, con el fin de dar sostenibilidad al plan de trabajo propuesto en este informe; dado a que, al reforzar la estructura del recurso humano de la Defensa Pública de Bribri y la Defensa Pública de Buenos Aires, se estaría en la capacidad para asumir la atención ordinaria de asuntos donde figure como parte actora o demanda una o más personas usuarias indígenas.

Tabla 10 Estimación del costo estimado para el 2021, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomen-dación** | **Período** | **Costo Estimado** |
| Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública | 2 | Defensor Público | - | Extraordinaria | 12 meses | ₡105.734.000 |
|  | | | | | | ₡3.356.545,00 |
|  | | | | | | **₡109.090.545,00** |

**Nota (1):** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000*

**Nota (2):** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273*

**Fuente:** Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación

### Escenario 2: Reubicación de personal defensor

Como se menciona en el presente informe, la Dirección de Planificación se encuentra desarrollando el Proyecto “Mejora Integral del Proceso Penal”, donde se considera que, en los casos en que el criterio de este ente técnico lo indique, se podrá plantear la posibilidad de movilizar plazas de Defensora o Defensor Público, con el propósito de suplir la necesidad de personal para la atención de personas usuarias indígenas en la Defensa Pública de Bribri y Buenos Aires, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en el entendido que una posible movilización de recursos dependerá meramente de los estudios técnicos realizados y de una priorización según las necesidades institucionales previamente detectadas.

Importante aclarar que, si bien este escenario no tiene impacto directo en el presupuesto de la institución, se dependerá del cronograma del Proyecto “Mejora Integral del Proceso Penal” y, por ende, se imposibilita determinar el momento en que se podrá suplir las necesidades detectadas en el presente informe.

Recomendaciones generales

### A la Jefatura de la Defensa Pública

* Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.
* En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria.
* Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población.
* Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo.

### A la Dirección de Gestión Humana

Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:

* Realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública.
* Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) *Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia* ***proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)****”****.*** Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas.
* Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como:
* Disposición para realizar las diligencias in situ
* Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.)
* Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género.
* Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública.

### A la Dirección de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación

Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:

* Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.
* Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios.

### A la Dirección de la Planificación

Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:

Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio. Apéndices y Anexos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apéndice** | **Nombre** | **Documento** |
| ***Apéndice 1*** | Memoria de cálculo: Distribución porcentual de posible atención de persona indígena, según territorios y ubicaciones de la Defensas Públicas del país |  |
| ***Apéndice 2*** | Memoria de cálculo: Análisis estadístico |  |
| ***Apéndice 3*** | Memoria de cálculo: Asuntos del Tribunal Contencioso Administrativo |  |
| ***Anexo 1*** | Consulta del estado de la implementación del SSC en materia agraria |  |
| ***Anexo 2*** | Consulta de las capacitaciones brindadas para la tramitación de asuntos con personas indígenas |  |
| ***Anexo 3*** | Consulta al Tribunal Contencioso Administrativo |  |
| ***Anexo 4*** | Consulta a la Dirección de Gestión Humana |  |
| ***Anexo 5*** | Cálculo de los costos presupuestarios |  |
| ***Anexo 6*** | Oficio de la Jefatura de la Defensa Pública |  |
| ***Anexo 7*** | Correo de consulta a la Dirección de Gestión Humana |  |
| ***Anexo 8*** | Datos Estadísticos facilitados por la Administración de la Defensa Pública |  |

### -0-

Seguidamente, se transcribe el informe Nº 553-PLA-RH-MI-2020, que literalmente dice::

“En adición al informe 507-PLA-MI-2020 y en atención al oficio 10880-18, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 2 de octubre del 2018, artículo LXVI, referente al Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas, se puso en conocimiento el informe preliminar 507-PLA-MI-2020 del 30 de marzo al Magistrado Jorge Olaso Alvarez, Coordinador de la Comisión Acceso a la Justicia, a la Máster Diana Montero Montero, Jefatura a.i de la Defensa Publica, de la Licda. Kattia Morales Navarro Directora de la Dirección de Tecnología de Información y de la Licda. Roxana Arrieta, Directora de la Dirección de Gestión Humana.

Como respuesta se recibieron oficios **662-DTI-2020 y 0712-DTI-2020** de la Dirección de Tecnología de Información (ver anexo 1) y el oficio **JEFDP-3565-2020** de la Defensa Publica (ver anexo 2).

Previo a iniciar con el análisis de las observaciones resulta procedente establecer que el informe en consulta 507-PLA-RH-MI-2020, fue realizado, tomando como base el informe del ejercicio presupuestario 2020 para el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas para el 2020 (634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación), el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019; y por Corte Plena en la sesión 22-19 6 de Junio de 2019, Artículo IV, por lo tanto, en el informe puesto en consulta se mantienen recomendaciones planteadas según fue aprobado en su oportunidad por los entes superiores.

Seguidamente se adjunta un resumen de los principales puntos planteados por la Dirección de Tecnología de Información y por la Jefatura de la Defensa Pública; así como, las observaciones correspondientes de la Dirección de Planificación:

**Dirección de Tecnología de Información:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Observaciones recibidas** | **Criterio de la Dirección de Planificación** |
| 1 | Mediante el oficio 662-DTI-2020 del 3 de abril la Licda. Fabiola Arancibia Hernández, Coordinadora de la Unidad de Implantaciones de la Dirección de Tecnología de Información manifiesta:  "*(...) Sobre las Implantaciones del SSC (Sistema de Seguimiento de Casos), me permito señalar que la unidad de Implantación no cuenta con la capacidad operativa para asumir las implantaciones del SSC, es por lo que actualmente la Defensa Publica cuenta con una persona encargada de las implantaciones de la Defensa Pública, bajo la administración y coordinación de la Defensa Pública. Por parte de la unidad de Implantaciones se ha colaborado en algunos aspectos de coordinación a lo interno de la Dirección de Tecnología para las configuraciones. Así mismo, al ser un solo recurso dedicado a las implantaciones, se coordinó con la Dirección de Planificación para establecer un orden y lograr las implantaciones de diferentes unidades que intervienen en las materias de Agrario, Ejecucion de la Pena (Penal), Pensiones.  Actualmente se tiene validado las funciones del SSC para las unidades de Ejecución de la Pena por lo que se han iniciado desde finales del 2019 las implantaciones de esas unidades. Cabe señalar que se tiene en proceso la validación del funcionamiento del sistema para las Unidades de Agrario y Pensiones Alimentarias, una vez que se cuente con esa validación, la defensa podría continuar con las implantaciones en esas unidades según la prioridad establecida por la Dirección de Planificación."* | En virtud de lo expuesto, se deberá esperar la validación del funcionamiento del sistema para las Unidades Agrarias y de Pensiones Alimentarias, para posteriormente continuar con las implantaciones, lo anterior supeditado a la capacidad operativa de la Unidad encargada en la Dirección de Tecnología de Información y el profesional en informática asignado a la Defensa Pública.  Lo anterior, se incorpora en el informe. |
| 2 | Mediante oficio 0712-DTI-2020 se indica.  En respuesta a la recomendación brindada a la Dirección de Tecnología de Información en el oficio N° 507-PLA-RH-MI-2020, donde se solicita: “Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios.”, se informa:  La Unidad de Inteligencia de la Información desarrollará durante el primer semestre de 2020 la mejora para extraer los datos de la variable etnia del Sistema de Seguimiento de Casos, con esto la información de los casos de la Defensa Pública se mostrarán dentro de las estadísticas en los reportes del SIGMA. | Se toma nota y se incorpora en el informe dicha propuesta por parte de la Dirección de Tecnología. |

**Defensa Pública:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Observaciones recibidas** | **Criterio de la Dirección de Planificación** | |
| 1 | La M.Sc. Diana Montero manifiesta lo siguiente:  *“Aún y cuando en distintos documentos y reuniones se ha recalcado la diferencia en la atención y requerimientos que necesitan las personas usuarias indígenas, lastimosamente esta situación no se refleja en el informe, y se plantea de forma cuantitativa, dejando de lado el aspecto cualitativo elemental en procesos judiciales con personas indígenas, y dejando de lado también, un aspecto cuantitativo justificado en el párrafo anterior, que implica la necesidad de que cuando las personas usuarias sean indígenas, la cantidad de procesos por plaza sea menor, pues la inversión de tiempo y diligencias es mayor.”* | Se concuerda con la Jefatura de la Defensa Pública en cuanto a la existencia de minutas que evidencian los requerimientos expresados por el personal defensor, la Supervisión de Pueblos Indígenas e inclusive, la Jefatura de la Defensa Pública. No obstante, se aclara que en el análisis del informe si fue considerado, precisamente variables cualitativas de la zona de Bribri y Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor cantidad de asuntos con persona usuaria indígena en calidad de interviniente. |
| 2 | La M.Sc. Diana Montero manifiesta lo siguiente:  *“Incluso, se echa de menos en el informe que hay lugares en los que no se pueden brindar los servicios por falta del recurso humano y esto afecta a las personas usuarias, entre ellas a las personas indígenas, por ejemplo, Coto Brus no tiene atención para actoras en pensiones y familia, a pesar que el Juzgado de Pensiones tiene una carga de procesos muy amplia.”* | En el informe se evidencia la cantidad de recursos con los que se cuenta en las oficinas de la Defensa Pública. Para el caso específico de la Coto Brus, se expresa literalmente:  *“ (…) la Defensa Pública de Coto Brus mantiene colaboración de Corredores (un día por semana). En este último despacho, aunque no se cuente en la estructura organizacional ordinaria con una persona defensora especializada en Pensiones Alimentarias, una Defensora o Defensor Público de materia penal mantiene un recargo de Pensiones Alimentarias. (…)*  Además, en la tabla 3 del informe se evidencia que la Defensa Pública de Coto Bus cuenta con un circulante penal de 76 asuntos (para el que si tiene recursos), 9 de Pensiones Alimentarias (donde mantiene colaboración de otra oficina) y no cuenta con circulante Agrario. Por último, importante mencionar que los asuntos de Pensiones Alimentarias son llevados por recargo por un recurso penal. |
| 3 | La M.Sc. Diana Montero manifiesta lo siguiente:  "*Aún y cuando en distintos documentos y reuniones se ha recalcado la diferencia en la atención y requerimientos que necesitan las personas usuarias indígenas, lastimosamente esta situación no se refleja en el informe, y se plantea de forma cuantitativa, dejando de lado el aspecto cualitativo elemental en procesos judiciales con personas indígenas, y dejando de lado también, un aspecto cuantitativo justificado en el párrafo anterior, que implica la necesidad de que cuando las personas usuarias sean indígenas, la cantidad de procesos por plaza sea menor, pues la inversión de tiempo y diligencias es mayor*." | La Dirección de Planificación comparte el criterio de que estos datos deben ser analizados; sin embargo, debido a las condiciones particulares geográficas, sociales y económicas de cada población indígena y la zona en la que habita, de momento no se estima oportuno realizar una recomendación generalizada para la atención de la población indígena, pues las condiciones pueden variar según la zona.  Es por ello, que las cargas de trabajo calculadas no son ajustadas para que la Persona Defensora tenga un 100% de ocupación; pues, es necesario dejar espacios para atender imprevistos o situaciones que ameriten dedicar más tiempo, como lo es la atención de personas indígenas.  Por otro lado, dentro de los alcances del Proyecto de Mejoramiento al Proceso Penal se están analizando de manera distintiva la condición y particularidad de la población y la zona en la que se encuentran, tomando en cuenta tiempos de movilización y limitaciones económicas de las personas en cada oficina que se aborda, para emitir recomendaciones de manera integral, que beneficien tanto a la oficina como a la población.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 4 | La M.Sc. Diana Montero manifiesta:  *"Se debe aclarar que el registro e informe de personas usuarias y procesos se realiza en la oficina en que se atiende según la competencia territorial, no en la oficina de la que se brinda la colaboración, de forma tal que la información es real y obedece al lugar donde debería existir una plaza"* | Se tiene por rendido este punto, el análisis del informe contempló esta variable, tal y como se indicó por la Defensa Pública en el cuadro remitido el 17 de febrero de 2020, denominado *"Personas Indígenas que mantienen procesos en trámite en la Defensa Pública en razón del cumplimiento de la Ley 9593, al 31 de diciembre 2019"* donde se especifica dentro de las notas al pie que hay casos atendidos por profesionales de otras zonas; sin embargo, el circulante es contabilizado dentro del circulante del despacho competente.  En informe este punto fue planteado como una posibilidad, no fue una aseveración; sin embargo, en vista de su oportuna aclaración, se realizará una modificación de la redacción del punto mencionado. Aclarando, que el análisis estadístico se realiza a nivel país y se segrega por oficina de la Defensa Pública. |
| 5 | *"El Departamento de Planificación no valora de forma oportuna que los dos casos a los que se refiere la Defensa corresponden a los procesos penales de Salitre y Térraba y que justamente es en ese lugar que el Estado de Costa Rica tiene medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se tiene conocimiento que habrán otras investigaciones en la zona de Buenos Aires con las mismas características, más de 50 imputados en la primera y aproximadamente 80 imputados en la segunda.* " | Se comparte el criterio de la Defensa Pública y se contempla dentro del informe 507-PLA-RH-MI-2020, donde literalmente dice:   " (...) Ahora bien, se tiene como excepción algunos asuntos conocidos dentro de la Defensa Pública, donde la Supervisora de Asuntos Indígenas indica que intervienen gran cantidad de personas usuarias indígenas y por ello, se toma en consideración dentro del análisis actual.  Sin embargo, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 “Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)” y el presente análisis estadístico, se infiere técnicamente que dichos expedientes responden a casos aislados y se encuentran fuera de los límites de control, debido a que en el amplio periodo de tiempo de estudio no se refleja el comportamiento descrito."  El texto anterior evidencia que las manifestaciones realizadas por el personal defensor, la Supervisión de Pueblos Indígenas y la Jefatura; fueron consideradas. Se recalca que se considera dentro del análisis estadístico un año de muestra (de setiembre 2018 a setiembre 2019) y, se compara los datos estadísticos del informe del año anterior, donde se comprueba que el comportamiento de la cantidad de personas usuarias indígenas en calidad de interviniente por expediente se mantiene. Importante mencionar que, a nivel nacional ingresaron más de mil expedientes con las características en mención, donde ninguno presenta el comportamiento expresado por la Defensa Pública, esos dos expedientes representan menos del 0,05% de la entrada.  Ahora bien, para poder solventar estos asuntos de gran complejidad, ya que requieren la intervención de muchos recursos de Defensor o Defensora Pública, se le recomienda a la Jefatura de la Defensa Pública hacer uso de los mecanismos temporales con que cuenta la Institución para brindar el servicio de calidad que caracteriza a la Defensa Pública, como el desarrollo de un proyecto bajo la metodología Institucional, un plan de trabajo o plan remedial, entre otros.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 6 | La M.Sc. Diana Montero manifiesta lo siguiente en relación a la naturaleza de los recursos de Defensora o Defensor Público: *(...) "se establece por Principio de Legalidad que quien brinda la asistencia letrada debe cumplir dos requisitos:   1) especializada en derecho indígena.   2) especializada en la materia de competencia.   Situación que a la fecha no opera, pues las personas defensoras públicas no tienen una especialidad en derecho indígena, aún y cuando se trata de generar capacitaciones; además se plantea la necesidad de la especialidad en la materia de atención a la persona indígena. Eso nos lleva a considerar que las personas defensoras públicas no deberían de asesorar materias por recargo, que implica otras especialidades, ni que pensiones deba atender penal, o violencia doméstica, ya que justamente por el Principio de Legalidad se requiere la especialización a partir de la condición de la persona usuaria y del tipo de proceso judicial que se asesore."* | Se coincide con el criterio de especialización de personal defensor; sin embargo, por las cargas de trabajo evidenciadas en el informe en mención, el criterio técnico de la Dirección de Planificación es que los recursos de Defensora o Defensor Público sean especializados pero no exclusivos, de manera que las personas defensoras cumplan con las cargas de trabajo establecidas por el ente competente, priorizando su especialización.  Adicionalmente, cabe manifestar, que las propuestas de recurso humano planteadas en dicho informe, mantienen la misma línea de trabajo establecida en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019; y por Corte Plena en la sesión 22-19 6 de Junio de 2019, Artículo IV, para fines del ejercicio presupuestario del año anterior.  Sin embargo, se toma nota de la observación jurídica, la cual se agrega dentro del apartado de recomendaciones del informe para la solicitar el criterio de la Dirección Jurídica, siendo el referente competente para dar un criterio técnico acertado en cuanto al principio de legalidad. |
| 7 | El Sr. Mario Rosales Vargas, Coordinador de materia Agraria de la Defensa Pública manifiesta:  *“Respecto de estas recomendaciones, concretamente en cuanto a que se asigne a las personas defensoras públicas que conformamos la Unidad Agraria casos de materias diferentes a las de nuestra especialización, deben valorarse algunas situaciones. En primer lugar, hay que recordar que la forma de reportar el circulante, había venido siendo equivocada mediante el reporte del número de expediente o NUE, de esa manera en un expediente donde se defiende a más de una persona, solamente se reportaba una representación."* | Los datos estadísticos incluidos en el informe 507-PLA-RH-MI-2020 puesto en consulta el día 30 de marzo del presente año, fueron suministrados por el Subproceso de Estadística y la Administración de la Defensa Pública, de manera tal, que son los datos oficiales para el 2019. Esta información es tabulada directamente en la Defensa Pública y posteriormente validados por el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación; de tal manera que, la data analizada en el informe se desprende de los insumos que cada oficina de la Defensa Pública facilitó en su momento.  Por otro lado, ante la imposibilidad de obtener datos del SSC debido a que no se tiene implantado el sistema informático, solo es posible obtener información por medio de los Anuarios Estadísticos, los cuales son utilizados para lo toma de decisiones de toda la institución y es por ello que cada despacho debe velar por que la información sea veraz y se ajuste a la realidad del despacho.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 8 | Asimismo, el Sr. Mario Rosales Vargas, Coordinador de materia Agraria de la Defensa Pública manifiesta:  *"Ahora, como se desprende también del cuadro indicado que se adjunta, lo cierto es que si analizamos los datos estadísticos tomando en consideración los expedientes y no las representaciones, ejercicio que sería equivocado, pero si aun así lo hacemos, podemos ver que el promedio de expedientes por cada persona defensora agraria es de 230, lo que evidentemente también rebaza la cantidad límite de 180 expedientes."* | Se coincide con el criterio emitido por el Lic. Mario Rosales, es por ello que dentro del análisis estadístico se hizo el ejercicio de establecer una relación de asuntos entrados durante los primeros tres trimestres del 2019, según los datos facilitados por el Subproceso de Estadística y Defensa Pública (ver apendice 1), donde se observó que ingresaron 1317 asuntos y la cantidad de intervinientes correspondió a 1570, de tal manera fue posible establecer una relación de 1,19; por lo que se puede definir que por cada 10 asuntos que entran con un solo interviniente, ingresan 2 con más de un interviniente.  Por otra parte, realizando un análisis del cuadro adjunto "Defensa Pública Unidad Agraria", donde se muestra la cantidad de expedientes y personas representadas en la unidad agraria a marzo de 2020, se puede observar que la cantidad de expedientes activos en promedio persona defensora corresponde a 172 y no a 230, como se menciona por el Lic. Mario Rosales, Coordinador de la Unidad Agraria de la Defensa Pública. De tal modo, se comprueba que el circulante en trámite por Persona Defensora continua por debajo de la cuota establecida, tal y como se menciona en el informe en atención.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 9 | La M.Sc. Diana Montero manifestó lo siguiente referente a materia Agraria: *"Según lo indicado supra, entre otras cosas debe valorarse también que en los procesos agrarios se está considerando por caso, no por persona usuaria, lo cual generaría una cantidad mayor. Valga aclarar que la respuesta de licenciado Rosales se transcribe en su totalidad como él la planteó y resulta de importancia valorar si tal y como él lo indica, la carga de trabajo en materia agraria ha aumentado de manera tal que resulte inmanejable el trámite de los procesos contenciosos administrativos, pues obviamente una sola plaza en materia contencioso administrativa, no resulta suficiente para tramitar todo lo que esa materia conlleva."* | Los datos estadísticos incluidos en el informe 507-PLA-RH-MI-2020 puesto en consulta el día 30 de marzo del presente año, fueron suministrados por el Subproceso de Estadística y la Administración de la Defensa Pública, de manera tal, que son los datos oficiales para el 2019. Esta información es tabulada y validada directamente en la Defensa Pública y posteriormente validados por el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación; de tal manera que, la data analizada en el informe se desprende de los insumos que cada oficina de la Defensa Pública facilitó en su momento.  El análisis estadístico de materia Agraria se encuentra ubicado de la página 31 a la 35 del informe 507-PLA-RH-MI-2020, con datos que fueron remitidos por la Defensa Pública el 17 de febrero del 2020. Del análisis efectuado, se extrae la siguiente información:  *"En análisis de los datos proyectados de la Defensa Pública en materia Agraria, se estima una entrada promedio de 8 asuntos por recurso Defensor Público a nivel nacional; así como, un circulante promedio de 129 asuntos por cada plaza de Defensor. De considerar la entrada promedio de 8 asuntos a nivel nacional más el circulante por cada plaza a diciembre de 2018, se estima un circulante proyectado de aproximadamente 137 asuntos por cada recurso Defensor Público; estando por debajo en 43 procesos (24%) de la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por cada plaza de Defensora o Defensor Público*"  Es por ello que se considera que se debe de mantener la recomendación; pues, no resulta procedente realizar un nuevo estudio debido a que información estadística con la que se cuenta fue brindada precisamente por la Defensa Pública.  Lo anterior es sujeto a seguimiento para analizar el comportamiento.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 10 | El Doctor Roberto Montero García menciona que*:  "Actualmente esta plaza cuenta con más de 39 expedientes activos, cantidad que es de esperarse que a futuro aumente, por lo que asignarle otro tipo de expedientes o causas de diferente materia, sin contar con datos estadísticos provenientes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (donde se ha indicado, como consta en el mismo informe de Planificación, que no se cuentan con esos datos exactos) podría poner en riesgo la adecuada representación, por lo que parece prudente esperar al menos a que el año 2020 finalice y volver a revisar el circulante indicado."* | En concordancia con el criterio del Señor Montero García se aclara que, el presente informe tiene como alcance el periodo presupuestario 2021 y, para brindar el criterio técnico, la presente Dirección realiza inferencias científicas por medio de análisis de datos históricos. Se considera adecuada la recomendación y, es importante mencionar que la práctica de utilizar los datos estadísticos más actualizados es utilizada por la Dirección de Planificación.   Es importante indicar que del mismo informe puesto en consulta se desprende la colaboración que recibirá durante el 2020 para la atención de los casos en materia Contenciosa Administrativa, según se cita. “…en la sesión 43-2019 del Consejo Superior artículo XL del 14 de mayo 2019, se acordó trasladar una plaza de persona defensora de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial, ya que se detectó la necesidad de reforzar estas funciones, pero no ha sido posible su asignación por la escases de recursos institucionales”.   Lo anterior, no modifica el contenido del informe |
| 11 | Además, el Doctor Roberto Montero García menciona que*:*  *"También cabe indicar que estos casos se llevan en la modalidad de “co defensa”, a efecto de que en caso de que como director del proceso sucediera alguna circunstancia que me haga imposible asistir a cualquier audiencia, pueda la persona asignada como codefensora participar de emergente sin ninguna objeción del Tribunal, ello atendiendo las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 16/15, Medida Cautelar 321-12 y aclarando que esto en casos con personas indígenas, pues en los demás casos contenciosos de personas no indígenas no aplica esa codefensa."* | Se está de acuerdo con la indicación del Señor Montero García y se reiteran los siguientes párrafos del informe:  " (...) Respecto a los asuntos Contenciosos Administrativos, es importante hace énfasis de que se reportan 39 representaciones al cierre de diciembre de 2019.Estos asuntos mantienen la particularidad de que requieren codefensa, por lo que al menos deben participar dos Defensoras o Defensores en su tramitación.  En consulta con la Coordinación de la Defensa Pública de Buenos Aires, el Licenciado Andrey Fuentes Gamboa, se expone que, por indicación de la Jefatura de la Defensa Pública, los asuntos contenciosos administrativos con interviniente persona indígena se asignan como recargo a las personas defensoras agrarias y por tal, desde que recibió la indicación, el único asunto que ha ingresado a la oficina es el que tiene asignado dentro de su circulante la persona defensora de materia agraria. (...) "  Aspectos que fueron considerados dentro del análisis de las cargas de trabajo del presente informe, inclusive se consulta al Defensor Coordinador de Buenos Aires por qué se registra un asunto Contencioso Administrativo, respuesta explícita en el párrafo anterior.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 12 | *El Doctor Roberto Montero menciona que:  "Otro aspecto cuestionable en el informe rendido por Planificación, es el dato de que solamente hay en el Tribunal Contencioso Administrativo 12 expedientes activos de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bribrí, KEKOLDI, pues en la Defensa Pública, como se desprende de los datos internos, se llevan bastante más de 12 causas a dicha asociación."* | Se reitera que la cantidad de expedientes activos mostrados en el informe fueron los reportados por el Tribunal Contencioso Administrativo el 04 de febrero de 2020, según los sistemas de información, para un total de 97 asuntos activos, dentro de los que están los 12 de la Reserva Indígena de Bribri, KEKOLDI, sin indicar un dato distinto.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 13 | *La M.Sc. Diana Montero menciona:  " (...) preocupa el enfoque del estudio de Planificación que refleja una constante minimización de la complejidad de los asuntos indígenas, a pesar de las múltiples explicaciones que sobre este aspecto, las personas Defensoras Públicas les han dado a las personas funcionarias de Planificación que han realizado las entrevistas para la confección de dicho informe, pero que sin embargo no son valoradas en las conclusiones del estudio, pues no basta su simple mención para analizar el impacto que esta complejidad tiene ni para la persona usuaria, ni para la Defensa Pública, ni siquiera para el país que se encuentra cuestionado internacionalmente por el manejo de los asuntos indígenas . (...) "* | Es importante aclarar que se tomó en cuenta lo externado por las diferentes personas de la Defensa Publica, según se desprende del mismo informe:  “..el 03 de febrero de 2020 se coordina una sesión de trabajo con la Administración de la Defensa Pública, respaldada en la minuta 29-PLA-MI-MNTA-2020; con el propósito de identificar el impacto dado en la Defensa Pública a partir de la implementación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y, recibir retroalimentación de la manera de trabajo optada por la administración para solventar las necesidades de la población en mención. Con base en la información recolectada en reunión mencionada en el párrafo anterior y, con la información estadística enviada por la Administración de la Defensa Pública; se procede a analizar las cargas de trabajo de las plazas de Defensora o Defensor Público responsables de la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena. Seguido, se consultó a Unidad de Capacitación de la Defensa Pública sobre los lineamientos establecidos por parte de la Jefatura de la Defensa Pública para cubrir el tema de capacitación del personal de la Defensa Pública en la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena.” En anexos, se adjunta minuta a este oficio   Con lo anterior, se realiza el análisis científico considerando las observaciones cualitativas brindadas por todo el personal en mención.   Adicionalmente, cabe reiterar que el análisis y las propuestas de recurso humano planteadas en dicho informe, mantienen la misma línea de trabajo establecida en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019; y por Corte Plena en la sesión 22-19 6 de junio de 2019, Artículo IV, para fines del ejercicio presupuestario del año anterior. |
| 14 | *"Debemos señalar que las apreciaciones y argumentos expuestos por el Dr. Montero García son compartidos en su totalidad por la Jefatura. Resulta preocupante que mucha de la información que se ha brindado en entrevistas a los responsables de estudio no quede reflejada en este, como por ejemplo, la situación del licenciado Jorge Sánchez y los acuerdos respecto a su ubicación. Además, preocupa el enfoque del estudio de Planificación que refleja una constante minimización de la complejidad de los asuntos indígenas, a pesar de las múltiples explicaciones que sobre este aspecto, las personas Defensoras Públicas les han dado a las personas funcionarias de Planificación que han realizado las entrevistas para la confección de dicho informe, pero que sin embargo no son valoradas en las conclusiones del estudio, pues no basta su simple mención "* | Se comparte el criterio del personal defensor técnico, así como de la Jefatura de la Defensa Pública; siendo consideradas dentro el presente estudio. Las observaciones presentadas por el Dr. Montero García se aclaran en los puntos anteriores.   Respecto a la situación del Lic. Jorge Sánchez, se procederá a especificar su ubicación, ya que se puede ampliar su mención en el informe en el apartado VI, sin embargo, en el apartado III se detalla el antecedente. |
| 15 | *"• La Defensa Pública para poder cumplir con las competencias asignadas en la Ley N° 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, publicada el 28 de setiembre de 2018, representación legal tanto a la parte actora como a la parte demandada en materia de familia, pensiones alimentarias y parte actora en procesos de violencia doméstica. Valga indicar que anterior a esta Ley, no se representaba a la parte demanda en procesos alimentarios, tampoco en procesos de familia parte actora y parte demandada y tampoco se atendía a la parte solicitante en procesos de violencia doméstica, debiéndose alterar el curso normal del servicio en diferentes oficinas de la Defensa Pública, después de la entrada en vigor de la Ley N° 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. • Los datos analizados en el informe bajo estudio de la materia de pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica, para la población indígena, incluye únicamente los datos de asuntos activos que lleva la Defensa Pública (a pesar de que el servicio se trata de brindar de la mejor manera, es claro que existe recurso limitado para ofrecer el servicio de forma integral), no se evidencia los datos de asuntos activos en las diversas materias (pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica) que llevan los Juzgados de las localidades con mayor concentración de personas indígenas, tales como: Limón, Puntarenas"* | Seguidamente se extrae parte de lo expuesto en el punto cinco del informe, referente a la carga laboral en materia de Pensiones Alimentarias:  *"Al tercer trimestre del 2019 existían 306 asuntos en trámite en la Defensa Pública, en los que figuraba una o varias personas pertenecientes a poblaciones indígenas, del total de asuntos un 68% esta centralizado en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, con un 34% en cada una; seguidos de Pérez Zeledón con un 7% y Limón con un 6%.*  *De tal modo, es posible determinar que los asuntos en trámite en Bribri y Buenos Aires de forma separada, superan en un 80% a los casos en trámite en la Defensa Pública con el tercer lugar, en materia de Pensiones Alimentarias."*  La Dirección de Planificación es consciente que con la promulgación de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se deberá atender tanto a la parte actora como a la parte demandada; sin embargo, a nivel de cargas de trabajo y tomando en cuenta la maximización de los recursos institucionales; además, en apego a la contención del gasto público; se puede observar que las circulantes actuales con las que cuentan la mayoría de estos despachos no justifican el otorgamiento de recurso humando adicional.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 16 | *"• Se indica por parte de la Dirección de Planificación que en el supuesto de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, que estas además de la materia de pensiones alimentarias conocerá de manera complementaria asuntos de materia penal, priorizando esta última por encima de materias concernientes al área del derecho de familia como lo son procesos de familia y de violencia doméstica. Asimismo, se debe recordar que la Ley N° 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, indica de manera clara que las personas defensoras públicas que atiendan a las personas usuarias indígenas deberán ser especialista en el área de atención, pero como podría pretenderse esto, si en la Defensa Pública justamente buscando esta especialidad realiza procesos de reclutamiento distintos para la materia penal y para materias sociales, por lo cual no podría catalogarse como materias afines. "* | Se replica lo que se expresó en puntos anteriores del presente documento:   Se coincide con el criterio de especialización de personal defensor; sin embargo, por las cargas de trabajo evidenciadas en el informe en mención, el criterio técnico de la Dirección de Planificación es que los recursos de Defensora o Defensor Público sean especializados pero no exclusivos, de manera que las personas defensoras cumplan con las cargas de trabajo establecidas por el ente competente, priorizando su especialización.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 17 | *"Para mayor claridad expondré mediante un cuadro aquellos juzgados ubicados en las zonas donde existe una mayor concentración de personas usuarias indígenas, con la indicación del servicio que se está brindado, si la Defensa Pública cuenta o no con persona defensora pública en la materia de pensiones alimentarias para la parte acreedora alimentaria. Se aclara que en materia de familia y violencia doméstica no se cuenta del todo con recurso humano para brindar ese servicio."* | En este particular, como se menciona en el apartado cinco de Pensiones alimentarias del informe 507-PLA-RH-MI-2020, la dinámica es la misma que realiza actualmente la Defensa Pública, donde "(...) *los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Pensiones Alimentarias, y en materia de Violencia Doméstica pasan hacer parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Penal. (...)"*  Tal y como se abordó en la observación 13 de presente documento la Dirección de Planificación es consciente que con la promulgación de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se deberá atender tanto a la parte actora como a la parte demandada; sin embargo, a nivel de cargas de trabajo y tomando en cuenta la maximización de los recursos institucionales; además, en apego a la contención del gasto público; se puede observar que los circulantes actuales de esas oficinas no justifican el otorgamiento de recurso humando adicional a nivel nacional.    Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| 18 | *" Todo ello aunado a las largas distancias que deben recorrer, por caminos escarpados y riesgosos, donde no existen medios de transporte. Por lo tanto, resulta lamentable que todos estos aspectos que describe y analiza la licenciada Mora Venegas, no sean valorados por las personas responsables del informe al momento de llegar a conclusiones, omitiendo estas delicadas condiciones.  En virtud de lo expuesto por los diferentes especialistas, es necesario recalcar que se requieren más de las dos plazas de pensiones alimentarias en Buenos Aires y Bribrí, que señala el Informe 507-PLA-RH-MI-2020. "* | La Dirección de Planificación tomando en consideración las limitaciones presupuestarias actuales que imposibilitan la creación de nuevas plazas y en busca de la maximización de los recursos con los que cuenta la institución, en el apartado denominado "Aspectos demográficos a considerar" realizó una revisión de todas las zonas indígenas del país, con el fin de detectar aquellas de mayor densidad, para así, poder favorecer primeramente a la mayor cantidad de personas; como resultado se obtuvieron las zonas de Bribri y Buenos Aires.  Por otro lado, es importante destacar que mediante el Proyecto de Mejoramiento al Proceso Penal que realiza la Dirección de Planificación, ya fue abarcada la oficina de la Defensa Pública de Bribrí donde se realizaron una serie de propuestas para mejorar el acceso a la justicia y el servicio que se brinda a la población indígena, como la realización de indagatorias en territorios indígenas en busca de un acercamiento con las personas, la atención de indagatorias de respuesta inmediata, con el fin de evitar que la población indígena deba presentarse varias veces; se promovió la posibilidad de ampliar las instalaciones físicas actuales o trasladarse a un lugar cercano para dar un mejor servicio a los usuarios, se planteó la capacitación al personal en lenguas indígenas, entre otros.  Si bien es cierto, estas recomendaciones fueron planteadas para la zona Bribri, el proyecto irá abarcando paulatinamente todas las oficinas de la Defensa Pública del país, lo que traerá una serie de recomendaciones específicas para cada oficina según sus particularidades y claramente tomando en cuenta los aspectos sociales asociados.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
|  | *Asimismo, la M.Sc. Diana Montero manifiesta:   "(...) la necesidad de recursos para atención de población indígena en materias de familia, pensiones alimentarias e incluso las actoras de violencia doméstica resulta imperiosa. El servicio que se está dando resulta sumamente limitado y contraviene lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Justica de Pueblos Indígenas (...)"* | La Dirección de Planificación coincide con lo manifestado por la Jefatura de la Defensa Pública, es por ello que, tomando en consideración las limitaciones presupuestarias que atañen a la institución, que se está haciendo un esfuerzo mediante los alcances del Proyecto del Mejoramiento al Proceso Penal en la Defensa Pública, para que en la medida de lo posible sean movilizadas plazas hacia las oficinas con mayor necesidades para solventar paulatinamente los requerimientos asociados a la promulgación de la Ley de Acceso a la Justicia de Poblaciones Indígenas.  Por otro lado, como se observa en el análisis y en los elementos conclusivos del informe en atención, y en lo concerniente a Pensiones Alimentarias, se puede observar que un 85% del total de asuntos se concentra en Buenos Aires y Bribri, y es por ello, que esta Dirección decidió priorizar la situación de estas oficinas.  Además, se tiene conocimiento de la situación de las oficinas de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón y Coto Brus, las cuales serían después de Bribri y Buenos Aires, las oficinas de mayor carga laboral en Pensiones Alimentarias y desde la perspectiva de mejorar al servicio público, eventualmente se podría valorar dotar de recurso; pues, según lo establecido en la Ley Acceso a la Justica de Pueblos Indígenas debe darse representación tanto a la parte actora como a la demanda, y partiendo de que no puede ser la misma Persona Defensora quien represente a ambas parte; sin embargo, las cargas de trabajo actuales, se logran atender con la cantidad actual de defensoras y defensores, y ante la necesidad de priorizar la utilización de recursos no resulta procedente otorgar recursos adicionales en este momento, pero serán tomadas en cuenta dentro de los alcances del Proyecto de Mejoramiento Penal de la Defensa Pública, como parte de la maximización de los recursos institucionales. |
|  | *"se solicita respetuosamente se realice un nuevo y completo análisis de parte de la Dirección de Planificación, que contemple y analice todos los argumentos y datos expuestos por los especialistas y que se echan de menos en el presente análisis"* | En vista de que todos los argumentos y datos expuestos fueron analizados uno a uno en el presente documento; el criterio de la Dirección de Planificación se mantiene, debido a que la regla Fiscal se mantiene y el presente informe responde a la actualización del requerimiento de recursos para a tramitación de asuntos con persona indígena en calidad de interviniente a partir de la promulgación de la Ley 9593, donde se obtiene como resultado que las cargas de trabajo no han tenido una variación significativa respecto al estudio realizado el año anterior, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria (Presupuesto 2020) artículo XV, celebrada el 23 de mayo de 2019 y, aprobado por Corte Plena en la sesión 22-19 celebrada el 06 de junio de 2019, artículo IV.  Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
|  |  |  |
|  | En vista de las solitudes planteadas en el Oficio específicamente en el *“Cuadro diagnóstico de servicio*” remitido por la Defensa Pública, se procede a enlistar todas las plazas requeridas desde el punto de vista de la Defensa Pública, segregado por despacho y materia:  Puriscal: 1 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Buenos Aires: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Corredores: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Golfito: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Coto Brus: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Guatuso: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Turrialba: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Tarrazú, Dota y León Cortés: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Limón: 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Bribri: 1 plaza en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Atención de personas indígenas que se encuentran privadas de libertad: 2 plazas en Pensiones Alimentarias, 2 plazas en Familia y una plaza en violencia doméstica.  Subtotal: 14 Pensiones Alimentarias, 22 Familia y 11 Violencia Doméstica.  Total: 47 | Con el fin de dar atención a lo establecido a lo solicitado por la Defensa Pública y tomando como insumo la estimación de costos por persona defensora para el 2021, se procedió a realizar un cálculo del costo que implicaría el otorgamiento de las 47 plazas mencionadas.  El costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000 y el Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273, para un total de ₡54.545.273 por lo tanto para las 47 plazas correspondería a ₡2.563.627.831. |

|  |  |
| --- | --- |
| Anexos | |
| Anexo 1 - 662-DTI-202 |  |
| Anexo 2 - JEFDP-3565-2020 |  |
| Anexo 3 - 0712-DTI-2020 |  |
| Minuta 29-PLA-MI-MNTA-2020 |  |

(…)”

-0-

La Directora de Planificación Valverde Bermúdez, comenta: “Con relación a este informe de las personas indígenas lo pusimos en consulta para adelantarnos al proceso por los plazos, recibimos y recopilamos las observaciones de las oficinas judiciales, para que sean anexadas en este acuerdo, del cual se desprende varias observaciones en relación a esto, en resumen, la Dirección de Tecnología de la Información hace la observación de que ellos están de acuerdo en el tema de las implantaciones del sistema en la materia agraria, sin embargo,, indican que lo irán haciendo supeditado al plan de trabajo que ellos tienen ya elaborado, igualmente la Dirección de Planificación solicitó información en relación en que se identificaran a las personas que se atendían indígenas registrados con la información del sistema de seguimiento de casos, la Directora de Tecnología de la información Morales Navarro, informa que para junio se tendrá la respectiva mejora para el sistema.

La máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública, hace la aclaración que por especialización lo correcto es que se mantengan los defensores públicos de forma especializada en cada una de las materias, porque cada vez demanda mayor especialización la atención de personas indígenas, entonces, lo que indica es que la propuesta no debería de ser que se le colabore en esas áreas, sino que se le debería dar toda una capacidad instalada en nuevos defensores públicos para que atiendan estas poblaciones, nosotros le indicamos que comprendemos la situación, sin embargo, nos toca revisar toda la carga de trabajo que tienen estos defensores públicos y mantenemos la recomendación de que ellos puedan seguir asistiendo hasta en el tanto la cuando la capacidad instalada lo permita, evidentemente cuando la capacidad instalada no la permite no se podrá seguir en este proceso, además, la máster Montero Montero, hace un cuestionamiento que es en materia de pensiones en donde hay demanda del servicio como tal y le parecería que debería de darse más recurso, la Dirección de Planificación le hace la observación a la máster Montero que la estadística que se está utilizando para revisar estos datos es en coordinación con ellos y los revisamos con los datos que ellos nos dieron y es precisamente en el área de Pensiones las dos zonas más complejas donde se está recomendando recurso adicional que es en la zona de Bribrí y Buenos Aires, también hay que recordar que esto se manda como una ley especial, esto va a parte, no necesariamente lo que se solicita aquí nos lo vayan a dar porque recordemos que más bien tenemos dos años de estar pidiendo el recurso y no nos lo dan, el valor agregado del informe es que las recomendaciones adicionales que se están dando es la maximizar el recurso interno en el Poder Judicial porque desde el año pasado las recomendaciones se hicieron y se aprobaron por el Consejo Superior, pero dándole seguimiento este año al informe, en su mayoría no se aplicaron, entonces, por eso quisimos sacarla para que quedaran bien detalladas en la propuesta del acuerdo y que quedaran expuesta como parte administrativas de las mejoras que se pudieran realizar, en general esas son las observaciones que se plantean en el informe, está muy detallada lo que la máster Diana Montero indica, respecto a la especialización a la necesidad de capacitación especifico y de la cantidad de personas que ellos atienden, sin embargo, cada una de esas observaciones están contestada y nosotros como Dirección de Planificación mantenemos el criterio expuesto.

En cuanto a las observaciones de doña Kattia Morales, Directora de Tecnología de la Información, señala que ya ella indica algunas cosas que está realizando y otras que va a ser, nosotros acogimos esas observaciones que mando doña Kattia, entonces deberíamos de quedar, corregidas o tomadas en consideración en la propuesta de acuerdo, porque ya esas estarían acogidas si ustedes así lo aprueban.”

### -0-

### Se acordó: 1.) Aprobar el informe 507-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, las cuales son; A la Jefatura de la Defensa Pública, Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo. En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria. Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población. Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo. A la Dirección de Gestión Humana. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en las que se indicó realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública. Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) *Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)”.* Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas. Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como: Disposición para realizar las diligencias in situ, Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.), Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género. Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública. A la Dirección de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación, se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, tales como: Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física. Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios. A la Dirección de la Planificación. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019; Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio. 2) En relación con la solicitud de los recursos necesarios para la implementación de esta nueva legislación deberá solicitarse la incorporación de los recursos al Ministerio de Hacienda, de forma separada al Presupuesto ordinario, ya que constituyen necesidades adicionales para el Poder Judicial. 3.) Rechazar las observaciones presentadas por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y mantener el informe Nº 507-PLA-RH-OI-2020. 4.) Tomar nota de las observaciones presentadas por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y tener por corregidas las observaciones señaladas, dentro del citado informe. Se declara acuerdo firme.

# **ARTÍCULO XXII**

**DOCUMENTO N°** **4589-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, indica que, mediante correo electrónico del 31 de marzo pasado, se recibió el oficio DM- 0321- 2020 suscrito por el Ministro de Hacienda Rodrigo A. Chaves Robles, relativo a la aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2021, para las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero (SPNF).

En este oficio se establece que el crecimiento del gasto corriente de los presupuestos ordinarios del 2021, de las entidades y órganos que conforman el SPNF no podrá sobrepasar el 4,13%.

Se debe recordar que para 2020 el crecimiento establecido fue de un 4.67%, del cual se derivó un límite del gasto corriente de ¢445.843.000.000, el cual fue comunicado posteriormente mediante oficio DM-615-2019; no obstante, es importante recordar que el monto indicado no reflejó el aumento establecido del 4.67%, ya que el Ministerio de Hacienda aplicó este porcentaje de manera agregada o consolidada. Lo anterior, considerando además que en el oficio del Ministerio de Hacienda en esta ocasión incluso se indica lo siguiente:

*“Finalmente, hay que tomar en cuenta que la crisis económica causada por el COVID-19 implica una alta probabilidad de que haya necesidad de valorar cambios, a fin de responder a la emergencia y minimizar su impacto sobre la estabilidad fiscal del país.”*

Se adjunta documento.



**-0-**

Seguidamente, se anexa el oficio Nº DM-0436-2020:



**-0-**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, manifiesta: “Este último oficio del Ministerio de Hacienda, lo que nos esta diciendo en comparación al año anterior, un rebajo del monto que teníamos de mas o menos dos mil millones de colones en los gastos corrientes, pero con la observación de que están incluyendo el monto de la contribución del seguro saludo; esto es mas o menos novecientos millones de colones, esta suma la financiaba extra presupuesto el Ministerio de Hacienda, nunca se incluía en el limite del presupuesto, pero ahora si lo están incluyendo, y también nos están diciendo que este gasto corriente considera lo que corresponde a personas jurídicas, recuerden que es de personas jurídicas son los aportes del organismo de investigación judicial, que como una Ley Especial, siempre se trabaja por fuera dentro del límite del presupuesto.

En resumen, si nosotros generamos esos montos llevamos más o menos casi tres mil millones de colones, dentro del presupuesto que nos están incorporando.

Esto para visualizar que estábamos partiendo de que teníamos el mismo limite de presupuesto, sin embargo, tenemos, más de tres mil millones de colones menos dentro del presupuesto.

Ahora personas jurídicas y aporte de la caja quedan incorporadas.

**Se acordó: 1.)** Tomar nota de los oficios DM-0321-2020 y DM-0436-2020, remitidos por el Ministerio de Hacienda, el cual señala un porcentaje de crecimiento de gasto corriente menor en relación con el propuesto en el proceso de formulación presupuestaria del año 2020. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XXIII**

**SALE LA DIRECTORA EJECUTIVA ANA EUGENIA ROMERO JENKINS**

**DOCUMENTO N°** **4593-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, indica que en la sesión del Consejo Superior N°21-2020, artículo XV, celebrada el 13 de marzo, se aprobó el anteproyecto de presupuesto 2021 de Vehículos; sin embargo, mediante correo electrónico enviado el 24 de marzo de 2020, el Lic. Wilbert Kidd Alvarado, Subdirector Ejecutivo, solicita dejar sin efecto la sustitución del vehículo p*laca BHF117.*

La licenciada Nacira Valverde indica que el vehículo todo terreno placa BHF117, año 2015, tiene un costo de sustitución estimado en el anteproyecto de presupuesto 2021 de ¢14.541.574,50, por lo que de aprobarse la solicitud antes señalada, el presupuesto de Vehículos pasaría de ¢3.039.904.461 a ¢3.025.362.887.

**Se acordó:** 1) Acoger la propuesta de no sustituir para el 2021 el vehículo placa BHF117, lo cual implica una disminución del presupuesto aprobado de Vehículos para el 2021 quedando en ¢3.025.362.887. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XXIV**

**ENTRA LA DIRECTORA EJECUTIVA ANA EUGENIA ROMERO JENKINS**

**DOCUMENTO N°** **4595-2020**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, indica que, mediante correo electrónico del 14 de abril de 2020, se recibió el oficio **DJ-C-167-2020 suscrito por el Lic. Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico**, relativo al informe que da respuesta al oficio de consulta N° 1409-2020 de fecha 12 de febrero de 2020, donde se hace de conocimiento el acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión N°3-2020 celebrada el 20 de enero de 2020, artículo XXXII, que dispuso trasladar a estudio de la Dirección Jurídica el oficio número 992-PLA-OI-2019 de fecha 28 de junio de 2019, referente a las decisiones administrativas a adoptar con respecto a la ubicación en la estructura administrativa del Centro de Gestión de la Calidad (CEGECA).

A continuación se transcribe el informe indicado:

***“(…)***

***I.- Antecedentes:***

*Mediante oficio número 992-PLA-OI-2019 de fecha 28 de junio de 2019, la Dirección de Planificación emite estudio donde planteó cinco escenarios para una nueva posible ubicación del denominado “Centro de Gestión de Calidad” (CEGECA) y dentro de sus recomendaciones, solicita a esta Dirección Jurídica, emita un criterio respecto de la viabilidad de efectuar las modificaciones propuestas conforme a la normativa que rige el accionar del indicado Centro.*

***II.- Consideración previa:***

*De previo a la exposición del criterio solicitado, se considera oportuno recordar que, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, contenido en la circular 251-2017, aprobado por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia en el artículo XXXIII de la sesión número 47-14, celebrada el día 06 de octubre de 2014, debe entenderse que esta Dirección cumple funciones de asesoría jurídica en términos generales respecto de los alcances de la legislación vigente y no sustituye la valoración de cada caso concreto que legalmente compete al órgano administrativo decisor, en virtud de lo cual, este acto constituye una orientación jurídica general sobre la base de la información y solicitud que se plantea, sin que se prejuzgue sobre ningún caso concreto.*

*Hay que recordar que la labor de la asesoría legal en materia de criterios y opiniones jurídicas, es orientar en los alcances legales del ejercicio administrativo, pero un límite legal y ético de quienes ejercen una adecuada asesoría jurídica, es no sustituir a los órganos competentes en el ejercicio de su decisión, sino tan solo ofrecer elementos para su valoración o de lo contrario, los órganos de decisión quedarían vaciados de su autoridad, sus competencias y responsabilidades y quedarían tan solo como simples repetidores o ejecutores de lo que el abogado diga, lo que haría que, en la práctica, sea el asesor jurídico quien ostente el poder institucional, a contrapelo de la decisión de la sociedad expresada en la legislación que otorga y deslinda las competencias públicas.*

***III.- Criterio de esta unidad asesora:***

*De conformidad con el criterio solicitado estima esta unidad asesora que procedería determinar en primer término las potestades de auto organización que poseen los órganos decisorios del Poder Judicial, conforme a la legislación aplicable a la materia.*

*En este orden de ideas, las entidades públicas poseen el derecho de auto organizarse internamente, lo que implica la potestad de diseñar e implementar la forma en que se organizará para cumplir de la manera más adecuada su función, todo con el objetivo de alcanzar el fin público que justifica su existencia, de conformidad con el interés público.*

*Con base en esta facultad que tiene el ente para de organizarse, para el cumplimiento de la finalidad pública que le fue asignada- se puede articular la relación entre los distintos órganos que lo integren, así como determinar los tipos y clasificación de puestos de su personal, cómo se distribuirán los recursos logísticos con que cuenten y la organización presupuestaria general y particular de la entidad.*

*En otras palabras, una vez creado por ley, el ente puede auto definir la estructura que considere más adecuada, teniendo como criterio orientador general cumplir eficientemente con las competencias que le fueron asignadas.*

*En este sentido, la propia Sala Constitucional ha establecido que:*

*“La reestructuración y la reorganización administrativa constituyen procedimientos tendientes a modernizar a la Administración Pública, con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia, logrando mejorar los servicios que ésta presta, amén de la consecuente reducción del gasto público. Sobre el particular, es menester recordar que hay algunos principios constitucionales que informan la organización y función administrativas, tales como los de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de «Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas», el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de «buena marcha del Gobierno» y el 191 al recoger el principio de «eficiencia de la administración»). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda actuación administrativa. Aunado a lo anterior, el artículo 192 de la Constitución Política faculta a la Administración Pública para disponer la reestructuración de las dependencias que la componen con el fin de alcanzar un mejor desempeño y organización de éstas, siempre y cuando se respeten los procedimientos de reorganización establecidos en la legislación. Tales procedimientos forman parte de la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas, conforme la cual corresponde al jerarca determinar cuál es la organización interna más adecuada para el ente, en razón de los fines que debe cumplir. Potestad discrecional que autoriza al jerarca para realizar reestructuraciones administrativas internas, lo que puede comprender el establecimiento de nuevos órganos o en su oportunidad, una distribución interna de competencias que no impliquen potestades de imperio (…)” (Voto número 13660-2004 de las 18:21 horas del 30 de noviembre del 2004 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El subrayado no es del original).*

*Es decir, la propia entidad tiene la potestad de autoorganización y esa constituye una potestad discrecional, en el entendido de que la misma se debe ejercer conforme a los límites de la ciencia, la técnica y principios de justicia, lógica o conveniencia.*

*En este orden de ideas, la posibilidad de crear órganos (oficinas, dependencias, etc.) no es irrestricta, porque está sujeta en su conjunto al bloque de legalidad aplicable y en ese sentido, hay que tener presente que el artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública, establece:*

*“Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio. 2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia. 3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura” (el subrayado no es del original).*

*Es decir, si se van a crear órganos que ejerzan directamente potestades de imperio[[15]](#footnote-15), entonces, esos órganos solo podrán ser creados por ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, en tanto que la distribución de competencias, así como la creación de órganos -como unidades de ejercicio de competencias que son- sin potestades de imperio, pueden crearse y ajustarse como a lo interno del ente disponga su propia autoridad superior.*

*En otras palabras, en ejercicio de la potestad de auto organización administrativa del ente, se puede crear órganos de manera discrecional, siempre que no se le estén asignando competencias que conlleven la atribución de ejercicio de potestades de imperio.*

*Igualmente, debe tenerse presente que tampoco se permite crear un órgano sin competencias externas de ejercicio de potestades de imperio para luego transferirle esas mismas atribuciones de ejercicio de potestad de imperio que tenía otro órgano, según lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en lo que interesa, dice:*

*“1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de un servidor público a otro, tendrá que ser autorizada por una norma expresa, salvo casos de urgencia. 2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener rango igual o superior al de la que crea la competencia transferida. 3. No podrán hacerse transferencias por virtud de práctica, uso o costumbre”.*

*Es decir, en ejercicio de la potestad de auto organización administrativa no se permite ni crear directamente órganos que a lo externo ejerzan potestades de imperio, ni tampoco crearlos sin esas potestades, para luego transferírselas, por vía de potestad auto organizativa, pues esas potestades, solo pueden ser creadas por ley formal.*

*Es importante recordar que toda creación u ordenación de órganos administrativos o, lo que es lo mismo, el ejercicio de la auto organización administrativa debe estar orientada por los principios de idoneidad, eficiencia, celeridad y economía, para la satisfacción del interés público (artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública).*

*Asimismo, toda la organización administrativa para ser eficaz y adecuada al cumplimiento del fin público debe caracterizarse por lo siguiente[[16]](#footnote-16):*

*Unidad (que sea un todo coherente y armónico)*

1. *Uniformidad (que no tenga variantes significativas que las que necesite por el actuar administrativo).*
2. *Singularidad (que cada órgano sirva para obtener una finalidad propia)*
3. *Responsabilidad (que se pueda individualizar la responsabilidad por el correcto funcionamiento y el cumplimiento de su función y misiones).*
4. *Subordinación (que, a pesar de la singularidad, pueda determinarse claramente un esquema jerárquico de gradación de autoridad que permita dirigir a toda la organización)*
5. *Precedencia (que la organización administrativa preceda, o al menos, sea contemporánea con las necesidades que la administración pública debe satisfacer)*

*Por lo anterior, es claro que cualquier creación de un órgano dentro de un esquema administrativo, deberá responder a la satisfacción de una necesidad de interés público, que justifique su creación y la inversión de recursos públicos que en él se vayan a utilizar, para lo cual, deberá analizarse su funcionalidad -evitándose duplicidad de funciones o competencias- y definiéndose con claridad su campo de acción dentro de todo el engranaje institucional.*

***IV.- Antecedentes de relevancia:***

*Con el fin de dar debida respuesta a la solicitud de criterio planteada, se estima procedente hacer referencia a los siguientes antecedentes de relevancia en la materia objeto de análisis:*

* *La Corte Plena en la sesión 30-2005, artículo IV de 3 de octubre de 2005 aprobó el programa “Modelo de Normalización y gestión de calidad y eficiencia en los despachos judiciales” a fin de crear un Sistema de Acreditación Judicial para los despachos judiciales basado en la definición de modelos de oficinas sometidas a estándares de calidad medidos con indicadores objetivos de gestión.*
* *En sesión número 08-08 de 10 de marzo de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, artículo XXII, se conformó la Comisión de Acreditación Judicial, para que se encargara de la dirección del referido programa.*
* *En acta 010-2009 de Corte Plena se aprobó el Convenio específico de ejecución del proyecto piloto sobre****“Modelo de Gestión Integral de Calidad y Acreditación para los Despachos Judiciales en Costa Rica”,*** *a financiar por el programa EUROsocial-Justicia. En dicho instrumento jurídico, se estableció como compromiso del país la construcción de un modelo de gestión integral de la calidad en determinados despachos judiciales.*
* *En abril de 2009 se suscribió el indicado Convenio Específico a fin de desarrollar un proyecto piloto de gestión la calidad a ejecutar por el Poder Judicial por medio de una unidad de gestión de ejecución de las actividades de planificación, organización y desarrollo del correspondiente proyecto.*
* *En sesión número 20-10 de 26 de julio de 2010, artículo XXX, se aprobó el cambio de denominación de la Comisión de Acreditación Judicial por Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia.*
* *De conformidad con acuerdo de Corte Plena 01-2010, artículo II, se aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2011 y en el mismo se incorporó de manera expresa en la previsión de recursos para dicho período al CEGECA de manera expresa.*
* *En sesión 05-2010 de acuerdo XXV de Corte Plena se dispuso “****Aprobar el proyecto de Decreto Ejecutivo para la creación del Sistema Nacional de Calidad para la Justicia y remitirlo a los señores Ministros de la Presidencia y de Justicia y Paz, con el ruego atento de que se sirvan darle el trámite correspondiente****”.*
* *De conformidad con lo acordado por la Corte Plena, mediante* *decreto ejecutivo 35839-MP-J publicado en el Alcance número 4 a La Gaceta número 62 del día 30 de marzo de 2010, se dispuso la creación del Sistema Nacional de Calidad y Acreditación para la Justicia (SINCA-Justicia), con la competencia de “… acreditar los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones nacionales o internacionales que realicen actividades relacionadas con la Administración de Justicia y que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la Norma GICA o de alguna otra normativa nacional o internacional aplicable. Además, velará porque los mismos mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su acreditación, y promoverá y estimulará la cooperación entre ellos….”*
* *En sesión de acta 032-2011 de artículo I de la Corte Suprema de Justicia se acordó: “Aprobar la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, y en consecuencia:****1.)****Reiterar la importancia de la política institucional de Gestión Integral de la Calidad y Acreditación Judicial (GICA), definida en el Plan Estratégico, al igual que la dedicación de recursos humanos y materiales para su ejecución conforme ya fue dispuesto oportunamente por esta Corte, acorde a las posibilidades de los Departamentos de la institución.****2.)****Aclarar que la definición de los modelos de despachos judiciales no son competencia del CEGECA ni de la Comisión de Gestión Integral de la Calidad en la Justicia, sino que éstos deben adaptarse a las necesidades y condiciones de cada despacho a acreditar.****3.)****Continuar promoviendo las acciones de sensibilización y capacitación para que más despachos se integren a la lista de solicitudes pendientes de iniciar el proceso de acreditación, con el propósito de fortalecer el Plan de Trabajo para el 2012, que será sometido a conocimiento y aprobación de esta Corte por parte de la Comisión de Gestión Integral de la Calidad en la Justicia y el CEGECA.****4.)****Reconocer que la función de control para la eficacia, eficiencia y efectividad del servicio público de justicia, establecida constitucional y legalmente, constituyen un pilar obligatorio y esencial para obtener una gestión integral de calidad.”*
* *El veintinueve de abril de dos mil diez se rubricó un Convenio Marco de Colaboración entre el Poder Judicial de la República de Argentina y el Poder Judicial de la República de Costa Rica, con el propósito de fortalecer y mejorar la calidad de gestión de ambas partes.*
* *El nueve de julio de dos mil diez se rubricó un convenio Marco de colaboración Interinstitucional entre el Poder Judicial de Costa Rica, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Corte Suprema de Nicaragua para fortalecer y mejorar la calidad de gestión en la administración de justicia.*
* *En el mes de junio de dos mil once, se rubrica un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Poder Judicial de la República de Costa Rica y el Poder Judicial de la República de Honduras con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de gestión del sistema de impartición de justicia.*
* *En la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Buenos Aires, Argentina, efectuado en abril del año 2012, se aprobó de manera unánime el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad.*
* *En sesión de Corte Plena 002-2013, artículo XIX se aprobó el Convenio de Cooperación entre el Poder Judicial y el Colegio de Médicos y Cirujanos, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad en la gestión de los servicios y procurar la acreditación de órganos y dependencias en materia médica.*
* *En sesión 15-2015, artículo XXIII se aprobaron las siguientes normas GICA-Justicia en la forma propuesta: - Versión 1 de la Norma GICA-Justicia 2014, Organización de la Oficina Administrativa. - Versión 2 de la Norma GICA-Justicia 2014, Organización del Despacho Judicial. - Versión 1 de la Norma GICA-Justicia 2014, Organización de la Defensa Pública. - Versión 1 de la Norma GICA-Justicia, Organización de la Policía Judicial. - Versión 1 de la Norma GICA-Justicia, Organización del Ministerio Público.*
* *En sesión 016-2015 de 27 de abril de 2015, la Corte Plena acordó aprobar el texto del Proyecto de “Ley del Sistema Integral de la Evaluación de la Gestión, el Desempeño y la Rendición de cuentas en el Poder Judicial” y se dispuso enviarlo al Ministerio de Justicia para el respectivo trámite legislativo.*
* *En los diferentes presupuestos aprobados a partir del año 2011 se contempla en la respectiva relación de puestos el CEGECA, junto con las demás secretarías de las Comisiones institucionales.*

***V.- Análisis sobre la regulación de la gestión de la calidad a nivel normativo en la Administración Pública:***

*Para efectos de dar debida respuesta a la solicitud de criterio, se procederá analizar el fundamento normativo de la calidad en la prestación de la administración de justicia, de la siguiente manera:*

*La obligación de prestar servicios públicos de calidad se fundamenta de manera expresa en el artículo 11, 139.4, 140.8 y 191 de la Constitución Política, en tanto disponen lo siguiente:*

*“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”.*

*“ARTÍCULO 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”.*

*“ARTÍCULO 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República: ….*

*4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación; …”*

*“ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: …”*

*8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas;…”*

*En el caso concreto del Poder Judicial las indicadas normas deben ser consideradas tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 152 y 156 Constitucional y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponen por su orden:*

*“ARTÍCULO 152.- El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley”.*

*“ARTÍCULO 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil”.*

*“Artículo 48.- La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y como órgano superior de éste ejercerá las funciones de gobierno y de reglamento”.*

*Sobre el tema la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente:*

***“… V.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.****Todos los servicios públicos prestados por las administraciones públicas –incluidos los asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquía. Como veremos en el considerando subsiguiente nuestro texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del buen funcionamiento de los servicios públicos, consecuentemente los principios que informan los servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes dominicales destinados a la prestación de un servicio público, etc.. Cualquier actuación –por acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y órganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno de los principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se lo requiera.*

***VI.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.****Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos pacientes que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida y a la salud….” (Voto No. 7532-04 de las 17:03 hrs. del 13 de julio del 2004)*

*De conformidad con lo anterior, la calidad en la prestación del servicio de administración de justicia tiene arraigo constitucional y propiamente en esta materia, así lo ha señalado la Sala Constitucional, de la siguiente manera:*

*“…. la Sala Constitucional en sentencia No. 7915-2009 de las 19:08 hrs. del 13 de mayo de 2009, se pronunció sobre el deber de reestructurar y reorganizar que tiene la Administración, en aras de aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios que se brindan, además de la potestad de trasladar o reubicar a sus funcionarios de manera unilateral con la sola obligación de fundamentarlo bajo criterios técnicos, como el realizado por la Dirección de Planificación, para el caso que nos ocupa. El voto en lo que interesa indica lo siguiente: “Es criterio de esta Sala que la reestructuración y la reorganización administrativa constituyen procedimientos tendientes a modernizar la Administración Pública, con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia, logrando mejorar los sencillos que ésta presta. Estas reestructuraciones o reorganizaciones deben estar basadas en necesidades reales y debidamente probadas, a fin de evitar abusos de parte de los empleadores. Esta Sala ha sido constante en su jurisprudencia en lo que atañe a la facultad de la administración como patrono de trasladar o reubicar a sus funcionarios ya que se ha declarado que la Administración en aras del fin público que persigue debe y puede decretar dichos actos unilateralmente con la sola obligación de fundamentarIo y no perjudicar los derechos laborales ya adquiridos por el trabajador". Es por lo expuesto, que el Poder Judicial está llamado a brindar un servicio público de administración de justicia de calidad y esto se logra en buena parte, logrando el uso correcto de las plazas que se tienen y conforme a las necesidades institucionales y a las funciones de cada persona en el puesto que fue nombrada. Además, que lo anterior viene aparejado a la evaluación y rendición de cuentas, siendo un tema trascendental exigido por mandato constitucional que permite definir los objetivos que permitan orientar la gestión judicial….” (voto Nº 2019-014388 de las catorce horas veinte minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve)*

*De conformidad con lo anterior, la gestión judicial debe ser de calidad, como un derecho inherente para todo administrado y corresponde al máximo órgano de gobierno del Poder Judicial velar y adoptar las medidas necesarias y suficientes para que la administración de justicia se acorde con dicho principio, a efecto de que la organización y funcionamiento de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos se realice conforme a estrictos estándares que garanticen el cumplimiento de las competencias que le han sido asignadas.*

*Por otra parte,* *la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008 y adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno San Salvador, El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008, dispuso:*

*“La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. … La instauración de estructuras internas para la ejecución de proyectos de mejora de la calidad, tanto a cargo de grupos o equipos de mejora, constituidos a tal efecto por funcionarios públicos para abordar un proyecto de mejora concreto, como de unidades estables de calidad, que tengan asignadas funciones de apoyo a la mejora de la calidad, de forma estable y continuada en el tiempo. Tendrán encomendadas tareas de identificación, análisis y resolución de aspectos susceptibles de ser mejorados, para la óptima orientación a resultados y a la satisfacción de los usuarios”.*

*En el ámbito propiamente de la legislación aplicable, resulta fundamental hacer referencia a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, en tanto dispone lo siguiente:*

*“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios”*

*Lo anterior, debe ser complementado con la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos que dispone lo siguiente:*

*“****ARTÍCULO 3.-******Fines de la Ley.*** *Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su interpretación y reglamentación serán: Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia”.*

*Más claro aún en el tema de la calidad en la prestación de servicios, la Ley Reguladora del Sistema de Contralorías de Servicios dispone:*

***“… 3)****Establecer la obligación de promoción de políticas de calidad en la prestación de los servicios que brindan organizaciones públicas y empresas privadas que brindan servicios públicos, que estén inscritas en el Sistema de conformidad con esta ley, el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios mencionados y de sus procesos de mejoramiento continuo e innovación….”*

*Por su parte, el artículo 11 de dicho cuerpo normativo dispone que*

*“La contraloría de servicios será un órgano asesor, canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda una organización. También apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se incremente la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales, así como la calidad en los servicios prestados”.*

*El artículo 31 de la indicada ley establece como un derecho de los administrados,*

***“1)****Recibir de las organizaciones servicios de óptima calidad, de forma efectiva, continua e innovadora…”*

*Más claro aún respecto del compromiso que debe tener la Administración respecto del tema de la calidad, el artículo 32 de la indicada ley, dispone:*

*“****ARTÍCULO 32.- Deber del Estado costarricense.*** *Es deber del Estado vigilar la efectividad, el mejoramiento continuo, la innovación y el funcionamiento de los servicios en procura de su mejora continua e innovación”*

*La indicada ley asigna competencias asesoras en la materia a las Contralorías de Servicios de la siguiente manera:*

***“ARTÍCULO 34.- Estándares de calidad de los servicios organizacionales***

*Las contralorías de servicios velarán por que la organización a la que pertenecen proceda a crear y aplicar los estándares de calidad que les permitan apreciar las mejoras de gestión y la medición de los niveles de calidad existentes en los servicios, con el fin de contribuir a su mantenimiento, mejoramiento continuo e innovación.*

*En este proceso, la contraloría de servicios participará como asesora del jerarca de la organización conforme a su naturaleza”.*

***“ARTÍCULO 35.- Procesos de mejoramiento continuo e innovación de los servicios***

*Las contralorías de servicios velarán por que la organización a la que pertenecen desarrolle e implemente procesos de mejoramiento continuo e innovación que incrementen de forma progresiva, permanente y constante la calidad de los servicios que presta, considerando las necesidades y expectativas de las personas usuarias.*

*En este proceso, la contraloría de servicios participará como asesora del jerarca organizacional conforme a su naturaleza”.*

*En relación con el tema, es menester indicar que parcialmente la fundamentación dada para la implementación de las normas de calidad ante la Corte Suprema de Justicia, se dio con base en la invocación de la Ley* *del Sistema Nacional para la Calidad, N° 8279 del 2 de mayo de 2002 publicada en La Gaceta N° 96 de 21 de mayo de 2002.*

*Si bien se advierte que el indicado sistema atiende fundamentalmente a la calidad y competitividad en el ámbito empresarial, las propuestas originales de calidad que se plantearon se fundaron en la siguiente disposición de dicha ley:*

*“a) Orientar, ordenar y articular la participación de la Administración Pública y el sector privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de promoción de la calidad, integradas al SNC.”*

*Resulta de relevancia indicar que la calidad no extraña al control interno institucional, toda vez que la propia Ley General de Control Interno indica que un objetivo del sistema de control interno es*

*“c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones”.*

*Lo anterior, debe complementarse con el artículo 12 de la misma Ley que indica que*

*“Artículo 12.-****Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno****. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:*

*a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo….”*

*En el mismo orden de ideas, se estable como parte del ambiente de control interno, lo siguiente:*

*“c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable”.*

*Como se advierte, en el ámbito propio del control interno, es fundamental la verificación de que la estructura organizativa sea acorde con los fines institucionales, toda vez que la transversalidad misma de un ambiente adecuado en la materia hace que deficiencias en la misma impacte en el sistema institucional en la materia.*

*Por otra parte, de manera implícita la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito contempla el deber de velar por la calidad en la prestación de servicios, al indicar:*

*“ Artículo 3º-****Deber de probidad****. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”*

*De manera más concreta, la ley 8688 dispuso lo siguiente:*

***“****La Contraloría de Servicios en Violencia estará a cargo de la Red Nacional de Contralores de Servicios Públicos del Mideplan; su objetivo será fiscalizar la eficiencia, efectividad, calidad técnica y humana de los servicios estatales, cuando estos tengan entre sus destinatarios a las personas afectadas por la violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar”.*

*Como se advierte, al ser este tema especialmente sensible y vinculado a las competencias del Poder Judicial, también se reafirma el deber de mantener una calidad técnica y humana en la atención de las personas usuarias.*

*En similar orden de ideas, la Ley de Justicia Restaurativa, dispone lo siguiente:*

*“ARTÍCULO 4- Principios rectores. Los procedimientos restaurativos deberán interpretarse y aplicarse en armonía con los principios rectores de la justicia restaurativa, los principios generales del derecho penal, derecho procesal penal y penal juvenil, la política pública de justicia juvenil restaurativa, la Constitución Política, las convenciones internacionales y demás instrumentos internacionales suscritos y aprobados por el Estado costarricense. Se establecen como principios rectores los siguientes: ….. e) Justicia pronta y cumplida: todos los procedimientos de justicia restaurativa serán atendidos y gestionados con criterios de rapidez, eficiencia, eficacia y simplificación de trámites, para asegurar el acceso de las partes intervinientes a una justicia pronta, cumplida, restauradora y de calidad.”*

*Con relación a otro grupo vulnerable, es menester indicar que la Ley 9714 que modifica la ley 7600 dispone lo siguiente:*

*“Artículo 63- Capacitación. El Poder Judicial y sus dependencias, así como las oficinas que desempeñan funciones en lo referente a la defensa y protección de derechos humanos de las personas con discapacidad, tomarán las medidas necesarias para que los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial cuenten con capacitación para la adecuada atención de personas con discapacidad, de manera tal que se garantice una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. Se desarrollarán actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a la adecuada atención de las personas con discapacidad, tomando en cuenta lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y demás normativa vinculante”.*

*Por otra parte, es menester destacar que en materia de niñez, el Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone que un derecho de todo niño o niña es*

*“e) Que todo procedimiento se desarrolle sin demora, en términos sencillos y precisos”.*

*Como se advierte, existe un amplio fundamento normativo en el sentido de que el Poder Judicial está obligado a la prestación de un servicio de administración de justicia de calidad, como inherente a sus competencias, al control interno institucional y al deber de probidad de sus servidores.*

*Con respecto al sistema de calidad y acreditación para la justicia, es menester reiterar la existencia del decreto* *35839-MP-J de 30 de marzo de 2010, que dispuso, lo siguiente:*

*“Artículo 2º-****Misión****. La misión del SINCA-Justicia será la de acreditar los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones nacionales o internacionales que realicen actividades relacionadas con la Administración de Justicia y que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la Norma GICA o de alguna otra normativa nacional o internacional aplicable. Además, velará porque los mismos mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su acreditación, y promoverá y estimulará la cooperación entre ellos”.*

*“Artículo 4º-****Garantía de independencia****. El SINCA-Justicia respetará la independencia del Poder Judicial y de las demás instituciones del sector de administración de justicia que voluntariamente se sometan a la aplicación de la Norma GICA. Sus gestiones no serán vinculantes sino recomendaciones para los procesos de validación externa de acreditación a que se sometan los entes u órganos que opten por esa distinción, tramitadas a través de su propio centro de gestión de calidad.”*

*En el caso concreto del Poder Judicial y la definición de competencias internas para efecto de adoptar las medidas administrativas necesarias, en orden a la mejor organización para cumplir los fines públicos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la siguiente competencia de la Corte Suprema de Justicia:*

*“16.- Refundir dos o más despachos judiciales en uno solo o dividirlos, trasladarlos de sede, fijarles la respectiva competencia territorial y por materia, tomando en consideración el mejor servicio público”.*

*En el mismo sentido, los artículos 67 y 80 de la misma ley, establecen las siguientes competencias del Consejo Superior:*

*“Artículo 67.- El Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano subordinado de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la administración y disciplina de ese Poder, de conformidad con la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera judicial”.*

*“Artículo 80.- El Consejo rendirá un informe anual a la Corte Suprema de Justicia, sobre su funcionamiento y el de los tribunales de la República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial. En dicho informe, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño debido y correcto de la función judicial. Antes de elaborarlo, pedirá a los tribunales, los juzgados y los demás órganos, oficinas y departamentos, un informe anual sobre la labor realizada y las necesidades concretas”.*

*Como se advierte de las indicadas normas, existe un deber genérico de adoptar las medidas y organizar los despachos del Poder Judicial, con el fin de garantizar el mejor servicio público y el debido desempeño de la función judicial.*

*Estima esta unidad asesora que dicho deber es inescindible de un enfoque de gestión de la calidad necesaria, conforme a las reglas técnicas y de la ciencia existentes en la actualidad, a fin de garantizar máximos en cuanto al cumplimiento de estándares de eficiencia y en la búsqueda de una optimización de resultados, en función del mejor servicio de la persona usuaria.*

***VI.- Análisis en particular sobre el objeto de consulta:***

*En la consulta planteada se nos hace petición para analizar los diferentes escenarios propuestos por la Dirección de Planificación respecto de la organización y ubicación de CEGECA.*

*Al respecto, una vez analizado el texto propuesta esta unidad asesora considera necesario realizar las siguientes precisiones:*

*1).- No es estima oportuno ni procedente la eliminación de una unidad especializada en la atención de la calidad en el Poder Judicial, toda vez que los antecedentes indicados contemplan una disposición de este Poder en enfocarse en procesos de mejora continua en la materia.*

*Como se advierte hay un derecho de los administrados a un buen funcionamiento de los servicios que brinda el Poder Judicial, existiendo normas que así lo disponen tanto a nivel general para este, como específicas para las distintas jurisdicciones.*

*Se estima inescindible el concepto de calidad con los conceptos de “eficiencia”, “mejor servicio público”, “eficiencia”, “adecuado desarrollo” “mejoramiento continuo” y otros mencionados anteriormente, debiendo tomarse en consideración que la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008 y adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno San Salvador, El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008, previó la existencia de unidades avocadas a la calidad en la administración pública.*

*Si bien existe una obligación general que es transversal a toda la organización y a todos los servidores y servidoras del Poder Judicial de mantener la calidad, lo cierto es que la determinación de parámetros y medios de “normalizar” la misma, deben quedar a cargo de un órgano especializado, que bajo criterios expertos pueda definir a priori los alcances de la calidad en cada caso en particular, tomando en consideración las características de los diferentes servicios prestados.*

*Difuminar el concepto de calidad entre diferentes órganos o al criterio de cada despacho o unidad, se estima contraproducente o un retroceso en los procesos seguidos por el Poder Judicial, en donde se han invertido sendos fondos públicos y tomando en consideración que en las diferentes relaciones de puestos presentada como parte del proyecto de presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa desde 2011 – incluido el año 2020-, se contempló la existencia de la CEGECA.*

*En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que las competencias referentes al control de calidad obedecen a acuerdos de Corte y que es a propuesta de esta que se emitió el decreto ejecutivo 35839-MP-J publicado en el Alcance número 4 a La Gaceta número 62 del día 30 de marzo de 2010, se dispuso la creación del Sistema Nacional de Calidad y Acreditación para la Justicia (SINCA-Justicia), con la competencia de “… acreditar los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones nacionales o internacionales que realicen actividades relacionadas con la Administración de Justicia y que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la Norma GICA o de alguna otra normativa nacional o internacional aplicable. Además, velará porque los mismos mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su acreditación, y promoverá y estimulará la cooperación entre ellos….”*

*Por consiguiente y al existir políticas definidas y aprobadas en la materia, bajo un concepto de sistema, no es dable que se pueda adoptar un acto administrativo que pueda ser interpretado como un medio para que se debilite las obligaciones legales sobre la materia y consecuentemente la desaparición del concepto de especialización en un órgano, resultaría improcedente, excepto que haya un criterio técnico que demuestre lo contrario y que evidencie cómo se cumpliría alternativamente los objetivos de calidad mencionados anteriormente.*

*Considera esta unidad que la aplicación dada en su momento a la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, N° 8279 del 2 de mayo de 2002 publicada en La Gaceta N° 96 de 21 de mayo de 2002 , no es del todo correcto, habida cuenta que la misma atiende a un concepto de calidad orientada al ámbito de prestación de servicios o fabricación de bienes (de ahí busca normalizar medidas, entre otros), más su espíritu puede ser aplicado a la necesidad misma de que la Administración Pública, (y de la cual forma parte del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública), interiorice y aplique algunos de sus líneas generales, en orden a la mejora constante de sus competencias en beneficio de los usuarios y administrados en general.*

*2).- No se estima jurídicamente procedente que la CEGECA dependa de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, habida cuenta que la Ley en la materia, no prevé dicho órgano como gestor de calidad, sino como promotor, contralor y asesor en la materia, por lo que no es de su competencia legal asumir la responsabilidad asignada por Corte Plena a la CEGECA.*

*En este sentido, las Contralorías de Servicios tienen la obligación de promoción de políticas de calidad en la prestación de los servicios, velando por el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios mencionados y de procesos de mejoramiento continuo e innovación, ejerciendo como un órgano asesor, canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad de las personas usuarias.*

*Consecuentemente, no sería procedente adscribir la indicada unidad administrativa a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.*

*3).- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar a cuál órgano resulta más oportuno y conveniente que dependa la CEGECA, manteniendo esta como una dependencia concreta orientada a los fines de la calidad conforme a la normativa citada ut supra.*

*No podría esta Dirección Jurídica entrar a determinar una unidad administrativa en concreto de la cual deba depender técnica y jerárquicamente la CEGECA había cuenta que dicha definición no corresponde a criterios de legalidad, sino técnicos, conforme una valoración de oportunidad y conveniencia.*

*En este orden de ideas, únicamente se reitera la necesidad de que cualquier decisión que se adopte no implique un demérito en el tratamiento de la calidad no solo como una política sino como una conducta general a seguir en la prestación de los servicios que brinda el Poder Judicial.*

*VII.-* ***Conclusiones:***

*De conformidad con el análisis realizado estima esta unidad asesora que se puede concluir lo siguiente:*

* *No resulta procedente realizar conductas administrativas que puedan ser interpretadas como un debilitamiento de la gestión de la calidad en el Poder Judicial, toda vez que existe senda normativa que le obliga en tal sentido. En este orden de ideas, existe un deber legal de garantizar calidad en los servicios prestados en la administración de justicia, ámbitos auxiliares y administrativos.*
* *El Poder Judicial ha optado por crear un órgano al cual se le ha adscrito la competencia de gestión de la calidad y esta unidad asesora estima procedente que se continúe en orden a la especialización, sin demérito que dicho concepto debe ser transversal a toda la institucionalidad. En este sentido por más de diez años se han venido adoptando acuerdos de Corte para su fortalecimiento y se ha invertido sendos fondos públicos en la unidad administrativa creada de manera tácita, para dar cumplimiento a los actos administrativos del indicado órgano colegiado y al decreto ejecutivo 35839-MP-J de 30 de marzo de 2010.*
* *No se estima procedente eliminar un órgano especializado en gestión de la calidad, en tanto que podría ser interpretado en contraposición al proceso institucional que se ha llevado en la materia y un debilitamiento del sistema establecido en el decreto en mención, por lo que más que eliminar dicha unidad administrativa, debe valorarse su ubicación en la estructura orgánica del Poder Judicial. El riesgo de eliminar un órgano especializado en la materia, es que la gestión de la calidad, con la definición y seguimiento que ello implica se difumine en las competencias de otros órganos, pierda impacto y se incurra en incumplimiento de la normativa citada ut supra.*
* *No es procedente adscribir el CEGECA a la Contraloría de Servicios toda vez que las competencias legales de esta, no corresponden a la gestión de calidad como tal, sino a funciones asesoras, de promoción y control.*
* *La determinación de a cuál órgano adscribir a CEGECA es una determinación que no es de legalidad, sino corresponde a una valoración técnica, de oportunidad y conveniencia.*

*Dejamos así evacuada su solicitud de criterio al respecto.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***MSC. Rodrigo Alberto Campos Hidalgo***  ***Director Jurídico a. i.*** | ***MSC. Argili Gómez Siu***  ***Sub Directora Jurídica*** |

***Ref: 300-2020”***

-0-

**Se acordó**: Tomar nota del criterio presentado, ya que este tema será conocido por la Corte Plena. **Se declara acuerdo firme.**

**-o0o-**

**Al ser las 10:56 termina la sesión.**

1. Acuerdo de Corte Plena, tomado en sesiónNº16-09 del 11 de mayo de 2009, art. XXI, punto N°35. [↑](#footnote-ref-1)
2. En consulta realizada el 5 de marzo de 2020 a la Secretaría General de la Corte, se confirmó que el informe 620-PLA-EV-2019 no se conoció por Corte Plena en la sesión 10-2020 del 2 de marzo anterior, por lo que continúa en espera de ser conocido por esa instancia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Conforme lo mencionado en el informe 620-PLA-EV-2019 del 06 de mayo del 2019, de cita*.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. Sesión extraordinaria 22-17 (Presupuesto 2018) del 8 de marzo de 2017, artículo VI. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sesión del Consejo Superior de presupuesto 2020, acta N°018-19 del 28 de febrero del 2019, artículo VIII. [↑](#footnote-ref-5)
6. Acuerdo del Consejo Superior de la sesión N° 90-19, del 17 de octubre del 2019, Artículo LXXXIII. [↑](#footnote-ref-6)
7. Acuerdo del Consejo Superior sesión 94-19 del 29 de octubre del 2019, artículo XXX. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se contó con colaboración de la Máster Floribel Campos Solano, Jefa a.í, Lic. Maria Antonieta Herrera Charraun, Lic. Luis Abarca Padilla, en su orden Jefe del Departamento Financiero Contable, Jefe de Proceso Presupuestario Contable y Jefe de Proceso; Lic. Juan Diego Víquez Oviedo y Licda. Mercedes Soto Morales, Profesional en Informática 3, Coordinadora del Proyecto y Profesional en Informática 2 de la Sección de Sistemas de Información de la Dirección de Tecnología de Información. [↑](#footnote-ref-8)
9. Anexo 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. En el informe 33-PLA-EV-2017 se indicó lo siguiente: “*La rectoría ejercida por la Dirección de Planificación sobre estos equipos de trabajo deberá ser entendida como la potestad que ostenta la Dirección de Planificación, derivada de su rol de ente rector del Rediseño en todos los ámbitos de la institución (jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo) y por lo tanto, de las metodologías a emplear en ellos, por lo que estos equipos, deberán laborar bajo los lineamientos emitidos por esta dependencia en materias de su competencia.”* [↑](#footnote-ref-10)
11. Las labores de arqueo se refieren al proceso de verificación y certificación estadístico que se somete a una oficina de la Defensa Pública, para corroborar que la información contenida en los sistemas informáticos sea la correcta. Dicha labor se encuentra a cargo del licenciado Rodolfo Brenes Blanco, Defensor Público. [↑](#footnote-ref-11)
12. En el informe 33-PLA-EV-2017 se indicó lo siguiente: “*La rectoría ejercida por la Dirección de Planificación sobre estos equipos de trabajo deberá ser entendida como la potestad que ostenta la Dirección de Planificación, derivada de su rol de ente rector del Rediseño en todos los ámbitos de la institución (jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo) y por lo tanto, de las metodologías a emplear en ellos, por lo que estos equipos, deberán laborar bajo los lineamientos emitidos por esta dependencia en materias de su competencia.”* [↑](#footnote-ref-12)
13. Grupo de Reacción Inmediata de Cárceles [↑](#footnote-ref-13)
14. En el informe 33-PLA-EV-2017 se indicó lo siguiente: “*La rectoría ejercida por la Dirección de Planificación sobre estos equipos de trabajo deberá ser entendida como la potestad que ostenta la Dirección de Planificación, derivada de su rol de ente rector del Rediseño en todos los ámbitos de la institución (jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo) y por lo tanto, de las metodologías a emplear en ellos, por lo que estos equipos, deberán laborar bajo los lineamientos emitidos por esta dependencia en materias de su competencia.”* [↑](#footnote-ref-14)
15. Recordemos que, en materia de Derecho Público, llamamos potestad de imperio a la facultad que poseen las administraciones públicas o el Estado para proteger el interés público y que significan una de dos cosas: que puede limitar derechos o imponer obligaciones, o ambas. [↑](#footnote-ref-15)
16. ESCOLA, Jorge Héctor. El interés público como fundamento del Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma, 1989. (p. 66-72). [↑](#footnote-ref-16)